



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página <http://books.google.com>

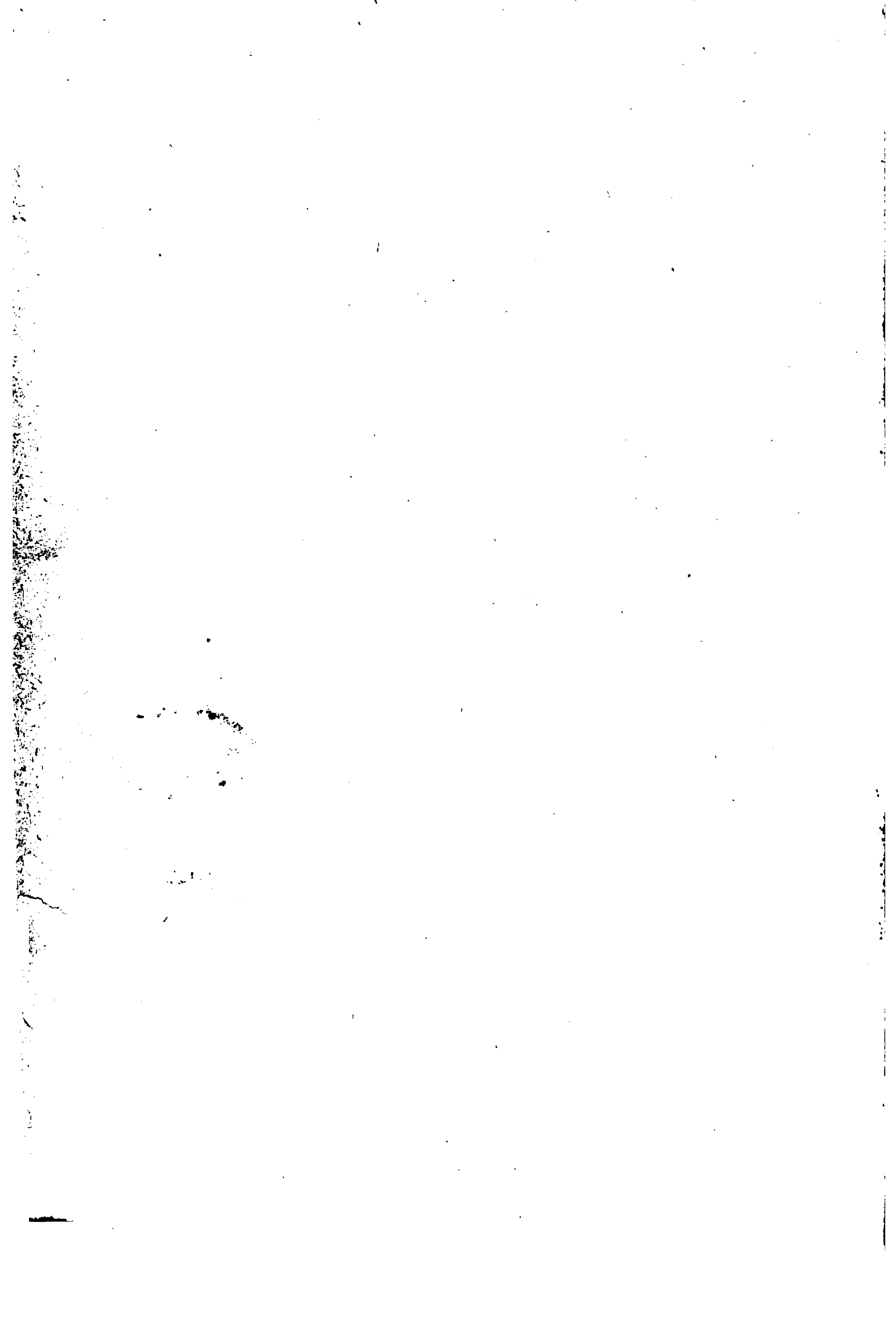
B.d. June, 1900.

HARVARD LAW LIBRARY.

Received *Mar. 26, 1900.*

CÓDIGO CIVIL

TOMO I



laws, Statutes, etc.

ACCIÓN ESPAÑOLA

CÓDIGO CIV

COMENTADO Y CONCORDADO EXTENSAMENTE

CON ARREGLO Á LA NUEVA EDICIÓN OFICIAL

POR

Q. MUCIUS SCÆVOL

ABOGADO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID

TOMO I

De las leyes, sus efectos y reglas
generales para su aplicación.—
Españoles y extranjeros.—Naci-
miento y extinción de la perso-
nalidad civil.—Domicilio.

3
TERCERA EDICIÓN

MADRID

IMPRENTA DE RICARDO ROJAS
Campomanes, 8.—Teléfono 3.071.

1893

Es propiedad del autor.
Queda hecho el depósito
que marca la ley.

Rec. Mar. 26, 1900.

GO

civil es un *hecho consuetudinario* convertido en *Código de Derecho*, es hoy la ciencia podrán discutir la *teoría*; los demás, y aun la nación para la que acatarlo y cumplirlo en

es lo que nos ha guiado o quiere decir esto que cuestión científica, no; tensión que á las de este ; pero sin incurrir en el , y procurando, por el los casos legales positivos convenientes y oportunos el objeto es armonizar la supremacía indicada de

ción del plan de nuestra mente científica, de cada contiene el Código (matrimonio, familia, etc.), hacemos

un extenso estudio comparativo con los proyectos de 1851 y 1882 y los principales Códigos extranjeros; concordamos cada uno de los artículos de aquél con los correspondientes de los mencionados proyectos, y analizamos cada uno de los libros, títulos y secciones en que se divide.

El carácter eminentemente práctico de nuestro trabajo se revela en el articulado, en el estudio de cada artículo. Figura en primer término el histórico, desenvuelto en el epígrafe denominado «Precedentes legales», donde consta el texto literal de las disposiciones que sobre la materia de cada artículo han regido en nuestra patria.

Á primera vista acaso se considere superflua esta parte histórica; pero muy fácilmente se adquiere el convencimiento contrario, puesto que al mismo tiempo que tiene aquella condición (la de histórica), reúne la de positiva, la de ser Derecho vigente. Explicaremos estas palabras. El Código civil ha empezado á regir desde 1.º de Mayo de 1889, y, por tanto, sus disposiciones serán aplicables á los actos y contratos posteriores á dicha fecha; pero los anteriores á la misma (salvo los casos en que el Código no disponga lo opuesto), se regularán por la legislación derogada, de manera que para todos ellos seguirá *subsistente* esta última. Así, los efectos de un contrato celebrado en 30 de Abril de 1889, por ejemplo, se determinarán por lo dispuesto en la Novísima Recopilación ó en las Partidas, y si para obtener su cumplimiento precisa acudir á los Tribunales, dichos cuerpos legales determinarán el fallo, y no el Código. Y esto sucederá, no en un corto espacio de tiempo, sino en el de veinte y treinta años, duración

les y reales. Por esto repetimos to de los precedentes legales no esto es, de comparación entre Derecho; es de gran importancia; los hemos de exponer, como ya tantas leyes han existido sobre ate, hasta el punto de que pna obra de una verdadera reco-

os antecedentes legales colocan- de estudiamos el espíritu del el texto origina y la resolución todo con gran extensión y de- artículos comprenden diversos con leyes de carácter distinto decretos y Reales órdenes, y en ro epígrafe, denominado «Dere- re clasificamos y sintetizamos ige sobre aquel extremo, así en rcantil ó en lo procesal. A más , tomo diversos apéndices de las lacionadas con el artículo á que

. también parte del trabajo va- s, que contribuyen á facilitar de la nueva legislación.

a el fin que hemos perseguido licación, y que queda expuesto deraciones: nada decimos sobre : lectores las verán confirmadas

o con este mismo fin, diremos

que la obra ha de ir dividida en tomos, comprensivos de una ó de varias instituciones, cada uno de los cuales podrá ser adquirido separadamente. De este modo, quien por su profesión desee la obra completa, verá realizado este deseo; quien por algún caso concreto que se presente á su consideración necesite conocer sólo el Derecho relativo al mismo, no se ve obligado á adquirirla toda.

ONES

ACION DEL CÓDIGO

-

las bases para la publica-
o civil.

or la gracia de Dios y la
y en su nombre y du-
Regente del Reino,
e vieren y entendieren,
estado y Nos sancionado

Gobierno para publicar
las condiciones y bases

te cuerpo legal se llevará
digos, cuya Sección de
to del proyecto, oyendo,
expeditos y fructuosos, á
isión, y con las modifi-
necesarias, se publicará

vez publicado el Código,

dará cuenta á las Cortes, si estuvieren reunidas, ó en la primera reunión que celebren, con expresión clara de todos aquellos puntos en que haya modificado, ampliado ó alterado en algo el proyecto redactado por la Comisión, y no empezará á regir como ley ni producirá efecto alguno legal hasta cumplirse los sesenta días siguientes á aquel en que se haya dado cuenta á las Cortes de su publicación.

Art. 4.º Por razones justificadas de utilidad pública, el Gobierno, al dar cuenta del Código á las Cortes, ó por virtud de la proposición que en éstas se formule, podrá declarar prorrogado ese plazo de sesenta días.

Art. 5.º Las provincias y territorios en que subsiste derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico por la publicación del Código, que regirá tan sólo como supletorio en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas por sus leyes especiales. El título preliminar del Código, en cuanto establezca los efectos de las leyes y de los estatutos y las reglas generales para su aplicación, será obligatorio para todas las provincias del Reino. También lo serán las disposiciones que se dicten para el desarrollo de la base 3.ª, relativa á las formas de matrimonio.

Art. 6.º El Gobierno, oyendo á la Comisión de Códigos, presentará á las Cortes en uno ó en varios proyectos de ley los Apéndices del Código civil, en los que se contengan las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias ó territorios donde hoy existen.

Art. 7.º No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Código civil empezará á regir en Aragón y

ne en las pro-
onga á aquellas
linarias que ac-

s Diputaciones
del é islas Ba-
e las capitales
o á la Comisión
a aprobación de
, á contar desde
ycto de ley en
civiles de Ara-
ervar.

erno en lo refe-
ción foral.

a Comisión se
o civil á las si-

cto de 1851 en
tido y capital
es del Derecho
por tanto este
ación civil sin
larizar, aclarar
; leyes, recoger
ción de las du-
der á algunas
ngan un funda-
zado en legisla-

ciones propias ó extrañas, y obtenido ya común asentimiento entre nuestros jurisconsultos, ó que resulten bastante justificadas, en vista de las exposiciones de principios ó de método hechas en la discusión de ambos Cuerpos Colegisladores.

BASE SEGUNDA

Los efectos de las leyes y de los estatutos, así como la nacionalidad, la naturalización y el reconocimiento y condiciones de existencia de las personas jurídicas, se ajustarán á los preceptos constitucionales y legales hoy vigentes, con las modificaciones precisas para descartar formalidades y prohibiciones ya desusadas, aclarando esos conceptos jurídicos universalmente admitidos en sus capitales fundamentos y fijando los necesarios, así para dar algunas bases seguras á las relaciones internacionales civiles, como para facilitar el enlace y aplicación del nuevo Código y de las legislaciones forales, en cuanto á las personas y bienes de los españoles en sus relaciones y cambios de residencia ó vecindad en provincias de Derecho diverso, inspirándose hasta donde sea conveniente en el principio y doctrina de la personalidad de los estatutos.

BASE TERCERA

Se establecerán en el Código dos formas de matrimonio: el canónico, que deberán contraer todos los que profesen la Religión católica, y el civil, que se celebrará del modo que determine el mismo Código en armonía con lo prescrito en la Constitución del Estado.

que medie imposibilidad absoluta de realizar la primera, y reservando á terceros perjudicados el derecho de impugnar así los reconocimientos como las legitimaciones, cuando resulten realizados fuera de las condiciones de la ley. Se autorizará también la adopción por escritura pública, y con autorización judicial, fijándose las condiciones de edad, consentimiento y prohibiciones que se juzguen bastantes á prevenir los inconvenientes que el abuso de ese derecho pudiera traer consigo para la organización natural de la familia.

BASE SEXTA

Se caracterizarán y definirán los casos de ausencia y presunción de muerte, estableciendo las garantías que aseguren los derechos del ausente y de sus herederos, y que permitan en su día el disfrute de ellos por quien pudiera adquirirlos por sucesión testamentaria ó legítima, sin que la presunción de muerte llegue en ningún caso á autorizar al cónyuge presente para pasar á segundas nupcias.

BASE SÉPTIMA

La tutela de los menores no emancipados, dementes y los declarados pródigos ó en interdicción civil, se podrá deferir por testamento, por la ley ó por el consejo de familia, y se completará con el restablecimiento en nuestro Derecho de ese consejo y con la institución del protutor.

código

A

veintitrés años
vil, establecié
la voluntaria p
los dieciocho a

A

comprenderá l
nonios, reconoe
y naturalizaci
nipales ú otros f
y de los Agent
anjero.

la prueba del
or otras en el c
ren desapareci
te los Tribun

garantida con s
ilitar las notici
pronto como ses
gal á las natur
critas en el Reg
que se acredite
lidas.

A

la propiedad y
e la accesión y
mentos capital

Derecho patrio, y se incluirán en el Código las bases en que descansan los conceptos especiales de determinadas propiedades, como las aguas, las minas y las producciones científicas, literarias y artísticas, bajo el criterio de respetar las leyes particulares por que hoy se rigen en su sentido y disposiciones, y deducir de cada una de ellas lo que pueda estimarse como fundamento orgánico de derechos civiles y sustantivos para incluirlo en el Código.

BASE UNDÉCIMA

La posesión se definirá en sus dos conceptos, absoluto ó emanado del dominio y unido á él, y limitado y nacido de una tenencia de la que se deducen hechos independientes y separados del dominio, manteniéndose las consecuencias de esa distinción en las formas y medios de adquirirla, estableciendo los peculiares á los bienes hereditarios, la unidad personal en la posesión, fuera del caso de indivisión, y determinando los efectos en cuanto al amparo del hecho por la Autoridad pública, las presunciones á su favor, la percepción de frutos, según la naturaleza de éstos, el abono de expensas y mejoras y las condiciones á que debe ajustarse la pérdida del derecho posesorio en las diversas clases de bienes.

BASE DUODÉCIMA

El usufructo, el uso y la habitación se definirán y regularán como limitaciones del dominio y formas de su división, regidas en primer término por el título que las constituya, y en su defecto por la ley, como supletoria á la determinación individual; se declararán los derechos del usufructuario en cuanto á la percepción de

n el momento de
 fijando los prin-
 cípios de las princi-
 pales servidumbres y uso
 de ellas, mejoras, des-
 amortización y fianza, inscrip-
 ción de sus derechos
 de él, y modos
 de todos esos dere-
 chos y prácticas
 en algunos impor-
 tes la publicidad y
 legislación hipote-

LA

El libro de servidumbres contendrá su clasifi-
 cación y división en continuas y discontinuas, positi-
 vas y negativas, aparentes y no aparentes por sus con-
 diciones de ejercicio y disfrute, y legales y volunta-
 rias por el origen de su constitución, respetándose las
 doctrinas hoy establecidas en cuanto á los modos de
 adquirirlas, derechos y obligaciones de los propietarios
 de los predios dominante y sirviente, y modo de extin-
 guirlas. Se definirán también en capítulos especiales
 las principales servidumbres fijadas por la ley en ma-
 teria de aguas, en el régimen de la propiedad rústica
 y urbana, y se procurará, á tenor de lo establecido en
 la base 1.ª, la incorporación al Código del mayor nú-
 mero posible de disposiciones de las legislaciones de
 Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y Pro-
 vincias Vascas.

BASE DÉCIMACUARTA

Como uno de los medios de adquirir, se definirá la ocupación, regulando los derechos sobre los animales domésticos, hallazgo casual de tesoro y apropiación de las cosas muebles abandonadas. Les servirán de complemento las leyes especiales de caza y pesca, haciéndose referencia expresa á ellas en el Código.

BASE DÉCIMAQUINTA

El tratado de las sucesiones se ajustará en sus principios capitales á los acuerdos que la Comisión general de Codificación, reunida en pleno, con asistencia de los Sres. Vocales correspondientes y de los Sres. Senadores y Diputados, adoptó en las reuniones celebradas en Noviembre de 1882, y con arreglo á ellas se mantendrá en su esencia la legislación vigente sobre los testamentos en general, su forma y solemnidades, sus diferentes clases de abierto, cerrado, militar, marítimo y hecho en país extranjero, añadiendo el ológrafo, así como todo lo relativo á la capacidad para disponer y adquirir por testamento, á la institución de heredero, la desheredación, las mandas y legados, la institución condicional ó á término, los albaceas y la revocación ó ineficacia de las disposiciones testamentarias, ordenando y metodizando lo existente, y complementándolo con cuanto tienda á asegurar la verdad y facilidad de expresión de las últimas voluntades.

IXTA

Las partes serán en primer lugar las legítimas, que no pueden ser de la segunda generación, a favor de personas que sobrevivan al fallecimiento del testador. La legítima se dividirá en tres partes iguales: una para la legítima de los hijos, una para el testador en su arbitrio como mee, y una para el testador que podrá disponer de ella en propiedad adjunta, y sin perjuicio de los derechos de los descendientes. Los hijos tendrán los hijos una porción hereditaria legítima. Los legítimos nunca podrán perder su legítima correspondiente, pero podrá aumentarse esta legítima por los descendientes.

PTIMA

El testador o viuda el usufructo de los bienes especiales le conceden, pero no más de lo que por su legítima de los hijos, si los hay, o de los hijos en que ha de cesar

BASE DÉCIMA OCTAVA

A la sucesión intestada serán llamados: 1.º Los descendientes. 2.º Los ascendientes. 3.º Los hijos naturales. 4.º Los hermanos é hijos de éstos. 5.º El cónyuge viudo. No pasará esta sucesión del sexto grado en la línea colateral. Desaparecerá la diferencia que nuestra legislación establece respecto á los hijos naturales entre el padre y la madre, dándoseles igual derecho en la sucesión intestada de uno y otro. Sustituirán al Estado en esta sucesión, cuando á ella fuere llamado, los establecimientos de beneficencia é instrucción gratuita del domicilio del testador; en su defecto, los de la provincia; á falta de unos y otros, los generales. Respecto de las reservas, el derecho de acrecer, la aceptación y repudiación de la herencia, el beneficio de inventario, la colación y partición, y el pago de las deudas hereditarias se desenvolverán con la mayor precisión posibles las doctrinas de la legislación vigente, explicadas y completadas por la jurisprudencia.

BASE DÉCIMA NOVENA

La naturaleza y efectos de las obligaciones serán explicados con aquella generalidad que corresponda á una relación jurídica cuyos orígenes son muy diversos. Se mantendrá el concepto histórico de la mancomunidad, resolviendo por principios generales las cuestiones que nacen de la solidaridad de acreedores y deudores, así cuando el objeto de la obligación es una cosa divisible, como cuando es indivisible, y fijando con pre-

s distintas e
ndicionales,
arán los mod
ndolos á aqu
sometiendo l
cto de los q
ón. Se fijará
eba de las ob
arte del Cód
7 de Enjuici
formales de
un máximu
ó de restitu
o de obras ó
ar por escri
umplimiento

igaciones ser
nirir en cuar
nio ó de cu
tinuarán son
sidencia de v
ece el vínou
a solemnidad
cosas, ó el ot
presados en
de fijar bien
cuanto á la c
los que le pr

ten, estableciendo los principios consagrados por las legislaciones modernas sobre la naturaleza y el objeto de las convenciones, su causa, forma é interpretación, y sobre los motivos que las anulan y rescinden.

BASE VIGÉSIMAPRIMERA

Se mantendrá el concepto de los cuasicontratos, determinando las responsabilidades que pueden surgir de los distintos hechos voluntarios que les dan causa, conforme á los altos principios de justicia en que descansaba la doctrina del antiguo Derecho, unánimemente seguido por los modernos Códigos, y se fijarán los efectos de la culpa y negligencia, que no constituyan delito ni falta, aun respecto de aquellos bajo cuyo cuidado ó dependencia estuvieren los culpables ó negligentes, siempre que sobrevenga perjuicio á tercera persona.

Las obligaciones procedentes de delito ó falta quedarán sometidas á las disposiciones del Código penal, ora la responsabilidad civil deba exigirse á los reos, ora á las personas bajo cuya custodia y autoridad estuviesen constituidos.

BASE VIGÉSIMASEGUNDA

El contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio tendrá por base la libertad de estipulación entre los futuros cónyuges, sin otras limitaciones que las señaladas en el Código, entendiéndose que cuando falte el contrato ó sea deficiente, los esposos han querido establecerse bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales.

EL

TEL

on
m
á
vers
tin
púb
no
o q

CU.

ijo
y s
la

QU

los
ión
e ac
e o
orre
ara
uzg
ble
a l
lota

cargas á que está sujeto, admitiendo en el Código los principios de la ley Hipotecaria en todo lo que tiene de materia propiamente orgánica y legislativa, quedando á salvo los derechos de la mujer durante el matrimonio, para acudir en defensa de sus bienes y los de sus hijos contra la prodigalidad del marido, así como también los que puedan establecerse respecto al uso, disfrute y administración de ciertas clases de bienes por la mujer, constante el matrimonio.

BASE VIGÉSIMASEXTA

Las formas, requisitos y condiciones de cada contrato en particular se desenvolverán y definirán con sujeción al cuadro general de las obligaciones y sus efectos, dentro del criterio de mantener por base la legislación vigente y los desenvolvimientos que sobre ella ha consagrado la jurisprudencia, y los que exija la incorporación al Código de las doctrinas propias á la ley Hipotecaria, debidamente aclaradas en lo que ha sido materia de dudas para los Tribunales de justicia y de seguridad para el crédito territorial. La donación se definirá fijando su naturaleza y efectos, personas que puedan dar y recibir por medio de ella, sus limitaciones, revocaciones y reducciones, las formalidades con que deben ser hechas, los respectivos deberes del donante y donatario y cuanto tienda á evitar los perjuicios que de las donaciones pudieran seguirse á los hijos del donante ó sus legítimos acreedores ó á los derechos de tercero. Una ley especial desarrollará el principio de la reunión de los dominios en los foros, subforos, derechos de superficie y cualesquiera otros gravámenes semejantes constituídos sobre la propiedad inmueble.

ene
s q
a, e
au
leg
e o
var
frá
r d
ne
a C
s q
me
ón
s j
der

cia
vil
y di
eje

och
EN'
ON

**Real decreto de 6 de Octubre de 1888 autorizando
la publicación del Código civil.**

EXPOSICIÓN

SEÑORA: La ley de 11 de Mayo de este año autorizó al Gobierno de V. M. para publicar un Código civil con arreglo á las bases establecidas en la misma, llenando así una necesidad sentida desde hace cinco siglos y no satisfecha aún á pesar de los laudables esfuerzos de algunas de las generaciones que nos han precedido.

El Código civil, que interesa por igual á todas las clases sociales, y realiza, no una aspiración pasajera, sino un anhelo constante del pueblo español, puede ser un título de honor para los contemporáneos á los ojos de la posteridad, y el más bello florón de la Corona que ciñe V. M. tan merecidamente por sus grandes virtudes y raras prendas.

Pocos serán ya hoy en España los que desconozcan la conveniencia de sustituir la legislación civil vigente, desparramada en multitud de cuerpos legales promulgados en la época gótica, en la Edad Media y en tiempos más recientes pero siempre distantes de nosotros, y que de todos modos retratan estados sociales distintos y aun opuestos, por un monumento legislativo armónico, sencillo y claro en su método y redacción que refleje fielmente nuestras actuales ideas y costumbres, y satisfaga las complejas necesidades de la moderna civilización española.

CÓDIGO ;

par su firma en esta
satisfacción interior
del Jefe supremo de
que su autoridad au
ad política, sino al c

cribe estima como u
tiene la honra de se
l Código civil, reda
os años viene pres
los términos que h
s, á todos los Vocal
puesta de sabios ju
jurídicas y partido

te ha llegado en Es
civil, huelga ya to
ascutir. Hoy se tra
de un precepto ter
ito, en justo acat
el honor de propon
creto.—SEÑORA.
LONSO MARTÍNEZ.

O

to en la ley de 11
autorizó á mi Gobier
arreglo á las cond
misma, conformán
Ministro de Gracia

Justicia, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar que se publique en la *Gaceta de Madrid* el Código civil adjunto, en cumplimiento de lo que preceptúa el art. 2.º de la mencionada ley de 11 de Mayo último.

Dado en Palacio á seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.—MARÍA CRISTINA.—*El Ministro de Gracia y Justicia*, MANUEL ALONSO MARTÍNEZ.

Real orden de 8 de Diciembre de 1888.

Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de los muchos y muy importantes trabajos que para la formación del Código civil ha hecho la Comisión general de Codificación en los últimos ocho años transcurridos, ya redactando los dos libros primero y segundo que fueron presentados á las Cortes en 1882, ya reuniéndose aquel mismo año con los Sres. Vocales correspondientes y los Sres. Senadores y Diputados nombrados entonces Vocales de la misma en las sesiones celebradas para unificar cuanto fuese dable la legislación general con las locales de España, ya, en fin, revisando los libros primero y segundo, formando, con arreglo á las bases nuevamente presentadas á las Cortes en 1884, los libros tercero y cuarto del Código.

Altamente satisfecha S. M. del relevante mérito

VOCALLES DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA COMISIÓN GENERAL
DE CODIFICACIÓN QUE HA REDACTADO EL CÓDIGO CIVIL

Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martínez, Presidente.
Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas.
Excmo. Sr. D. Salvador de Albacete.
Excmo. Sr. D. Germán Gamazo.
Excmo. Sr. D. Hilario de Igón.
Excmo. Sr. D. Santos de Isasa.
Excmo. Sr. D. José María Manresa.
Sr. D. Eduardo García Goyena.

VOCALLES QUE HAN SIDO DE LA SECCIÓN PRIMERA Y HAN TOMADO
PARTE EN LA REDACCIÓN DEL CÓDIGO CIVIL

Excmo. Sr. D. Francisco Silvela.
Excmo. Sr. D. Benito Gutiérrez.
Excmo. Sr. D. Cirilo Amorós.

SEÑORES SENADORES, DIPUTADOS, VOCALLES DE LA SECCIÓN SEGUNDA
Y VOCALLES CORRESPONDIENTES QUE CONCURRIERON CON LOS DE
LA SECCIÓN PRIMERA Á LAS SESIONES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
DE 1882.

Excmo. Sr. D. Fernando Calderón y Collantes, Marqués de
Reinosa.

Excmo. Sr. D. Alejandro Groizard.
Excmo. Sr. D. Vicente Romero y Girón.
Excmo. Sr. D. Manuel Danvila.
Excmo. Sr. D. Emilio Bravo y Romero.
Excmo. Sr. D. José María Fernández de la Hoz.
Excmo. Sr. D. Pedro Nolasco Auriolles.
Excmo. Sr. D. Telesforo Montejo y Robledo.
Excmo. Sr. D. Justo Pelayo Cuesta.
Excmo. Sr. D. Eduardo Alonso Colmenares.

CIÓN DEL CÓDIGO

ía Fabié.

iz Capdepón.

nas.

la Pisa Pajares.

in y Bas.

y López, Barón de Mora.

ómez.

o.

Mendieta.

de Febrero de 1889.

azo de sesenta días establ
de 11 de Mayo de 1888 pa
no ley el Código civil publ
drid, en cumplimiento de
to de 6 de Octubre último
a proposición prevista en
y,

propuesto por el Ministro
uerdo con el parecer de

gusto Hijo el Rey D. A
Regente del Reino,
rogado hasta el 1.º de Ma
de los sesenta días establ
yo de 1888.

de Febrero de mil ochocie
ARÍA CRISTINA.—*El M*
JOSÉ CANALEJAS Y MÉNDE

Ley de 26 de Mayo de 1889.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Contitución, Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino,

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:

Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º El Gobierno hará una edición del *Código civil* con las enmiendas y adiciones que á juicio de la Comisión general de Codificación sean necesarias ó convenientes, según el resultado de la discusión habida en ambos Cuerpos Colegisla-dores.

Art. 2.º Esta edición se publicará lo más pronto posible, dentro del plazo de dos meses.

Además se insertarán en la *Gaceta* los artículos del Código enmendados ó adicionados.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Aranjuez á veintiséis de Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve.—YO LA REINA REGENTE.—*El Ministro de Gracia y Justicia, JOSÉ CANALEJAS Y MÉNDEZ.*

DE MOTIVOS

LAS

LA NUEVA EDICION OFICIAL

de Julio de 1889.

cuenta á S. M. la Reina
mo servicio que la Sección
leral de Codificación acaba
umplimiento de la ley de 26
das y adiciones consignadas
ódigo civil, recientemente

del relevante mérito de los
o del diligente celo y ex-
que en el breve plazo esta-
ley ha realizado tan difícil
confianza depositada en los
la componen;

sto Hijo el Rey D. Alfon-
servido disponer que se sig-
to á V. E., que en su cali-
ción ha dirigido sus traba-

jos, como á los Vocales de la misma D. Francisco de Cárdenas, D. Salvador de Albacete, D. Germán Gamazo, D. Hilario de Igón, D. Santos Isasa, D. José María Manresa y D. Eduardo García Goyena, y que á continuación de esta Real orden se publique en la *Gaceta de Madrid* la luminosa exposición en que se expresan los fundamentos de las adiciones y enmiendas consignadas en la nueva edición del Código civil, publicado en cumplimiento de la ley de 26 de Mayo último.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y satisfacción. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 29 de Julio de 1839.—JOSÉ CANALEJAS Y MÉNDEZ.—*Sr. D. Manuel Alonso Martínez, Presidente de la Sección primera de la Comisión general de Codificación.*

La exposición de motivos á que se refiere la precedente Real orden dice así:

EXPOSICIÓN

Excmo. Sr.: V. E. se sirvió comunicar á esta Comisión, para su cumplimiento, la ley de 26 de Mayo último, que manda hacer una edición del Código civil, con las enmiendas y adiciones que, á juicio de la Sección de lo civil de la Comisión general de Codificación, sean necesarias ó convenientes según el resultado de la discusión habida en ambos Cuerpos Colegisladores. Cumpliendo este mandato, la Sección ha revisado detenidamente todo el Código, y en particular las disposiciones que han sido objeto de controversia y de crí-

venir las dudas á que pudiera dar lugar la suspicacia ó la malicia de los que litiguen sobre su aplicación, ya, en fin, para corregir los errores de imprenta ó de copia de que adolecen. Hay también artículos que contienen principios indiscutibles de justicia ó conveniencia, pero que necesitan ampliarse y desarrollarse para su aplicación, á fin de que no den lugar á una jurisprudencia varia y aun contradictoria. La Sección, teniendo todo esto en cuenta, ha procurado el remedio, prestándose á todas las modificaciones de concepto y expresión que ha podido exigir la más severa crítica.

La verdad es que, fuera de muy pocos puntos en que por diversidad de escuela ó de propósito no puede convenir la Sección con algunos de sus censores, en todos los demás las diferencias consisten, más bien que en el fondo, en la expresión de concepto. Se han expuesto ciertamente consideraciones generales muy importantes sobre las novedades introducidas por el Código en el orden de la familia, en las relaciones jurídicas entre sus individuos y en las sucesiones hereditarias; pero la Sección se ha abstenido de controvertirlas, tanto porque casi todas ellas proceden de la ley de bases para redactar el Código, á las cuales ha tenido que sujetarse, cuanto por no ser éste ya el momento oportuno de exponer los motivos de toda aquella obra. Pasada su oportunidad, cumple sólo á la Sección manifestar el orden y método con que ha verificado su revisión, la extensión y los límites de su labor y los fundamentos de las principales enmiendas y adiciones adoptadas.

Expuesto queda el método seguido: respecto á la extensión de su trabajo, se ha limitado la Sección á

ciones de un Código no se deben interpretar aisladamente, sino en combinación con todas las otras que tienen relación con ellas, habría debido entenderse el artículo 15 sin perjuicio de lo dispuesto en el 12, el cual consagra la integridad del régimen jurídico foral, en justo acatamiento al precepto claro y terminante del art. 5.º de la ley de 11 de Mayo de 1888.

Ya que esta interpretación no tranquilizó bastante á los que entendían de otro modo el art. 15, la Sección ha procurado aclararlo y fijar su verdadero sentido, de suerte que no pueda quedar duda al más suspicaz de que por él no se introduce novedad alguna en el régimen jurídico de las provincias forales.

También ha modificado la Sección, no el concepto, sino la forma del art. 29, que declara la condición y los derechos de los póstumos. Decía este artículo en su redacción primitiva, que aunque el nacimiento determina la personalidad humana, la ley retrotrae en muchos casos á una fecha anterior los derechos del nacido. Hallándose estos casos señalados en diversos lugares del Código, y siendo todos aquellos en que podía optar el póstumo á algún beneficio, esta disposición no alteraba el precepto de nuestra antigua legislación, que consideraba al póstumo como nacido para todo lo que fuera favorable. Mas para que no pueda quedar duda de que este mismo es el sentido del art. 29, se ha variado su redacción, adoptando la fórmula genérica y tradicional de nuestro antiguo Derecho.

Ha sido igualmente objeto de interpretación equivocada el art. 54, suponiendo que, según él, la posesión de estado, con las actas del nacimiento de los hijos en concepto de legítimos, era por sí sola prueba bas-

Sección lo ha redactado de nuevo, limitando el derecho de ejercitar dicha acción á los cónyuges, á los que tengan algún interés en ella y, con señaladas limitaciones, al Ministerio público.

Aunque el Código no ha adoptado la antigua denominación de alimentos *naturales y civiles*, ha reconocido la diferencia que estos nombres significaban, en cuanto á los servicios comprendidos en la obligación de alimentar. El Código no había tomado bastante en cuenta esta diferencia con relación á la diversidad de personas, á quienes, ya confirmando las leyes ó la jurisprudencia antigua, ya completándola ó fijándola, se concede el derecho á alimentos. Así la Sección, después de darlos en toda su extensión á los cónyuges, á los descendientes ó ascendientes legítimos y á los padres y los hijos naturales, legitimados ó reconocidos, los restringe entre padres é hijos ilegítimos no naturales y entre hermanos consanguíneos ó uterinos, cuando alguno de éstos no pueda procurarse la subsistencia por causas que no le sean imputables.

La clasificación que se hacía en el cap. III, tít. I, libro II, de los bienes de dominio público, ó no era bastante comprensiva, ó podía dar lugar á dudas en casos especiales. Por ello ha parecido oportuno á la Sección definir estos bienes, teniendo en cuenta su destino más bien que su denominación y sus analogías, señalando después tan sólo como ejemplos los que antes aparecían como reguladores exclusivos de la clasificación. El Estado posee bienes destinados al uso común y bienes que, sin ser de uso común, están destinados á algún servicio público. Unos y otros son bienes de dominio público, y se distinguen de los patrimonia-

rtenece también al Estado, stancias. Igual distinción se os pueblos y provincias, sin ertenecer su propiedad á las

a subsistentes las servidum- s, necesitaba alguna amplia- aramente su régimen en lo se creyera que iban á des- ladas por la legislación an- servidumbres, cuanto para sas que en adelante se esta- o y abrevadero de los gana- fines, guardando profundo airidos, ha refundido la Sec-

, plantar árboles altos cerca nos distancia de tres metros, 3 á menos de dos de la línea dades. Estas distancias hu- s y no bastante justificadas otras mucho menores no su- n ni perjuicio el dominio creído así también, y en su aquellas distancias á dos s respectivamente, salvo lo so las Ordenanzas rurales, ó por la costumbre de la loca-

ción de nuestro antiguo De- rohibición de heredar y de a á los religiosos ligados con

monásticas,
la facultad
disponiendo
los Monaste-
servancia de
los progresos
ivó á los re-
debían rete-
minio de las
ción supo-
ios para ad-
que desde e'
les privaron
en su mayor
pto canónico
prohibían á
testamento
ás de una vez
anecieron en
as y las que
aciones reli

odos, las re-
Órdenes mo-
y al punto ha
timarse res-
ara testar y
acción, como
derando que
erecho canó-
levantado st
tes, pertene

ren
luc
e a
cum
abr
sin
regl
nsi
o c
onc
sup
nce
.
es l
los
or l
cida
nira
rest
o,
qu
a.
má
ent
lisi
ve.
ota
ase
test
e n
e lo

La condición impuesta á la mujer casada, en artículo 995, de no aceptar herencias sino á beneficio de inventario, era en verdad excesiva é injustificada. Obligar á la hija á no recibir la herencia de sus padres y á la de sus hijos sino con aquella protesta, era en muchos casos, y aun en los más, lastimar sus sentimientos de filial respeto y cariño, sin razón válida que lo justificase. Si en algunas circunstancias puede ser esta precaución necesaria, podrán utilizarla las mujeres á quienes favorezca, sin que sea menester obligarlas á ello. La Comisión ha entendido que con esta facultad, y con no responder en todo caso de deudas hereditarias los bienes de la sociedad conyugal existentes al ser aceptada la herencia, quedarán suficientemente protegidos los intereses matrimoniales.

El art. 1.280 determina los contratos que deben hacerse constar en documento público por razón de su objeto sobre que versen ó de su naturaleza jurídica cualquiera que sea su cuantía. Esta disposición por ofrecer el inconveniente de dificultar los contratos de poca entidad, por temor á los gastos que ocasionara la elevación á documento público. Para evitar este perjuicio, una adición al art. 1.280 exime de aquella formalidad los contratos no comprendidos en los seis números del mismo artículo, y permite hacerlos valer, aunque su importe exceda de cierta suma, si constan por escrito privado, quedando libres de toda solemnidad los mismos contratos de inferior cuantía.

También ha rectificado el art. 1.296, que exige para la rescisión las capitulaciones matrimoniales de menores celebradas con intervención de sus tutores, porque ni en tales capitulaciones intervienen los tutores.

nero de contratos el
ulo. Una referencia
91, que debía ser al
r lugar á este error.
an los contratos ce-
onas ausentes, con-
eunstancias bastan
rescisión. Pero las
s menores, aunque
us ascendientes, ó
en su apoyo tantas
ra declararlas irres-

oversia en las Cor-
523 á las heredades
objeto del retracto
militar, con el trans-
a división excesiva
donde este exceso
arrollo de la rique-
naciones, concedió
ho de retraer por el
us ó menos, límitro-
e parecer excesiva á
rían reducirla á 50
ido la Sección que
itaran el retracto,
viese menos cabida,
ropuso después al-
ulo. En vista de las
do la Sección á re-
erredades sujetas á

que de
de la
la más
a acej
ad del

los for
gislaci
na ley
ción h
ipo pa
de la p
esta d
ros. A
rque e.
la Sec
ición a
foros.
dos ec
transit
l y ju
va, de
redara:
quirido
ración
decir
legisl
tendr
stermi
emas n

sto er

en Italia y en otros países, por el Poder legislativo, ante autorización constituyente disposiciones transitorias. ni siquiera iniciado, dicha el encargo de hacer en el iciones que creyese necesa- el resultado de la discusión Colegisladores, se ha creído también las reglas según las : nuevas disposiciones que derecho anteriormente cons-

guirse para el desempeño de alar minuciosamente todas rminando en cada caso la espondiente; otro, establecer á todos los casos que puedan El primero de estos siste- mismo indefinido y tal vez ondería mejor á su objeto; eucción, no daría un resul- excluyera en absoluto la ne- s para casos determinados. terminar cuáles son las va- lean derechos anteriormente 1, por tanto, aplicarse con lo no basta decir que son es que privan de la posesión interés ó acción jurídica; ividad ó extensión del dere- dades independientes de la

voluntad del que lo posee, podrá éste tener una esperanza, pero no un verdadero derecho adquirido. Por eso los herederos legítimos y los instituidos, así como los legatarios de las personas que viven, no tienen derecho alguno adquirido hasta la muerte de éstas, porque la existencia del que en lo futuro podrán disfrutar, depende ya de la eventualidad de su propia muerte, ya de las vicisitudes de la fortuna, ó de la libre y variable voluntad de los testadores.

Fundada en estas consideraciones, la Comisión, que estima peligrosa la definición abstracta de los derechos adquiridos, ha preferido desenvolver las doctrinas más comúnmente admitidas en algunas prescripciones generales y en una serie de reglas concretas, que puedan ofrecer solución á los casos más frecuentes y servir de criterio en todos los análogos.

Lo primero que debía resolver era el punto de partida de los derechos, á fin de determinar cuáles quedaban al amparo de la legislación antigua y cuáles sometidos á la nueva. Y como todo derecho nace necesariamente de un hecho voluntario ó independiente de la humana voluntad, la fecha de este hecho, que puede ser anterior ó posterior á la promulgación del Código, es la que debe determinar la legislación que ha de aplicarse al derecho que de aquel hecho naciera. Ni es necesario que el derecho originado por un hecho ocurrido bajo la legislación anterior se halle en ejercicio para que merezca respeto, pues si existía legitimamente según la ley bajo la cual tuvo origen, si dependía solamente de la voluntad del que lo poseyera ponerlo ó no en ejercicio, es un derecho tan adquirido como el que hubiera ya producido ó estuviera produciendo su de-

trata de un derecho nuevo, desconocido en el Código y no reconocido anterior, deberá regirse por el mismo derecho que lo origine hubiere tenido relación, á menos que perjudique al sujeto bajo la misma; porque en este caso es el que va á sufrir el daño el que debe obtener un beneficio gratuito.

En principio en la regla 1.ª, no se pone en el estado legal de las personas y ejerciendo la patria potestad y el nuevo matrimonio antes de que éste prive de aquel derecho á casarse después. Por igual razón para heredar, así absolutas como condicionadas, se aplicará la ley que se aplicaba con arreglo á la legislación anterior del testador ó causante de la sucesión, y conforme á la misma se entenderá que han perdido el beneficio *in integrum* las personas que en la legislación anterior, cuando el hecho que causa el perjuicio que debe repararse se produjo bajo aquel régimen; y sólo cuando se promulga la nueva ley, deberán aplicarse las disposiciones de la nueva ley. De la misma manera la 7.ª, que no permite á los herederos retirar las fianzas que tengan en garantía que se hallen ejerciendo de garantía es un derecho adquirido por los herederos, del cual no se puede privar, aunque la nueva ley establece la obligación de afianzar

á las personas anteriormente nombradas, cuando las llama á la tutela de sus descendientes.

De esta regla general se derivan otras varias, que la Sección ha consignado también, aunque sea por vía de ejemplo. Así, pues, conforme á la regla 2.^a, los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior, que fueron válidos según ella, deben serlo también después de promulgado el Código, aunque con las limitaciones, en cuanto á su ejecución, establecidas en las disposiciones transitorias. Por eso deben valer los testamentos otorgados bajo aquella legislación, con arreglo á la misma, estén ó no otorgados en forma autorizada después. Por eso serán válidos, aunque el Código no los permite, siempre que procedan del tiempo en que regían las leyes que los autorizaban, los testamentos mancomunados, los poderes para testar, las memorias testamentarias, las cláusulas llamadas *ad cautelam*, y los fideicomisos en que el testador encarga al fiduciario dar á sus bienes un destino desconocido. Lo que no podrá hacerse es alterarlos ni modificarlos en manera alguna después de regir el Código, sino testando con arreglo al mismo; porque lo que pudo hacerse legítimamente bajo el régimen anterior, no es lícito repetirlo bajo el nuevo régimen.

Por efecto de la misma regla 2.^a no podrá alterarse el estado legal en que se hallen los que, por pacto anterior á la promulgación del Código, estén dando ó recibiendo alimentos; ni el hijo adoptado bajo la legislación anterior habrá perdido su derecho á heredar abintestato al padre adoptante, aunque el Código no reconozca este derecho á los adoptados después. En el mismo caso se hallan las reglas que determinan la co-

rán hacerse valer por los procedimientos en el mismo establecidos, y sólo cuando éstos se hallen pendientes en dicha época, podrán optar los interesados por ellos ó por los nuevos.

Consecuencia es también de esta regla la 8.ª, que mantiene en su cargo á los tutores y curadores nombrados antes de regir el Código y á los poseedores y administradores interinos de bienes de ausentes, pero sometiéndolos, en cuanto á su ejercicio, á la nueva legislación.

También emana de la misma regla 2.ª lo dispuesto en la 9.ª, que manda constituir, bajo el régimen de la legislación anterior, las tutelas y curatelas cuya constitución esté pendiente de la resolución de los Tribunales; pero entiéndase esto sin perjuicio de que los curadores ya en ejercicio tomen el nombre genérico de tutores, y de que todos ellos se sometan, en cuanto al desempeño de su cargo, á las disposiciones del Código.

De la regla 2.ª procede igualmente la 11.ª, que manda sigan su curso los expedientes de adopción, emancipación voluntaria y dispensa de ley, pendientes ante el Gobierno ó los Tribunales.

Pero el rigor de la regla fundamental en esta materia, ó sea la de atender á la legislación vigente al tiempo de adquirirse el derecho, exige también ciertas excepciones, aunque de corta transcendencia. Los efectos de la patria potestad respecto á los bienes de los hijos, según el Código, no siempre convienen con los mismos efectos según la legislación anterior. En su consecuencia, aquello en que difieran debería regirse por dicha legislación, cuando los padres estu-

u p
echu
el C
. Co
a pa
para
e la
os.
ent
y a
pue
s er
ient
a pa
n el
ros c
are
-not
or l
ado
ue l
sma
s si
qu
adm
sol

e p
rgac
gime
-lo,
riar

emancipado á un hijo, reservándose algún derecho sobre sus bienes adventicios, podrá continuar disfrutándolo hasta el tiempo en que el hijo debería salir de patria potestad, según la legislación anterior.

También tiene carácter en cierto modo excepción del principio que domina en esta materia, la regla 10. que establece ciertas restricciones á la introducción inmediata del consejo de familia cuando la tutela estaba ya constituida ó constituyéndose al empezar regir el Código. Siendo esta nueva institución enteramente desconocida en España, su establecimiento requiere temperamentos de lentitud y prudencia, no ha de comprometerse su éxito. Por eso, aunque el Código, legislando para lo porvenir, dispone que los Jueces y Fiscales municipales procedan de oficio al nombramiento del consejo de familia si supieren que hay en su territorio alguna persona sujeta á tutela, la Sección entiende que este precepto no es aplicable sino á los menores ó incapaces cuya tutela no estuviese definitivamente constituida al empezar á regir el Código, sin perjuicio de que, tanto en este caso como en el de estar funcionando el tutor, deberá nombrarse consejo cuando lo solicite persona interesada, y siempre que deba ejecutarse algún acto que requiera su intervención. Mientras no vaya entrando en las costumbres la nueva institución, la iniciativa fiscal para promover su uso podría más bien perjudicarla que favorecerla. Por la misma razón, cuando la tutela estuviese ya constituida bajo el régimen de la legislación anterior, no se deberá proceder al nombramiento del consejo sino á instancias de cualquiera de las personas que tengan derecho á formar parte de él, ó del tuto

Aunque la Sección ha buscado detenidamente el Código todos los casos de conflicto que pueda haber entre sus disposiciones y las del antiguo Derecho cree que todos los conocidos podrán resolverse por las reglas transitorias que quedan expuestas, y por lo mismo ha creído conveniente prever otros casos que puedan ocurrir en la práctica y no se hallen directamente comprendidos en aquéllas. Si esto ocurriese, toca á los Tribunales decidir lo que á su juicio correspondiere á su libre arbitrio, sino aplicando, según la regla, los principios que sirven de fundamento á las transitorias.

Fuera de las enmiendas y adiciones que quedan indicadas, nada más ha tenido que hacer la Sección sino algunas correcciones de estilo, ó de erratas de imprenta ó de copia, cometidas en la primera edición del Código. Fácil será advertirlas comparando los textos con los publicados, y así se verá que sus diferencias son tan poco importantes y sus motivos tan evidentes, que no es necesario llamar la atención sobre ellas.

Expuestas las consideraciones que preceden á conocer en ellas lo que principalmente matters en los trabajos á que se refieren y en el espíritu que los ha animado, cree la Sección deber dar por terminado el encargo recibido.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 1.º de Junio de 1889.—*Manuel Alonso Martínez, P. Francisco de Cárdenas, Salvador de Albacete Gamazo, Hilario de Igón, Santos de Isasa, J. Manresa, Vocales; Eduardo García Goyena, Secretario.*—Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia. (Gaceta 30 Julio íd.)

CÓDIGO CIVIL

ucede con el Código civil hoy vigente en la. Cualesquiera que hayan sido las opiniones emitidos en las discusiones que motivó le que responde á la constante aspiración de todos modos manifestada hace m que aun negándole otras ventajas, producible de reducir á una sola las múltiples, encontradas fuentes de nuestro Derecho p l, modifica en términos racionales el Der o, aclara y mejora el relativo á la persona en general, tomando por base la tradición, r determina toda clase de relaciones jurídicas en una forma más racional, más sistemática que la usada en los libros legales de esa y abundante serie nos han dejado los aglos.

En las Antillas ni en Filipinas hay Derecho y diferente del que rigió en la Península. La organización de la familia y de la propiedad en las remotas provincias demanda especialidad de reglas para una vida que en lo privado elve lo mismo que en el resto de la Nación. Aquellos pueblos que tienen su sentido propio distinto del pueblo español, se acomodan en sus relaciones civiles á las leyes que traen nuestros conquistadores y misioneros, las mismas de su propia patria española.

Hay, pues, el peligro de llevar innovaciones que pudieran resultar malsanas para las familias, ni trastornos perjudiciales para la salud que se adquiere, se conserva y se pierde á los modos establecidos en la antigua le

CÓDIGO CIVIL

El aliento de la patria nunca regateó su interés para levantar generosamente y traer á su seno los elementos vivos de los pueblos colonizados, y regirlos como se educaba y regía en España; si como feliz resultado de esta conducta de abnegación se implantó de antiguo el principio importante de los beneficios en el orden legal, la identidad en el Derecho civil, es racional y de conveniencia de Gobierno mantenerla, como lo así el título más honroso y el bien más útil que puede ofrecer una Nación respecto á los que domina, y que consiste en asentar la paz en la igualdad y conceder á todos los derechos de que ella misma goza.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro de Ultramar, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la aprobación de S. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 31 de Julio de 1889.—SEÑORA DOÑA P. de V. M.—MANUEL BECERRA.

La propuesta del Ministro de Ultramar; de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de mi Augusto Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Tengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se hace extensivo á las islas de Puerto Rico y Filipinas el Código civil vigente en esta Península, redactado de conformidad con lo dispuesto en la ley de 11 de Mayo de 1888, y aprobado por el Real Decreto de 24 del actual.

Art. 2.º Empezará á regir este Código en las

12/12/12

1

2

3

4

5

Los bienes inmuebles habían de regirse, según el art. 8.º, por las leyes españolas, aunque estuvieren poseídos por extranjeros; los muebles (art. 9.º) por las del país en el que el dueño estuviese domiciliado, y las solemnidades de los instrumentos públicos y contratos (art. 10) por las del país en que se otorgaren, precepto análogo al del párrafo primero del art. 11 del Código actual.

No permitía el art. 11 convenio alguno contra las buenas costumbres ó en que estuviese interesado el orden público; preceptuaba el 12 (á semejanza del primer párrafo del 6.º del nuevo Código) que incurría en responsabilidad el Tribunal que se negare á fallar á pretexto de silencio ú obscuridad de la ley, y el 13 prohibía á los Jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general y reglamentaria.

Un principio importantísimo y justo, aunque extraño y poco propio de un Código civil, consignaba el art. 14, á saber: que «las leyes no reconocen en el orden civil distinciones de nacimiento, ni diferencias de condiciones sociales».

El art. 15 encerraba la misma doctrina que el 7.º del actual, con la sola diferencia de que la computación de las fechas y plazos en él señalados podían ser alterados en los contratos por estipulación en contrario.

El art. 16 adolecía de igual inconveniente que el 14, pero en mayor grado, pues es á todas luces impropio de un Código de esta clase el determinar, como lo hacía dicho artículo, el sistema de pesas y medidas que había de regir en España, estableciendo ya el métrico decimal.

Por último, el art. 17 era el antecedente del 16 del Código actual, aunque con diferentes palabras, pues expresaba que las disposiciones del Código (el de 1851) sólo eran aplicables á los asuntos que se rigiesen por las leyes de comercio, minas y otras especiales, en cuanto no se opusiesen á estas leyes.

I y II.—Artículos 19 al 46.

extranjeros (artículos 19 al 34).—T
el domicilio.—Capítulo I: De la vecindad
ulo II: Del domicilio (artículos 38 al 46)

españoles.—Se consideran españoles, según el proyecto que estudiamos, las mismas personas enumeradas en el art. 17 del Código vigente.

Pérdida de la calidad de español.—La calidad de español se pierde por las mismas causas consignadas en el artículo 20 del Código actual, pudiéndose recobrar previos los requisitos expuestos en los artículos 21 y 23 del moderno Código.

Personas que pueden gozar de la calidad de españoles.—Los hijos de un extranjero nacidos en los dominios españoles, y los hijos de padre ó madre españoles nacidos fuera de España, si desean gozar de la calidad de español deberán manifestarlo dentro del año siguiente á su emancipación ó mayor edad. Los que se hallaren fuera del reino harán la citada manifestación ante el Alcalde del pueblo en que residieren. Los que se hallen en el extranjero acudirán á los Agentes consulares ó diplomáticos del Gobierno español, y aquellos que estuvieren en un país en que el Gobierno no tenga Agente diplomático ó consular, deben dirigirse al Ministerio de Estado. Como se ve por lo expuesto estas disposiciones son idénticas á las que forman el contenido del art. 19 de nuestro Código.

Hijos nacidos en España.—Los hijos de un extranjero nacidos en España seguirán la condición de su padre y se considerarán españoles hasta tanto que no hagan la manifestación prevenida anteriormente, conservando la calidad de españoles mientras no renuncien á ella los hijos de padre ó madre españoles nacidos fuera de España.

Los hijos nacidos en país extranjero de un español ó de

pañola que hubieran perdido esta calidad, podrán adquirirla volviendo al reino y renunciando á la protección del pabellón del país en que estuvieren, ante el Alcalde del pueblo del domicilio que piensen tener.

Mujer española.—La española que se case con un extranjero sigue la condición de su marido, pudiendo recobrar la calidad de española después de disuelto el matrimonio, haciendo la renuncia en la forma prevenida en el párrafo anterior.

Derechos civiles.—Los extranjeros gozarán en España de los mismos derechos que disfrutaban los españoles en su país, á no ser que se dispusiere otra cosa en contrario por los tratados y leyes especiales.

Demandantes y demandados.—Todo español puede ser demandado en España por las obligaciones contraídas fuera del reino con un extranjero ú otro español. Respecto de los extranjeros, aunque no residan en España, pueden ser demandados ante los tribunales españoles, siempre que hubieran contraído obligaciones con un español, ya sea en el reino ya en país extranjero. También puede ser demandado un extranjero que se encuentre en España, por otro, cuando contraiga obligaciones en este territorio. El extranjero demandante en España debe afianzar el pago de lo que fuer juzgado y sentenciado, á no ser que posea bienes inmuebles en cantidad suficiente.

Todo lo expuesto anteriormente, así como lo relativo á las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros para su cumplimiento en España, ha de entenderse sin perjuicio del principio de reciprocidad.

Personas morales.—Las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidas por la ley, tienen la consideración de personas morales, para el ejercicio de los derechos civiles.

Esclavos.—Adquirirán la calidad de libres en el momento de ser importados en el territorio continental de

el vigente, y en que en él se expresa que los bienes muebles están sujetos á la ley del país donde se hallen, cuando el 10 del nuevo Código dice que al de la nación del propietario.

El nuevo Código añade en este artículo una disposición referente á los vizcainos, que seguirán sometidos, á pesar de residir en las villas, y en cuanto á los bienes que posean en la tierra llana, á la ley 15, tít. XX del Fuero de Vizcaya.

Otra disposición completamente nueva, y que no constaba en el proyecto que estudiamos, es la contenida en el último párrafo del art. 11 del moderno Código. Se dice en este párrafo que las leyes prohibitivas concernientes á las personas, sus actos ó sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costumbres, no quedarán sin efecto por leyes ó sentencias dictadas, ni por disposiciones ó convenciones acordadas en país extranjero.

Los preceptos de los artículos 12, 13, 14 y 15 del Código vigente son nuevos, no teniendo, en su consecuencia, precedente en el proyecto que ligeramente reseñamos.

Libro I.—Títulos I y II.—Artículos 15 al 27.

Título I: De los españoles y extranjeros (artículos 15 al 26).—Título II: Del domicilio (art. 27).

El libro I se refería también á las personas, y su título I (artículos 15 al 26) á la materia de «españoles y extranjeros». Todos sus artículos eran exactamente iguales á los que del Código rigen hoy sobre el particular. El art. 26 del proyecto y el 28 del Código son iguales en cuanto al primer párrafo. El Código aumenta un segundo apartado referente á las Asociaciones domiciliadas en el extranjero, las cuales tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados ó leyes especiales.

Ni el proyecto de 1851 ni el de 1882 se ocupaban de la

del mismo. Ésta fué abolida por ley de 13 de Mayo de 1854, cuyas disposiciones consignamos á continuación.

El condenado á pena perpetua aflictiva no puede disponer de sus bienes, aceptar donación, manda hereditaria, recibir nada por estos conceptos, á menos que sea por vía de alimentos, ser tutor, tomar parte en el consejo de tutela, ser testigo, y caso de presentarse en juicio, necesita la representación de un curador especial. No obstante, el Gobierno puede relevarle de algunas de las incapacidades enumeradas anteriormente, y concederle también algunos derechos civiles de que se halle privado por su interdicción legal. Los efectos de esta pena cesan para el porvenir, pero sin perjuicio de tercero respecto de los que anteriormente sufrieren la pena por sentencia de muerte civil.

En Bélgica ha sido también derogada la doctrina de esta sección por el art. 13 de su Constitución.

La ley de 1853 en Francia y el art. 13 de la Constitución belga son dignos de aplauso por sus humanitarias disposiciones, debiendo hacer constar, para honra de nuestra patria, que la muerte civil fué abolida por el Código penal de 1848, principio desenvuelto después por los preceptos de la de 18 de Julio de 1870.

ITALIA

DISPOSICIONES SOBRE LA PUBLICACION,

interpretación y aplicación de las leyes en general
(artículos 1.º al 12).

Promulgación de las leyes.—Las leyes promulgadas en Italia son obligatorias á los quince días de su publicación, salvo disposición en contrario, entendiéndose por publica-

cción oficial y dadas á conocimiento.

no tiene efecto retroactivo ni del que expresen sus términos acerca de su redacción se generales del Derecho.

se verifica únicamente por la lader ó por incompatibilidad larizándose por la nueva en

la capacidad de las personas
El estado y capacidad de las familia se rigen por la ley nacional rigen por las leyes de la nación nubles por las del país donde n las leyes á las que se halle encia se trate, así como tam- i instrumentos.

erente á procedimiento se reyes del país donde se siga el

DE LA CIUDADANÍA

derechos civiles.

Artículos 1.º al 19.

-Todo ciudadano goza de los ivado de ellos por sentencia, las personas morales ó cor- injeros pueden gozar de todos ibuyen á los nacionales, con- al hijo de padre. En el caso i ciudadanía, se reputa al hijo

como ciudadano si ha nacido en el reino y tiene en residencia, pudiendo optar por la cualidad de extranjero haciendo la declaración ante el oficial del Registro civil, si este estuviese ausente, ante funcionarios diplomáticos locales.

El hijo nacido en país extranjero de padre que ha perdido la ciudadanía se estima extranjero, pudiendo optar por la nacionalidad con las formalidades ya citadas. Si el hijo, si ha aceptado empleo público en el reino ó en el ejército ó armada, sin invocar su cualidad de extranjero, se le reputa ciudadano sin necesidad de más formalidades. Siendo desconocido el padre, es ciudadano el hijo si es varón; si es mujer, es ciudadana; no teniendo padres conocidos, es ciudadano el hijo nacido en el reino, reputándose también como extranjero que haya tenido diez años de domicilio en el reino, no determinando esta sola circunstancia si la pérdida es por causa de comercio; no fijando su domicilio en el mencionado espacio, se reputará al hijo como extranjero.

La mujer extranjera que se casa con ciudadano adquiere el derecho de ciudadanía y le conserva en su viudez; si sobreviene la muerte del marido, también se adquiere la ciudadanía en virtud de naturalización inscribiéndose en el Registro de estado civil correspondiente dentro del término de seis meses.

Modos de perderse la ciudadanía.—Por renuncia; por obtener ciudadanía en país extranjero; por aceptar ó ingreso en el servicio militar de potencia extranjera; por hijos por haber perdido sus padres la ciudadanía, si éstos continúan con residencia en el reino. Hay que advertir que la pérdida de la ciudadanía en el caso anterior no es por la prestación del servicio militar.

Modos de recobrarla.—Por regreso á Italia con autorización del Gobierno; por renunciar la ciudadanía ó al empleo ó militar aceptado en el extranjero; por declaración oficial del Registro de estado civil, siempre que lo sea dentro de un año. La mujer casada con extranjero

vo
esa
en
ción
día

EN

es 1

do
eres
tan
tenc
e d
pr
os c
ma
uev
nbie

ara
esc

PORTUGAL

DE LA CAPACIDAD CIVIL

Parte primera.—Libro único.—Artículos 1.º al 54.

Título I: De la capacidad civil y de la ley que la regula en general (artículos 1.º al 17).—**Título II:** De la forma de adquirir la cualidad de ciudadano portugués (artículos 18 al 21).—**Título III:** De la manera de perderse la cualidad de ciudadano portugués (artículos 22 y 23).—**Título IV:** De los ciudadanos portugueses en país extranjero (artículos 24 y 25).—**Título V:** De los extranjeros en Portugal (artículos 26 al 31).—**Título VI:** De las personas morales (artículos 32 al 39).—**Título VII:** Del domicilio.—**Capítulo I:** Disposiciones generales (artículos 40 al 42).—**Capítulo II:** Del domicilio voluntario (artículos 43 al 46).—**Capítulo III:** Del domicilio necesario (artículos 47 al 54).

De los Códigos modernos, el portugués es el que reviste, sin duda, un carácter más científico, acaso en demasia, pues el contenido de algunos de sus títulos, si es propio de un libro de enseñanza, parece extraño á un Cuerpo legal.

Capacidad jurídica. Derecho y obligación.—Empieza explicando en qué consiste la personalidad ó capacidad jurídica, considerando como tal la facultad de ser susceptible de derechos y obligaciones. Define el *derecho*, «la facultad moral de practicar ó dejar de practicar ciertos hechos», y *obligación*, «la necesidad moral de realizarlos ó dejarlos de realizar».

La capacidad jurídica se adquiere por el nacimiento, quedando el individuo, una vez nacido, bajo la protección de la ley.

Efectos generales de la ley.—La ley civil es igual para todos, sin distinción de personas ni sexos, á no ser en casos especiales en que así se declare; no tiene efecto retroactivo, y nadie está exento de sus disposiciones á pretexto de ignorancia ó desuso. En su virtud, todos los actos verificados contra ley son nulos, excepto en los casos en que la ley

as d
l.
iace
esa
extu
icip
os c
o de
pai
arai
adr
as n
a q

la
irai

ios
caj
resi
ste
ues
rei
—F
s e
one
ino
ero
act
es
stos
asta
act
no
der

el reino por nacionales ó traídas en el extranjero,

Capacidad jurídica de ley nacional; pero los extranjeri-
tugal tienen los mismos derechos
ciudadanos portugueses
producir sus efectos en e
demandados por naciona
nes contraídas en Portu
portugueses, para cuyo
por Tribunales extranje
determina el Código de

Personas morales ó s
Asociaciones ó Corporac
dadas con el fin ó motive
pública y particular con
civiles representen una i
estén legalmente autoriz

Su capacidad.—No
bienes inmuebles, no sien
se adquieran por títulos
dentro de un año, bajo
Hacienda pública.

Son Asociaciones per
mitado, ó aquellas que, s
por objeto intereses mate
corporarán sus bienes á
para los efectos de la le
Cámaras municipales, la
cualquier establecimiento
ción pública, excepto en l
rio, no gozando ninguna
otra Corporación el privi

Las demás Asociacio
contrato de sociedad.

o determina el ejercicio de los derechos y las obligaciones, entendiéndose que el ciudadano tiene su residencia personal y jurídica en el sitio de su administración.

voluntario y necesario: lo primero es el arbitrio del ciudadano, lo segundo es el necesario.

Si el ciudadano tuviese diversas residencias, se le considera en la que se hallare, pudiendo cambiar de residencia, poniéndolo en conocimiento de las autoridades locales; en el caso de no tener residencia se le considerará domiciliado. No pueden elegir domicilio determinado para los actos consignados en documentos.

Los menores no emancipados tienen por domicilio el de su padre ó madre, y en su defecto el de su marido, á no hallarse separado.

Los emancipados que trabajen han de tener por domicilio el de su lugar de trabajo; los empleados, el lugar de su trabajo; los militares, aquel en el que presten sus servicios; los marinos, el lugar de su matrícula; los penados, el lugar de su condena; los detenidos y procesados, el lugar de su detención desde el momento en que se les capture.

GUATEMALA

DE LAS LEYES EN GENERAL

Título preliminar.—Artículos 1.º al 19.

Leyes: sus efectos.—Las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general surten sus efectos desde su promulgación, ó dentro del plazo que fije la misma disposición. No tienen efecto retroactivo, á nadie puede impedirse lo que la ley no prohíba, y son obligatorias por los transeúntes, sobre todo, las penales, de policía y seguridad.

Contra la observancia de las leyes no puede alegarse desuso, costumbre ó práctica en contrario. No se pueden renunciar, siendo nulos los actos ejecutados contra el tenor de las prohibitivas, puesto que su derogación ó abrogación ha de hacerse por una posterior.

Formas y solemnidades de los actos y contratos.—Todos los actos se regirán por las leyes del país donde se hubiesen otorgado. Sin embargo, los guatemaltecos ó extranjeros que no residan en la República quedan libres para sujetarse á las formalidades de la ley guatemalteca en los casos que el acto haya de ejecutarse en Guatemala. Las obligaciones y derechos que nazcan de los actos verificados en el extranjero se regirán por las disposiciones de este Código cuando deban cumplirse en la República; si fuesen otorgados por extranjero, será libre el otorgante para elegir la ley que regule la solemnidad interna del acto, si se refiere á bienes muebles; si se trata de inmuebles, se regirán por las disposiciones del Código, debiendo probar el que funde su derecho en leyes extranjeras, la existencia y aplicación de las mismas.

En cuanto á los bienes sitos en la República, se rigen por las leyes guatemaltecas, aun siendo poseídos por extranjeros.

por cantidades no recibidas y demás gastos habituales para satisfacer vicios, quedando á la prudencia del Juez el calificar cuándo es ó no habitual el hecho. Da también lugar á la interdicción la dilapidación de capitales, no la de renta ó frutos. Todos los no comprendidos en la expuesta enumeración son capaces.

Los incapaces por locura ó fatuidad se reputan menores y, por lo tanto, no ejercen por sí sus derechos civiles ni salen de la patria potestad, y muertos sus padres, viven bajo la protección de sus tutores ó guardadores, pudiendo ser anulados sus actos anteriores si se probase que la incapacidad existía en la época en que se verificaron.

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Libro I.—Título II.—Artículos 44 al 47.

Personas jurídicas.—Son personas jurídicas las asociaciones ó corporaciones temporales ó perpetuas establecidas con motivo de utilidad pública, no teniendo vida jurídica si no han sido autorizadas por la ley; pero una vez que gocen de entidad jurídica pueden ejercer todos los derechos civiles relativos á los intereses de su instituto. Las asociaciones de carácter particular quedan sujetas á las reglas del contrato de sociedad.

DE LAS PERSONAS SEGÚN SU ESTADO CIVIL

Libro I.—Título III.—Párrafos 1.º y 2.º.—Artículos 48 al 82

Guatemaltecos y extranjeros.—La Constitución designa quiénes son guatemaltecos y quiénes extranjeros, no habiendo diferencia entre unos y otros en cuanto á la adquisición y goce de los derechos civiles, que son independientes de la calidad de ciudadano. Nadie puede eximirse de las obligaciones contraídas en la República conforme á las le-

os extranjeros do-
en, pueden ser ci-
para el cumpli-
ais extranjero en
itan contratar. El
er citado ante los
tra sus bienes, ó
o hubiere estipu-
dose presente que
gación sirven para
se opongán á las

las obligaciones
á menos de so-

actos retroactivos.
pierden sino por

a es el lugar don-
uel donde tiene el
que la persona se
domicilio en el
los militares; el
ad se encuentre;
ado incapacitado,
el de su marido;
r párrafo de este
á quien sirvan;
á la condena, el
iores, al que últi-
jetos á destierro,
domicilio de las
sus estatutos, es
ó administración.
rra, tienen domi-

CÓDIGO CIVIL

ugar guatemalteco en que se en
de la matrícula del buque; si fi
su mujer; si sirvieren en la
y no renunciaren á su nacionali
; pero si sirven en buques de g
pierden. Los vecinos, ya natura
jetos á las cargas de su Munic
lirles que cambien de domicilio
ntes.— Es transeúnte el que es
zando, por tanto, de los derecho
ciones de los vecinos, pero disfr
es: no pueden ser demandado
, á menos de haber renunciado
uede imponérseles ninguna de
etos en el lugar de su residenci

MÉJICO

DE LA LEY Y SUS EFEC
as reglas generales de a

Título preliminar.—Artículos 1.

us efectos generales.—La ley c
listinción de personas, salvo l
ialmente.

posiciones emanadas de la au
fectos desde el día que en la
omulgación. Para ésta se comp
día por cada cinco leguas de
ón que exceda de la mitad de
in día más. Ninguna ley tiene
urte eficacia la renuncia de las

yes prohibitivas, pues siempre los actos
lelo que éstas disponen serán nulos. Sólo
nueva ley podrá abrogar ó derogar la
esuso ó práctica en contrario, no admi-
establecen excepción á la regla general,
expresamente se especifiquen en la ley,
llas, porque ni es excusa, ni á nadie

stan al derecho público ó á las buenas
alterarse ó anularse por convenio par-

rales de Derecho constituyen derecho
pueda decidirse una controversia judi-
el sentido natural de la ley.

a de los mejicanos. Actos y contratos.—
imiento, pues desde el momento que un
, entra bajo la protección de la ley. Las
ulan el estado y capacidad jurídica de
gatorias para todos los mejicanos, aun
extranjero, respecto de los actos que
todo ó parte en la demarcación del
nismo las leyes del país los bienes
y posesión se ejerza por personas ex-

orma y solemnidades externas de los
tad para ajustarlas á las disposiciones
ubiere otorgado, ó á la de Méjico en
sto haya de realizarse en su territorio.
derechos que nazcan de los contratos
jero por mejicanos, se regirán por las
dos los actos que deban cumplirse en
lo fuere por un extranjero, tendrá
para elegir la ley á que ha de sujetarse
del acto, siempre que verse sobre bie-
inmuebles están desde luego sujetos á

la legislación del país. Si existiere el caso de fundar el derecho en leyes extranjeras, deberá probarse la existencia de éstas y de su procedencia en la aplicación.

DE LAS PERSONAS

Libro I.—Artículos 22 al 48.

Título I: De los mejicanos y extranjeros (artículos 22 al 25).—
Título II: Del domicilio (artículos 26 al 42).—Título III: De las personas morales (artículos 43 al 47).

Mejicanos y extranjeros.—El Código reconoce la clasificación de mejicanos, extranjeros y ciudadanos y establece la Constitución política de los Estados Unidos mejicanos. Los Tribunales del país son competentes para conocer en las demandas que se interpongan, tanto respecto de los mejicanos como de los extranjeros residentes en el Estado, por las obligaciones contraídas con mejicanos o extranjeros dentro ó fuera de la República, pudiendo hacerlo aunque no resida en el Estado, siempre que en ellos no haya bienes que estén afectos á las obligaciones contraídas, éstas deben tener ejecución en dichos lugares.

Domicilio.—El domicilio de una persona es el lugar donde reside habitualmente ó el en que tiene el principal asiento de sus negocios. A falta de uno y otro, se reputa por domicilio el lugar en que ésta se encuentra, bien á causa de su destino, si es un empleado público ó militar, ó bien por ser menor de edad no emancipado, caso en que es el de la persona á cuya patria potestad se halla sujeto; el de la mujer casada es el del marido, y el de los criados el del amo á quien sirven. Las corporaciones, asociaciones y establecimientos reconocidos por la ley tienen por domicilio el lugar donde está situada su dirección ó administración.

Las reglas anteriores no privan á las partes del derecho

obligación ó
pre que la des

asociaciones ó c
das con algún
ésta y particu
representan t
corporación tie
torizada, en cu
iles relativos á
n gozar del be
se concede ni
in interés parti
o de sociedad.

V

NA

le c
nuc
, et
a é

es (
pro
de
ativ
ro,
solt
sie
prop
afe
al r
cien
dien
ey

CÓDIGO CIVIL

dente aparece lo expuesto en los artículos. Dice el 4.º en su párrafo 1.º que los actos ejecutados contra lo dispuesto en las leyes, en los casos en que la misma ley prescribe la pena, pueden haber actos contra ley en los casos en que no puede haber en las leyes de procedimiento? No. Luego el artículo 4.º no se refiere á la ley civil, y sería más propia si estuviese así en el Código civil, y no en el Código de Procedimiento civil. Los actos ejecutados contra lo dispuesto en las leyes, salvo cuando éste mismo ordene lo contrario.

El art. 6.º no es menos impropio en su colocación. Su contenido no es propio para un todo caso penal y nunca para un todo caso civil. La Constitución de 1869 establece en el artículo 125 que los Jueces pueden ser juzgados por el Jefe del Poder Judicial, y el Código penal, en el artículo 1.º, establece que el Juez que se negare á juzgar, por incompetencia, insuficiencia ó silencio, será castigado con la pena de suspensión. En el artículo 1.º del Código de Procedimiento civil examinaremos también el contenido de este artículo. Su contenido es el siguiente: «Los Jueces de primera instancia rijan por leyes especiales, la materia de su competencia, y suplirá por las disposiciones que no hubiere el artículo «por leyes especiales» y «leyes especiales», sin hacer que parece que el Código será aplicable en materias como montes, aguas, caza, pesca, y otras que se rigen por leyes especiales».

rente al derecho
de los españoles,
contratos, acor-
de conformidad
e la ley de este

y crítica de la
ción que su im-
estudio completo
vado, imposible
bro, y que bien
mos á consignar
e la teoría de los

ristas de la Edad
nen del vasallaje
el principio de
a el de que las
ncipio que reinó
te largo tiempo,
ue no era posible
principio, sino
en cuenta la ley
Rodenburg, si
istarse siempre á
a variaría según
ponía un absur-
ayor de edad y
de leyes refe-
atuto personal)
cosas (estatuto
n un tercer tér-

mino relativo á las solemnidades de los actos y contratos (estatuto formal).

El estatuto personal, como su nombre indica, supone el conjunto de leyes referentes á la persona. ¿Qué leyes han de considerarse comprendidas en él? Asser dice que todas las que conciernen á la cualidad de hijo legítimo ó ilegítimo, mayor y menor de edad, estado de matrimonio ó de celibato, divorcio, filiación, patria potestad, adopción, emancipación, tutela, autoridad marital y derecho de la mujer casada, en una palabra, todas las leyes que determinan las relaciones jurídicas de una persona con su familia, así como las que determinan si es capaz y en qué medida de realizar actos jurídicos. Es el criterio reflejado en nuestro Código (expresado en éste en términos más generales), el cual en su art. 9.º menciona como leyes del estatuto personal las relativas á los derechos y deberes de familia, al estado, condición y capacidad legal de las personas.

El principio de las leyes personales es hoy admitido en la mayor parte de los Estados. Algunos autores sostienen que la aceptación del principio obedece á razones de pura condescendencia y mera cortesía, á lo cual contesta Laurent que sería más exacto decir que lo hacen por necesidad, por estar interesados en ello los Estados, pues si quieren que en el extranjero se respeten las leyes personales que rigen en su Nación, es preciso que atestigüen el mismo respeto á las leyes personales de los otros países, pues la igualdad reina entre las Naciones; lo que una no acuerde, dice, la otra lo rehusará. Todas están interesadas en que el principio de las leyes personales se admita, convirtiendo así este principio en regla de sus relaciones; lo

cesidad, concluyó por

establecida por nues-
arte de las sentencias
o se expresa que la
en la mutua conve-

los bienes. En éste
su imperio no es, sin
res y legisladores la

a del principio de la
man parte del territo-
éste.

iene el dominio emi-
ne cada Estado tiene
odos los bienes de su
lico tiene el derecho
ienes por leyes civi-
s impuestos propor-
as y disponer de estos
idad pública. Es de
—el ser ésta indivisi-
el territorio como se
.. En una palabra, la
ación de la soberanía;
les no pueden oponer
njero, pues estos bie-

Estado, y con rela-
ste territorio debe re-
tado.»

les. Se supone, dice

Bouhier, por una especie de ficción que los muebles son como inherentes á la persona del propietario. De aquí la máxima universal: *Mobilia personam sequuntur*, y la nacional inglesa: *Personal property has no locality*. La propiedad mueble, según Loughborough (citado por Fiore), no tiene ninguna situación local fija, lo cual no significa que las cosas muebles no se hallan en un lugar visible, sino que están siempre sometidas á la ley de la persona del propietario.

La corriente científica se desvía de esta distinción entre muebles é inmuebles. Waechter, Savigni y Asser proclaman igual principio respecto de unos y otros.

El legislador—dice Waechter—tiene á la vista todas las cosas que están en su territorio sin distinción alguna. Savigni supone que toda persona que quiera adquirir ó gozar un derecho real sobre una cosa se somete voluntariamente por esta relación jurídica á las leyes del país donde la cosa se encuentra. Asser se inclina á la doctrina de no distinguir entre muebles ó inmuebles porque, según él, da lugar á dudas en el caso de que una cosa sea mueble en un país é inmueble en otro.

Fiore no mantiene un criterio único, distingue. Afirma que el precepto *Mobilia ossibus personæ inhærent* no puede admitirse de modo absoluto, sino sólo en el caso de que el lugar ocupado por una cosa mueble sea accidental, ó no pueda ser determinado; en este supuesto, no cabe estimar dicha cosa en el territorio de Estado alguno, sino en el domicilio del propietario y, por consiguiente, sujeto á la ley personal de éste. En virtud de estos principios, manifiesta tan eminente tratadista que la ley personal debe admitirse respecto de los

monio, como
los derechos

mucho tiempo
a ley del lu-
te es el prin-

ad y aun de
imposible ob-
formalidades
se sabría, por
donde el No-
ctos se hacen
) las formali-
luntaria): en
es que las del
y de jurisdic-
del país donde

cto imposible
distintas na-
formas de la
desconfianza
a dar el otro

ación de la fe
a tener lugar
las solemn-

objeto—dice
e la voluntad
ador', pues—

añade,—corresponde determinar las formas que le parezcan más propias para alcanzar este objeto.

Cuando se han observado las formas legales, es de presumir que el acto es la libre expresión de la voluntad de las partes; desde entonces debe valer en todas partes.

Así lo han entendido las legislaciones que, como la nuestra en el art. 11 del Código, declaran que las formas y solemnidades de los instrumentos públicos se rigen por la ley del país en que se otorguen.

* * *

No estableciéndose en el Código la unidad legislativa nacional civil, pero deseando adelantar algo en pro de ella, se consignan en el título reglas relativas á la aplicación del Código y de las legislaciones forales que se dejan subsistentes, y á las relaciones jurídicas entre las personas que han de seguir rigiéndose por ellas y las sometidas al derecho común, reglas que, especialmente las comprendidas en el art. 15, manifiestan de un modo expreso el citado deseo.

ARTÍCULO 1.º Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de África sujetos á la legislación peninsular, á los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa.

Se entiende hecha la promulgación el día que termine la inserción de la ley en la *Gaceta*.

Concordancias.—Tomado del 1.º del proyecto de 1851, aunque distinto en sus términos. Igual al 1.º del proyecto de 1882.

de las Direcciones y demás dependencias centrales, se publicarán en la parte oficial de la *Gaceta*.

Art. 2.º Las disposiciones generales que se publiquen en la *Gaceta* no se comunicarán particularmente. Con solo la inserción en ella de las expresadas disposiciones será obligatorio su cumplimiento para los Tribunales, para todas las Autoridades militares y eclesiásticas en cuanto dependan de los respectivos Ministerios, y para los demás funcionarios.

Art. 3.º Las respectivas Autoridades y funcionarios á quienes incumba cuidarán de que las disposiciones publicadas en la *Gaceta* se inserten en los *Boletines Oficiales* cuando por su naturaleza deba así hacerse, y expedirán desde luego las órdenes convenientes para su más pronto y exacto cumplimiento, como si dichas disposiciones les hubieran sido comunicadas directamente.

COMENTARIO.—La ley se elabora, se da para ser cumplida por los individuos de la Nación cuyo Poder legislativo la ha creado; mas esto exige que sea conocida por los que han de observarla.

En todo tiempo se comprendió la evidencia de esto, y se procuraba llenar tal requisito por el medio estimado más apropiado.

Con anterioridad al usado actualmente, se empleaba la lectura en audiencia pública. Este medio es combatido de modo brillante por Laurent. «La lectura—dice—no se dirige más que á algunos raros oyentes; los edictos suponen que todos los ciudadanos saben leer, y después de transcurrido un siglo desde la Revolución, la suposición no es más que un deseo. La publicación á son de trompeta no atrae más que á los niños—expresa con frase exacta y pintoresca. —Si la lectura no se verificaba ó los edictos no se fijaban, las leyes no obligaban á los ciudadanos; su fuerza obligatoria dependía, pues, de la buena ó mala voluntad de los Jueces, y la ley, dice Portalis, no debe ser abandonada al capricho de los hombres.»

La lectura pública de la ley como medio de llegar á conocerla, la rechazaban de consuno la crítica y la práctica, y claro es que los primeros codificadores de la época moderna habían de buscar otro medio más adecuado á su tiempo. Así lo hicieron los autores del Código civil, y en su consecuencia la ley belga, ma-

CÓDIGO CIVIL

ión tiene en Derecho; es un sentido vulgar.

bra *promulgar* viene del latín *promacer* público. En Derecho romano ión de la publicación; un mismo a oet, *ad Pandectas*, libro I, tít. III sucedía, según Merlin, en el antiguo de la promulgación y de la publicación. Un decreto de 9 de Noviembre de 1808 regló á las cuales debía hacerse el modo de publicación de las leyes. La promulgación era un acto solemne por el cual el cuerpo social la existencia de la ley se comunicaba á los cuerpos administrativos. La promulgación seguía la publicación y el promulgador para conseguir que la ley llegase á los ciudadanos. »

—continúa Laurent—asienta los verbos de promulgación—dice—es el acto por el cual el cuerpo social la existencia de la ley se comunica á los individuos.

t habla hasta aquí de la promulgación y de la publicación? El insigne catedrático de la facultad de derecho de París responde: No. Se vale de la opinión de Merlin para hacer llegar la ley al conocimiento de los individuos.

elante, al final de la parte en que se hace la síntesis de todo lo expuesto, como se firma lo siguiente:

Distinción entre la promulgación y la publicación. La distinción de palabras: se funda en la realidad de los hechos jurídicos. Antes que la ley obligue á los individuos, ella debe tener un carácter auténtico: ésta es la promulgación. Pero no basta que la ley exista para que ejerza su autoridad: es preciso que se sepa que existe. Es necesario, por lo tanto, que después de la promulgación, la ley sea conocida: conocer que la ley existe: es el fin y el objeto de la publicación. La ley existe antes de la publicación.

NAR

si no existiese. En el instante de la publicación, la ley tiene ya su fuerza real para los ciudadanos.

Como al tit. I del Código francés, ni establece diferencia entre la publicación y la promulgación. Emplea la palabra publicación como sinónimo de promulgación. «La promulgación, es el medio de hacer conocer la ley. La promulgación no puede comenzar hasta que la ley ha sido publicada. *lex nisi promulgata*. No es válida para cada individuo. La ley es promulgada para cada individuo, no á cada particular.

En el art. 1.º del Código francés, en varios artículos, se ocupa también de la promulgación. El art. 1.º del citado Código, manifiesta tan sólo que la promulgación está tomada de la ley, que corresponde á la

promulgación—que en lenguaje vulgar se llama promulgar por la voz—es lícito, tratándose de la ley. La acción de promulgar se hace por la imprenta ó por voz, que se desea venga á conocimiento de la publicación, cuando la ley misma dispone la promulgación, es, es más adelante—es, es conocida por todos con carácter de obligatoriedad de promulgación de la ley hasta el día

que es obligatoria para los ciudadanos, en cuyo día está promulgada.»

El Sr. Pedregal omite la cuestión en sus comentarios al Código patrio. Análoga conducta sigue el Sr. Manresa, puesto que se limita á consignar que «nuestro Código, al entender hecha la promulgación cuando la ley se ha publicado, evita la distinción sutil y las difíciles cuestiones de los comentaristas franceses, en especial de Portalis, que pretendían deslindar y conceder efectos distintos á la promulgación y á la publicación de las leyes», palabras cuya exactitud vemos desmentida por las consideraciones del Sr. Carvajal.

El Sr. Navarro Amandi abunda en la opinión de Laurent, según consta por las palabras que transcribimos: «Son ambos actos (publicación y promulgación) completamente distintos, al punto de que una observación atenta nos permite concebir leyes promulgadas y no publicadas. La promulgación es un decreto ó un mandato del Jefe del Estado, haciendo constar la autenticidad de la ley y ordenando el cumplimiento y observancia de la misma. Se comprende, por lo tanto, que pueda estar expedido el decreto, y aun notificado á alguno de los interesados en la ley, sin que ésta se haya publicado, sea fijándola en los parajes destinados al efecto, sea insertándola en el periódico oficial.»

«La publicación—añade el Sr. Navarro Amandi—no comprende sólo el hecho de insertar en el periódico oficial la ley, sino todo aquello que le da publicidad, es decir, que contribuye á que la ley llegue á conocimiento de todos. Así es que tanta importancia como la inserción en la *Gaceta* tiene el plazo ó término que, á contar desde aquélla, se concede para que la ley comience á ser obligatoria.»

Como vemos, los autores y jurisconsultos que consideran actos distintos la publicación y la promulgación, no están de acuerdo respecto de lo que se entiende por una y otra, disconformidad que favorece á los que combaten la diferencia entre uno y otro acto.

Para Laurent, Merlin y Navarro Amandi, la promulgación es el decreto del Jefe del Estado en el que se afirma la existencia de la ley y se ordena su ejecución, es un acto anterior á la publicación; para el Sr. Carvajal, por el contrario, es un acto posterior, pues el período de promulgación, á su entender, es aquel que

lía en que es obliga-
promulgada. Igual
de la publicación.
ción de la ley en la
inspira y sigue fiel-
atedrático belga) lo
ción de la ley en el
ser más manifiesto.
se estiman publica-

de Laurent expresa
cual es también el
dice el art. 51 de la
párrafo 2.º del 34 de
or promulgación se
Estado ó la parte de
7. El Sr. Carvajal,
ar, concede sólo el
n ó la difusión de

nión. Entendemos,
ad se encuentra en
nos que la promul-
na serie de ellos, un
el Estado ordenando
to en que se pre-
todos los obligados

ten que promulgar
esto es, hacer que
oner que la inser-
encial de la promul-
e la difusión de la
al? ¿Cómo presumir
sto es, que se halla
al, si no se ha inser-
n? Si promulgar es
y Navarro Amandi,
a publicado? Si la

riodo que sigue inmediatamente á la inserción en el periódico oficial, ¿dónde está la promulgación, para que la ley sea obligatoria, en determinada forma, en el momento de la citada inserción, como en Colombia, Guatemala y Méjico? Resulta que la ley es obligatoria, á pesar de no estar

promulgada. La promulgación supone varios actos del Estado; la inserción de la ley en el periódico, el señalamiento de un término á partir de la promulgación, ejecutoria, cuando así suceda por el término único. Todos estos varios actos conducen á que la ley sea conocida de todos, á publicar la ley en los conceptos comprendidos dentro del verbo pro-

poner. Los autores sobre el momento desde el cual surten las leyes, existiendo dos criterios: el primero, que debe ser uno mismo para toda la Nación, y los que sostienen que ha de estar en relación con el tiempo (*término progresivo*).

El segundo, porque, en su sentir, la idea de la simultaneidad es sólo una ficción desmentida por la realidad en la marcha de la Naturaleza, dice; todo depende de la ley.

Según la opinión de Laurent, partidario del término único—es más conforme á la naturaleza de la ley, que es una sola para todos los ciudadanos, es necesario que surta efecto al mismo tiempo.»

En las legislaciones positivas civiles aparecen divididas en este sentido, Italia, Costa-Rica y Guatemala admiten la simultaneidad; Francia, Chile, República Argentina admiten la progresión.

En Colombia, el término único, declarando que las leyes civiles de las penales, las sustantivas de las acciones, surten en la Península, islas adyacentes y territorios de la legislación peninsular á los veinte días siguientes á la inserción en la Gaceta, entendiéndose por ésta la inserción en la Gaceta, si no se dispusiere otra cosa.

En Chile, el término absoluto, es decir, no se fija el principio del

ellas se han de mantener recibiendo derecho et faciéndolo, razón es que las sepan, ó por loallas, ó por tomar el entendimiento dellas de los que las leyeren, ó por saberlas el mesmo bien razonar en otra manera sin leer... et pues que por sí, ó por sus mandaderos ó por cartas se puedan escusar, non son ellos escusados por decir que non saben las leyes, nin tal razon como esta, si la dixieren, no les debe ser cabida.—*Ley 21....* Señaladas personas son las que se pueden escusar de non recibir la pena que las leyes mandan, magüer non las entiendan nin las sepan al tiempo que yerran haciendo contra ellas, así como aquel que fuese loco de tal locura que non sabe lo que se face: lo mismo decimos de mozo que fuese menor de catorce años et la moza menor de doce años. Otrosí decimos que los caballeros que han á defender la tierra et conquerirla de los enemigos de la fe por armas, deben ser escusados por non guardar las leyes... Mas si el caballero ficiere traicion, ó aleve, ó falsedad ó yerro, que otro home debiese entender naturalmente que mal era, non se puede escusar que non haya la pena que las leyes mandan. Eso mesmo decimos de los aldeanos que labran la tierra et moran en los lugares do no hay poblado; et de los pastores que andan con los ganados en los montes ó en los yermos; et de las mugeres que morasen en tales lugares como estos.—*Idem 5.ª, tit. XIV, ley 31...* Todos los del nuestro señorío deben saber estas nuestras leyes, et si algunos por non saberlas fecieren contra ellas algunas cosas que sean á su daño, tórrense por ende á su culpa, fueras ende si el que hobiese fecho tal paga como esta fuese caballero de nuestra corte; ca los nuestros caballeros más se deben trabajar en uso de armas que en aprender leyes; ó si fuese muger, ó menor de veinte et cinco años ó labrador simple, ca estos atales bien se pueden escusar en tales razones como estas, diciendo que non sabien estas leyes.

Nov. Rec., lib. III, tit. II, ley 2.ª—Y establecemos que ninguno piense de mal hacer, porque diga que no sabe las leyes ni el derecho, ca si lo hiciere contra ley, que no se pueda escusar de culpa por no la saber.

COMENTARIO.—Necesaria é indispensable en la vida del derecho positivo es la afirmación del principio de que nadie puede alegar el desconocimiento de las leyes. El Código así lo ha

ción, y lo mismo obliga á su restablecimiento que si fuera por su consentimiento deliberado.»

Laurent habla en igual sentido. «Las leyes, por su esencia, obligan á todos; no habría sociedad posible si las leyes no tuviesen una fuerza obligatoria independiente de la ignorancia, del capricho ó de la mala voluntad de aquellos á quienes obligan. Esto implica que nuestra presunción esté fundada sobre un interés social. Desde que existe un interés social en causa, nadie puede alegar la ignorancia de la ley.»

El deber de obedecer inexcusablemente á la ley, y poder, por consiguiente, excusarse de su cumplimiento alegando su ignorancia, como decíamos antes, resultado necesario de su inserción en el diario oficial, ó de la publicación, como dice Laurent.

«Nuestra Constitución—manifiesta éste—dice que las leyes son obligatorias sólo después de haber sido publicadas en la forma legal. Las leyes son ejecutorias en virtud de la promulgación, pero se convierten en obligatorias por la publicación. Una ley no publicada en la forma determinada por la ley no obliga á los ciudadanos. Pero de este principio se deduce el que las leyes obligan á todos los ciudadanos desde que se publican, aunque ellos no las conozcan. «Es lo mismo—dice Portalis—que decir que una ley que no se conoce no puede ser obligatoria. Desde que la ley es publicada se presume conocida; por consecuencia, obliga á los ciudadanos. No se pueden sustraer á las obligaciones que impone, sosteniendo que ignoran la existencia de la ley. La presunción de que la conocen es absoluta, y no admite prueba en contrario. Esto resulta de la esencia misma de la publicación. La ley es obligatoria desde que se publica. Si los ciudadanos alegasen la ignorancia de la ley, no podría decirse que las leyes son obligatorias por el solo hecho de ser publicadas. Sería preciso afirmar que no obligan á los ciudadanos si ellos no las conocen, lo que conduciría á la consecuencia de que las leyes, aunque obligatorias, no obligaban. En este sentido puede decirse con Portalis que la ignorancia del Derecho no sirve de excusa.

El artículo muestra con exactitud la idea que quiso expresar el legislador. Su redacción responde con fidelidad al principio contenido en él. No podemos menos de contestar negativamente á quien quiere decir que nadie puede alegar el desconocimiento de un

conocida. Así lo dice la sana crítica; así lo establece la ley 5.^a título II, Part. 1.^a, y lo han confirmado los Tribunales, los cuales exigen (sentencias del Tribunal Supremo de 8 de Septiembre de 1877 y 5 de Octubre de 1887) la prueba de la costumbre cuya aplicación se pretende, de donde se deduce que cabe impugnar negar su existencia, que es aún más que alegar ignorancia de ella.

Art. 3.º Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario.

Concordancias.—Análogo al art. 3.º del proyecto de 1851 e igual al 3.º del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—*Fuero Juzgo, lib. II, tit. I ley 1.ª*.—...Estas leyes, que Nos emendamos e las que facemos nuevamientre, é ordenamos, é ponemos en este libro cada uno de sus títulos mandamos que sean guardadas de las kalendas de noviembre, de este segundo anno que Nos regnamos, é que valan por siempre...—*Ley 2.ª* ...Damos leyes en sembla para Nos, é para nuestros sometidos á que obedezcamos Nos, é todos los reyes que vinieren *despues* de Nos, é tod el pueblo.

Partida 3.ª, tit. XIV, ley 15.—...Si sobre pleyto, ó postura, ó donación, ó yerro que fuese fecho en algunt temporal que se judgaban por el fuero viejo, fuera fecha demanda en juicio en tiempo de otro fuero nuevo que es contrario del primero, que sobre ta razon como esta, debe ser probado et librado el pleyto por e *fuero viejo et non por nuevo*: et esto es porque el tiempo en que fueron comenzadas et fechas las cosas debe ser siempre catado magüer se faga demanda en juicio en otro tiempo sobre ellas.

COMENTARIO.—Conocida es de antiguo la máxima de que «las leyes miran á lo porvenir.» El derecho patrio lo admitió ya, según vemos en las leyes consignadas en los precedentes, y el Tribunal Supremo lo consignó en sus sentencias, aunque con criterio distinto en cada una de ellas. En la de 22 de Enero de 1849 dejó sentada doctrina análoga á la del Código, ó sea que las «leyes no tienen efecto retroactivo, si por circunstancias especiales no lo pre

de 8 de Enero de 1869 afirmó el principio de que «las leyes nunca pueden tener

er, en términos generales, la justicia del legal, toda regla sentada por el legislale la conducta de los individuos de una s actos que realicen con posterioridad al no de los anteriores, en cuyo momento

n principio general el que las leyes no

El oficio de las leyes es de regular el e bajo su poder.

ifiesta el eminente jurisconsulto francés ros al tit. I del Código Napoleón—no gar ni por el tiempo, porque es de todos

los países y de todos los siglos. Pero las leyes positivas, que son obra de los hombres, no existen más que cuando se las promulga, y no pueden tener efecto sino cuando existen.»

Hay otra razón más en pro del principio de la no retroactividad. Las leyes, por regla general, tienen por fin establecer ó asegurar el bienestar personal ó económico del individuo. Pues bien: la realización, el cumplimiento de tal fin sería en muchas ocasiones ilusorio si el legislador pudiese alterar sin limitación alguna el estado de derecho creado á favor de los ciudadanos al ocuparse de una legislación anterior. Si el legislador pudiese borrar, destruir los derechos concedidos por una ley, lejos de representar aquél el fiel defensor de los intereses de los ciudadanos, sería su más cruel enemigo. El ciudadano no vería en la ley la salvaguardia de sus derechos, sino una constante amenaza de ellos.

«¿Qué sería—pregunta Portalis—la libertad civil si el ciudadano pudiese temer que á cada momento se hallaba expuesto al peligro de que se investigasen sus acciones, ó se turbasen sus derechos adquiridos, por una ley posterior?» «Alejémonos—añade—de las leyes de dos caras que, con un ojo sobre el pasado y otro sobre el porvenir, secarían la fuente de la confianza y serían un principio eterno de injusticia, de trastorno y de desorden.»

Á este respeto justo y santo de la libertad del individuo responde, en efecto, la adopción del principio de la no retroacti-

vidad de la ley por los legisladores de la Revolución francesa. La consignó la Constitución del año III para evitar los abusos que pudieran cometerse. En un movimiento tan grande como aquel, encaminado á afirmar los derechos del individuo, no podía escaparse á la inteligencia de sus directores la conveniencia de garantizarles contra las extralimitaciones del legislador, reprobables siempre, pero con mejor excusa en momentos de tempestad de una revolución que en los de calma y serenidad de las reacciones.

Benjamín Constant habla enérgicamente en contra de la retroactividad. Ésta, en su opinión, es el mayor atentado que la ley puede cometer; es la negación del pacto social, la nulidad de las condiciones en virtud de las cuales la sociedad tiene el derecho de exigir la obediencia del individuo, puesto que le arrebatara las garantías que le aseguraba en cambio de dicha obediencia, que es un sacrificio. La retroactividad afirma que quita á la ley su carácter, porque la ley que retrotrae sus efectos no es ley.

Quedan expuestos sumariamente los fundamentos del principio de la no retroactividad. Preguntamos ahora: ¿este principio debe ser absoluto? ¿Ha de regir en todos los casos, sin excepción alguna? ¿Ha de tenerlo en cuenta siempre el legislador de modo que no se aparte de él en ningún caso? No reina unidad de criterio sobre este punto entre los jurisconsultos. Portalis y Benjamín Constant se muestran partidarios de lo absoluto del principio; Laurent y Dalloz contrarios á él, y defensores de la retroactividad en caso determinado. Las legislaciones positivas ofrecen análoga disconformidad. Los Códigos belga, francés, argentino, chileno, guatemalteco aceptan el criterio primero. El portugués admite la excepción respecto de la ley interpretativa; el patrio es el más radical; afirma el principio de la no retroactividad, pero permite al legislador disponer lo contrario.

La legislación anterior al Código ofrece varios ejemplos de retroactividad: las leyes 8.ª y 9.ª, tít. XIV, lib. I, Novísima Recopilación, que al ordenar que los censos se capitalizasen al 3 por 100, hablaban, no sólo de los censos impuestos, sino de los que se impusiesen; el art. 23 del Código penal dispone que las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorecen á los reos, y la ley procesal de 11 de Mayo de 1888.

Este criterio, hay que confesarlo, envuelve en el terreno es-

pio. Éste ha de ser absoluto, ó se admite que pueda ser desco-
dad desmerece por tratarse del
ia de legislación. Si el legislador
bre lo pasado, esto prueba que
encia en la ley, dice Laurent. En
egla de legislación se convierte
ia al legislador. No es un pre-
obligación propiamente tal, sino
etarse.

órica, atendiendo sólo al prin-
se ante los razonamientos acaba-
o, la vida de la legislación exige

Sería contrario á la esencia de
viviese como atado por la regla de
para el porvenir, afirma el emi-
—en que la ley debe regir el pa-
en interés de los ciudadanos. De
star encadenado por un principio
dad de acción en perjuicio de la
legislador es el órgano de los in-
puede regir el pasado como el
oreses.

s más decisivos y radicales. «Las
interés general exige que sean
ne no hay derechos adquiridos
del Estado.»

allos y aceptamos el de Laurent,
nuestro entender, al primero, en
formulado nos parece demasiado
stinción capital. Cuando el legis-
un simple interés invocado por
nterés individual á plegarse ante
el legislador se encuentra con un
icular, entonces debe respetarle.»
áxima (la del derecho absoluto
den político. El Estado tiene por
rechos de los ciudadanos. ¿Cómo
dido interés (*salut*) público? El

verdadero interés público ¿no exige que estos derechos no pueden ser violados? ¿Qué sería de la sociedad si el Estado, en nombre de tal principio, pudiese quitar á los ciudadanos su libertad ó su vida?»

Nos ratificamos en la opinión de Laurent, con arreglo á la cual formulamos el siguiente principio, que condensa toda la doctrina de la retroactividad: el legislador ha de poder dar efecto retroactivo á la ley siempre que lo haga en interés general y no perjudique derecho adquirido.

Este principio indica lo que es ya conocido, á saber: que la cuestión donde ofrece más importancia es en la esfera del derecho civil, porque es donde se ve menos ostensible ó aparente el interés social, y, por el contrario, se presentan con más frecuencia los derechos adquiridos. Así, en las leyes políticas y en las procesales no se ofrece el conflicto ó no es tan fácil que se presente, respecto de las primeras, porque, como dice muy bien Pardessus, dichas leyes son todas retroactivas, puesto que modifican las instituciones bajo las cuales los hombres han nacido y viven, con relación á las segundas, porque afectan al derecho del Estado, no al del particular. Así, expresa con gran acierto Laurent, refiriéndose á la ejecución en la vía judicial de un contrato, las partes no son las que ejecutan, es el Poder público que les presta su apoyo para obtener aquélla (la ejecución) de modo forzoso. En este caso, las partes no tienen ningún derecho que oponer al legislador cuando modifica el modo de ejecución de los contratos. Podrán invocar todo lo más un interés; pero el privado cede ante el del Estado.

El legislador español ha adoptado en este punto un temperamento medio, consistente en dejar á la voluntad de las partes interesadas el regirse, bien por la legislación anterior, bien por la nueva. Este criterio es el que se fijó en la ley de Enjuiciamiento civil y criminal y aun en el Código civil en aquella parte de sus disposiciones de índole procesal (1).

(1) *Real decreto de 3 de Febrero de 1881, art. 3.º*—Los pleitos pendientes en la actualidad continuarán sustanciándose en la instancia en que se hallen con arreglo á la ley hoy vigente, á no ser que los litigantes todos, de común acuerdo, pidieren que el procedimiento se acomode á la nueva ley.

Real decreto de 14 de Septiembre de 1882, art. 2.º, regla 3.ª—Las

12

fin e
ret
uebo
po pe
time
, por
is fa
er d
nina
dqui
e en
te ha
s pal
re ha
techo
da, c
chos
in á .
del
se tr
sto c
egia
relig
fring

orida
arre
lidad
gla a
susta
los le
ento
—La
egir
reco
i su
spue
llare
ción
igo,

Acabamos de emplear la palabra «capacidad» en la esfera de la personalidad, y ocurre formularse la pregunta: ¿existen en dicha esfera derechos adquiridos?

Funda su opinión el sabio catedrático belga de la Corte de Casación de 6 de Junio de 1810 de 1815, afirmativos del principio que, según informa las leyes del estado de las personas. «Las leyes regulan el estado de las personas, rigen respecto del momento mismo en que son obligatorias y le instante capaz ó incapaz, según su disposición; las leyes no tienen efecto retroactivo, porque el estado de las personas, como subordinado al interés público, puede ser modificado ó cambiado por el legislador, según las necesidades de la sociedad.»

Conformes estamos en principio con la opinión, pero no la consideramos absoluta. En la esfera de la económica puede haber derechos adquiridos, persona, pero sí á favor de la persona. La ley, entenderá legislar sobre el estado y condición de las personas siempre que no lesione ó arrebatase un derecho adquirido. podrá decir, como ordena la disposición transitoria, que los emancipados y fuera de la patria potestad lo han cumplido veintitrés años al empezar el año en que se dispone otra cosa, esto es, acordar que los hijos emancipados con anterioridad á la publicación del Código, sujetos á la patria potestad hasta cumplir veintitrés años, gozarán tanto como suponer que los padres tenían sobre la persona de sus hijos. Aquí tiene perfecta aplicación el artículo de Laurent; pero no en el caso que vamos á presen-

oy á los veintitrés años. Pues una ley ordenando que, de con-, la mayor edad empezaría á los aplicable esta disposición? ¿Se-cumplido veinticinco años? En istinguir entre los que á la fecha biesen cumplido ó no veintitrés ida que les sería aplicable desde nplido dicha edad? ¿Volverían á abían sido mayores? ¿Sufrirían , pérdida de su capacidad? ¿No el estado ó condición de mayor facultad de regir libremente su in es afirmativa en este caso. Tal , la lesión de un derecho adqui-o retroactivo.

quiridos en la esfera de la perso-le ello nos le ofrecen los mismos a de la codificación civil. El ar-la patria potestad á la madre nupcias. De esta penalidad civil .presa la exposición de motivos go, á las viudas que hubiesen tes de regir el mismo. ¿Por qué? uocarle un derecho adquirido: el o pro de sus hijos.

in contradicción, puesto que de-hos á favor de las personas y no tria potestad parece que supone pero no es así. La patria potes-ejerce *sobre* los hijos; pero esto ueremos consignar, sin relación , que no ha de considerarse con ón cuando se emplea respecto de s. Con relación á éstas, indica-

e los bienes es donde se admite e derechos adquiridos, porque podrá, pues, el legislador, ó al

menos no deberá dar efecto retroactivo á una disposición legal en perjuicio del derecho adquirido por una persona sobre una cosa. Pero sí podrá variar el uso y ejercicio del derecho, siempre que no afecte á lo esencial del adquirido por el individuo.

Las acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el Código—se establece en la disposición transitoria 4.ª de éste—subsistirán con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación precedente; pero sujetándose, en cuanto á su *ejercicio*, duración y procedimiento para hacerlos valer, á lo dispuesto en el Código.

Resulta, por consiguiente, que en la esfera personal como en la de los bienes, gobierna igual principio en la doctrina de retroactividad, á saber: el respeto al derecho adquirido.

ART. 4.º Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez.

Los derechos concedidos por las leyes son renunciabiles, á no ser esta renuncia contra el interés ó el orden público, ó en perjuicio de tercero.

Concordancias.—Análogo al art. 4.º del proyecto de 1851 é igual al 4.º del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.

Párrafo 1.º—*Part. 5.ª, tit. XI, ley 28.*—... Todo pleyto que es fecho contra nuestra ley ó contra las buenas costumbres, que non debe seer guardado, magüer pena ó juramento fuese puesto en él.—*Part. id., tit. id., ley 38.* Poniendo pena algunos homes entre sí sobre promision que ficiesen, magüer la promisión non sea valedera, vale la pena, et será tenuto de la pechar, fueras ende si la promision fue fecha sobre cosa que fuese contra ley ó contra buenas costumbres...—*6.ª, tit. IX, ley 32.* Non puede ningut testador facer manda en ninguna manera que por el derecho de las leyes deste nuestro libro non deba de ser juzgada; et por ende magüer el defendiese señaladamente que ninguna ley

podiese contrastar nin embargar la
eso si la faciere contra derecho ó como
era non valdra, et debe ser revocada et
e nuestro libro...

., tit. I, ley 9.^a (*exceptio non numerata*
e los dos años se compliesen lo quere-
licho, non serie tenudo de responderle
arle los maravedis, fueras ende si el
habia contados los maravedis quel pro-
l debdor que habie otorgado que habie
mprestados *renunciase á la defension de*
a entonces non se podrie amparar por
miento atal fué escripto en la carta.

I, ley 6.^a—Porque somos informados
as de nuestros Reynos, que *defienden*
o no fagan contratos por do se obliguen
ometan á la jurisdiccion eclesiástica,
ente, ni se executan las penas en ellas
tes, ni contra los Escribanos que vie-
al se siguen grandes peligros y daños
erjuros en que á menudo incurren los
juramento, por las excomuniones que
inmente ponen los Jueces eclesiásticos,
costas que se les creen, y la nuestra
de ello recibe detrimento: por ende or-
ue de aquí adelante las dichas leyes se
guardándolas, *defendemos*, que ningun
oro no haga obligacion en que se so-
eclesiástica, *ni haga juramento* por la tal
adamente, ni el acreedor lego la reciba
n las dichas leyes; y que la obligacion
eba: y mandamos á todas y cualesquier
en, y manden ni hagan pagar: y defen-
uno no la reciba, ni signe la tal obliga-
a se haga junta ó apartadamente, so
e la signare pierda el oficio, y dende en
haga fé ni prueba y pierda la mitad de
un tercio para quien lo acusare, y los
a Cámara. Y mandamos á los nuestros

Secretarios, que cada y quando librasen cartas de Escribanías Notarías para cualesquier personas, pongan en ellas, que si *signare* el Escribano obligacion entre lego y lego, por donde se *meta* el deudor á la jurisdiccion eclesiástica, ó *signare juramen* de ella, que pierda el oficio; pero permitimos, que en los contratos de las rentas que se arrendaren de las Iglesias y Monasterios y Prelados y Clerigos de ellas, que puedan intervenir juramentos, y ponerse en ellos censuras, si las partes lo consintiesen tiempo que se hicieren los recaudos.

Nov. Rec., lib. id., tit. id., ley 7.ª—A los que nos querellaro que por causa de la ley pasada que hicimos en la ciudad de Toledo, por la qual *defendemos* ser fechos contratos con *juramen* entre legos, y asimismo submisiones á la jurisdiccion eclesiástica, algunos Notarios y Escribanos de nuestros Reynos no ós tomar los dichos contratos y submisiones no solamente seyen ambas partes legos, pero aunque el uno fuese clerigo; y por disposicion de la dicha ley los dichos Escribanos y Notarios quieren tomar *juramento* en contrato que de su natura requiere juramento para su validacion asimismo en compromisos y contratos de dotes, y sobras de ventas y donaciones, y otros contratos semejantes de enajenamientos perpetuos; y generalmente dicha ley era contra la libertad y jurisdiccion eclesiástica, y que por ella se quitaba á los Jueces eclesiásticos el conocimiento cosas que de derecho y costumbre les pertenecía; y que nos *solicaban*, que mandásemos revocar la dicha ley: á esto respondemos que la dicha ley es justa, y se pudo hacer bien de Derecho, y no es contra la libertad eclesiástica; ni por la dicha ley defiende el *juramento* al clérigo siendo uno de los contrayentes aunque el otro contrayente sea lego; y asimismo nuestra voluntad no fué de quitar el *juramento* en los contratos que para validacion se requería, y asimismo que no interviniese en los compromisos, y contratos de dotes y arras, y vendidas y enajenamientos, y donaciones perpetuas, y así lo declaramos y queremos que quede libertad á los contrayentes que en tales contratos puedan *jurar*; y los dichos Escribanos y Notarios puedan tomar los contratos *con juramento*, sin incurrir en pena alguna.

Nov. Recop., lib. id., tit. id., ley 17.—...Y porque para defraudar lo de suso contenido, se procurará que los dichos contratos *flanzas* (los celebrados por menores de edad al fiado con plateros

prohibido una cosa en interés general. Pero sucede á menudo que la ley estatuye un interés puramente privado sin querer prescribir ni prohibir nada. Acontece entonces que, á pesar de disponer en interés social, el legislador no quiere imponer la pena de nulidad á la inobservancia de sus disposiciones, es decir, que no hay principio absoluto en esta materia; hay que ver ante todo la voluntad del legislador.»

Cuando el legislador—continúa Laurent—dicta leyes sobre los contratos, no entiende imponer á las partes contratantes las reglas que traza sobre las condiciones y los efectos de las convenciones. El principio es, al contrario, dejarles plena y entera libertad. Esta libertad es la esencia de los contratos. Se hacen por interés individual, y nadie mejor que las partes para conocerle.

«En este supuesto—pregunta Laurent,—¿cuál es el objeto de las leyes sobre esta materia? El legislador entiende que no manda ni prohíbe; se limita á trazar reglas generales para la utilidad de las partes contratantes; prevé, presume lo que ellos quieren, según la naturaleza de los diversos contratos. Si las partes quieren lo que el legislador ha presumido que ellos querían, no tienen necesidad de escribir en sus actas las obligaciones y los derechos que se derivan de ellos naturalmente; no tienen más que referirse á la ley, donde todo esto se encuentra escrito. Si sus intenciones no concuerdan con las que el legislador ha supuesto, pueden derogar la ley, el legislador se lo permite, y estas derogaciones serán perfectamente válidas.»

«Cuando el legislador dispone en interés de la sociedad, impone la voluntad general á las voluntades particulares, lo que implica el que los individuos no puedan derogar la ley, porque al derogarla ponen sus conveniencias sobre las conveniencias de la generalidad. Si las voluntades particulares deben plegarse ante la voluntad general, los actos por los cuales un individuo se manifiesta en oposición contra la voluntad de todos, no pueden ser mantenidos sin comprometer la existencia misma de la sociedad. Es necesario, para salvar la autoridad de la ley, que estos actos puedan ser declarados nulos.»

¿Tienen razón los autores que sostienen este criterio de distinguir leyes (mejor disposiciones, pues una misma ley puede comprender las de las tres naturalezas) prohibitivas, preceptivas

título 507, sin que éste acuerde la nulidad. Y otros de varias leyes que pudiéramos presentar.

En estos casos, y otros semejantes, los actos realizados contra el precepto legal, aun no siendo prohibitivo, podrían ser declarados nulos por ministerio de la ley, por suponer una violación de ésta, porque es evidente la voluntad del legislador de que se respete y cumpla.

Es cierto, pues, que el precepto se refiere á las leyes prohibitivas y preceptivas, pero no admitimos en absoluto la opinión de Laurent, afirmativa de que en cuestión de contratos, las partes pueden acordar lo que estimen conveniente, hasta el punto de sostener que pueden derogar la ley. No. En este punto, como en todos, cuando existe un precepto, hay que acatarle. Aun en los contratos, hay que presumir que la disposición la ha establecido el legislador en beneficio, no de un contratante, sino de todos, y, por consecuencia, en interés general. Los contratantes gozan, y deben de gozar, de amplia libertad en cuanto al contenido del contrato, pero esto ha de sobreentenderse siempre como subordinación á la ley, que está sobre todo. Prueba evidente de esto, demostración cumplida de nuestro criterio es el art. 1.2º del Código, según el cual los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, *pero siempre que no sean contrarios á las leyes, á la moral ni al orden público*. Si son contra ley, serán nulos.

El párrafo primero contiene una excepción. Los actos contra ley serán válidos en los casos en que la ley ordene su validez. Esto es harto evidente, porque en tal supuesto los actos dejan de ser contra ley para convertirse en actos conforme á la ley. En este sentido pudiéramos decir que no hay excepción al principio sino que existe sólo éste.

El artículo manifiesta que la *misma* ley ha de ordenar la validez, ó mejor dicho, la convalidación de los actos nulos; pero ha de ser en los casos en que aquéllos dependen de los individuos. Así sucede (ejemplos presentados con acierto por el Sr. Manresa) con los actos ejecutados por la mujer casada sin licencia de su marido, en los casos en que ésta es necesaria (art. 62), los cuales pueden ser convalidados por el marido, especialmente los relativos á compra de joyas, muebles y objetos preciosos, y con los matrimonios nulos por causa de error, fuerza, miedo ó rapto, los cuales se co

ley 61 de Toro no podía renunciarse, ni aun con juramento, por la mujer casada.

El Código adopta un temperamento ecléctico. Declara, según se ha expuesto, que los derechos son renunciables, pero esta regla es limitada, puesto que hay casos en que no lo son.

Conviene fijarse en las palabras del artículo en el párrafo que vamos estudiando. Lo que quiere expresar en realidad es que hay derechos renunciables y derechos irrenunciables, es decir derechos que siempre y en todo caso pueden renunciarse porque siendo privativos de una persona, afectando sólo á la misma, es libre de usar ó no de ellos, pues se supone que nadie más interesado que ella en buscar su beneficio, y claro está que si ejecuta tal acto no será en perjuicio suyo; y derechos que no pueden renunciarse porque atañen al interés social. Así, si una persona tiene derecho á reclamar una cosa, exigir una indemnización, y renuncia á uno y otro, esta renuncia no hay para qué impedirla pues es un acto libre del principalmente interesado, acto que no perjudica á nadie.

No sucede esto en los casos de que la renuncia sea contra el interés, el orden público ó en perjuicio de tercero, en los que no discutir cabe lo racional de tales excepciones. Permitir la renuncia de un derecho que afectara al interés ú orden público, valdría tanto como negar este mismo interés y este mismo orden. De aquí la conocida doctrina de que el perdón de la parte ofendida (ó sea la renuncia del derecho que la ley concede á la persona perjudicada por el delito para el castigo de éste) no extingue la acción penal procedente del mismo, pues de prevalecer lo contrario, el interés de la sociedad, que ha visto totalmente infringida la ley por el hecho punible, quedaría subordinado al particular de individuo. Dar firmeza —dice Portalis— á convenciones contrarias á la ley sería colocar las voluntades particulares sobre el nivel de la voluntad general; sería disolver el Estado.

Sucede lo mismo respecto del tercero. Se denomina así todo aquel que no interviene en un acto ó contrato, y siendo un axioma jurídico el de que á nadie debe perjudicar aquello en que no ha tenido participación, sería arbitrario hacerle experimentar los efectos de una renuncia que de ordinario desconocería. Tales renunciaciones tendrían casi siempre por objeto defraudar á los acreedores, y á evitar esto es precisamente á lo que la ley aspira.

NAR

ron
que
a de
men
y
os.
ide
o n
cia

n el
de
ndo
qu
, a
irm
nad
ras
e qu
en
fa l
n te
ieno
rte
lfr
a de
ber
orri
cu
jo r
eje
lfr
te,
ndo
enti
ene
do p
nde
e qu

lo menos en el concepto de que, pudiendo los padres emancipar á sus hijos, pueden con mayor razón renunciar á la sola administración de sus bienes, porque, sobre ser cosas distintas, es torio que la ley que faculta á aquéllos para emancipar á éstos cuando llegan á determinada edad y circunstancias, *no ha signado precepto alguno que les autorice á renunciar la administración de los bienes de los que están en potestad, mientras subsiste ésta*

ART. 5.º Las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores, y no prevalecerá contra su observancia el desuso, ni la costumbre ó la práctica en contrario.

Concordancias.—Análogo á los de igual número de los proyectos de 1851 y 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—*Nov. Rec., libro III, tit. ley 11.*—Todas las leyes del reino que expresamente no se han derogadas por otras leyes posteriores, se deben observar literalmente, sin que pueda admitirse la excusa de decir que *no están en uso*, pues así lo ordenaron los señores Reyes Católicos y sucesores en repetidas leyes, y yo lo tengo mandado en diferentes ocasiones.

COMENTARIO.—Termina el artículo las discusiones que se promovido sobre la manera de perder las leyes su fuerza. En arreglo al Código, acontece esto únicamente por la derogación, es decir, por la publicación de otra ley posterior, sin que tenga lugar por el desuso, la costumbre ó práctica en contrario. De manera que aunque una ley haya dejado de usarse ó se ejecuten actos no conformes á la misma, no es dable alegar estas circunstancias, continuando vigente aquélla hasta que no se promulgue otra.

¿Tendrá absoluto cumplimiento este precepto en la práctica? Lo dudamos. Cuando una ley cae en desuso, y en oposición á la misma se forma una costumbre, es porque aquella ley no se amolda á las exigencias de la época ó á las ideas de los hom

cuantos esfuerzos haga el

legislador para procurar su observancia.

Prueba evidente de esto tenemos en la ley 5.^a, tít. VII, Partida 6.^a, que señalaba como causa de desheredación de los descendientes el que éstos se hiciesen juglares ó se dedicasen al oficio del toreo. Esta ley no ha sido derogada por otra alguna, y, sin embargo, nadie ha sostenido el cumplimiento de sus disposiciones. Por esto decía el legislador de Partidas (1.^a, tít. II, ley 6.^a) que la costumbre puede desatar el fuero antiguo «si fuere fecho ante que la costumbre, et hobiese en él mengua, ó yerro, ó cosas tan sin razon porque debiese ser desfecho».

ART. 6.º El Tribunal que rehúse fallar á pretexto de silencio, obscuridad ó insuficiencia de las leyes, incurrirá en responsabilidad.

Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicará la costumbre del lugar, y, en su defecto, los principios generales del Derecho.

Concordancias.—El pár. 1.º igual al art. 12 del proyecto de 1851. Igual al 12 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.

Párrafo 1.º—*Art. 368 del Código penal.*—El Juez que se negare á fallar so pretexto de obscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley, será castigado con la pena de suspensión. (*De un mes y un día á seis años.*)

Párrafo 2.º—*Part. 1.^a, tít. II, ley 6.^a*—... Fuera muy grande ha la costumbre, cuando es puesta con razon, asi como diximos, ca las contiendas que los homes han entre sí, de que non fablan las leyes escritas, pueden se librar por costumbre que fuese usada sobre las razones que fue la contienda, e aun ha fuerza de ley. trosi decimos que la costumbre puede interpretar la ley cuando nasciese dubdas sobre ellas, que ansi como acostumbraron los ros de la entender, ansi debe ser entendida y guardada..,

Nov. Recop., lib. III, tít. II, ley 3.^a—... Y mandamos que

quando quier que alguna duda ocurriese en la interpretacion y aclaracion de dichas leyes de ordenamientos y Fueros, o de las Partidas, que en tal caso recurran á Nos, y á los Reyes que de Nos vinieren, para la interpretacion dellas: porque Nos, vistas las dichas dudas, declaramos é interpretamos las dichas leyes como convienen al servicio de Dios Nuestro Señor, y al bien de nuestros subditos y naturales, y á la buena administracion de justicia.

COMENTARIO. —El primer párrafo del artículo anterior declara que incurre en responsabilidad el Tribunal que se negare á fallar un asunto por cualquiera de los motivos en él indicados.

Laurent expresa con la sencillez y propiedad que le caracterizan el fundamento de esta disposición. «La función de Juez, dice, está organizada precisamente porque las leyes son con frecuencia oscuras: está llamado á interpretarlas conforme á las reglas científicas que ha estudiado. Si la ley es clara, no hay pleito. No hay litigio sino cuando hay una duda aparente. El deber del Juez es terminarlo aplicando la ley. Rehusar juzgar cuando la ley no es clara y precisa, sería realmente negar la justicia, y esto es introducir el desorden en la sociedad.»

Para facilitar al juzgador su misión, el segundo párrafo del artículo determina que si no hubiese una disposición legal exactamente aplicable al caso controvertido, se acudirá á la costumbre del lugar, y, en su defecto, á los principios generales de Derecho.

El precepto es amplio, comprende á todos los Tribunales, ya impersonales, ya colegiados y de cualquier clase que sean.

¿De qué responsabilidad habla el artículo: civil ó criminal? Indudablemente de esta última, según indica de un modo expreso el art. 368 del Código penal; pues los artículos 260 á 266 de la ley orgánica del Poder judicial que establecen la civil, se refieren al caso en que hayan dictado los Jueces ó Magistrados alguna providencia ó resolución contra ley. Compréndese pronto la diferencia entre uno y otro caso. Cuando un Juez ó Magistrado dicta un acuerdo contra lo dispuesto en la ley, obra *positivamente*, y con su conducta puede perjudicar á alguna de las partes litigantes, en tanto que cuando se abstiene de fallar procede *negativamente*, no haciendo lo que debía realizar, y sin perjudicar (al

dos.
por
al en
ente
ley

for-
ro sí
Ann
cos-
cir-
a de
ir la

ley? Calla el Código sobre este particular, y sólo se sabe que los tres efectos que la costumbre producía, suplir la ley, interpretarla y derogarla, han quedado reducidos á uno solo, al primero.

Interesa llenar la deficiencia del Código, y como quiera que éste reconoce la fuerza de los principios de Derecho, ante el silencio de aquél han de aplicarse éstos. En su consecuencia, para que la costumbre supla á la ley creemos que será preciso, teniendo en cuenta lo que ha regido hasta aquí y las doctrinas establecidas por el Tribunal Supremo, que se use durante largo espacio de tiempo, que sea constante y uniforme y que no vaya contra la moral.

¿Qué tiempo ha de transcurrir para constituirse? La antigua legislación de Partidas (5.^a, tit. II, Partida 1.^a), decía diez ó veinte años. La dificultad se halla en apreciar con exactitud este período de tiempo por lo imposible de precisar el primer momento y el acto primero en que comienza una costumbre. Por eso lo más acertado es exigir un uso casi inmemorial, y, por lo menos, en la necesidad de señalar un transcurso de tiempo, el de veinte años. Caben asimismo dudas sobre si será menester algún fallo judicial para el efecto de que una costumbre tenga autoridad. La mencionada ley de Partidas requería dos; la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Abril de 1875 decía que no basta que se apoyase en un solo fallo de la Audiencia. (Apéndice ámero 1.^o—*Antejudio para exigir responsabilidad á los Jueces y magistrados.—Responsabilidad de éstos.*)

ART. 7.º Si en las leyes se habla de meses y noches, se entenderá que los meses son de treinta días y las noches de veinticuatro horas, y las noches se pone hasta que sale el sol.

Si los meses se determinan por sus nombres, computarán por los días que respectivamente

Concordancias.—Tomado en parte del art. 18 de la Ley de 1851.

PRECEDENTES LEGALES.—*Ninguno.*

COMENTARIO.—Se ocupa de los diversos espacios que pueden señalar las leyes: meses, días y noches.

Los dos primeros no ofrecen dudas, y sólo en el tercer mes establece una distinción, según se determinen los nombres. En este caso, se computan por los días que realmente tengan el mes ó meses de que se trate; en el primer mes, por treinta días, cualquiera que sea el número de días que compongan. Respecto de la noche, entiende como el día transcurrido desde que se pone hasta que sale el sol. La duración de la noche es de fácil comprobación, pero acaso ocurriera menester hacer constar en un documento el momento preciso de la postura y salida del sol, para lo cual precisa un Calendario.

Guarda el Código silencio acerca de este punto, el año, período de tiempo de que no habla. En el primer caso, consideramos como Calendario oficial, digámoslo así, el que es el admitido en general y del que el Código habla en su art. 60; en el segundo, atendiendo á que los años son iguales, pues sabido es que el bisiesto no altera la duración, por razones idénticas á las acabadas de exponer, estimar como año legal, tipo y norma de las cuestiones que puedan surgir, el de trescientos sesenta y cinco días.

En consulta hecha á la Fiscalía del Tribunal Supremo acerca de si las liquidaciones de condena debían hacerse, según el artículo 7.º del Código civil, á razón de treinta días por mes ó por

cepto
agres
s se
ueste
s me

pol
s qu

l pro

.^a, ti
r de
et gi
orio (e
e juz
io, r
es el
estos
s otr

que l
es, q
ón,
torio
rida

el f
r, no
ente
s efe
plo,
son

mantienen la policía del Estado y velan por su seguridad. E leyes deben obligar indistintamente á todos los que habita territorio. No puede, con respecto á ellas, existir diferencia guna entre ciudadanos y extranjeros. Un extranjero se convi en sujeto casual de la ley del país en el cual viaja ó reside. E curso de su viaje ó durante el tiempo más ó menos largo d residencia, es protegido por esta ley; debe, pues, respetarla á vez. La hospitalidad que se le da le fuerza á su reconocimie Por otra parte—continúa el eminente jurisconsulto francé cada Estado tiene el derecho de velar por su conservación, d cho en el que radica la soberanía. ¿Cómo podría un Estado servarse y mantenerse si existiesen en su seno hombres pudiesen impunemente violar su Policía y turbar su tran lidad? El Poder soberano no podría llenar su fin si hombres tranjeros ó nacionales fuesen independientes de ese Poder, puede ser limitado ni en cuanto á las cosas ni en cuanto á personas. La cualidad de extranjero no puede servir de excep legítima para el que se prevaleiese de ello contra el Poder púl que rigiese el país en que vive.»

El precepto responde al principio de la Soberanía del Est es decir, que cada Estado ha de poder hacer respetar su sob nía. De aquí que se refiera á las leyes de carácter ó de interés blico. Así vemos que la ley orgánica del Poder judicial disp en su art. 336 que los Tribunales españoles son competentes conocer de los delitos que afecten al interés del Estado y d Nación; el art. 140 del Código penal habla de la pena que se pondrá al extranjero que cometa en España el delito de traic y el 10 de la ley de Orden público de 23 de Abril de 1870 que culta á la Autoridad civil, una vez suspendidas las garan constitucionales, para entrar en el domicilio de cualquier esp ó *extranjero* residente en España sin su consentimiento y r trar sus papeles.

Pero esto no quiere decir que no existan otras leyes de ín particular ó privada, cuyas reglas obligan también á los ext jeros.

Ejemplo de ello nos ofrece el art. 15 del Código de Come según el cual, «los extranjeros podrán ejercer el comercio en paña con sujeción á las disposiciones del Código en todo cu concierne á la creación de sus establecimientos dentro del t

como dice Laurent, acompañan á la persona y no la abandonan en tanto que conserva la nacionalidad de donde derivan. Por ejemplo, el menor de edad en España no será mayor en ella aunque el número de años señalado en ésta es inferior á aquélla. La patria potestad se adquirirá y se perderá respectivamente por un español en el extranjero por los hechos y las circunstancias que determine la legislación de nuestro país.

El artículo habla sólo de los españoles, es decir, de los que han de regir su capacidad fuera del territorio nacional, callando acerca de la de los extranjeros en España.

Salvan este silencio, como hace notar el Sr. Manresa, el artículo 14, que habla de las disposiciones de los artículos 9, 10 y 11 con referencia á *los extranjeros en España*, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero, en nuestro sentir, aun sin necesidad de estos preceptos positivos, habría de igual modo que consiguientemente aplicable la disposición del art. 9.º respecto de los extranjeros por virtud del principio capital del estatuto personal. La esencia de éste es que la capacidad según su ley nacional le sigue á la persona cualquiera que vaya. Por consiguiente, el extranjero en España regirá por su ley nacional, y así lo consignan algunos Códigos entre ellos el francés, portugués, italiano, chileno y mejicano, los cuales contienen preceptos iguales al del art. 9.º del nuestro.

¿Se deberá el silencio á la circunstancia de que el art. 2.º reclama la igualdad de derechos civiles entre españoles y extranjeros? No pensamos así. Esta igualdad se refiere más bien al ejercicio de los derechos, no al derecho mismo, menos aún á los relativos á la capacidad. De entenderlo de otro modo, resultaría que el extranjero que fuese capaz en su país, podría serlo en España, y no sucede así. Por ejemplo: el francés que tiene veintidós años, mayor de edad en su país, no lo será aquí, porque el Código exige veintitrés años.

La prueba más evidente de la certeza de nuestra afirmación nos la ofrece el Código italiano. Éste en su art. 3.º establece el principio de la igualdad de nacionales y extranjeros, y, sin embargo, en el art. 6.º se dice que el estado y capacidad personal y las relaciones de familia se regularán por la ley de la Nación á que pertenezcan.

Tanto el precepto de este artículo como el de los dos siguientes descansan en la teoría de los estatutos (personal y real

ribu
e in
sitiv
la d

en a
él.

eta
mes
leye
e ti
dis
as fe
rea
con
tra
civi
ente.
mes
en o
lar
nos
vas

e en
las
l). c
don
par
ctar
erve

Tril
de y
pre

l es
na

juicio universal de testamentaria, y antes, por el contrario, calció de toda competencia desde el momento en que por deferencia á los mandatos judiciales se presentó una de las partes más interesadas, no para someterse á la jurisdicción de aquel Tribunal sino reclamando constantemente que el conocimiento de las cuestiones jurídicas que afectan á lo intrínseco del testamento correspondía al Tribunal del país de donde era ciudadano el testador y lo son los herederos, y manifestando que ante el mismo tenía deducida la oportuna demanda. (*Id.*)

Para que el Tribunal del lugar del fallecimiento pudiera ser competente era necesario que el finado hubiera tenido carta naturaleza, ó, por lo menos, un verdadero domicilio, al que según las leyes del país, estuviera anejo el goce en todos los derechos civiles. (*Id.*)

La circunstancia de consistir la herencia en bienes muebles, lejos de conceder jurisdicción al Juez del distrito de la residencia del extranjero, fija la del de la Nación á que éste pertenece; porque justamente en este caso tiene lugar el estatuto personal, y todo lo que comprende es inherente á la persona y á la residencia. (*Id.*)

Sentencia de 27 de Noviembre de 1868. (Gaceta 18 Diciembre idem.)—La ley personal de cada individuo es la del país á que pertenece y la cual le sigue á donde quiera que se traslade, reglando sus derechos personales, su capacidad de transmitir por testamento ó abintestato y el régimen de su matrimonio ó familia.

Sentencia de 6 de Junio de 1873. (Gaceta 26 Agosto id.)—El derecho de testar, como referente á la capacidad del individuo, uno de los que corresponde al estatuto personal.

Sentencia de 13 de Enero de 1885. (Gaceta de 11 Agosto id.)—doctrina de Derecho internacional y privado que al extranjero acompañan su estado y capacidad, y deben aplicárseles las leyes personales de su país para evitar los inconvenientes de no juzgarle por una sola ley, cuando no contradiga los intereses de la Nación en que hace sus reclamaciones.

Lejos de infringirse, se ha respetado la regla de Derecho internacional privado de que los extranjeros se hallan sometidos en cuanto á los actos que ejecutan á la legislación del país donde se hallan, con arreglo al estatuto formal y al principio de De-

l estimar el auto recurrido la excepción de falta de persona del recurrente, fundándose en lo acordado por la Sala tercera del Tribunal Supremo en 13 de Noviembre de 1873 y en que ha concedido el *exequatur* á la resolución del Presidente del Tribunal de Comercio del Sena confirmando el nombramiento de administrador de una Sociedad al mismo recurrente, infringe el artículo 3.º, especialmente en el párrafo 2.º, del tratado de comercio y navegación celebrado entre España y Francia el 6 de Febrero de 1822, el cual dispone que «los españoles en Francia y los franceses en España tendrán libre y fácil acceso cerca de los Tribunales de justicia, tanto para demandar como para defender sus derechos en todos los grados de jurisdicción establecidos por las leyes, y podrán asimismo emplear en todas las instancias abogados, los Procuradores y Agentes de todas clases que quisiere á propósito, y gozarán, por último, de los mismos derechos y ventajas que estén ya concedidos ó que se concedan á los franceses». (*Id.*)

Auto de 24 de Mayo de 1886. (*Gaceta* 20 Agosto *id.*)—El auto personal, según el Derecho internacional privado, rige sobre los actos que se refieran en lo civil á la persona del extranjero sujeto á las leyes vigentes en el país de que es súbdito, resolviéndose por él todas las cuestiones de capacidad, aptitud y derechos personales.

Bajo este concepto, es evidente la capacidad del testador español para otorgar en Orán su última voluntad y disponer de sus bienes con arreglo á la ley española, puesto que el otorgante conservaba esta nacionalidad, completas sus facultades intelectuales y mayor edad de la que exige la ley 13, título I, Partida 6.ª (*Id.*)

Admitida la capacidad del otorgante, su testamento es válido, por lo que á su otorgamiento concurrieron el Notario y cuatro testigos, elegidos y llamados por el testador, y un intérprete jurado, resolviéndose en el documento el estado normal del otorgante, sus condiciones y domicilios de cuantos estuvieron presentes, legalizada por la autoridad local la firma del Notario y el Consulado la de aquélla, quedando con ellos observados los requisitos prescritos por las leyes francesas, que, como extrajudiciales y formularias, sirven para que los actos extrajudiciales sean admitidos y válidos en España conforme al art. 282

cuantía de los derechos sucesivos y á la validez intrínseca de sus disposiciones, se regularán por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en que se encuentren.

Los vizcaínos, aunque residan en las villas, seguirán sometidos, en cuanto á los bienes que posean en la tierra llana, á la ley 15, tít. XX del Fuero de Vizcaya.

Concordancias.—Análogo al 8.º del proyecto de 1851 en cuanto á los inmuebles, pues respecto de los muebles señalaba como ley á la que debían sujetarse la del domicilio del dueño, y al 9.º y al 10 de 1882, menos el último párrafo, que es nuevo.

PRECEDENTES LEGALES.—*Part. 1.ª, tít. XXIV, ley 4.ª.*—Todo home á quien non es defendido por Derecho ha poder de facer de lo suyo lo que quisiere; ca ninguna cosa non val más á los homes que ser guardadas sus mandas. Et por ende queremos et mandamos que los romeros, qui quier que sean, et donde quier que vengán puedan tambien en sanidat como en enfermedat *facer manda de sus cosas segunt su voluntad*; et ninguno non sea osado de embargarlo en poco ni en mucho...

...Et otrosi si el romero muriere sin manda, los alcalles de la villa do muriere reciban sus bienes et cumplan dellos todo lo que fuere menester á su enterramiento, et lo demas guardengelo et fágalo saber al rey, et él mande hi lo que toviere por bien.

Part. 3.ª, tít. XIV, ley 15.—No tan solamente se podrien probar los pleytos et las contiendas que son entre los homes por conosciencias, ó por testigos, ó por cartas valederas, ó por previllejos, ó por escrituras públicas, ó por sospecha, ó por fama, así como de-suso decimos, más aun por ley ó por fuero que averigue el pleyto sobre que esta contienda. Et por ende decimos et mandamos que toda ley deste nuestro libro que algun alegare delante el juzgador para probar et averiguar su entencion, que si por aquella ley se prueba lo que dice, que vala et que cumpla. Et si por aventura alegase *ley ó fuero de otra tierra que fuese fuera de nuestro señorío*, mandamos que en nuestra tierra non haya fuerza de pruebas

ella tier
azon de
er estos
de nue
fuero de
verigua

establec
la Nac
ie estén
mera, e

s, ha ter
nam seq
cho inte
ecto los
B.
ieble ó
gule el
ones, e
del tes
que li
unque t
ie esto,
á la f
ider á l
osión ter

terior, i
la mat

párrafo

3 de N

artículo a
elativa
u padre

nado vecindad en España con motivo de su larga residencia una población de la misma y otros antecedentes relativos á vida pública y privada es puramente de hecho, y, por lo mismo, suelta por la Sala sentenciadora en sentido negativo, en uso de sus facultades y con presencia de las pruebas hechas por los litigantes, sin que en contra de su apreciación se haya citado ley alguna como infringida, son inoportunas las citas como infringidas de las reglas 3.^a, 8.^a y 9.^a del tít. XI, lib. VI de la Novísima Recopilación; doctrina legal según la que la nacionalidad se establece, no sólo por la procedencia ó el nacimiento, sino que se funda en la voluntad del individuo, en la que está basada la Real cédula de 20 de Agosto de 1849 al prevenir que para la vecindad precisa la voluntad; el art. 1.^o de la Constitución de 1837, reducido en las de 1845 y 1869 (1), según el que son españoles los extranjeros que, aun sin carta de naturaleza, hayan ganado ciudad en cualquier pueblo de la Monarquía, y el art. 3.^o del decreto de 17 de Noviembre de 1852: mucho más si aparece que dicho testador fué inscrito como extranjero, cuando nació, en las matrículas del Consulado y del Gobierno civil, y posteriormente siendo ya mayor de edad y huérfano de padre.

Tanto en las leyes comprendidas en nuestros Códigos como en los tratados internacionales celebrados con Francia, se ha reconocido constantemente el derecho de los franceses transeúntes domiciliados en España á ser juzgados por las leyes de su país en todo lo que se refiere al estatuto personal, y hasta el Tribunal Supremo ha establecido la misma doctrina en diferentes sentencias (*Idem.*)

El derecho de testar, como que se refiere á la capacidad del individuo, es uno de los que corresponden al estatuto personal, y en este supuesto, el francés residente en España que no ha perdido su nacionalidad puede otorgar válidamente el testamento ógrafo, puesto que se halla autorizado para ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 969, 970 y 999 del Código civil francés. (*Id.*)

El art. 9.^o del tratado celebrado con Francia en 7 de Enero de 1862, lejos de contener frase alguna que revele el propósito de privar á los franceses de la facultad de hacer testamento ólógrafo.

(1) Y en la actual de 1876, y en el art. 17 del Código.

o se
ó
ecib
e lo
star
squi
ra t
sue
ento
que
leg
de
era
in l
otre
stos
es de
ubio
form
rse
as l
de l
la o
ley

ros
real,
ha
doc
esta
alid
n s
las

l de
r le

nbre
one

nadas con la posesión y la propiedad de *bienes raíces ó inmuebles* deben ventilarse ante los Tribunales en donde aquéllos se hallan sitos.

Conforme á ese principio, dispone el Real decreto de 17 de Noviembre de 1852, en su art. 32, que los extranjeros tienen derecho á que por los Tribunales españoles se les administre justicia, con arreglo á las leyes, en las demandas que entablen para el cumplimiento de las obligaciones contraídas ó que deban cumplirse en España ó cuando versen sobre *bienes sitos en territorio español*. (*Id.*)

Lo resuelto por el Tribunal extranjero sobre bienes objeto de litigio no puede citarse bajo ningún concepto como precedente bastante eficaz á herir la nacionalidad española y la soberanía de su Derecho, que en materia de bienes sitos en España parte del principio *lex loci rei sitae*, según el cual deben resolverse las cuestiones que afectan al movimiento y transmisión de la propiedad, porque de otra manera fácil sería á una Nación lastimar á las demás en un derecho tan alto y sagrado como el dominio, que todas ejercen de un modo absoluto sobre su respectivo territorio. (*Id.*)

Sentencia de 29 de Enero de 1875. (Gaceta 27 Marzo id.)—Tratándose de un español que falleció, sin dejar de serlo, en país extranjero, es inconducente la cuestión sobre estatuto real y personal, no siendo objeto de la demanda la distribución de los bienes hereditarios, sino la declaración extensiva de un derecho, el que habiéndose de decidir por los Tribunales españoles, no puede menos de referirse á las leyes españolas, que son las aplicables por éstos en mérito de sus atribuciones, que no se ponen en duda por el demandante de los bienes hereditarios.

La ley 15, tít. XIV, Part. 3.^a excluye por principio general la aplicación de ley ó fuero de otra tierra; y si bien la admite, es respecto de las contiendas entre «hombres de aquella tierra, ya sobre pleitos ó posturas que hobiesen fecho en ella, ó en razon de algun mueble ó raíz de aquel lugar.» (*Id.*)

Sentencia de 24 de Junio de 1886, pár. 2.º (Véase artículo anterior.)

El último párrafo del artículo se ocupa de legislación foral ó provincial, no internacional; habla del Fuero de Vizcaya. ¿Por

y en muerte pueda disponer de ellos como podía d
cayno, vecino de la tierra llana; Y sean admitid
rayz los tronqueros profiricos, como y segun se
bienes, que poseen, uenden y mandan los Vizcayr
la tierra llana.»

El precepto es terminante: los bienes inmueb
ritorio sometido al fuero se rigen por éste, aun
quien no reside en tal territorio.

ART. 11. Las formas y solemnidades
tratos, testamentos y demás instrumentos
rigen por las leyes del país en que se otor

Cuando los actos referidos sean autó
funcionarios diplomáticos ó consulares d
el extranjero, se observarán en su otorg
solemnidades establecidas por las leyes es

No obstante lo dispuesto en este artí
anterior, las leyes prohibitivas concern
personas, sus actos ó sus bienes, y las qu
objeto el orden público y las buenas cos
quedarán sin efecto por leyes ó sentenc
ni por disposiciones ó convenciones acord
extranjero.

PRECEDENTES LEGALES.—*Ninguno.*

COMENTARIO.—La doctrina del primer párrafo,
principio *locus regit actum*, ha sido siempre defend
por parte de los tratadistas y admitida en las
práctica.

No basta, sin embargo, en todos los casos, pa
trumento público tenga fuerza obligatoria, la ex
vancia de las formalidades exigidas en el país en
Si ha de conservarla en Nación distinta de la del

tados de Europa, de nueve si lo hubiesen sido en los de América y África, y de un año si en los de Asia. 5.º el país del otorgamiento se conceda igual eficacia y valiéndose los actos y contratos celebrados en territorio de los dominios.

Los artículos citados de la ley de Enjuiciamiento civil tñan lo que á continuación se expresa:

«Art. 600. Los documentos otorgados en otras Naciones tendrán el mismo valor en juicio que los autorizados en España, si reúnen los requisitos siguientes:

1.º Que el asunto ó materia del acto ó contrato sea permitido por las leyes de España.

2.º Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse con arreglo á las leyes de su país.

3.º Que en el otorgamiento se hayan observado las solemnidades establecidas en el país donde se han verificado los actos ó contratos.

4.º Que el documento contenga la legalización y los requisitos necesarios para su autenticidad en España.

Art. 601. A todo documento redactado en cualquier idioma que no sea el castellano se acompañarán la traducción original y copias de aquél y de ésta. Dicha traducción podrá ser hecha privadamente, en cuyo caso, si alguna de las partes lo solicitare dentro de tercero día, manifestando que no la tiene verdadera y exacta, se remitirá el documento á la Interpretación Pública para su traducción oficial.»

Estos artículos, como se ve, reproducen el contenido del decreto de 1851, menos los números 4.º y 5.º, que, á nuestro entender, no subsisten: el primero (4.º), porque no lo exige nada especial sobre la materia, la Hipotecaria; el segundo (5.º) porque no lo preceptúa tampoco la ley posterior, la de Enjuiciamiento ni el Código. El requisito 5.º se fundaba en el principio egoísta y anticientífico de la reciprocidad, incompatible con el principio de igualdad establecido por el art. 27 del Código.

El caso 4.º del art. 600 de esta última ley ordena el requisito para la validez de los documentos de la clase á que nos refiriendo, el de la legalización. ¿Por quién ha de verificarse ésta? Existen varias disposiciones sobre el particular. En primer término, una circular de 7 de Junio de 1859 (mencionada

de 30 de Junio de 1866), declarando e vengan del extranjero procedan res que no mantengan correspon- *de Estado*, deben además ser for- ción ó Cónsul respectivo

del Consejo de Estado de 5 de stia falta de personalidad en un torgado á su favor en Francia, si Tribunal civil de primera instan- de Justicia y el de Negocios Ex- Cónsul general de España en esta ro *Ministerio de Estado*.

de lo civil de la Audiencia de ño de 1889 (no recordamos la fe- sito *indispensable* para despachar or el *Ministerio de Estado* del acta lizada por el Cónsul general de

puede referirse el citado inciso 4.º naturaleza de cada acto ó contrato sde luego es dable indicar el de de bienes inmuebles sitos en Es- . 5.º de la ley Hipotecaria y el 9.,

que «también se inscribirán en el los expresados en el art. 2.º (1)

os expresados en el artículo anterior

tivos de dominio de los inmuebles ó s sobre los mismos.

ie se constituyan, reconozan, mo- le usufructo, uso, habitación, enfite- lumbres y otros cualesquiera reales. tos en cuya virtud se adjudiquen á chos reales, aunque sea con la obli- ó de invertir su importe en objetos

que se declare la incapacidad legal ón de muerte de personas ausentes, ción ó cualquiera otra por la que se

otorgados en país extranjero, que tengan fuerza en España arreglo á las leyes, y las ejecutorias de la clase indicada en mero 4.º del mismo artículo, pronunciadas por Tribunales extranjeros á que debe darse cumplimiento en el Reino, con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil.»

El 9.º del Reglamento expresa que «los documentos otorgados en el extranjero sólo podrán inscribirse después de ser convenientemente traducidos por la oficina de la Interpretación de Lengua, ó por cualquier otro funcionario que para ello esté competentemente autorizado.»

No podrán inscribirse las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros hasta que el Tribunal Supremo disponga su inscripción, conforme á lo determinado en la ley de Enjuiciamiento civil.

Respecto á este mismo, la Real orden de 1.º de Junio de 1862 dispuso en su caso 1.º lo que á continuación copiamos literalmente: «Los documentos escritos en idiomas extranjeros ó dialectos distintos del que se usa en el país donde han de registrarse, deben los interesados presentarlos al Juez de primera instancia del partido donde proceda su registro, para que el Juez de primera instancia los remita á la oficina de Interpretación de Lengua, á los traductores autorizados, á fin de que los traduzcan, haciendo la traducción á continuación del documento original. Verificado, los devolverán al propio Juez para que ponga de la traducción una nota firmada por él que acredite ser fielmente traducida, y el documento devuelto por la Interpretación de Lengua y los entregará á los interesados para que puedan presentarlos al Registro y ser inscritos, entendiéndose que corren por cuenta de dichos interesados los gastos de traducción.»

modifique la capacidad civil de las personas en cuanto á la disposición de sus bienes.

Quinto. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un período que exceda de seis años, ó los en que se haya estipulado las rentas de tres ó más años, ó cuando, sin tener en cuenta de estas condiciones, hubiere convenio expreso de las partes para que se inscriban.

Sexto. Los títulos de adquisición de los bienes inmuebles de los reynos reales que poseen ó administran el Estado ó las Corporaciones civiles ó eclesiásticas, con sujeción á lo establecido en la ley ó Reglamentos.

traducción de los documentos, so-
de Enjuiciamiento civil preceptúa,
odrá hacerse privadamente, y si la
delidad y exactitud de la traduc-
a de Interpretación de Lenguas.
le 1863 manifiesta que las traduc-
es Agentes Consulares de Francia
or que las que hubiesen verificado
rados españoles, debiendo en sus
portunas medidas para asegurar
a presentada por los interesados.
a repetida ley de Enjuiciamiento
inación de documentos públicos
es judiciales de toda especie,» así
dispuesto en esta misma ley (ar-
ías dictadas por Tribunales ex-
este mismo comentario.

nidades ó requisitos externos han
orguen, como determinan el ar-
ros, los demás que insertamos y
cia.

os españoles podrán testar fuera
dose á las formas establecidas por
llen.

lta mar, durante su navegación
ujeción á las leyes de la Nación

amento ológrafo con arreglo al ar-
pel sellado, aun en los países cu-
tamento.

n España el testamento manco-
669, que los españoles otorguen
autoricen las leyes de la Nación

os españoles que se encuentren
estamento, abierto ó cerrado, ante
ar de España residente en el lugar

e hará las veces de Notario, y se

servarán respectivamente todas las formalidades de las secciones quinta y sexta de este capítulo, no obstante, necesaria la condición del domicilio en lo dispuesto en el art. 735. El Agente diplomático ó consular remitirá con su firma y sello, copia del testamento abierto ó otorgamiento del cerrado, al Ministerio de Estado para que se archive en su Archivo.

Art. 736. El Agente diplomático ó consular en el extranjero, si hubiese depositado su testamento ológrafo ó cerrado, remitirá al Ministerio de Estado cuando fallezca, en el certificado de defunción.

El Ministerio de Estado hará publicar en la *Gaceta* noticia del fallecimiento, para que los interesados puedan recoger el testamento y gestionar su cumplimiento en la forma prevenida.

Sentencias de 6 de Noviembre de 1867, pár. 3.º; 1.º de Mayo de 1885, párrafo 2.º, y 24 de Mayo de 1886, párrafos 3.º y 4.º

C) *Abintestato*.—Sobre este extremo hay una disposición en el art. 28 del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852, en opinión nuestra, sigue vigente después de la promulgación del Código, dados los términos del art. 1.º 76 del mismo.

Declara éste que *quedan derogados todos los cuerpos legales que constituyen el llamado Derecho civil con respecto a las materias que sean objeto del Código*. Ahora bien: no obstante el Real decreto de 1852 de ningún cuerpo legal, se al derecho civil común y no siendo su materia derogada, claro es que no está contenido en la disposición derogatoria del art. 1.º 76, y por consiguiente, queda subsistente.

Dicho art. 28 del Real decreto de 1852 dice así: «*El Agente diplomático de los extranjeros domiciliados y transeúntes en el país, de común acuerdo con el Cónsul de la nación, formará el inventario de los bienes y efectos, y tomará las disposiciones convenientes para que estén en seguridad hasta que se presente el heredero legítimo ó la persona que legalmente le represente*».

Así en este caso como en los de sucesiones testadas, conocerán los Tribunales de las reclamaciones que se presenten sobre embargo de bienes de acreedores, y cualquier

proceda que conozca la jurisdicción española, con arreglo á las leyes del Reino ó á los tratados con otras Potencias.

Sentencia de 8 de Octubre de 1888.—Es legalmente inadmisibile en autos sobre aprobación de operaciones particulares, una cuestión de competencia por declinatoria entre un Juez de primera instancia y un Cónsul de España en el extranjero, dada la índole de las atribuciones de éste.

Lo es también que por reconocida falta de jurisdicción en el Consulado para resolver sobre el punto sometido á la Autoridad judicial, se pretenda atribuir la competencia á Tribunales extranjeros completamente extraños al asunto. (*Idem.*)

La regla 6.^a del art. 20 del tratado entre España y Francia, fecha 7 de Enero de 1862, no puede ser aplicable, según el Derecho internacional, á una testamentaria en la que la persona de cuya sucesión se trata, lo mismo que la totalidad de sus herederos, son españoles, en la que los bienes adquiridos radican en España, con arreglo á cuyas leyes sustantivas y adjetivas se han de resolver las controversias que puedan surgir entre los interesados, y en la que, por último, el albacea contador ha practicado la liquidación, división y adjudicación del caudal extrajudicialmente en cumplimiento de la expresada voluntad de la testadora, sin otra restricción que la de presentar el expediente particional á la aprobación del Juez por la circunstancia de existir menores de edad interesados. (*Id.*)

Denegando la Sala sentenciadora la mencionada declinatoria de jurisdicción, aplica rectamente la regla 5.^a del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil. (*Id.*)

En el propio supuesto, el hecho de haber sido anteriormente aprobadas por un Cónsul español en el extranjero las operaciones particionales del caudal del marido de la persona en cuya testamentaria se promueva la declinatoria, no constituirá nunca una razón legal aceptable contra las expresadas. (*Id.*)

b) *Embargo preventivo.* *Ley de E. civil.*—Art. 1400. Para decretar el embargo preventivo será necesario:

1.^o Que con la solicitud se presente un documento del que resulte la existencia de la deuda.

2.^o Que el deudor contra quien se pida se halle en uno de los casos siguientes:

Que sea extranjero no naturalizado en España.

Á los exhortos de Jueces extranjeros se dará cumplimiento con arreglo á las leyes, cuando vengan por el Ministerio de Estado, con las formalidades y requisitos de costumbre. Por el mismo Ministerio se remitirán los exhortos para las Autoridades extranjeras. En los exhortos cuyo cumplimiento no ha de hacerse por los Cónsules españoles, se dirigirán principalmente á los Tribunales, Jueces y Autoridades extranjeras que deban ejecutar las diligencias que se encarguen.»

Real orden (Circular) de 9 de Abril de 1884. (Gaceta 11 idem.)—

- 1.º Toda comunicación que los Tribunales de cualquiera orden dirijan á los Representantes de Naciones extranjeras, así como á empleados ó dependientes de su misión, ya sean citaciones para comparecer, exhortos, emplazamientos ó requerimientos de naturaleza civil ó criminal, se dirigirán necesariamente, según está prevenido, por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia, que lo comunicará al de Estado, siempre que conste el carácter y condiciones de la persona citada. 2.º Tan luego como en los procedimientos resulte ese carácter ó condición del citado ó emplazado, se cumplirá respecto á él esa formalidad, regularizando el procedimiento en lo que sea referente, si no consta la expresa renuncia de su inmunidad, hecha por el interesado en el proceso ó autos de que se trate.

*Real decreto de 5 de Febrero de 1889. (Gaceta 6 idem).—*Artículo único. Se modifica y amplía la instrucción de 26 de Junio de 1861 (*Gaceta 29 idem*) (1), dictada para determinar los requisitos que han de cumplirse al disponer y verificar pagos en el extranjero por obligaciones del Estado, adicionando á la misma las adjuntas reglas, á las que, en lo sucesivo, se subordinarán los pagos y reembolsos causados en el extranjero á instancia de parte interesada en la Península y Ultramar, y los gastos extraordinarios que suplan los agentes diplomáticos y consulares por ejecución de los servicios definidos en el art. 7.º (2) de la citada instrucción.

(1) No la incluimos porque atañe esencialmente á la materia de hacienda.

(2) *Art. 7.º, párrafo 2.º.....* Dejarán de figurar entre los llamados *Gastos extraordinarios* los que se produzcan en gestiones de

antes á cuya instancia libren los Tribunales las adyacentes exhortos, suplicatorios ó desahucio en otros países con intervención de las autoridades del Gobierno de S. M., se les reserva el derecho en la Caja del Banco de España de la capital de Madrid de pagar el pleito radique, el impuesto de los gastos de traslado por el Tesoro público.

El pago será requisito indispensable consignar por los exhortos y suplicatorios el deseo del interesado, ó en el caso de la Dirección general del ramo.

En esta pretensión, el Centro directivo, luego que reciba de Estado los exhortos diligenciados, dará traslado á la Dirección de Hacienda de la provincia respectiva para que pague el ingreso de la cantidad correspondiente, y luego en la Caja del Banco, lo comuniquen sin demora al Ministerio de Gracia y Justicia para que lo libere el Tribunal de origen.

Si se prefiriese cursar la carta de pago á dicho Centro producirá los mismos efectos que el aviso de la Hacienda.

En el caso de que los litigantes no satisficieran la cantidad ocasionados en el extranjero, en cumplimiento de las resoluciones acordadas por solicitud suya, y tuviesen que pagar los gastos sin curso en la Dirección general del Tesoro, se dará acción de reembolso contra el procurador de la causa, y no el primer responsable ante la Hacienda, y subrogada la parte interesada.

Los exhortos y suplicatorios relativos á la defensa por el extranjero serán de la misma manera que los anteriores, y la Dirección del Tesoro los mandará en seguida de recibirlos al Ministerio de Gracia y Justicia, el cual le abrirá una cuenta de gastos, paciones, gastos causados en el extranjero en el extranjero,» con objeto de que si los interesados obtuvieren resultado favorable, se retengan por el Juzgado correspondiente de la cosa litigiosa la suma anticipada, y se devuelva á aquel departamento ministerial el crédito correspondiente al gasto.

En el procedimiento se tramitarán los documentos que se refieran á actuaciones de justicia criminal,

í al Ministerio
siendo obliga-
dirección gene-
ción al crédito
amente se for-
se se trate.

nálogos.

en el extran-
s documentos
la Instrucción
ente al Minis-
stancia al de
na establecida

con la oportu-
el extranjero la
costas en cum-
posterioridad á
de Pagos bajo
ta del Ministe-
; por conducto
Tribunales de
consulares que
es sus gestio-
pondiente para

inisterio

entes diplomá-
e solicitar del
e hacer ningún

anticipo de la recaudación de derechos obvenacionales por carla á gastos de exhortos, suplicatorios, etc., ni ning documento de interés privado que proceda de instanci gantes de las Audiencias de Cuba, Puerto Rico y Filip que antes se les sitúen fondos por los interesados ó por terio de Ultramar, ó se tenga un depósito á disposición facción del Tesoro de la Península.

2.º Todo gasto suplido en tal concepto por dichos será de su cuenta y responsabilidad.

3.º El Ministerio de Estado cesará en la práctica est con anterioridad á la instrucción de 26 de Junio de aprobar en concepto de *Gastos extraordinarios* cuantos se refieran al de Ultramar, excepto los que tengan crédi presupuestos especiales de dicho Ministerio.

4.º El Ministerio de Ultramar adoptará las disposicio venientes á prevenir queden incumplimentados los exho emanen de los Tribunales de justicia en las Antillas.

Reglamento estableciendo el procedimiento administrativo nieterio de Gracia y Justicia de 17 de Abril de 1890.—Art. exhortos y suplicatorios que hayan de ser remitidos al jero ó á otras Autoridades dependientes de distintos Min se cursarán en la forma dispuesta por los tratados y las Enjuiciamiento. En cuanto á la tramitación para ped al extranjero, se observará el Real decreto de 5 de de 1889.

Real decreto de 20 de Julio de 1891. (*Gaceta* 23 *ides* exhortos que desde las islas Filipinas se dirijan á los de la China ó del Japón ó á cualquiera de los países extr situados más allá del Cabo de Buena Esperanza ó del i Suez, se cursarán directamente por el Gobierno, gener agentes consulares correspondientes.

f) *Extradición.*—Hay que tener en cuenta lo preceptu las leyes de Enjuiciamiento civil y criminal sobre el miento de extradición y los tratados acerca de ella qu dremos en el Apéndice respectivo.

g) *Procedimiento.*—Como regla general en este punt asentarse la de que los Tribunales de un país podrán ap leyes de éste en cuanto al procedimiento, pero en lo conc al derecho sustantivo, esto es, en lo que afecte á la pers

CÓDIGO CIVIL

nino el Tribunal proseguirá en el conocimiento que no haya comparecido el citado.

58. Denegándose el cumplimiento, se devolvirá lo que la haya presentado.

Denegándose, se comunicará el auto por certificación, para que ésta dé la orden correspondiente en la instancia del partido en que esté domiciliado el demandado, para que la sentencia ó el auto que deba ejecutarse, á fin de cumplirlo en ella mandado, empleando los medios que se hubieren indicado en la sección anterior.»

El párrafo último del artículo obedece al principio de cada Nación. Ésta debe respetar la ley propia, pero en tanto que no menoscabe el poder de la otra para aplicarse dicha ley. De aquí que carezcan de efecto y no produzcan efecto alguno la ley ó sentencia extranjera y las convenciones acordadas en ella, si son contrarias, ó las que tengan por objeto el orden de las costumbres. Éstas afectan al interés público y si puede admitirse la autoridad extraterritorial de las leyes extranjeras en lo que pertenece á la utilidad pública (*utilitatem pertinent*), no debe considerarse abrogada dicha autoridad en lo que *ad statum rei publicae* se refiere. El párrafo común á los artículos 9.º, 10.º y 11.º distingue entre el *general*, por decirlo así, y el *particular*. El *general* es el contenido en los artículos 9.º, 10.º y 11.º, y las sentencias del Tribunal Supremo que se refieren al estado. Conforme al mismo, todo cuanto se refiere al estado ó condición y capacidad legal de la persona, como el matrimonio, paternidad, patria potestad, filiación, mayoría de edad, facultad de contratar y acción activa y pasiva, tanto en el orden de las obligaciones (como en el de las acciones), está sujeto á la ley de la persona de que se trate. (*Estatuto personal*). Los bienes muebles se regulan por el derecho de la persona que los posee (*Estatuto personal*), salvo lo que dispongan las leyes en que se hallen los muebles.

Los bienes inmuebles se rigen por la ley de la Nación en que se hallen. (*Estatuto real*.)

En tal concepto, son inaplicables al caso las leyes 1.^a y 13, título XIII, Partida 6.^a; la 1.^a, tít. II, libro X de la Novísima Recopilación; el art. 11 de la Constitución del Estado y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre aplicación é inteligencia del estatuto personal. (*Idem*).

Sentencia de 20 de Mayo de 1889.—«La cláusula del contrato del arrendamiento de un casino, en que se apoya la excepción de incompetencia, y por la cual se comprometieron las partes á someterse á la decisión soberana ó sin recurso alguno que los árbitros dictasen respecto de las diferencias que pudieran surgir entre ellas (las partes), no puede cumplirse en España por ser contrario en el fondo y en la forma á lo preceptuado por nuestras leyes.»

El Derecho *especial* está consignado, como hemos dicho, en los *tratados* con los principales países que exponemos á continuación:

Alemania.—*Convenio de 12 de Enero de 1872 extendiendo al Imperio alemán el de 22 de Febrero de 1870 celebrado con la Confederación de Alemania del Norte.*—Art. 10 (del de 1870). Los Cónsules generales, Cónsules y Vicecónsules ó Agentes consulares de los dos países ó sus Cancilleres, podrán, siempre que las leyes de su país les faculten para ello:

1.º Recibir en sus Cancillerías, en el domicilio de las partes y á bordo de los buques de su país, las declaraciones que hayan de prestar los Capitanes, tripulantes y pasajeros, negociantes y cualesquiera otros súbditos de su país.

2.º Autorizar como Notarios las disposiciones testamentarias de sus nacionales y todos los demás actos propios de la jurisdicción voluntaria, aun cuando estos actos tengan por objeto la constitución de hipotecas sobre bienes situados en el territorio de la Nación á que pertenezca el Cónsul ó Agente consular.

3.º Autorizar en sus Cancillerías todos los contratos que envuelvan obligaciones personales entre uno ó más de sus compatriotas y otras personas del país en que residan, como también todos aquellos que, aun siendo de interés exclusivo para los súbditos del país en que se celebren, se refieran á bienes situados ó á negocios que deban tratarse en cualquier punto de la Nación á que pertenezca el Cónsul ó Vicecónsul ante el cual se formalicen dichos actos. Los testimonios ó certificaciones de estos actos debidamente legalizados por dichos Agentes y sellados con el sello

Vicecónsul á la Autoridad local invitándola á asistir al levantamiento de los dobles sellos, no compareciese ésta dentro de un término de cuarenta y ocho horas después de recibido el aviso, el expresado agente podrá proceder por sí solo á dicha operación.

2.^a Formar el inventario de todos los bienes y efectos del difunto en presencia de la autoridad local, si hubiere concurrido al acto, en virtud de la indicada notificación.

La autoridad local autorizará con su firma las actuaciones que presencie, sin que por su intervención de oficio en ellas se causen costas de ninguna especie.

3.^a Disponer la venta en pública subasta de todos los efectos muebles de la testamentaría que pudiesen deteriorarse y de los que sean de difícil conservación, así como de los frutos y efectos para cuya enajenación se presenten circunstancias favorables.

4.^a Constituir en depósito seguro los efectos y valores inventariados, el importe de los créditos que se realicen y de los rendimientos que se recauden, bien sea en la casa consular ó bien en la de algún comerciante de la confianza del Cónsul ó Vicecónsul.

En ambos casos deberá procederse de acuerdo con la autoridad local que haya intervenido en las operaciones anteriores, si después de la convocatoria á que se refiere el párrafo siguiente se presentaren súbditos del país ó de una tercera potencia como interesados en el abintestato ó testamentaría.

5.^a Convocar por medio de los periódicos de la localidad y del país del finado, si necesario fuese, á los acreedores que pudiera haber contra el abintestato ó testamentaría, á fin de que hagan valer sus respectivos créditos, debidamente justificados, dentro del término legal en cada país.

Si se presentaren acreedores contra la testamentaría ó abintestato, deberá hacerse el pago de sus créditos á los quince días de terminado el inventario si resultase haber numerario en cantidad suficiente para ello, y en caso contrario tan luego como puedan realizarse fondos por los medios más convenientes, ó bien dentro del plazo que se determine por común acuerdo entre el Cónsul y la mayoría de los interesados.

Si el Cónsul respectivo denegase el pago de todo ó parte de los créditos, alegando la insuficiencia de los bienes de la testa-

timos ó á sus apoderados, después de espirado un plazo de seis meses, á contar del día en que el aviso del fallecimiento se hubiere publicado en los periódicos.

Y 8.º Organizar, si ha lugar á ello, la tutela ó curatela con arreglo á las leyes de su país.

Art. 12. Si muriese un español en Alemania ó un alemán en España en algún punto donde no haya Agente consular de su Nación, la autoridad territorial competente procederá, con arreglo á la legislación del país, al inventario de los efectos y á la liquidación de los bienes que dejare, debiendo dar cuenta en el plazo más breve posible del resultado de sus operaciones á la Embajada ó Legación correspondiente, ó al Consulado ó Viceconsulado más próximo al lugar en que se haya incoado el abintestato ó testamentaria. Pero desde el momento en que se presente por sí, ó por medio de algún delegado, el Agente consular más inmediato al punto donde radique dicho abintestato ó testamentaria, la intervención de la autoridad local habrá de ajustarse á lo prescrito en el art. 11 de este convenio.

Art. 13. Los Cónsules generales, Cónsules y Vicecónsules ó Agentes consulares de ambas Naciones conocerán exclusivamente de los autos de inventario y de las demás diligencias preventivas para la conservación de los bienes hereditarios dejados por la gente de mar y pasajeros de su país que fallecieren en tierra ó á bordo de los buques del mismo durante el viaje, ó en el puerto donde arribaren.

Tratado de comercio y navegación de 8 de Agosto de 1883. (Gacetas 12 y 13 id.)(1).—Art. 3.º Los súbditos de cada una de las altas partes contratantes tendrán en el territorio de la otra el mismo derecho que los nacionales para adquirir y poseer toda clase de bienes, muebles ó raíces, y para disponer de ellos por venta, donación, última voluntad ó de otra manera, así como para heredar en virtud de la última voluntad ó de la ley.

Podrán acudir libremente á los Tribunales para la persecución y defensa de todos los derechos y exenciones de los nacionales, y como éstos, tendrán la facultad de valerse en todo litigio

(1) Denunciado. Prorrogado hasta 30 de Junio de 1892 por convenio de 30 de Enero del mismo año.

.RT.

de l

lgie

; si

poi

in

que

nto

de

r, j

rec.

acti

nist

sell

ión,

one

se s

Tril

cesi

3. (C

s al

rito

de

.ción

la o

itir

el pa

eros

. Si

is p

seg

ín q

er n

omo

02 I

los mismos derechos (excepto los políticos) que los naturales ó nacionalizados, con la condición, no obstante, de estar sometidos para ello á las leyes del país de su residencia.

Tendrán, por lo tanto, libre y fácil acceso cerca de los Tribunales de justicia, tanto para demandar como para defender sus derechos en todos los grados de jurisdicción establecidos por las leyes. Podrán asimismo emplear en todas las instancias los Abogados, Procuradores y Agentes de todas clases que juzguen á propósito, y gozarán, por último, bajo este concepto, de los mismos derechos y ventajas que estén ya concedidos ó que se concedan á los nacionales.

Art. 5.º Los naturales ó nacionalizados de ambos sexos podrán disponer según su voluntad, por donación, venta, permuta, testamento ó de cualquier otro modo, de todos los bienes que posean en los territorios respectivos. Asimismo los naturales ó nacionalizados de los dos países que fueren hábiles para heredar los bienes situados en el otro, podrán entrar en posesión sin impedimento alguno de aquellos de dichos bienes que les corresponda de derecho aun *abintestato*, y dichos herederos ó legatarios no tendrán que pagar diferentes ni mayores impuestos por la sucesión de los que pesen sobre los nacionales del país en que los bienes radiquen.

Tratado de pobreza para litigar de 14 de Mayo de 1884. (Gaceta 21 Enero 1886.)— Art. 1.º Los españoles en Francia y los franceses en España gozarán recíprocamente del beneficio de la defensa por pobre para litigar (*assistance judiciaire*) como los nacionales mismos, conformándose con la ley del país donde se reclame.

Art. 2.º En todos los casos, el certificado de indigencia deberá concederse al extranjero que solicite la defensa (*assistance*) por las autoridades de su residencia habitual.

Si no reside en el país en que se hace la petición, el certificado de indigencia será aprobado y legalizado por el Agente diplomático del país donde deba exhibirse.

Cuando el extranjero resida en el país en que la petición se formule, podrán tomarse informes cerca de las autoridades del Estado á que pertenezca.

Art. 3.º Los españoles admitidos en Francia y los franceses admitidos en España al beneficio de la defensa por pobre para li-



—

—

aises Bajos.—*Convenio consular de 10 de Febrero de 1873.* (*Gaceta de Madrid* id.)—Art. 15. Idéntico al de igual número celebrado con Bélgica. (*Véase éste.*)

Portugal.—*Convenio consular de 21 de Febrero de 1870.* (*C. L.*, t. CVI, pág. 709.)—Art. 5.º Los súbditos de los dos Estados podrán disponer como les convenga, por donación, venta, permuta, testamento ó de cualquiera otra manera que sea, de todos los bienes que posean en los territorios respectivos, y sacar íntegramente sus capitales del país.

Asimismo los súbditos de uno de los dos Estados que sean propietarios de bienes situados en el otro podrán suceder sin impedimento en aquellos de dichos bienes que les correspondan, aun en testamento; y los indicados herederos ó legatarios no tendrán que pagar otros ni más elevados derechos de sucesión que los que paguen en casos semejantes los mismos nacionales.

.. 18. Igual al 19 del convenio de Francia de 1862. (*Véase*

.. 19. Idem al 20 de id. id.

.. 20. Idem al 21 de id. id.

.. 21. Idem al 22 de id. id.

Rusia.—*Convenio consular de 11/23 de Febrero de 1876.* (*C. L.*, t. CXVII, pág. 889.)—Art. 9.º Los Cónsules generales y Cónsules, así como los Vicecónsules y Agentes consulares de los dos Estados tendrán el derecho de recibir en sus Cancillerías, en el domicilio de las partes y á bordo de los buques de su Nación, las declaraciones que hayan de prestar los Capitanes, tripulantes y pasajeros, negociantes y cualesquiera otros súbditos del país. Estarán, además, autorizados á recibir, como Notarios, según las leyes de su país:

Las disposiciones testamentarias y todos los demás actos jurídicos concernientes á sus Naciones, incluso los contratos de cualquier clase. Pero si estos contratos tienen por objeto la constitución de una hipoteca ó cualquier otra transacción sobre bienes situados en el país en que el Cónsul reside, deberán celebrarse en la forma prescrita y según las disposiciones legales de las leyes de este mismo país.

Todos los contratos estipulados entre uno ó varios de sus súbditos y otras personas del país en que residan, con tal de que estos actos se refieran exclusivamente á bienes situados ó á

facultad de fijar desde luego los sellos sin el consular y viceversa, salvo la necesidad de tener que Autoridad que no haya intervenido en el acto, el derecho de cruzar su sello con el que ya esté colocado.

El Cónsul general, Cónsul ó Vicecónsul tendrá proceder á esta operación personalmente ó por un legado que elija al efecto. En el último caso, el legado estará provisto de un documento expedido por la Autoridad consular, revestido del sello del Consulado, y en el que constará su carácter oficial.

Los sellos que hayan sido puestos no podrán levantarse en presencia de la autoridad local, y de la autoridad consular Delegado.

Se procederá de la misma manera á la formación del inventario de todos los bienes muebles ó inmuebles, e inmuebles, e del difunto.

Sin embargo, si después de un aviso dirigido local á la autoridad consular ó viceversa, invitándola al acto de levantar los sellos simples ó dobles, y del inventario, la autoridad á la que ha sido dirigida la invitación no se hubiese presentado en el plazo de ochenta horas, á contar desde el recibo del aviso, la otra autoridad procederá por sí á realizar las mencionadas operaciones.

Art. 3.º Las autoridades competentes harán lo que se prescriba por la legislación del país, relativamente al juicio de sucesión y á conocer los herederos ó albaceas, y á las publicaciones que podrán hacerse por la autoridad consular.

Art. 4.º Cuando se haya hecho el inventario con arreglo á las disposiciones del art. 2.º, la autoridad consular comunicará á la autoridad consular, en virtud de petición por escrito y con arreglo al inventario, todos los efectos de que se componga la herencia, los títulos, valores y papeles, así como el testamento si existe.

La autoridad consular podrá hacer vender en pública subasta todos los efectos muebles de la herencia que puedan ser vendidos y todos aquellos cuya conservación pudiera causar perjuicio á los herederos. Deberá, sin embargo, dirigirse al Jefe local con objeto de que la venta se haga en la forma que el Jefe local considere más conveniente.

efectos ó valores pertenecientes á ésta deberán, en virtud de petición de los acreedores, ser entregados á la Autoridad local competente, quedando la Autoridad consular encargada de representar los intereses de sus nacionales.

Art. 8.º A la conclusión del plazo fijado por el art. 5.º, si no existe ninguna reclamación, la autoridad consular, después de haber satisfecho con arreglo á las tarifas en vigor en el país todos los gastos y cuentas con cargo á la herencia, entrará definitivamente en posesión de la parte mueble de dicha herencia, que liquidará y transmitirá á quien corresponda, sin tener que rendir cuenta alguna más que á su Gobierno.

Art. 9.º En todas las cuestiones á que pueda dar lugar la apertura, administración y liquidación de las herencias de los nacionales de uno de los dos países en el otro, los Cónsules generales, Cónsules y Vicecónsules respectivos representarán con pleno derecho á los herederos, y serán oficialmente reconocidos como apoderados, sin que estén obligados á justificar su encargo por ningún título especial.

Podrán, por consiguiente, presentarse personalmente ó por delegados, escogidos entre las personas autorizadas para ello por la legislación del país, ante las autoridades competentes para tomar parte en todo asunto relativo á la testamentaria, la defensa de los intereses de los herederos, sostener sus derechos ó responder á las peticiones formuladas contra ellos.

Bien entendido, sin embargo, que los Cónsules generales, Cónsules y Vicecónsules, siendo considerados como apoderados de sus nacionales, no podrán nunca ser personalmente responsables por ningún asunto que se relacione con la testamentaria.

Art. 10. La herencia de los bienes inmuebles se regirá por las leyes del país en el que los inmuebles estén situados, y el conocimiento de toda reclamación ó duda concerniente á la parte inmueble pertenecerá exclusivamente á los Tribunales de dicho país.

Las cuestiones suscitadas sobre partición de bienes inmuebles, así como los derechos de sucesión de los efectos muebles, dejados en uno de los dos países por súbditos del otro, serán juzgados por los Tribunales ó autoridades competentes del Estado al que pertenecía el difunto y en conformidad con las leyes de este Estado, á menos que un súbdito del país en el que la tes-

neros ó pasajeros de uno de los dos países, muertos á bordo de un buque ó en tierra, serán entregados al Cónsul de su Nación.

Tratado de comercio y navegación de 2 de Julio de 1887. (Le de 12 de Mayo de 1888, Gacetas 19 y 20 de Junio id.)—Art. 2. Los súbditos de ambas Naciones tendrán la facultad de hacer de administrar ellos mismos sus negocios, ó hacerse representar por personas debidamente autorizadas, así en la compra como en la venta de sus bienes, efectos ó mercancías.

Art. 3.º Los españoles en Rusia y los rusos en España tendrán recíprocamente libre acceso á los Tribunales de justicia conformándose á las leyes del país, tanto para reclamar como para defender sus derechos, en todos los grados de jurisdicción establecidos por las leyes. Podrán emplear en todas las instancias Abogados, Procuradores y Agentes de todas clases autorizados por las leyes del país, y gozarán á este respecto de los mismos derechos y ventajas que se concedan ó puedan concederse los nacionales.

Art. 4.º Los españoles en Rusia y los rusos en España tendrán plena libertad, observando las reglas y formalidades en vigor, de adquirir, poseer, alquilar y enajenar toda suerte de propiedades en los territorios y posesiones respectivas en tanto e cuanto lo permitan ó puedan permitirlo en adelante á los súbditos de toda Nación extranjera.

Podrán adquirirlas y disponer de las mismas por venta, donación, cambio, matrimonio, testamento ó de cualquiera otra manera que sea, y retirar íntegramente sus capitales del país e las mismas condiciones establecidas ó que se establezcan con respecto á los súbditos de toda otra Nación extranjera, sin estar sujetos á tasas, impuestos ó cargas, cualquiera que sea su denominación, distintas ó más elevadas que las establecidas ó que puedan establecerse para los nacionales.

Suecia y Noruega.—Tratado de comercio y navegación de 15 de Marzo de 1883. (Gaceta 8 Julio id.)—Art. 2.º Los naturales ó naturalizados de los Estados contratantes podrán disponer, según su voluntad, por donación, venta, permuta, testamento ó cualquier otro modo, de todos los bienes que posean en los territorios respectivos.

Asimismo los que tuvieran capacidad para heredar los bienes situados en el otro podrán entrar en posesión de los que le

Perú.—Tratado de paz y amistad de 14 de Igual al del Paraguay.

República Argentina.—Tratado de amistad de 21 de Septiembre de 1863. (C. L., t. XCI, pág. 861.)—Igual al de Bolivia.

San Salvador.—Tratado de 24 de Junio de 1865. (C. L., t. XCV, página 666.)—Igual al de Bolivia.

*Uruguay.—Tratado de paz y amistad de 19 de Julio de 1870, ratificado en 9 de Octubre de 1882. (Gaceta 28 Enero 1883.)—Art. 3.º S. A. el Regente del Reino de España y S. E. el Presidente de la República Oriental del Uruguay convienen en que los súbditos y ciudadanos respectivos de ambas Naciones conserven expeditos y libres sus derechos para reclamar y obtener justicia y plena satisfacción por las deudas *bona fide* contraídas entre sí, como también en que no se les ponga por parte de la autoridad pública ningún obstáculo en los derechos que puedan alegar por razón de matrimonio, herencia, testamento ó *abintestato* ó cualquiera otro de los títulos de adquisición recomendados por las leyes del país en que haya lugar á la reclamación.*

Tendrán, en su consecuencia, libre y fácil acceso á los Tribunales de justicia para reclamar y defender sus derechos en todos los grados de jurisdicción establecidos por las leyes.

*Art. 8.º Los súbditos españoles en la República Oriental del Uruguay y los ciudadanos de la República en España podrán poseer, comprar y vender por mayor y menor toda clase de bienes y propiedades muebles é inmuebles, disponer de ellos en vida ó por muerte, y suceder en los mismos por muerte ó *abintestato*, todo con arreglo á las leyes del país, en los mismos términos y bajo iguales condiciones que usan ó usaren los de la Nación más favorecida.*

Art. 11. Los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules y Agentes consulares podrán autorizar como Notarios las disposiciones testamentarias de los súbditos respectivos de su Nación y todos los demás actos de la jurisdicción voluntaria, aun cuando éstos tengan por objeto la constitución de hipotecas, formación de inventario en la muerte intestada de sus nacionales, custodia de la herencia, su liquidación y aplicación de sellos, con asistencia de la autoridad local, si otros Agentes consulares hubiesen obtenido iguales facultades...

Venezuela.—Tratado de paz y amistad de 30 de Marzo de 1845.—Análogo al de Bolivia.

á la existencia de una sola ley civil fundamental para toda España, y los que quieren sigan vigentes las legislaciones especiales de las diversas provincias forales.

Se apoyan los primeros en las ventajas de la unificación, en el hecho de que existiendo ésta en lo penal, en el procedimiento y en otras leyes, no hay razón científica que aconseje lo contrario, y en el precepto constitucional de que unos mismos Códigos regirán en toda la Nación. Sostienen los segundos la necesidad, ó por lo menos la conveniencia, de conservar las legislaciones forales, amparadas por respetable tradición, reguladoras de un derecho especial de la familia, propiedad y sucesiones, y cuyo cambio produciría una alteración profunda en la vida jurídica particular de las provincias que aún las mantienen. El Código, como hemos dicho antes, obedeciendo á estas últimas consideraciones y acaso á otras de índole política, adopta un término neutro, por decirlo así, análogo al que ya existía, de respeto hacia las legislaciones regionales.

Declara obligatorios para todas las provincias del Reino los efectos generales de las leyes y de los estatutos, las reglas generales para su aplicación y las disposiciones del tít. IV, lib. I (matrimonio). En lo restante, las provincias y territorios en que subsiste legislación particular, la conservarán por ahora en toda su integridad, rigiendo en las mismas el presente Código sólo como supletorio y en defecto del que lo sea en cada una de ellas, esto es, supletorio del supletorio. Con arreglo, pues, al primer párrafo del artículo, podemos señalar un orden de prelación del Derecho vigente en dichas provincias, en la forma siguiente:

1.º Título preliminar del Código y tít. IV del lib. I como derecho principal, no como supletorio. 2.º Su derecho especial en cuanto á las demás materias. 3.º El Código.

Analizaremos cada uno de los términos de la prelación marcada, comenzando por el primero, sobre el cual ocurre preguntar: ¿es cierto que de todas las disposiciones del Código solamente han de regir como Derecho primordial en las provincias forales, es decir, con preferencia al suyo, las que expresa el pár. 1.º del artículo 12? No. A más de las que en él se indican, hay otras que tendrán tal carácter, entre las que se encuentran las siguientes: el tít. I del lib. I (españoles y extanjeros); el tít. II del mismo libro (nacimiento y extinción de la personalidad civil), en parte

CÓDIGO

CA'

a

Orden de prelación.

título preliminar; lib. I, tit. I; libro id., títulos 0 y 32, al menos, y todo el cap. II relativas jurídicas, y tit III.—2.º Su derecho, ó sea leyes y capítulos de corte, costumbres generales (*Recognoverum proceres y Sanctacilia*), pragmáticas y Bulas apostólicas, sentencias arbitrarias y derecho supletorio, canónico y romano.—

legislación foral especial contenida en las leyes generales escritas de la insigne ciudad de Barcelona su Derecho supletorio las Constituciones forales.

b

Jurisprudencia.

Abril de 1858.—En Cataluña rigen las disposiciones en materia civil.

Junio de 1862.—En las cuestiones que pertenecen á las Constituciones especiales de Cataluña, no como infringidas las leyes del Derecho romano, pues éstas sólo tienen el carácter de supletorio, por tanto, ser admitidas como fundadas ó falta de aquéllas.

Y el de las Partidas, y aun antes que éstos, el fuero en Cataluña en defecto de Usatges, Consuetudines, que es lo que constituye la legislación especial; por lo tanto, no pueden reputarse aquéllas como sentencias, cuando se ha aplicado en ellas. (*Idem.*)

1.º Diciembre de 1862.—El Derecho romano, anterior á la ley de la Novísima Recopilación, no tiene fuerza en Cataluña á falta de las Constituciones que constituyen su fuero municipal vigente.

1.º Diciembre de 1862.—En las provincias del

pítulos de Corte y otros derechos de aquel territorio, el canónico y el civil romano, por su orden, en los casos no es, y, finalmente, las doctrinas de los Doctores, y con arreglo á ellas se han dado uniformes y repetidos casos por aquellos siglos, como se establece en la ley única, tít. XXX, libro de las Constituciones; en el cap. XLII de la ley 1.^a, tít. IX, de la Novísima Recopilación, que las reconoció y mandó observar, y varias sentencias del Tribunal Supremo.

Resolución de 23 de Junio de 1884.—El *Derecho romano* rige en Cataluña solamente como legislación supletoria y á falta de observancia de costumbre especial catalana.

Resolución de 29 de Marzo de 1887.—La infracción del decreto de planta, ley 1.^a, tít. III, lib. V de la Novísima Recopilación, que establece que en lo que en el mismo no esté prevenido observen las antiguas Constituciones de Cataluña, sujeta á alguna ley de precisa observancia con arreglo á este decreto; y la cita y aplicación de leyes de Partida en aquel territorio en defecto de la ley local y como doctrina, no es impropia ni infringe la mencionada disposición.

Resolución de 27 de Diciembre de 1888.—Tratándose de un contrato mercantil celebrado en Cataluña, no son aplicables las leyes 3.^a, 11 y 12 del Digesto, *De compensationibus*, porque el *Derecho de Comercio*, tanto el antiguo como el moderno, es ley para toda la Monarquía, y esas leyes romanas, aunque como supletorias en Cataluña, no constituyen el *Derecho* á cuyas reglas generales están sujetos los contratos ordinarios del comercio.

Resolución de 18 de Febrero de 1891 (1).—La ley de Enjuiciamiento civil somete al Juez el nombramiento de curadores ejemplares marcando el orden de los llamamientos, y aun dándole facultades para nombrar á la persona que estimase á propósito para las llamadas por la ley no fuesen aptas para desempeñar la curaduría.

Imperándose á estas consideraciones, un testador en su testamento no nombró desde luego curador ejemplar para su hijo instituido, sino que se limitó á expresar encarecidamente su deseo de que lo fuesen las personas que designó, rogando que

Se trataba del nombramiento de tutor en Cataluña.



advertencia de que, cuando mejorasen las libras no entraría en el reparto, sino que razón á haber ésta aportado la dicha suma efectos:

Resultando que Teresa Monné y Pablo matrimonio en 9 de Enero de 1811; Colon Roselló é hija de padres desconocidos, falleció de 1849, y en 24 de Julio de 1886 murió Pablo

Resultando que Teresa Monné y Grinó otorgado en 6 de Mayo de 1887, en heredera universal á Teresa Badía y á acogerse á las ventajas de que goza quie á beneficio de inventario, elevó á escrituras relictas por la testadora, autorizando los Monfar y Cantons á 10 de Diciembre de

Resultando que en ese documento se inscriben bienes, los siguientes: una casa cuyo título noraba, por lo que ofreció la otorgante en legal forma; una pieza de tierra plantada en el dijo constaba inscrita á favor de la cautura de 29 de Abril de 1840, razonada en folios 19 y 20 del cuaderno correspondiente blanch; siete fincas señaladas en el inventario 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 12, respecto de las escrituras que sólo se inventaría la mitad en ellas, y que todas fueron adquiridas por Monné por títulos onerosos y durante su vida Roselló, que concurrió con aquélla a la que llevan los números 6 y 8, de que se acreditan adquiridas solamente por Pablo Roselló y pertenecía la mitad indivisa de ambos Grinó, en virtud del pacto de compras y en la escritura de capítulos matrimoniales de 1840, y la mitad de tres créditos hipotecarios (13, 14 y 16), adquiridos durante matrimonio Rius:

Resultando que presentada la referida escritura de la Propiedad de Montblanch, fué sujeta á la casa por no estar inscrita á favor de la

por la Dirección en 15 de Septiembre de 1863, que es motivo de suspensión de una escritura el no citarse en ella la inscripción del título de dominio del inmueble ó derecho que se trasfiera, y como esa resolución tuvo por objeto facilitar la marcha de los Registros, y también pone á ésta obstáculos, la cita equivocada del lugar en que consta la inscripción del inmueble ó derecho que se trasmite, la suspensión que se combate es procedente y legal; que, según el Código civil, sólo el remanente del caudal, deducidas cargas, deudas, dote, parafernales, etc., constituye el haber de la sociedad de gananciales, y es partible por mitad entre el cónyuge supérstite y los herederos del premuerto, y como quiera que la sociedad conyugal entre Pablo Roselló y Teresa Monné se extinguió en 24 de Julio de 1886, claro es que entonces desapareció la personalidad á cuyo favor debían considerarse inscritos los bienes en cuestión (Resolución de 8 de Noviembre de 1882), y por ende no cabe que uno de los socios intente inscribir á su favor bienes de aquella sociedad, sin liquidar previamente los que le pertenecen; que no abona las pretensiones del recurrente la Resolución de 8 de Enero de 1878, pues el caso que la motivó era distinto del actual, y aun cuando así no fuera, por más que merece respeto, no forma jurisprudencia, y menos si pudiera estimarse que se halla en pugna con el derecho constituido; que de todo lo expuesto se infiere que ni aun de la mitad de las fincas adquiridas durante el matrimonio puede disponer el viudo, porque su dominio no es definitivo hasta después de la liquidación de la sociedad y la adjudicación consiguiente (Sentencia de 22 de Octubre de 1857); que aunque así no fuera, tampoco prosperaría la reclamación del recurrente, porque los créditos hipotecarios se incluyen en la escritura por mitad, pero sin proindivisión, porque se ignora la participación que en 24 de Julio de 1886 correspondía en los bienes en cuestión á Teresa Monné, dado que, siendo aquélla mayor ó menor, llegando á la mitad ó quedando en el tercio, según viviera ó no Coloma Roselló, era preciso acreditar el fallecimiento de ésta, para lo que es insuficiente la fe de óbito que se acompaña, y en que no constan los apellidos de la persona difunta á que se contrae, y porque al disolverse la sociedad conyugal no se inscribieron los bienes á favor de Teresa Monné, y sin tal inscripción no pueden aquéllos registrarse á nombre de su sucesora (Resolución de 24 de Abril de 1879); que el

munidad conyugal; que el fallecimiento de Coloma acreditado en legal forma, puesto que en la parte el recurrente presenta para justificarlo sólo se c Noviembr de 1849 falleció Coloma, viuda de Martafulla, hija de N. N.; que de los títulos de adquisición número 8 del inventario aparece que fué adquiri selló, mediante permuta, por lo que la Teresa Monniente Teresa Badía, á virtud del pacto de cotan sólo tendrían sobre la expresada finca la mi aumento ó mejora que se justificara tener la ref la permutada; y que adquirida la finca 11 ant tanto, viviendo Coloma Rius, es notorio que sól Teresa Monné en ella una tercera parte y no la consigna en la escritura de inventario:

Resultando que contra ese auto apelaron D. Registrador de la propiedad, manifestando el pfecto consignado por el Registrador en su info partida de defunción de Coloma Rius, no de cuenta en este recurso por no figurar estampada rrida; que esto aparte, tal defecto no existe, por partida se denomina por su nombre á Coloma que era viuda de Martín Roselló, lo cual basta á aunque tampoco es de apreciar si la finca citada merece resolución aparte por haber sido adquiri selló mediante permuta, ya que no se hace m cunstancia ni en la nota ni en el dictamen del viene tener presente que, por haber sido la ad oneroso, hay que reputar comprendida dicha fin conyugal mientras no se pruebe que la que sirv era de la propiedad exclusiva de Pablo Roselló, cación padecida al reseñar el título de adquisici ventariada al número 11 no es motivo bastante la inscripción, por constar del mismo Registro e nio de aquélla según tiene resuelto la Direcció y 25 de Junio de 1863, 30 de Octubre de 1872, 15 y 6 del mismo mes de 1884, é indicando el Reg campo de Tarragona no corresponden por cost á la comunidad conyugal y es por ende impertin título 130 del Reglamento dictado para la ejecu

nos ocupa la sociedad de ga-
que debía regirse durante su
s aplicables son las del Có-
t. 130 del Reglamento no es
necesidad de practicar una
lear una inscripción previa á
a á lo que estatuye el art. 20
ión de este Centro de 24 de
esa misma liquidación, cuya
preciso el pago del impuesto,
persigue no será nunca pro

la Audiencia revocó el auto
declaró inscribibles en el Re-
dos en el inventario con los
ó la suspensión en cuanto la
derar que en un recurso gu-
judicial, la sentencia debe
s oportunamente deducidas
s defectos que hay que tener
son los consignados por el
e inventario; que según la
863, es motivo bastante para
ritura la falta del título de
se transfiera, de donde se
dolece de un defecto subsa-
n el undécimo lugar, por no
l tomo que se cita en el do-
apítulos matrimoniales otor-
fonné se constituyó la socie-
los efectos del Registro por
rio, según el que debieron
á dicha sociedad como pro-
cas y créditos inventariados
yugal, y adquiridos después
idad de ellos, correspondía á
lo á lo pactado en la escri-
s bienes mencionados proce-
quidar previamente la socie-

dad ni pagar el impuesto de Derechos reales, por lo cual no puede prosperar la negativa del Registrador:

Vistos el art. 12 del Código civil, las resoluciones de 1.º de Julio de 1887 y 21 de Febrero de 1889:

Considerando que la asociación en las compras y mejoras que es costumbre pactar en las capitulaciones matrimoniales en el campo de Tarragona, es estimada por todos los tratadistas de Derecho catalán como una verdadera sociedad legal, que si bien se extiende á personas que no son los cónyuges (lo cual la diferencia de los gananciales de Castilla), en cambio comprende tan sólo aquellos bienes que provienen del trabajo, cuidado ó industria de uno de los consortes, exige que para fijar los aumentos se hagan en consideración las desmejoras y pérdidas ocurridas, y mantiene radical separación entre el patrimonio común y el propio y privativo de cada cónyuge, caracteres todos peculiares del sistema de gananciales de la legislación común:

Considerando que esto sentado, no es de extrañar que, salvo muy contadas excepciones, los principios que rigen sobre esta asociación sean consuetudinariamente los propios de la sociedad de gananciales:

Considerando que por esta razón, y además por la que después del art. 12 del Código civil son los preceptos de éste el derecho supletorio en defecto del que con tal carácter rija en las provincias en que subsiste derecho foral, es perfectamente legal aplicar en el territorio generalmente llamado campo de Tarragona los artículos del Código, reguladores de la sociedad de gananciales:

Considerando que si la asociación de compras y mejoras de que se trata constituye dentro de la legislación general del Principado una excepción á favor de la que penetra en el campo de Tarragona el derecho común, claro es que la liquidación del caudal, obligada consecuencia de la disolución de la sociedad legal, impónese por igual en el citado campo que en territorio de Castilla:

Considerando que se infiere de todo lo expuesto que la doctrina sentada por esta Dirección en su Resolución de 21 de Febrero de 1889, es perfectamente aplicable al caso del recurso, y á su tenor,uelto el matrimonio, la liquidación del caudal y las adjudicaciones consiguientes son las únicas operaciones que definen y precisan los derechos ulteriores del cónyuge supérstite so-

de un pleito de Navarra leyes de Castilla, no se infringe la ley 1.ª título III, lib. X de la Novísima Recopilación de Navarra y jurisprudencia del Tribunal Supremo en que se establece que falta de disposiciones del Derecho foral se acuda al común ó mano para la decisión de las causas civiles en aquel territorio.

Sentencia de 10 de Noviembre de 1884 — Por no ser las leyes Partida supletorias de la legislación foral de Navarra, no es aplicable al litigio sobre revocación de donación la ley 8.ª, tít. I Partida 5.ª, y si bien se han aplicado en casos decididos en Tribunales de Navarra, cuando no debían resolverse por la legislación foral, este hecho que se invoca como doctrina en uno de fundamentos, no ha sido contrariado por la sentencia recurrida.

Sentencia de 16 de Febrero de 1887. — Tratándose del caso de ganizar la curatela de una señora que es navarra, cuyos bienes según consigna la Sala sentenciadora, radican en su mayor parte en aquella provincia, y que se ha opuesto, en uso de su derecho discernimiento del cargo de curador á favor de la persona nombrada por el testador, que era también navarro, no puede tenerse en cuenta el estatuto personal; por cuya razón, la sentencia infringe la doctrina de que las cuestiones que se relacionan con la capacidad se rigen por el estatuto personal, y aplica recientemente la ley 4.ª, tít. XXIV del Código: *qui dare tutores vel curatores possunt et qui dare nom possunt*.

Cualesquiera que sean las disposiciones de las leyes de Partidas acerca de la materia de que se trata, son inaplicables al caso actual, porque en Navarra rige como supletorio el Derecho romano, y éste decide claramente el punto litigioso en el sentido de prohibir que los militares desempeñen el cargo de guardadores. (*Idem.*)

Sentencia de 1.º de Abril de 1891. — De acuerdo con lo prevenido en el art. 5.º de la ley de 11 de Mayo de 1888 estableciendo las bases para la redacción del Código civil, ordena éste en su artículo 12 que, con excepción de las disposiciones que expresa el párrafo primero, «las provincias y territorios en que subsiste el Derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su integridad, y que sufra alteración su actual régimen jurídico, escrito ó consuetudinario, por la publicación del Código, que regirá solamente como Derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada uno de aquéllas por sus leyes especiales.»

sucesión ha de considerarse intestada con relación á lo que dejase á su fallecimiento, y que, en virtud de contrarios, no hubieran sido objeto de pactos especiales a por la legislación foral de Navarra.

Si bien en la escritura de capítulos matrimoniales conforme al Derecho especial de aquel territorio, se c pactos que deben ser observados y cumplidos, su oha de limitarse á lo que en ellos dispusieron las pers hicieron la estipulación, siempre que conste claramente i tad. (*Idem.*)

En la referida escritura, los donantes, padres de la re declararon expresamente su voluntad de donar, como donaron á su hija con ocasión de su matrimonio, los bienes de su propiedad, que todos eran muebles, y los que pudieran corresponderles, con el pacto expreso de de los hijos del citado matrimonio hubiera de suceder e con facultad en los padres, ó en el que de ellos sobrevi nombrar sucesor en dichos bienes al que mejor les p cuya disposición, aun considerada como última y defi los padres de la recurrente, se limitaba á los bienes de nantes, y nada tenía que ver con la que pudiera hacer rido respecto á los suyos propios, que es de lo que aquí

El marido de la recurrente, cuya intervención en el de capítulos fué distinta de la que tuvieron en él los p su futura esposa al hacer la aportación de las 25 onzas c contrato expresa, y al establecer que hubiera de suceder el hijo que fuese heredero de los bienes donados, limit samente los efectos de esta estipulación á la cantidad i (*Idem.*)

Respecto á las conquistas que se hicieran durante e monio, se estipuló de común acuerdo y en cláusula sepa serían por mitad para la donataria y su esposo, sin hiciera extensiva á ella la disposición consignada re su aportación, como indudablemente lo hubiera verifca hubiese sido su voluntad; por donde se ve claramente daron excluidas de los pactos sucesorios antedichos. (*Id*

Desde el momento en que se reconoce y declara expre que el marido falleció *abintestato*, no puede estimarse q claración especial que hizo respecto á su aportación ses

PRELIMINAR

dero, no debiendo, por lo tanto, ser la escritura de pactos expresamente en ella dispuesto, sin que pudiera ilmente que fuese otra la voluntad con que aparece expresa supuesto de regir en Navarra Derecho romano sobre la univ de que esa doctrina sea conforman el actual estado de derecho los que rigen en aquel territorio no puede invocarse ni tener a)

al Registro se hace constar con las conquistas de bienes inmuebles y no habiéndose hecho sobre el declaración que la que queda m para cada cónyuge, sin otra el padre se reservó el dominio habiendo muerto sin testamento los abintestato sus herederos le determinadas por la legislación aplicables para cada caso. (*Idem.*)
ntos, la recurrente, si bien pue propios en la forma admitida para, y aun pudo hacerlo de los que aportación al matrimonio de para ello la autorizaban los pactos capitulos, no se halla en igual condiciones en el pacto sucesorio, con lo que se reservó expresamente fundada la calificación del Registro para disponer de ello. (*Idem.*)
en corresponda, la debida declaración que deben suceder en dicha materia correspondan respectivamente al patrimonio con su difunto esposo en forma á nombre de todos, con hipotecaria, no procede admitir (*Idem.*)

Sentencia de 31 de Marzo de 1892.— Subsistiendo en Navarra de la promulgación del Código civil, la legislación foral da su integridad, excepto en lo comprendido en los títulos III y IV del lib. I, según el texto de su art. 12, son inaplicables y no pueden ser infringidos por la sentencia recurrida los artículos de dicho Código, invocados en los motivos 1.º, 5.º, 6.º y 7.º, ó sea 675, 167, 168, 172, 206, 209, 231, 233, cuyo vigor no alcanza á Navarra como derecho supletorio, pues habiendo disposiciones locales sobre la materia, no se trata de un derecho supletorio, sino derogatorio, ni por tener un carácter público que le saca de la esfera del derecho civil, porque el referido artículo 12, al declarar terminantemente la aplicación de todo el contenido del Código, salvo lo que de modo taxativo consigna.

Facultando expresamente el testador á dos hijos suyos mayores de edad para nombrar tutor á sus sobrinos (nietos del testador), y no prohibiéndoles solicitar ni proponer curador *ad litem* á los mismos, cuando pueda ser necesario; es por lo tanto, inaplicable la absolución de la demanda contra el nombramiento hecho de tutor en sí mismo por uno de los hijos del testador facultado por éste, de acuerdo con su hermana y contra la propuesta de curador *ad litem*, á favor de un hermano del demandado y tío de los menores, no contrariando la letra ni la intención de los testadores, según se alega en uno de los motivos de la sentencia. (*Idem.*)

El padre que contrae segundas nupcias pierde la patria potestad, ó sea la tutela y la administración de las personas y bienes de las criaturas del primer matrimonio, por virtud del artículo 1.º, título X del libro III de la Novísima Recopilación de Navarra, á lo cual no se oponen la subsistencia de otras obligaciones que nacen de la paternidad, ni los preceptos de las leyes 2.ª de dicho título y 50 de las Cortes de Pamplona de 1765, que en el caso de que el padre llevase de hecho á un segundo matrimonio las personas y los bienes del primero, sin haber particionado con éstos la formal partición y entrega de sus bienes, corresponde la tercera parte de lo ganado en el segundo matrimonio, y, por consiguiente, está bien aplicada en la sentencia la ley 1.ª, título I, libro VIII de la Novísima Recopilación de Navarra, y no se infringen la 2.ª del mismo título ni la 50 de las Cortes de 1765-66. (*Idem.*)

mismas que se cita en el motivo 5.º, tuvo por collar el contenido de la ley 16, tít. XIII, li- ma Recopilación de Navarra, y la observancia de *Hacedictali Codicis de secundis nuptiis*, ó sea vas y limitar la libre disposición de los bienes en segundo matrimonio, y, por consiguiente, ó con la materia del presente recurso, ni da de su silencio sobre la tutela y adminis- del primer matrimonio, que no fué asunto de

libro I de la Novísima Recopilación (invo- .º, relativa á la coronación y unción de los es evidentemente inaplicable al caso actual, obrado el Rey D. Felipe V después de casado s, como tutor y administrador de la persona pe D. Luis para el efecto de su juramento esor en el reino, por su carácter político y lmente regulada la familia del Monarca por navarro, no tiene para los naturales de aque- ivil que le atribuye el recurrente. (*Idem.*)

VIZCAYA

a

Orden de prelación.

lo en igual número para Cataluña y Nava- special confirmado por el art. 1.º de la ley 1831.—3.º Código civil.

en toda Vizcaya, sino en la tierra de infanzón,
En las villas y ciudades es ley el derecho

en Álava y Guipúzcoa, provincias sometidas
y por tanto al Código.

b

Jurisprudencia.

Marzo de 1861. — A falta de ley foral, por la e en Vizcaya algún pleito sobre bienes raíces, or las generales del Reino, según disposición

de la ley 3.^a, lib. XXXVI de los fueros, y el art. 1.^o Octubre de 1869.

Sentencia de 16 de Marzo de 1865.—Para que puedan regir las leyes generales del Reino sobre bienes de un aforado de Vizcaya, es menester, según dispone la ley 3.^a, lib. XXXVI de los citados fueros, que se pruebe que aquellos bienes radican en punto donde no rige la legislación foral.

Sentencia de 23 de Febrero de 1866.— Cuando hay falta de disposición foral, hay que acudir á lo que respecto á la materia se halle consignado en las leyes generales del Reino.

Sentencia de 8 de Junio de 1874.— La ley 2.^a, tít. I, lib. II del Fuero Juzgo, que manda que ninguna persona se excuse de guardar las leyes; la 15, tít. I, Part. 1.^a, que explica cómo deben obedecerse las leyes y juzgarse por ellas, y la 2.^a, tít. II, lib. III de la Novísima Recopilación, que señala el orden de las leyes y fueros que se han de observar para la decisión de los pleitos, no tienen aplicación al caso en que se trata de una finca sita en el señorío de Vizcaya y sujeta, por consiguiente, á las leyes de la tierra, sea la que se quiera la naturaleza y domicilio del testador, que no tienen facultad para disponer de la misma finca, sino con sujeción á las leyes del país en que radica.

La cita de la letra de la ley 15, tít. XIV, Partida 3.^a, «é que si por aventura alegare ley ó fuero de otra tierra que fuere de nuestro señorío, mandamos que en nuestra tierra no tenga fuerza de prueba; fueras ende en contiendas que fueren entre omes de aquella tierra, sobre pleito ó postura que obieren fecho en ella, ó en razon de *alguna cosa mueble ó raiz de aquel lugar*», es impertinente cuando no se trata de ley ó fuero de otra tierra, sino de nuestro propio país. (*Idem.*)

Si bien las ordenaciones de varios Reyes, referentes á los Fueros de Vizcaya, disponen que los pleitos que se promuevan entre vizcaínos se determinen por las leyes del fuero, y lo que no se pueda determinar por ellas lo hagan por las generales del Reino, ninguna altera el principio de que los bienes sitos en Vizcaya han de regirse para las sucesiones por las leyes forales, toda vez que existan parientes vizcaínos que tienen derecho notorio á la sucesión. (*Idem.*)

l artículo
gón y en
s provin-
uellas de
e actual-

al pár. 1.º
no como en
principal,
al vigente
en que no
Balears, ó
mo que en
:

echo espe-
ina su in-
ilación de

sto no tie-

XIX, Par-
antes, son
un censo
atenorise
arreglo á
14

la cual se interrumpe la prescripción, tanto por las reclamaciones extrajudiciales como por las judiciales.

BALEARES

a

Orden de prelación.

1.º Código civil en lo que no contradiga su legislación especial.—2.º Ésta, ó sea Reales pragmáticas, privilegios, buenos usos, Derecho romano con las modificaciones determinadas por el canónico en algunas materias (prescripciones, etc.).

b

Jurisprudencia.

Sentencia de 12 de Noviembre de 1872. --La ley 3.ª, tít. II, lib. III de la Novísima Recopilación, publicada en el año 1505, no tuvo por objeto suprimir ni suprimió las legislaciones especiales que regían y se observaban en diversas provincias y reinos de España, y que con posterioridad á dicha ley han continuado y aún continúan vigentes, señaladamente en el orden civil.

Una de esas legislaciones especiales es la del antiguo reino de Mallorca, la cual recibió nueva confirmación por el decreto llamado de nueva planta, expedido por el Rey D. Felipe V en 28 de Noviembre de 1715, que forma la ley 1.ª, tít. X, lib. V del mencionado Código, estableciendo que en todo lo que no esté comprendido en el mismo se observen todas las pragmáticas y privilegios con que se gobernaban antiguamente la isla y reino de Mallorca, menos en las causas de sedición y crimen de lesa majestad; así como por otro decreto publicado por el mismo Monarca en 16 de Enero de 1716, respecto de la Audiencia de Cataluña, ó sea la ley 1.ª, tít. IX, mandó se observasen las Constituciones que antes había y que aún siguen rigiendo en aquel territorio.

ART. 14. Conforme á lo dispuesto en el art. 12, lo establecido en los artículos 9.º, 10 y 11, respecto á las personas, los actos y los bienes de los españoles en el extranjero, y de los extranjeros en España, es aplica-

llado que corresponda, según las disposiciones vigentes en materia. 2.º Los pleitos y causas pueden sustanciarse en el territorio, mientras que la sustanciación tenga lugar de acuerdo con el territorio; pero las apelaciones y recursos que deban interponerse y seguirse ante los Tribunales y autoridades de fuera del territorio de las provincias enunciadas, tendrán que extenderse en el territorio y con todas las formalidades de la ley. Y 3.º Con este criterio procederá resolver todas las dudas que puedan suscitarse en cuanto al uso del timbre del Estado que requieran los autos ó representaciones de los vecindarios en las aludidas provincias.»

Respecto del impuesto de derechos reales, el párrafo 2.º del artículo 1.º del Reglamento general de 25 de Septiembre de 1892 para la ejecución de la ley de igual fecha, dispone que en las provincias Vascongadas y Navarra continuará exigiéndose dicho impuesto en la forma establecida por las disposiciones vigentes.

Art. 15. Los derechos y deberes de familia, los relativos al estado, condición y capacidad legal de las personas, y los de sucesión testada é intestada declarados en este Código, son aplicables:

1.º A las personas nacidas en provincias ó territorios de derecho común, de padres sujetos al derecho foral, si éstos durante la menor edad de los hijos, ó los mismos hijos dentro del año siguiente á su mayor edad ó emancipación, declararen que es su voluntad someterse al Código civil.

2.º A los hijos de padre, y, no existiendo éste ó cuando desconocido, de madre, perteneciente á provincias ó territorios de derecho común, aunque hubieren nacido en provincias ó territorios donde subsista el derecho foral.

3.º A los que, procediendo de provincias ó territo-

los actos de los españoles en el extranjero era pañoles en los territorios de diferente legislación partidarios de la pluralidad de legislaciones. somos decididos defensores de la unidad legal aun internacional si las circunstancias históricas lo permiten pero no por esto hay que desconocer que el Código es una consecuencia de los preceptos proclamados en el párrafo del art. 12, y en el art. 14.

Para la mejor comprensión de la doctrina y las variaciones que ha experimentado, lo estudiaremos nuevamente en las dos redacciones que ha tenido.

El núm. 1.º del artículo primeramente redactado en el Código (en las materias indicadas al comienzo del artículo) *«á las personas nacidas en provincias de Derecho común»*. Y á la verdad, esto era redundante, pues es de suponer que el Código, ley civil común, es de declaración expresa en los territorios forales. El nacido en Madrid, Santander, etc., no está sometido, no ya á los derechos y deberes de familia, sino á la legislación y capacidad de las personas, sucesión, etc., sino á todo el Código.

En nuestro entender, éste ha venido en modificarse para expresar y significar de un modo acertado el contenido de este núm. 1.º Dice, en efecto, que serán aplicables referidos del Código *«á las personas nacidas en territorios de Derecho común de padre foral, si éstos durante la menor edad de los hijos dentro del año siguiente á su mayor edad declararen que es su voluntad someterse al Código»*. Este texto expresa el caso en que verdaderamente no hay duda, es decir, respecto de los hijos de personas sujetas á legislaciones especiales que hayan nacido en territorios de Derecho común, resolviéndolo del modo indicado.

El Código respeta la ley de los padres, y lo es también para éstos, á no ser que aquéllos durante la menor edad de éstos, ó los hijos dentro del año siguiente á su emancipación, manifiesten que su deseo es someterse á la ley civil. Si unos ú otros nada manifiestan en este sentido, estarán rigiéndose por la legislación foral respectiva.

El párrafo siguiente ha sufrido una alteración en la forma, diciendo «en todo caso» en vez de «en este caso,» y añadiendo la palabra «no emancipados» y que «á falta de éste (padre), la de su madre,» á la que no mencionaba para nada en el texto primitivo.

El último párrafo del artículo ha venido á llenar el vacío que se notaba en el de la primera edición del Código, que no se ocupaba de las relaciones de las legislaciones forales entre sí. El artículo, con buen acuerdo, resuelve este particular, haciendo extensivas y de recíproca aplicación sus disposiciones á las diversas provincias de derecho especial. Así, conforme al núm. 1.º del art. 15, un hijo de catalán nacido en Aragón se regirá por la legislación de Cataluña si sus padres no manifiestan durante su menor edad, ó el mismo llegado á la mayor, que es su deseo someterse al Derecho aragonés, y con arreglo al 3.º, un aragonés residente diez años en Navarra quedará sometido á la legislación de ésta, si no manifiesta su voluntad en contrario, así como podría, pasados dos años, gozar de los beneficios de la misma si llevando dos años de residencia en un punto del territorio navarro, expresa al Juez municipal tal deseo. Lo único que creemos que debía haberse establecido es que el que se encuentra en estas condiciones pudiera optar por la legislación foral de que se tratase ó por la común.

El cuadro siguiente da clara idea de la doctrina del artículo en cuanto á las relaciones entre el Derecho común y los especiales.

En
efic
es

ins.

RES

—E
d in
sol
dig
te s
end
esp
pr
ener

de
las
char
es d
—I
de
su
bre
n u
elec
men
duet

tible de derechos y obligaciones

su capacidad jurídica ó su personalidad».

Esta omisión de los Códigos es, en nuestro entender, intencional, no involuntaria. La idea de la personalidad es hoy universal, de dominio común, y por esto el legislador ha creído acaso que no era necesaria la afirmación de un concepto ajeno, por su carácter científico, á una obra de Derecho positivo por excelencia como es un Código. Además, los Códigos, si bien como epígrafe de su libro primero consignan «las personas», su propósito es estudiar, no la persona, sino las diversas modificaciones jurídicas de ésta, los varios estados civiles de la misma.

El progreso de la ciencia en general y de la jurídica en particular, ha determinado una ampliación del concepto de la persona. Hoy no es sólo persona el hombre, lo son también las entidades constituidas por la reunión de varias personas individuales para el cumplimiento de un fin. Sin salir del concepto de la persona propiamente tal, ésta es distinta por naturaleza, puesto que los individuos pueden ser de diverso sexo, y aun con relación al individuo mismo cabe que su capacidad sea muy varia, por virtud de circunstancias especiales de su organismo. Dedúcese de estas consideraciones la conveniencia en el orden rigurosamente científico, de clasificar las personas, según hace el Código guatemalteco, en naturales ó jurídicas, varones y hembras, mayores y menores de edad, capaces é incapaces. Una vez expuesto un concepto, parece imponerse la división del mismo si la admite su naturaleza.

El hombre, si bien por esta mera cualidad, es persona, es lo cierto que su personalidad, ó mejor dicho,

LAS PERSONAS

idad no son iguales. I

es también uno; pero
el país en que vive ó
establecido en sus l
personalidad, adqu
cuya causa hay que
del individuo, si se n
sarnos, para determ

El hombre tiene p
sde que es procread
dad que pudiéramos
de muy distinta r
tenece el individuo. F
social la ley de la na
tá sujeta á ella. El l
ancés, italiano ó ruso
echos y obligaciones c
pero su personalidad
rta en dicho instant
posterioridad. La na
ste sentido la person
isma. He aquí explic
ha consignado en el
nes son españoles y
adquirir y perder la
echos del extranjero.
o todo lo que es vida
origen y una causa d
e de esta consideraci
lódigo patrio, á la ci
tít. II del lib. I, qu
rtinción de la perso

civil, tanto con relación á las personas naturales como á las que denomina jurídicas. Respecto de las primeras señala el momento desde el que adquieren la personalidad, las restricciones de la misma y su extinción; concerniente á las segundas, expresa cuáles se consideran tales personas y su capacidad.

Del domicilio habla el tít. III. Materia esencialmente adjetiva, parece impropio que figure en el cuerpo legal sustantivo por excelencia. El legislador español la ha incluido siguiendo fielmente al francés, y por la razón que guió á éste: la necesidad de determinar un lugar donde la persona pueda ejercer sus derechos ó ser demandado para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, y en el que pueda también cumplir todas las formalidades relativas á su estado civil (nacimiento, matrimonio, tutela, defunción).

Las materias contenidas en los tres primeros títulos del libro I del Código ofrecen un carácter general. Conciernen al origen de la personalidad propiamente dicha ó natural y al de la nacional, á la extensión y límite de una y otra y á la determinación del domicilio en cuanto se relaciona con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones por la persona; no se refieren á los estados civiles de la persona. Ahora bien: sentados los preceptos generales relativos á la personalidad, corresponde examinar los diferentes estados de ella, comenzando por el que es generatriz de los demás, causa de todos: el matrimonio.

Así lo hace nuestro Código. El tít. IV está dedicado al matrimonio, porque éste es el principio, la base fundamental del derecho de la familia, y, por consiguiente, de los diferentes estados civiles de la persona

determinar estas personas bastaba al legislador fijarse en la ley natural, en su razón, las cuales le habían de decir que las llamadas á ello en primer término no podía ser sino aquellas de quienes procede el menor: sus padres. La patria potestad es, pues, un derecho derivado de la naturaleza, comprensivo á su vez de deberes respecto de aquellos á cuyo favor recae. Es una facultad inherente á la cualidad de padre ó madre, demostrativa de esta cualidad, encaminada á suplir la incapacidad del hijo, determinativa de derechos y obligaciones entre el que lo ejerce y aquellos para los que se ejerce, y debe estudiarse, por tanto, dentro del derecho de familia, según hace nuestro Código en el tít. VII del libro I. La patria potestad es la consecuencia primera de la paternidad; es ésta en ejercicio.

El hombre, convencido sin duda de lo hermoso de la paternidad, procuró hallar un medio de conseguir sus ventajas é ideó la adopción, copia de aquélla, imagen de la potestad natural, de la naturaleza como decían los romanos. Así lo ha entendido el autor del Código, que coloca á la adopción en uno de los capítulos de la patria potestad.

Existen casos en que no consta expresamente la extinción de la personalidad, pero ésta es incierta, dudosa por ignorarse dónde reside la persona. Es el caso de la ausencia, materia del tít. VIII del libro que nos ocupa. Dada la clasificación del Código, es lógico hablar de ella dentro de la esfera referente á las personas, pero no donde lo hace, interrumpiendo el derecho de familia, cortando, por decirlo así, la marcha natural de él.

No sólo la menor edad es una restricción de la per-

En queda expuesto, del incompetencial de la persona; lo es, la prodigalidad y la interdicción de la capacidad (demonstración de ella (prodigalidad), bien de los Tribunales é imposibilitados actos de la capacidad). Originase, por consiguiendo la necesidad de completar la existencia de un poder tutelar realizado por la naturaleza ó cumplen esta misión, respecto de patria potestad; cuando éstos almente, bien ante la ley en sus derechos de padre por la privación de ejercicio, hay que acudir a los padres en el cumplimiento, es decir, á la tutela y familia. Estas son instituciones del menor, porque sólo rigen en los primordiales en relación al ródigo. Encaminada, pues, la personas que no pueden regirse en el libro I del Código, en el que, es en el título IX.

Es un límite. Éste varía según diversos países, pero todas tienen establecer un momento desde el momento que el hombre ha llegado á incompetencial. Esto determina un personalidad, porque si el nacimiento la mayor edad determina la

capacidad. Es un nuevo estado civil de la persona, importantísimo, acaso el de mayor alcance en el orden jurídico. Las legislaciones admiten el principio de la adquisición de los beneficios consiguientes á la mayor edad, mediante la realización de determinadas causas (emancipación voluntaria, beneficio de mayor edad, matrimonio). Natural es estudiarlas en un mismo título, según vemos en el X del libro I de nuestro Código.

La sociedad tiene interés en conocer los diversos cambios de la persona, y ésta á su vez necesita en muchas ocasiones justificar su estado civil. A este fin obedece el Registro civil (cuyas disposiciones fundamentales se encuentran en el tít. XI), registro de la historia civil de las personas, puesto que en él deben constar todos los actos de su estado privado, todos por los que pase en su vida, desde su principio hasta su extinción.

brar la nacionalidad española, se observan y reconocen por fundamento la voluntad del individuo. Voluntad expresa hay en el matrimonio, en la vecindad; voluntad presumida en el matrimonio de extranjera con español, modos de adquirir la nacionalidad española; voluntad expresa en la declaración de adquisición adquirida en país extranjero, en el empleo de otro Gobierno, en el ingreso en el servicio de las armas de potencia extranjera, en la declaración en el matrimonio de española con extranjero, en la declaración de perder la nacionalidad española; voluntad expresa existe también en la declaración de recuperar la nacionalidad española, en la declaración de haberse naturalizado en el extranjero y en la declaración del que ha perdido dicha nacionalidad, en la declaración de haber admitido empleo de otro Gobierno ó haber ingresado en el servicio de las armas de otra potencia, en la declaración de recuperar la nacionalidad.

Parecen desmentir nuestra afirmación y 2.º del art. 17, declarativos respectivos, que son españoles las personas nacidas en territorio español y los hijos de padre ó madre español nacidos fuera de España, puesto que el Código acepta el principio de la territorialidad; pero estudiados dichos preceptos en conjunto, resulta desvanecida tal presunción, porque el art. 17 no determina la nacionalidad española expresamente en los artículos 18 y 19, sino que, al contrario, al contrario, para que los nacidos en territorio de nuestra nacionalidad, es requisito indispensable que los padres manifiesten que optan, á favor de la nacionalidad española, renuncian á la del país de origen.

vasta confederación de pueblos, cuyo lazo de unión se la paz y el reconocimiento de la fraternidad y solidaridad universales; pero más remoto vemos aún el tiempo en que la palabra extranjero era sinónima de bárbaro y de enemigo, y á lo menos el Estado se encuentra hoy encarnado en el amplio organismo de la Nación, después de haberse desenvuelto en su evolución histórica por los más limitados de la familia, la ciudad, la provincia y la región.

Algunas Naciones podrán considerar actualmente otras como no amigas, bajo el punto de vista de la política exterior; pero con relación al Derecho, no existen enemigos, al menos entre los pueblos cultos. El hombre, sea español, francés, italiano, es siempre persona y, por tanto, capaz de derechos y obligaciones.

Ahora bien: el reconocimiento, la afirmación de esta capacidad varía según los países, y esta diferencia de los preceptos legales constituye el Derecho positivo particular de cada Nación. Sin embargo, notas una tendencia en la esfera científica, y aun en la práctica, á un principio común, al de la igualdad entre nacionales y extranjeros. Nuestro Código la acepta expresamente en el art. 27 al decir que «los extranjeros gozan en España de los mismos derechos que las leyes civiles conceden á los españoles.»

Este es el principio racional, no el egoísta de la reciprocidad, ó sea el de la represalia jurídica, condenado por la ciencia por ser la negación de la personalidad humana. La reciprocidad implica el recelo, la desconfianza de las Naciones entre sí: la igualdad, por el contrario, como dice Fiore, es en el campo del Derecho civil la expresión de la fraternidad de los hom

Más completo era en este punto el proyecto que en su cap. I, tít. II del lib. I, referente a la vecindad, art. 27, señalaba como requisitos con los cuales un extranjero ganaba vecindad, los tres: residir en un pueblo más de tres años; ante el Alcalde la protección de su país; y alguno de estos extremos: haber entrado al servicio del Estado; estar ó haber estado casado con español; haber ejercido por más de cinco años en el Reino una profesión útil; establecimiento de alguna industria que requiera su residencia habitual en el país; haberse arraigado en el Reino, adquiriendo en él bienes inmuebles.

El Código, pues, ha debido establecer el mismo precepto u otro análogo, pero no guardar el que aparece encerrado.

ART. 17. Son españoles:

- 1.º Las personas nacidas en territorio español.
- 2.º Los hijos de padre ó madre español que hayan nacido fuera de España.
- 3.º Los extranjeros que hayan obtenido la nacionalidad española por naturalización.
- 4.º Los que, sin ella, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía.

Concordancias.—Igual al art. 18 del proyecto de Código de 1809 y del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—*Constitución de 1809.* Son españoles:

- 1.º Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los territorios de las Españas, y los hijos de éstos.

ART. 19. Los hijos de un extranjero los dominios españoles deberán manifestar, dentro del año siguiente á su mayor edad ó emancipación, si quieren gozar de la calidad de españoles que les concede el art. 17.

Los que se hallen en el Reino harán esta manifestación ante el encargado del Registro civil del pueblo en que residieren; los que residan en el extranjero, ante uno de los Agentes consulares ó diplomáticos del Gobierno español; y los que se encuentren en un país en que el Gobierno no tenga ningún Agente, dirigiéndose al Ministro de Estado en España.

Concordancias.—Igual al art. 22 del proyecto de 1851, si bien con la diferencia de que, en lugar del encargado del Registro, se nombra al alcalde. Igual al 21 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—*Ley de Registro civil.* Art. 103. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros, ó de padre extranjero y madre española, que quieran gozar de la nacionalidad de España, deberán declararlo así en el término de un año, á contar desde el día en que cumplan la mayor edad, si á la sazón están ya emancipados; y en otro caso, desde que alcancen la emancipación, renunciando al mismo tiempo á la nacionalidad de los padres.

Art. 104. Esta declaración y renuncia y consiguiente inscripción en el Registro, deberán hacerse ante el Juez municipal del domicilio del interesado. Si residieren en país extranjero se harán ante el Agente diplomático ó consular del punto más próximo, quien inscribirá el acta en el Registro de que esté encargado, remitiendo copia á la Dirección para que repita la inscripción en su Registro si el interesado no tuviere domicilio en España.

Art. 105. Respecto á los nacidos de padre extranjero y madre española fuera del territorio de España, se observará la disposición contenida en el artículo anterior.

Concordancias.—Igual al 20 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—*Ley de Registro civil.* Art. 108. El español que hubiese perdido esta calidad por adquirir naturaleza en país extranjero, podrá recobrarla volviendo al Reino, declarando que así lo quiere ante el Juez municipal del domicilio que elija, ó, en otro caso, ante el Director general, renunciando á la protección del pabellón de aquel país y haciendo inscribir en el Registro civil esta declaración y renuncia.

ART. 22. La mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido.

La española que casare con extranjero podrá, disuelto el matrimonio, recobrar la nacionalidad española, llenando los requisitos expresados en el artículo anterior.

Concordancias.—Análogo al art. 25 del proyecto de 1851 y 20 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—*Novísima Recopilación, lib. VI, título XI, ley 3.ª*—... Y si es la mujer extranjera, que casare con hombre natural (de España), por el mismo hecho se hace del fuero y domicilio del marido.

Real decreto de 17 de Noviembre de 1852.—Art. 1.º Son extranjeros: 5.º La mujer española que contrae matrimonio con extranjero.

Ley de Registro civil.—Art. 109. Asimismo podrá recuperarla (la nacionalidad) la mujer casada con extranjero después que se disuelva el matrimonio, haciendo la declaración necesaria é inscripción que quedan expresadas. En este caso, la interesada habrá de presentar el documento que compruebe la disolución del matrimonio.

ART. 23. El español que pierda esta calidad por admitir empleo de otro Gobierno, ó entrar al servicio

española, han de renunciar previamente á su nacionalidad anterior, jurar la Constitución de la Monarquía y é inscribirse como españoles en el Registro civil.

Concordancias.—Igual al art. 23 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—*Nov. Recop., libro VI, tit. XI, ley 9.^a (Instrucción de 21 de Julio de 1791, pár. 5.^o)*— Los extranjeros que estén avecindados, ó quieran avecindarse, deben ser católicos, y unos y otros han de hacer ante la respectiva Justicia el juramento en la forma siguiente: «Que jura observar la religión católica, y guardar fidelidad á ella y al Rey nuestro Señor, y quiere ser vasallo, sujetándose á las leyes y prácticas de estos Reynos, renunciando, como renuncia, á todo fuero de extranjería, y á toda relación, unión y dependencia del país en que nació; y promete no usar de la protección de él, ni su Embaxador, Ministro ó Cónsules; todo baxo las penas de galeras, presidio ó expulsion absoluta de estos Reynos, y confiscación de sus bienes, según la calidad de la persona y de la contravención.»

Ley de Registro civil.—Art. 101. Las cartas de naturaleza concedidas á un extranjero por el Gobierno español no producirán ninguno de sus efectos hasta que se hallen inscritas en el Registro civil del domicilio elegido por el interesado, ó en el de la Dirección general, si no hubiese de fijar su residencia en España. Al efecto, deberá presentarse en uno ú otro Registro por el interesado el decreto de naturalización y los documentos expresados en el art. 97, manifestando que *renuncia á su nacionalidad anterior y jurando la Constitución del Estado*. En el asiento respectivo del Registro se expresarán estas circunstancias y la clase de la naturalización concedida.

Art. 102. Los extranjeros que hayan ganado vecindad en un pueblo de España gozarán de la consideración y derechos de españoles desde el instante en que se haga la correspondiente inscripción en el Registro civil.

Al efecto, deberán presentar ante el Juez municipal de su domicilio justificación bastante, practicada con citación del Ministerio público, de los hechos en virtud de los cuales se gana la vecindad, *renunciando en el acto á la nacionalidad que antes tenían*.

comprendidos en la justificación practicada y deberá hacerse mención expresa en el asiento

Los españoles que trasladen su domicilio extranjero, donde sin más circunstancia que noia en él sean considerados como naturales, para conservar la nacionalidad de estar que esta es su voluntad al Agente consular español, quien deberá inscribirlo en el libro de españoles residentes, así como á si fueren casados, y á los hijos que tu-

ma.—Igual al art. 24 del proyecto de 1882. El la sobre este extremo.

ES LEGALES.—*Ley de Registro civil*.—Art. 112. Los que trasladen su domicilio á país extranjero en las circunstancias que la de su residencia en él sean naturales, necesitarán, para conservar la nacionalidad española, manifestar que esta es su voluntad al Agente consular español, quien deberá inscribirlos, conyuges si fuesen casados y á los hijos que tuvieran, en el libro especial de españoles residentes que deberá

DE LOS ARTÍCULOS 17 AL 26, AMBOS INCLUSIVE.—Los artículos tratan de los modos de adquirir, perder y conservar la nacionalidad española. Estudiaremos cada uno de

de la nacionalidad.—Los modos por los cuales se adquiere la nacionalidad de españoles son: filiación, es decir, ser hijo de españoles, ó de padre y madre españoles; naturalización por carta de naturaleza (art. 11, núm. 3.º); nacimiento en cualquier pueblo de España (art. 18, 1.º); y declaración de los padres extranjeros de hijos na-

cidos en territorio español de que optan, á nombre de sus hijos, por la nacionalidad española, renunciando á otra (art. 18); manifestación de los hijos de extranjero nacidos en España, dentro del año siguiente á su mayor edad, de su deseo de gozar de la nacionalidad española (art. 19); casamiento de mujer extranjera con un español (art. 22).

Si se pretende clasificar estos diversos modos, podemos reducirlos á dos: nacimiento y voluntad, bien expresa (naturalización, vecindad con los demás requisitos necesarios, manifestación de los padres extranjeros durante la menor edad de sus hijos nacidos en España); manifestación tácita ó presunta (matrimonio) del hijo emancipado de extranjero nacido en territorio español. Queriendo llevar este punto hasta su última consecuencia, aún podríamos decir que el único modo de adquirir la nacionalidad es la voluntad, pues la adquisición por el nacimiento se funda (Fiore) en la presunción de que la voluntad del nacido es ser ciudadano de la misma patria de quien le procreó. Para la mejor claridad de nuestro estudio, admitiremos el modo del nacimiento como distinto de el de la voluntad.

A) *Nacimiento ó filiación.*—Empleamos ambas palabras porque, dice Brocher, que si bien la ley habla de nacimiento, la idea principal es la de filiación, y la relación entre ambas existe desde la primera fase de la vida (aludiendo, sin duda, á la concepción), de la cual es una consecuencia el nacimiento. Son españoles—dice el núm. 2.º del art. 17—los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido *fuera* de España. Los nacidos en España de padres españoles no cabe duda alguna que tienen esta calidad; pero hay que salvar la (nacionalidad) de los que nazcan en el extranjero, y á eso responde el precepto legal. El principio contenido en él se funda en el *jus sanguinis*, en la ley de la sangre, en la presunción de que el nacido ha de querer ser de la misma Nación de su progenitor, presunción que hacen admisible, como dice Fiore, la unidad de la vida y los afectos y sentimientos de la familia.

La sangre, en efecto, llama á la sangre, y nada más lógico y natural que presumir que el hijo ha de querer gozar de la misma nacionalidad de su padre porque debe también pensarse que éste á su vez le procreó con la intención de que conservase su nacionalidad.

principio de la sangre
cuestión de razas, y

las facultades de que está dotada cada una de éstas se transmiten por la sangre, y no dependen del azar del nacimiento. De aquí que sostenga que deba rechazarse la antigua máxima, la del *jus solis*, pues importa poco el lugar donde nace el niño. Esto—dice—es casual, y el espíritu de las razas no depende de un caso fortuito. Es preciso ver cuál es la nacionalidad del padre, que transmite á sus hijos con su sangre. Poco importa—expresa en otro lugar—el punto donde el niño viene al mundo; no descansa su derecho en el lugar donde ha nacido, sino en la sangre que le han transmitido sus antepasados.

Esto no ofrece duda á los autores cuando los dos padres tienen igual nacionalidad; pero dicen que se presenta en el caso de que sea distinta la de cada uno de los cónyuges. Laurent estudia la cuestión y la resuelve á favor del padre, es decir, que los hijos tendrán la nacionalidad de éste.

Para Asser existe también la cuestión. Dice que la ley que rige el matrimonio en el momento del nacimiento determina la legitimidad del hijo; pero si por consecuencia del cambio de nacionalidad del marido, la esposa no tuviese en el momento indicado ley nacional común, se aplicaría la del marido, jefe del matrimonio y de la familia. Y añade que el poder paternal, tanto respecto de los derechos personales como sobre los bienes, se rige, por regla general, por la ley nacional del padre; y en caso de cambio de nacionalidad, por su ley nueva.

La legislación española no da origen á la duda de que nos hablan los autores citados, durante el matrimonio, esto es, existiendo el vínculo por virtud de la disposición del art. 22 del Código; pero puede presentarse en el caso de una legislación extranjera que permita á la mujer conservar la nacionalidad española y en el de la nulidad del matrimonio.

Como quiera que la mujer, según dicho artículo, sigue la condición del marido, claro es que hay una sola ley común á los dos cónyuges, no la diversidad que suponen Asser y Laurent. Los hijos, por consiguiente, tendrán la ley nacional de sus procreadores, ó sea la del padre, en el supuesto de que con anterioridad al matrimonio fuese distinta la de cada uno de ellos, pues si fuere la misma no cabría duda alguna.

Si una legislación extranjera permite á la mujer conservar su nacionalidad al contraer matrimonio, ¿la perderá la mujer española en virtud del precepto del art. 22? Entendemos que no. Dicho precepto se funda en el principio admitido por casi todas las legislaciones de que la mujer casada sigue la nacionalidad del marido, pero si hay alguno que respeta la de cada cónyuge, no hay razón alguna para imponerle un cambio forzoso de ciudadanía. El art. 22 presume que la ley del varón que se casa con española impone á la mujer el cambio de nacionalidad: cuando falta la presunción á que obedece, no parece lógica la aplicación del precepto. De aquí que creamos que el art. 22 de nuestro Código deba entenderse en el sentido del 14 del italiano, cuyo criterio aprobamos, según el cual, la mujer pierde su nacionalidad «si por el hecho del matrimonio adquiriese la del marido». Si no la adquiere, no la pierde.

Por la nulidad del matrimonio se disuelve de hecho éste, ó, para hablar en términos más exactos, se supone que nunca ha existido; pero los hijos no han de sufrir las consecuencias fatales de un acto que, si bien es vicioso, es extraño á su voluntad, y de aquí el proclamar, como lo hace el art. 69 de nuestro Código, el que el matrimonio producirá efectos civiles respecto de los hijos. ¿Cuál será en tal caso la nacionalidad de éstos?

Resolveremos brevemente la cuestión dentro del derecho patrio. El matrimonio nulo produce efectos civiles para los hijos, conforme al citado art. 69, aun en el caso de mala fe de ambos padres, es decir, que el matrimonio se considera siempre como válido en cuanto á los hijos. Éstos son legítimos. Ahora bien: como quiera que los hijos al anularse el matrimonio tenían una nacionalidad, habrán de seguir disfrutando de ella, porque representa para ellos un derecho adquirido que, como todo derecho, debe respetarse mientras no lo exija el interés social.

Esto es evidente, tanto en el caso de buena ó mala fe de los dos cónyuges; pero asalta la duda en el de buena fe de uno solo, caso en el que, según el párrafo segundo del art. 69, el matrimonio sólo produce efectos civiles respecto de él y de los hijos. En este caso, creemos cabe establecer una excepción á la regla general antes sentada, en armonía con los principios generales en materia de retroactividad. Es cierto que los hijos tienen adquirida una nacionalidad al declararse nulo el matrimonio de sus

padres; pero aquí es lícito, más aún, es indispensable la pérdida del derecho, por exigirlo así el interés social. La ley impone al cónyuge culpable la privación de los efectos civiles de la unión que contrajo de mala fe, como castigo á esta circunstancia; sería, pues, contra ley y absurdo que si el culpable era el padre, y los hijos tenían, por tanto, esta nacionalidad, al anularse el matrimonio siguiesen la condición de aquél. Tal solución, lejos de perjudicar, vendría á favorecer al culpable, y es un principio de criterio jurídico que hay que rehusar toda solución que favorezca la mala fe y el dolo. Aparte de esta consideración general, ateniéndose á la legislación positiva española, no cabe admitir otra solución. El matrimonio produce sólo efectos para el cónyuge inocente y los hijos, esto es, que respecto del culpable se estima que no ha habido unión legítima alguna. Sentada esta afirmación legal, la consecuencia legal también es lógica: bajo el punto de vista puramente jurídico, con relación á los hijos, existe sólo un padre, el inocente; luego la nacionalidad de éste será la de aquéllos. El padre culpable vivirá en el corazón de sus hijos, pero está muerto ante la ley. Confirman la certeza de estas palabras el pár. 2.º del art. 70 del Código: «Si la buena fe hubiese estado de parte de *uno solo* de los cónyuges, quedarán bajo su *poder* y cuidado los hijos de ambos sexos.» El poder paterno, la patria potestad es atribución exclusiva del cónyuge inocente, y ¿cómo ejercerla si, por ejemplo, siendo la madre la inocente se sostuviere en este caso que los hijos habían de continuar con la nacionalidad adquirida durante el matrimonio, ó sea la del padre? El ejercicio de dicho poder-sería imposible por resultar que la madre tenía una nacionalidad distinta de la de los hijos. La unidad legal de la familia desaparecería además en el caso expuesto.

Pudiera objetarse que nuestro criterio va contra el principio de que el cambio de nacionalidad debe ser voluntario, hijo legítimo de la voluntad del que cambia, no de un tercero; mas estudiado bien el caso, se desvanece este criterio que produce la impresión primera de él. El principio mencionado se refiere á los cambios también voluntarios del tercero, por ejemplo, á la naturalización del padre, es decir, á la pérdida voluntaria de una nacionalidad y adquisición asimismo voluntaria de otra; pero no puede referirse al caso de que el cambio es exigido por la natu-

raleza de las circunstancias especiales que existen en él, al caso en que la pérdida de la nacionalidad es forzosa porque se impone por virtud de ciertos preceptos legales fundados en interés social. La regla general del derecho público debe ser, pues, en nuestro sentir, la de que los hijos, declarado nulo el matrimonio de sus padres, deben conservar la nacionalidad de origen, de sangre, excepto en el caso de buena fe de sólo uno de los cónyuges, en el que seguirán en la de éste, si fuese el padre, ó adquirirán los de la madre si fuere ésta. Hemos supuesto hasta aquí que los dos padres son españoles; pero el art. 17 parece que prevé el caso de que uno solo de los padres lo sea, pues emplea la disyuntiva ó, y, además, el art. 105 de la ley del Registro civil habla de los nacidos de padre extranjero y madre española, estableciendo que pueden adquirir la nacionalidad española del modo que preceptúa hoy el art. 19 del Código.

Nosotros aceptamos con agrado el precepto del indicado artículo 105 de la ley del Registro en cuanto tiende á favorecer á la nacionalidad española, pero le creemos apartado de los principios generales en materia de nacionalidad, al contrario de lo que sostiene el Sr. Manresa en su comentario del art. 17, según el cual la madre determina en vida del padre la nacionalidad del hijo.

Véanse los fundamentos de nuestra opinión. La mujer, conforme al art. 22, sigue la nacionalidad del marido; se convierte en extranjera. Luego el hijo de padre extranjero nacido en país extranjero tendrá esta cualidad por el principio de la filiación y por el territorial. Como el patriotismo ciega algunas veces, conviene examinar el que es objeto de nuestra investigación en el caso opuesto. El hijo de padre español y madre francesa, nacido en España, ¿no será español? ¿Cabe pensar que la madre francesa, por el mero hecho del matrimonio con un español, pueda determinar la nacionalidad francesa del hijo? Así lo cree el Sr. Manresa, opinión que, dicho con todos los respetos debidos, pensamos se aleja de la pura doctrina jurídica. El artículo 105 de la ley del Registro es, pues, conveniente; pero no taxativa y rigurosamente científico. En nuestro entender, el artículo debe tener aplicación en el caso de que, en efecto, el padre sea extranjero y la madre española, por permitir la legislación del país de aquél conservar á ésta su nacionalidad al contraer

matrimonio. En este caso el art. 105 repete sino una facultad justa á favor del hijo: la nacionalidad del padre ó la de su madre.

Estúdiase también la cuestión de la persona sin filiación alguna, por no conocerse á ninguno de ellos, legítimo ó ilegítimo, y preguntamos á los autores cuál será su nacionalidad. Responden que ésta es nuestra opinión, que la del lugar de nacimiento, porque es de interés que todo hombre tenga una nacionalidad, cuando ésta no pueda deducirse de la relación que derivarla del lugar del nacimiento. Es el principio de nuestro derecho positivo. Cuando no conste de un individuo nacido en España, se le atribuye la nacionalidad con arreglo al núm. 1.º del art. 17. Después de la territorialidad es determinante de la nacionalidad el de la sangre; cuando no rige el principio de la sangre es un principio supletorio.

Consecuencia obligada de la aplicación del principio de la sangre es la disposición del párrafo primero del art. 17, en el cual los hijos, mientras permanezcan bajo la patria potestad, tienen la nacionalidad de los padres. Si el hijo nace en el extranjero la nacionalidad de su padre por la que lo reclama así la sangre, porque es la de aquél, es racional decir que el hijo ha de seguir la nacionalidad de los padres, conforme á lo que hemos expuesto con anterioridad.

El precepto es claro; ¿es también absoluto? No lo es. El hijo varía la nacionalidad de origen, del padre, y sigue la del padre en los cambios que este hace. Laurent defiende la doctrina primera; Pisanelli la segunda.

En pro de su opinión alega Pisanelli la razón de interés que no permite que entre el padre y los hijos haya una dualidad de nacionalidad, y los inconvenientes de esta dualidad para la moral de la familia. «Tal dualismo—dice—produce una funesta alteración en las relaciones jurídicas que la naturaleza ha creado entre el padre y los hijos, y la autoridad del padre como jefe de la familia. La consecuencia de las diversas legislaciones es...

Fiore, contestando á los razonamientos...

mismo lo reconoce dicho autor) de Pisanelli, manifiesta que la nacionalidad del hijo en el momento del nacimiento se determina por la del padre, porque en la necesidad de atribuirle alguna y no debiendo aceptarse que depende del accidente del lugar donde ha nacido, es más conforme á los principios de justicia hacerla derivar *jure sanguinis*, puesto que debe reputarse como la voluntad presunta del hijo. Adquirida la nacionalidad con el nacimiento, constituye un derecho personal que forma parte del patrimonio del hijo; sostiene el ilustre tratadista italiano que no se le puede arrebatar por voluntad del padre, y del que sólo él puede disponer cuando tenga capacidad civil para ello.

Laurent, como hemos dicho antes, está de acuerdo con Fiore. En su opinión, del principio de que el cambio de nacionalidad implica una manifestación de la voluntad, se sigue que nadie puede ser privado de su nacionalidad por efecto de una voluntad extraña, y aunque á primera vista parece esto en contradicción con la máxima de que el hijo sigue la nacionalidad del padre, no es así, porque no hay que entender esta regla en el sentido de que sea el padre quien da la nacionalidad al hijo, quien pueda quitársela. La raza, dice, es la que imprime la nacionalidad, no la voluntad del padre la que crea la raza. El hijo, por su nacimiento, pertenece á la raza de su padre; desde este instante tiene un derecho de que no puede ser despojado por ninguna voluntad particular.

La cuestión es de tanta transcendencia, que hemos de limitarnos á exponer el pro de una y otra en la adoptada por Pisanelli. En ésta reina siempre el principio en que se funda, ó sea la unidad de la familia, en la que, según Laurent y Fiore, hay casos en que no puede tener lugar la aplicación del principio sustentado por Laurent de que el hijo por su nacimiento pertenece á la raza de su padre. Cambiando la nacionalidad del hijo á la vez que la del padre, se consigue que la familia se rija por una sola legislación, que es lo que dice Pisanelli; conservando cada hijo la nacionalidad determinada por su nacimiento, puede resultar que no sea la ley de la raza, como afirma Laurent, la que dé la nacionalidad á los hijos, pues cabe que unos nazcan antes del cambio verificado por el padre y otros después. Los primeros tendrán, sí, la nacionalidad de la raza, pero los segundos, con arreglo al nuevo precepto de la ley del nacimiento,

e haya adquirido el padre. Resultado: los matrimonios con nacionalidad distinta. Es verdad no debe ser impuesta, mas conviene no pueden luego optar por la nacionalidad que

1 nuestro Código se inclina á lo absoluto del principio. En primer término, indícalo así la redacción del artículo, que no contiene excepción alguna. Manifiéstase también en el párrafo segundo del art. 18, permitiendo á los padres optar, á nombre de sus hijos, por la nacionalidad española, cuando éstos hayan nacido en nuestro territorio, de donde se infiere que la nacionalidad de los hijos durante su menor edad depende de la voluntad de los padres. Confírmalo, por último, el art. 24 al conceder á los hijos de españoles nacidos en el extranjero la facultad de recuperar la nacionalidad española cuando la hayan perdido sus padres. Si el legislador entendiese que los hijos no perdían su nacionalidad por el cambio de ésta, efectuado por su padre, no hablaría de recuperación, porque sólo se recobra lo que se pierde.

El Sr. Manresa, al comentar el art. 24, dice que es impropio hablar de recuperar por tratarse de individuos que no han pertenecido á nuestra nacionalidad (opinión de Laurent), refiriéndose, sin duda, al caso de los nacidos después que los padres hayan perdido su calidad de españoles. Sin negar que el artículo pueda tener aplicación al caso expuesto, parécenos que se refiere más directamente al presentado por nosotros, esto es, al hijo de padres españoles en el momento del nacimiento, que hayan perdido después la nacionalidad española. El nacido de padres que hayan perdido esta nacionalidad y adquirido otra, tendrá ésta; no cabe duda, ni hay cuestión. Ésta se presenta en el que exponemos nosotros, y á él creemos se refiere el artículo. Dice éste: «el nacido en país extranjero, de padre ó madre *españoles*», es decir, el nacido de padres *que sean españoles en el momento del nacimiento*. No puede, por tanto, aplicarse al nacido de padres que hayan perdido su nacionalidad española con anterioridad al nacimiento, porque los padres tendrán la calidad nacional que hayan adquirido, no la española que perdieron. Se lee también en el artículo, que «haya perdido la nacionalidad de España por haberla perdido sus padres.» Pierde una cosa el que la tenía; el que no la tiene no puede perderla. En el supuesto del Sr. Man-

resa no hay pérdida, porque el hijo tiene, con la nacionalidad de su raza, la de su filiación, la del momento de su nacimiento, la única que le puede corresponder; en el nuestro, sí, porque teniendo el hijo una nacionalidad de origen, la española, la pierde por el cambio de los padres, ó sea *por haberla perdido éstos*, como dice el artículo. A esto se encamina precisamente el art. 24, á salvar la nacionalidad del hijo de padres que, siendo españoles, perdiesen esta cualidad, de donde se deduce que, con arreglo al derecho positivo español, los hijos pierden la nacionalidad por el cambio de ella realizado por los padres.

Nuestro estudio se ha concretado hasta aquí á la nacionalidad de los hijos legítimos: examinemos la de los naturales y demás ilegítimos. Los autores no discrepan en este punto tanto como en otros. Casi todos sostienen que el hijo natural reconocido, ó el ilegítimo, cuya filiación conste, tendrá la nacionalidad del padre ó madre que lo reconozca, si fuere uno solo, por virtud del mismo principio que en los legítimos, ó sea el de la sangre; si lo han reconocido, ó afirmado su paternidad ó maternidad, los dos en distinto tiempo, el que lo reconoció ó afirmó su filiación en primer término, por el cariño que presume esta prioridad y el principio de que el primero en el tiempo es mejor en el derecho; si lo han hecho conjuntamente, entonces corresponde la preeminencia al padre por la supremacía que se concede siempre al varón sobre la hembra.

B) Voluntad.—Es un principio de derecho internacional el que la nacionalidad sólo debe adquirirse y perderse por la voluntad del individuo. Nosotros, aceptando este principio, distinguimos entre la voluntad *expresa* y la *presunta* ó *tácita*.

Voluntad expresa.—Puede ser de los padres ó de los hijos.

a) De los padres.

La adquisición de la nacionalidad por voluntad de los padres se determina en el párrafo 2.º del art. 18, según el cual, para que los nacidos de padres extranjeros en territorio español gocen de la calidad de españoles, es menester que los padres manifiesten, bien ante el encargado del Registro civil del pueblo en que residan, bien ante uno de los Agentes consulares ó diplomáticos del Gobierno español si residen en el extranjero, ya dirigiéndose al Ministro de Estado en España si se encuentran en un país en que el Gobierno no tenga ningún Agente, que optan, á nombre

dad española, renunciando á toda

El precepto es combinación del principio territorial y el de la voluntariedad; pero ligado aquél con éste en relación de dependencia tal, que bien puede decirse que está completamente negado y obacurecido. No dice el Código que los nacidos en territorio español son españoles en tanto que no conste voluntad opuesta, caso en que el territorio es lo principal, sino lo contrario, es decir, que el territorio no determina por sí sólo la nacionalidad, si no va acompañado el hecho del nacimiento en lugar español de la manifestación expresa de los padres de que sus hijos gocen de nuestra nacionalidad.

Haremos constar que los buques españoles deben ser considerados como parte del territorio nacional para el efecto de la aplicación de la doctrina del art. 18.

b) *De los hijos*.—Los hijos de un extranjero nacidos en los dominios deberán manifestar dentro del año siguiente á su mayor edad ó emancipación si quieren gozar de la calidad de españoles que les concede el art. 17.

Este precepto es la consagración más terminante del principio de la voluntariedad, á la vez que un nuevo golpe contra el del *jus soli*. No importa que los padres extranjeros del nacido en España hayan dejado de optar por nuestra nacionalidad, conforme al precepto del párrafo 2.º del art. 18; los hijos tienen aún la facultad de adquirirla por virtud de lo dispuesto en el art. 19. Llegada la mayor edad ó la emancipación de los hijos, concluida la edad en que éstos siguen forzosamente la nacionalidad determinada por la sangre ó impuesta por los padres, aquéllos pueden, dentro del término concedido por la ley, adquirir la cualidad de español.

¿A qué ley se refiere el art. 19 al hablar de mayor edad ó emancipación? La mayoría de los autores sostienen que la ley que debe regir en este punto es la nacional de la persona, porque la mayor edad y la emancipación conciernen directamente á la capacidad, y ésta se rige, según principio admitido universalmente, por la ley personal, á la cual está sujeto hasta el cambio de nacionalidad. Lo contrario sería suponer á la persona con una condición nacional que aún no tiene. No deja de tener fuerza la opinión contraria, porque se trata de un acto que determina la

adquisición de la personalidad civil en el país por cuya nacionalidad opta, y si con arreglo á la legislación de éste, el sujeto no reúne la capacidad necesaria para celebrar actos por sí, parece que el de optar por la nacionalidad no debe ser válido. Sin embargo, parécenos más acomodada á razón la opinión primera.

La manifestación se hará ante los funcionarios mencionados en el art. 19, párrafo 2º, ó sea ante los encargados del Registro civil en España, y en el extranjero (Agentes consulares ó diplomáticos), ó ante el Ministro de Estado si los que quieren adquirir la nacionalidad se encuentran en país donde no exista Agente consular ó diplomático.

c) *Naturalización.* — La naturalización individual, no la colectiva por anexión ó cesión de un territorio, es el modo genuinamente voluntario de adquirir la nacionalidad, porque no tiene en cuenta el principio territorial ni el de la sangre, y sí sólo la voluntad del individuo.

Si la nacionalidad debe depender exclusivamente de la voluntad del ciudadano, es indiscutible su derecho á adquirir la que quiera en cualquier momento de su vida, siempre que no sea en fraude de la ley del país que trate de renunciar para eludir deberes impuestos por ella. «El *status civitatis* —dice Fiore— es uno de los derechos personalísimos del hombre, el cual le corresponde contra todo Estado, debiendo considerarse como axioma en este punto el que toda persona pueda pertenecer al cuerpo político que quiera, y que, por tanto, ningún Soberano puede imponer al hombre la ciudadanía contra su voluntad expresa ó presunta, ni impedir á los que la hayan adquirido renunciar á ella y elegir otra.» El derecho de expatriarse y de naturalizarse en el extranjero debe considerarse—añade—como uno de los derechos internacionales del hombre».

Según Laurent, la libertad individual, proclamada por la Declaración de los Derechos del hombre, tiene por consecuencia evidente que el hombre no esté ligado perpetuamente á su patria. No debe romper con ligereza—expresa—los lazos que la Naturaleza ha formalizado, pero no debe estar encadenado á un régimen y á unas leyes que reprueben su conciencia.

Las cartas de naturaleza se conceden por el Ministerio de la Gobernación respecto de la Península, y por el de Ultramar respecto de las colonias, otorgándose generalmente las llamadas de

del tit. XIV, lib. I de la Novísima Re-

ta de naturaleza? No existe precepto lo que corresponde concederla por el ión ó el de Ultramar, parécenos lógico se en cuenta los Reglamentos estable-administrativo de dichos Ministerios. bernación rige el de 22 de Abril de 1890, os artículos 8.º y 9.º, que dicen lo si-

tes administrativos se incoarán de ofi-nteresada. . En el primer caso, se abri-l que lo ordene; en el segundo, con la que los motive.

romoviendo un expediente estarán fir-ó por sus representantes, acompañando o público que acredite el mandato.

rán distinguiendo los puntos de hecho do con claridad en la súplica lo que se

solicita.

En el escrito señalará el interesado su domicilio y residencia habitual ó la de su representante.»

Estimamos aplicable también el art. 14, declarativo de que se oirá al Consejo de Estado en los casos en que lo disponga la ley,

(1) Nota 5.ª (*Adición de 7 de Septiembre de 1716 á la Instrucción de 1588 para el gobierno de la Cámara.*)—Las naturalezas para extranjeros es una habilitación para que puedan gozar y tener en estos reynos todos y cualesquier oficios, honores, dignidades, rentas y preminencias que tienen los naturales, sin distinción ni diferencia alguna; sus clases son quatro: la primera, absoluta, para gozar de todo lo eclesiástico y secular sin limitación alguna; la segunda para todo lo secular; la tercera para poder obtener cierta cantidad de renta eclesiástica en Prebenda, Dignidad ó pensión, sin exceder de ella; y la quarta es para lo secular, y solo para gozar de honras y oficios como los naturales, exceptuando todo lo que está prohibido por la condición de millones. Para las tres primeras precede á su concesión el consentimiento del Reyno, escribiendo cartas á las ciudades y villas de voto en Cortes, excepto quando las tales naturalezas son del número que ha solido conceder el Reyno al tiempo de disolverse las Cortes generales.

puesto que así lo ordena el art. 48 de la ley orgánica del Consejo de Estado de 17 de Agosto de 1860, y el 22, pár. 2.º, en cuanto manifiesta que los interesados, en cualquier estado del asunto, antes de que recaiga sentencia definitiva, podrán presentar los documentos que estimen útiles á su defensa.

Real decreto de 21 de Septiembre de 1888, confirmado y modificado por el de 13 de Junio de 1890. — Rige para el Ministerio de Ultramar el Reglamento de 21 de Septiembre de 1888, modificado en parte por el de 13 de Junio de 1890, cuyo art. 8.º es pertinente y dice así:

«Art. 8.º Los escritos promoviendo un expediente administrativo, estarán firmados por los mismos interesados ó por sus representantes ó apoderados, acompañando en este caso los documentos públicos que acrediten la representación ó el mandato, ó la carta ú oficio en que se les autorice para representante. Si el interesado no supiese firmar, lo hará otra persona de la misma vecindad á su ruego.

Dichos escritos se redactarán procurando distinguir los puntos de hecho y los de derecho y expresando con claridad en la súplica lo que solicita.

En la parte superior de los documentos que se acompañen se pondrá por el interesado un número de orden y un epígrafe de su contenido. Si el interesado los presentase en otra forma, lo hará el encargado del Registro general.

En el expresado escrito, el interesado señalará su domicilio y residencia habitual.

d) *Vecindad.*—El inciso 4.º del art. 17 del Código declara que son españoles los que, sin haber obtenido carta de naturaleza, ganan la vecindad en cualquier pueblo de España.

No contiene el Código precepto expreso acerca de la manera de adquirir la vecindad, ni existe disposición legal especial respecto de esta materia, aparte de la ley 3.ª, tít. XI, libro VI de la Novísima. Ésta la estimamos vigente, en su esencia al menos, puesto que el Código no habla de la materia que constituye su contenido, razón por la cual la transcribimos: «Debe considerarse por vecino, en primer lugar, cualquier extranjero que obtiene privilegio de naturaleza, el que nace en estos Reynos, el que en ellos se convierte á nuestra Santa fe católica; el que, viviendo sobre sí, establece su domicilio; el que pide y obtiene vecindad

principio es la naturaleza misma del matrimonio, que de dos seres hace uno, dando preeminencia al esposo sobre la esposa.

Sostiene también Fiore el criterio del Código español, porque dice que el principio de la unidad de la familia se comprometería gravemente si el marido y la mujer pudiesen tener diferente ciudadanía.

Aparte de estos fundamentos, el principal es la voluntad presunta de la mujer. Al casarse ésta con individuo de distinta nacionalidad de la suya, se *presume* que consiente en perder su nacionalidad y adquirir la de su marido, consiguiendo así la unidad legislativa del matrimonio.

Laurent manifiesta que en teoría prefiere la doctrina inglesa, que permite conservar á cada uno de los esposos la nacionalidad que tenían al casarse, en atención á que el cambio de nacionalidad es un hecho voluntario, puesto que implica la pérdida de un derecho á la vez que la adquisición de otro. Pero tampoco combate la doctrina francesa (igual á la española), y, por el contrario, después de expresar que el fundamento consignado por Boulay es importante, dice que el matrimonio produce el efecto de imprimir á la mujer la nacionalidad del marido por su naturaleza, es decir, por razón del lazo íntimo que establece entre los esposos.

La mayoría de los autores estudian la cuestión de si el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio lleva consigo igual cambio en la de la mujer, cuestión tratada también con su reconocida competencia por el ilustre catedrático Sr. Azcárate al discutirse en el Congreso jurídico ibero-americano la Memoria del Sr. Pedregal, «El matrimonio y divorcio en el Derecho internacional».

La opinión de Laurent es negativa. Dice que la mujer cambia de nacionalidad al casarse porque el matrimonio implica el consentimiento, supone una abdicación voluntaria de la patria, y en este sentido el cambio de nacionalidad es voluntario, pero que no sucede esto existente ó ya celebrado el matrimonio, porque al casarse conserva ó adquiere una nacionalidad, es un derecho y no puede despojársele de él. Este derecho—expresa—lo ha adquirido al casarse, esto es, por su voluntad, y no puede ser arrebatado por una voluntad extraña.

Fiore se muestra también partidario de la doctrina defendida

por Laurent. Dice á este efecto que cuando una mujer se casa con extranjero, el cambio de nacionalidad de aquélla es voluntario, porque sabe que al unirse á un extranjero pierde *ipso facto* su ciudadanía y adquiere la del marido, y dependiendo de ella aceptar ó no la unión matrimonial, es indudable que al casarse consiente implícitamente la pérdida de su nacionalidad y la adquisición de la nueva, pero que casada ya no puede prever que el marido la obligue á cambiar de nacionalidad.

Los que sostienen la opinión contraria alegan los mismos razonamientos que sirven de base al precepto general de que la mujer tiene la nacionalidad del marido, ó sea: la naturaleza del matrimonio que exige la unidad de legislación de los esposos, y la presunción de que sabiendo la mujer que debe tener la condición jurídica de su esposo, claro es que ha de seguirle en todos los cambios de ella.

Nosotros compartimos la opinión de Laurent, Fiore, y la del ilustrado catedrático Azcárate, que en el Congreso jurídico llamaba la atención sobre el peligro para la mujer de admitir la contraria en la materia de divorcio, presentando el ejemplo de un diplomático extranjero (italiano) que se naturalizó francés para conseguir el divorcio absoluto que no admitía la legislación italiana. Nosotros vamos más allá: creemos que la mujer no debe perder la nacionalidad por el mero hecho del matrimonio. Cabe hablar de presunción de voluntad tratándose de los hijos menores, porque éstos no pueden manifestarla; cuando puede expresarse claramente, ¿para qué hablar de presunción? Esta es supletoria; rige cuando no puede conocerse la voluntad expresa. Pruébalo bien claramente el art. 19. Éste permite á los hijos, llegada su mayor edad ó emancipación, optar por la nacionalidad española. ¿Por qué? Porque pueden expresar su voluntad; luego donde hay igual razón debe aplicarse igual derecho, y por tanto, á la mujer debe permitírsele que pacte la nacionalidad que estime conveniente.

II. *Pérdida de la nacionalidad.*—La adquisición y pérdida de la nacionalidad, así como todos los cambios de la misma, deben tener por causa la voluntad expresa ó tácita de la persona. Así lo reconoce el Código español, de acuerdo con todos los extranjeros, puesto que en los artículos 20 y 22 enumera los casos en que la nacionalidad se pierde por virtud de determinados actos

del individuo. Esta es la regla general, pero cambio de nacionalidad no depende de la voluntad, sino de imposición de la ley.

A) Voluntad expresa. a) Naturalización voluntaria.—Quien adquiere voluntariamente pierde la de origen. Esta afirmación es la que dice Laurent, de la aplicación del principio de tener dos patrias. Es la expresión más manifiesta de la persona, porque al adquirir una nueva nacionalidad *ipso facto* ó *in mente* á la que tenía.

b) Empleo de otro Gobierno, ó entrada al servicio de una potencia extranjera sin licencia del R. E. con notable acierto el fundamento de la pérdida por esta causa.

La nacionalidad—dice—no da solamente derechos, también deberes, y el primer deber del ciudadano es dedicar su vida y sus talentos al servicio de la patria para ejercer funciones públicas en país extranjero, cumplir los deberes que la patria le impone, se debe á la patria, pues hace en beneficio de ella lo que debería hacer por el Estado doméstico — como una naturalización tácita.»

Nuestro Código admite el principio, con lo que el español no pierde la nacionalidad á pesar de haberse hecho con licencia del Jefe del Estado.

B) Voluntad presunta. Matrimonio.—No necesita extensas consideraciones sobre este modo de perder la nacionalidad, después de lo dicho en igual caso en el artículo anterior. La española que se case con un extranjero pierde la española, porque sabido es que nadie puede tener dos patrias.

C) Naturalización forzosa.—En oposición á la individual voluntaria, ó sea la que depende de la voluntad de la persona, existe la forzosa, proveniente de las Naciones. Existen, en efecto, Estados que exigen la nacionalidad á toda persona que resida en él la cualidad de extranjero implica la pérdida de la nacionalidad que

principio de Derecho internacional privado, que proclama la incompatibilidad de dos patrias en un mismo sujeto.

Este principio cabe aplicarlo con rigor cuando la naturalización sea voluntaria, pero siendo forzosa, la Nación á que pertenezcan los individuos á los que se impone el cambio de nacionalidad, han de procurar salvar la de origen. A conseguir esto tiende el art. 26, conforme al cual los españoles que trasladen su domicilio á país donde, sin más circunstancia que la residencia en él, sean considerados naturales, pueden conservar la nacionalidad, manifestando que esta es su voluntad al Agente diplomático ó consular español, que les inscribirá en el Registro de españoles residentes, así como á su cónyuge é hijos, si fueren casados.

III. *Recuperación de la nacionalidad.*—Libre debe ser la persona para elegir su nacionalidad; libre debe ser también para recobrar la que renunció. Si puede suponerse que un ciudadano pierde voluntariamente su patria —dice Boulay,—debe suponerse con más razón que tendrá el deseo de recobrarla. El que esto desee—añade,—no debe ser considerado un extranjero, sino un hijo que vuelve al seno de su familia.

La ley patria no establece iguales requisitos para recobrar la nacionalidad española: exige más en unos casos que en otros, en armonía con la causa que ha determinado la pérdida de la nacionalidad. Examinaremos cada uno de ellos.

a) *Manifestación de la voluntad de recobrar la nacionalidad.*—Hay un caso en que este solo requisito basta para recuperar la nacionalidad española: el del nacido en país extranjero de padre ó madre españoles, que haya perdido la calidad de español por haberla perdido sus padres. En este caso, con la manifestación de querer recobrar la nacionalidad española ante el encargado del Registro civil si reside en España, ante Agente consular y diplomático si reside en el extranjero, ó dirigiéndose al Ministro de Estado si en el lugar donde residiere no hubiere Agente diplomático ó consular, recobra la nacionalidad perdida.

El fundamento de tal disposición (art. 24) es comprensible. Habiendo perdido *involuntariamente* su nacionalidad, puesto que ha sido por causa de actos de sus padres, es lógico proclamar se pueda recobrarla mediante la manifestación de su voluntad, es un justo y debido acatamiento á ésta.

Aunque el art. 24 no lo dice expresamente, tanto por referirse el artículo al 19, como por el principio que informa el estatuto personal, se sobreentiende que la manifestación ha de hacerse llegada la mayor edad ó emancipación con arreglo á la ley personal, es decir, á la que tenga el sujeto, ó sea la de los padres.

b) *Manifestación de la voluntad de recobrar la nacionalidad y residencia en el territorio español y renuncia á la protección del pabellón del país extranjero.*— Hay dos casos en que, conforme al Código, no basta la mera manifestación de la voluntad de recobrar la calidad de español, sino que han de acompañar los otros requisitos mencionados en el epígrafe, los comprendidos en los artículos 21 y 22. «El español que pierde esta calidad por adquirir naturaleza en país extranjero — dice el art. 21 — podrá recobrarla volviendo al Reino, declarando que tal es su voluntad ante el encargado del Registro civil del domicilio que elija para que haga la inscripción correspondiente, y renunciando á la protección del pabellón de aquel país.» «La española que casare con extranjero podrá — declara el párrafo segundo del art. 22 — recobrar la nacionalidad española llenando los requisitos expresados en el artículo anterior.»

La calidad de español se recobra, pues, en estos casos, mediante el cumplimiento de las circunstancias siguientes: 1.^a Volver á España. 2.^a Declarar que su voluntad es ser español ante el encargado del Registro civil del domicilio que haya elegido. 3.^a Renunciar á la protección del pabellón bajo el que vivía (artículo 21 del Código). 4.^a Hacer inscribir esta declaración y renuncia en el Régistro civil (art. 106, ley íd.).

Con todo estamos conformes menos con la obligación que la ley impone de trasladar la residencia á España. Puede ocurrir muy bien que la persona que trate de recobrar la condición de español tenga todos ó sus principales intereses en el país donde viva, sin que le sea posible abandonarlos, y se le pone en el duro trance de no poder satisfacer su deseo, ó de tener que descuidar ó realizar (en el sentido usual de la palabra) su capital, la industria ó el comercio á que esté dedicada, acaso con notable quebranto. De aquí que la disposición á que nos venimos refiriendo la creamos poco acertada, pues su único resultado ha de ser el de restringir, limitar é impedir que se recobre en muchos casos los cambios de nacionalidad española.



artículo 22; en el de la nulidad, entendemos que no hay para qué hablar de recuperación de nacionalidad, puesto que no habiendo matrimonio no ha podido perder la que tenía. En la disolución, para recobrar la mujer española esta cualidad, debe llenar los requisitos del art. 21; la nulidad produce *ipso facto* el efecto de continuar la mujer con su nacionalidad, sin necesidad de llenar ninguno de los requisitos mencionados en el indicado artículo.

c) *Real habilitación*.—Hay un caso en el que la pérdida de la nacionalidad implica un olvido de los deberes que todo ciudadano debe á su patria, puesto que en vez de cumplirlos en ella, los llena en otro país. Es el del art. 20, ó sea la admisión de un empleo, el servicio militar en país extranjero.

El español no se ve privado ni aun en este caso de expresar su deseo de recobrar su nacionalidad perdida; pero, por su naturaleza especial, por el alejamiento que supone de la idea de la patria, el legislador ha exigido el requisito de la Real habilitación.

Derecho vigente.—*Derecho general.*—*Nacionalidad española.* Son españoles:

1.º Los nacidos en territorio español de padres españoles ó de padres desconocidos.

2.º Los nacidos en territorio español de padres extranjeros, si los padres manifiestan ante funcionario competente que optan, á nombre de sus hijos, por la nacionalidad española, renunciando á otra. (*Artículos 17, núm. 1.º, y 18 del Código, y art. 1.º, núm. 1.º, de la Constitución de 1876.*)

3.º Los nacidos en territorio español de padres extranjeros si dentro del año siguiente á su mayor edad ó emancipación manifiestan ante funcionario competente que quieren gozar de la calidad de españoles. (*Artículos 17, núm. 2.º, y 19 del Código; art. 103 de la ley del Registro civil.*)

4.º Los hijos de padres españoles nacidos fuera de España. (*Artículos 17, núm. 1.º, del Código, y 1.º, núm. 2.º, de la Constitución de 1876.*)

5.º Los que hayan obtenido carta de naturaleza, renunciando previamente á su nacionalidad anterior, jurado la Constitución é inscrito como españoles en el Registro civil. (*Art. 17, núm. 3.º, y art. 25 del Código; art. 1.º, núm. 3.º, de la Constitución de 1876; 101 de la ley del Registro civil.*)

con el dictamen de este Consejo, se consigna que los artículos 98 y 103 de la ley provisional del Registro civil de 17 de Junio de 1870 (que se ocupan de la inscripción de la nacionalidad) no se refieren al caso en que meramente se trate de la de ciudadanía en virtud de la nacionalidad española adquirida por el hecho del nacimiento y reconocida por el Estado español en alguna de las formas que la Constitución y las leyes tienen establecidas, pues, como se dice en dicha Real orden, en todas las Constituciones, á contar desde la de 1845, se ha declarado que *son españoles las personas nacidas en territorio español*, y los artículos de la ley de Registro civil no tienen por objeto declarar ni otorgar derechos, sino establecer tan sólo, como toda ley adjetiva, los procedimientos para hacer constar los hechos en virtud de los cuales se adquieren ó se pierden aquéllos.

La mencionada Real disposición es completamente aplicable al caso actual, puesto que se trata de *un individuo nacido en España*, que es mayor de edad, que desde su nacimiento ha residido en este país, y que, según afirma la Comisión provincial, ha redimido el servicio de las armas, y esto último por sí solo, con arreglo á la doctrina consignada en dicha Real orden, significaría por sí mismo un acto de opción á la nacionalidad, *si ya no la tuviera adquirida por el nacimiento*.

Con efecto, la Constitución de la Monarquía, en su art. 3.º, limita á los españoles la obligación de servir en el Ejército, y la vigente ley de reemplazos excluye á los extranjeros (1), conformándose con el art. 24 del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852, que los declara exentos de dicho servicio militar, á no haber optado por la nacionalidad española.»

Inscripción de ciudadanía en el Registro civil.—Artículos 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 del Código; artículos 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 de la ley del Registro.

Real orden de 9 de Septiembre de 1837 (Gracia y Justicia).—«En vista del expediente instruido en esa Dirección general á consulta del Juez municipal del distrito de la Universidad de esta Corte, sobre si procede inscribir en el Registro civil la de-

(1) *Ley de reclutamiento del Ejército de 11 de Junio de 1885.*—Artículo 14. Para servir en el ejército en cualquiera clase se admitirán solamente *españoles*.

Que al tener noticia D. Ignacio Baüer, padre de D. Gustavo, de que la petición de su hijo se hallaba pendiente de resolución en esa Dirección general, presentó en la misma una certificación de haber redimido á su hijo del servicio militar activo, para el cual había sido sorteado en el reemplazo de 1886, y una instancia en la que manifestó: que nacido su hijo en esta Corte, es desde luego español, con arreglo al art. 1.º, caso 1.º de la Constitución del Estado, circunstancia que determina el ser aplicable á sus actos del estado civil el estatuto personal de España, según el cual la emancipación puede suplirse con el consentimiento paterno que ha prestado á su hijo para que éste reclame la nacionalidad española; que si se aplicase el art. 103 de la ley del Registro, atendiendo sólo á su letra y no á su innegable espíritu, resultaría que se hallaría en suspenso durante veinticinco años la condición de español ó extranjero de los hijos de extranjero que naciesen en España; que el art. 24 del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852 resuelve la cuestión al determinar que así los domiciliados como los transeúntes y sus hijos, cuando no hayan optado por la nacionalidad española, están exentos del servicio militar, lo cual prueba que la opción puede hacerse antes de llegar á la edad en que debe prestarse dicho servicio; y, por último, que el proyecto de Código civil, fundado en el principio de que la nacionalidad no puede estar en suspenso veinticinco años, declara en el art. 17 que «los hijos, mientras permanezcan en la patria potestad, tienen la nacionalidad de sus padres», siendo consecuencia de esta disposición el que para que los nacidos de padres extranjeros en territorio español puedan gozar de los beneficios que les otorga el núm. 1.º del art. 15, «será requisito indispensable que los padres manifiesten de la manera y ante las autoridades expresadas en el art. 16, que optan, á nombre de sus hijos, por la nacionalidad española, renunciando á toda otra»; y suplicó que en virtud de estas consideraciones se declarase que debía inscribirse en el Registro civil la opción por la nacionalidad española, formulada por su hijo D. Gustavo Baüer:

Que al informar de nuevo el Negociado correspondiente de esa Dirección, insistió en su anterior dictamen, exponiendo que, en el supuesto de que la emancipación pudiera suplirse por el consentimiento paterno, debía tenerse presente que además de la

emancipación, exige el art. 103 de la ley la mayor edad, y como falta este requisito, aun cuando existiera el de la emancipación, todavía no podría considerarse á D. Gustavo Bauer con derecho á optar por la nacionalidad española; que aun en la hipótesis de que por la aplicación literal del art. 103 quedara en suspenso durante la menor edad la nacionalidad de los hijos de extranjeros, esto no sería bastante para prescindir de su observancia, porque cuando la letra es clara, no es lícito contrariarla á pretexto de su espíritu, mayormente no habiendo el legislador expresado el genuino y verdadero sentido de dicho precepto; que esta consideración podrá ser válida en derecho constituyente, pero no en el constituido; que la disposición relativa al servicio militar del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852 es muy anterior á la ley del Registro civil, y que la existencia en el proyecto de Código de un artículo contrario á la misma ley no es razón para que pueda dejar de cumplirse ésta, mientras aquel proyecto no adquiriera la sanción legislativa:

Que en vista de lo expuesto, la Dirección propuso, y así se acordó por este Ministerio, que, dada la transcendencia de la cuestión promovida, emitiesen informe las Secciones de Gracia y Justicia y de Gobernación del Consejo de Estado, á cuyo efecto se remitió el expediente á este alto Cuerpo:

Y que, habiendo informado las expresadas Secciones, se dió cuenta del expediente en Consejo de Ministros:

Considerando que las dudas suscitadas con motivo de la pretensión formulada en este expediente, nacen de hallarse en oposición el tenor literal de los artículos 98 y 103 de la ley de Registro civil, con otros preceptos legales de carácter substantivo y fundamental, anteriores y posteriores á la promulgación de dicha ley:

Considerando que las Constituciones de 1845, 1869 y 1876 han establecido una misma y terminante declaración en su art. 1.º, estatuyendo que son españoles «todas las personas nacidas en territorio español;» pero que este precepto constitucional no ha tenido desarrollo en la legislación posterior sobre adquisición y pérdida de la nacionalidad española, ó lo ha tenido poco en armonía con el mismo principio que establece, á pesar de que la segunda de dichos Constituciones, la de 1869, declaró también en su art. 1.º que la nacionalidad española se adquiriría, conser-

varía y perdería con arreglo á lo que determinasen las leyes, por cuya razón ha de estimarse como legislación vigente sobre nacionalidad, aun después de publicados los tres Códigos fundamentales aludidos, la comprendida en el tit. XIV, libro I de la Novísima Recopilación, y especialmente en la nota quinta de este título, en que se inserta la adición hecha en 7 de Septiembre de 1816 á la instrucción de 1588:

Considerando que la deficiencia de estas leyes, para ser aplicadas en armonía con los preceptos constitucionales, se ha venido supliendo con la única disposición dictada con posterioridad á la promulgación del primero de aquéllas, ó sea el Real decreto llamado de extranjería de 17 de Noviembre de 1852, en cuyo artículo se declara extranjeros á los nacidos en territorio español de padres extranjeros, si no reclaman la nacionalidad de España; declaración perfectamente antitética al texto constitucional, puesto que éste reconoce *ipso facto* como españoles á los que nacen en territorio español, sean ó no hijos de padres extranjeros:

Considerando que el Real decreto citado quiso suplir la falta de una ley sustantiva que determinase la forma en que debiera adquirirse, conservarse y perderse la calidad de español, reconociendo al propio tiempo un principio innegable de derecho internacional, al tenor del cual no es lícito privar á los padres extranjeros del derecho de conservar para el hijo nacido en territorio español la nacionalidad de los mismos, ni tampoco privar al hijo del propio derecho:

Considerando que el expresado Real decreto nada dispone respecto al tiempo y forma en que haya de hacerse la reclamación á que abre camino su art. 1.º, de cuyo silencio se deduce racionalmente que puede hacerse en cualquier tiempo; deducción que confirma el art. 24 del mismo decreto, en que se declara que los hijos de extranjeros estarán exentos del servicio militar en España cuando no hayan optado por la nacionalidad española, toda vez que prestándose en España antes de haber llegado á la mayor edad, es evidente que la opción puede y debe hacerse antes de que el interesado haya llegado á ella:

Considerando que una vez admitida la base de que la opción puede hacerse por los menores, claro es que su capacidad para este acto ha de ser suplida por sus padres, en cuya potestad se

oportunamente una resolución definitiva en asunto tan importante y grave:

Considerando que si bien el precepto constitucional repetidamente citado, y los de las leyes sustantivas, comprendiendo en este número el Real decreto de 1852, parece que se oponen á los artículos 96, 98 y 103 de la ley del Registro civil, la verdad es que estos últimos no tienen por objeto declarar ni otorgar derechos, ni tampoco privar de ellos á persona alguna, sino tan sólo establecer, como toda ley adjetiva, los procedimientos para hacer constar los hechos en virtud de los cuales se adquieren ó se pierden aquéllos:

Considerando que, en efecto, el primero de dichos artículos declara que los cambios de nacionalidad sólo producirán efecto desde su inscripción en el Registro; que el 98 prohíbe hacer esta inscripción sino en virtud de declaración de persona interesada que se halle emancipada y haya cumplido la mayor edad, y que el 103 ordena que los nacidos en territorio español de padres extranjeros que quieran gozar de la nacionalidad española deberán declararlo así en el término de un año, á contar desde el día en que alcancen la mayor edad, si á la sazón están ya emancipados:

Considerando que si, como parece deducirse de la letra de dichos artículos, el menor, hijo de padres extranjeros y nacido en España, que según la Constitución es español por el hecho mismo de su nacimiento, no adquiere los derechos y obligaciones de tal español hasta su emancipación, y carece, por tanto, durante la menor edad de todos los derechos civiles, que sólo pueden arrancar de su inscripción en el Registro, vendría á resultar que el referido menor no sería extranjero, porque la Constitución le declaraba español, y á pesar de ello no disfrutaría de los derechos que esta calidad le otorga en cuanto á su capacidad y estado civil:

Considerando que estos preceptos de la ley adjetiva no son bastantes para dejar en suspenso y sin cumplimiento el artículo constitucional y la legislación sustantiva en la materia, por lo cual hay que presumir que ni el art. 98 ni el 103 antes citados impiden que la inscripción en el Registro como español del interesado á que se refiere este expediente, se verifique antes que llegue á la mayor edad, cuando suple su capacidad legal el consentimiento paterno; y que si por acaso lo impidieran, el Go-

en su deber adoptando una resolución de preceptos legales, y que evite los perjuicios de tener privado de su estado por el hecho de no hallarse emancipado: en el caso de admitirse la interpretación del presente caso, siempre sería la ley de Registro civil se refiere á inscripcíon, adquisición, recuperación ó pérdida de la nacionalidad, á los que quieran gozar de la nacionalidad, donde se sigue que en ambos artículos no que pretenda su inscripción por haber nacido en España, sino de un español que nació tal como del art. 1.º de la Constitución, y que no se adquiere la nacionalidad por ningún acto positivo de optar, sino de *inscribir* en el Registro civil de un español que lo es *ipso facto* por haber nacido en España, y no ejercita ningún derecho de opción: en otra parte, que el art. 103 señala un término para la inscripción, el cual puede estimarse como un plazo, que obsta para que antes de espirar dicho plazo se haga en cualquier tiempo la inscripción. El art. 103 tiene por objeto declarar que, para la emancipación, no cabe ya optar ni adquirir la nacionalidad sino obteniendo carta de naturaleza, que antes de tal época, y supliendo la falta del padre, como en todas las demás circunstancias, se debe hacer la correspondiente inscripción: en consecuencia, puede variar el aspecto de la cuestión planteada, la circunstancia de que los interesados no anotaron su nacimiento en el Registro civil, por lo que prescindiendo de los motivos que justificaban en aquella época el no haber anotado el nacimiento en la Cancillería de un consulado, los padres, no puede atribuir por sí sola la nacionalidad francesa, ni estaba en la facultad de la ley española ni extranjera, atribuirle la nacionalidad que le correspondía, ni por su nacimiento en España, ni por sus padres: en consecuencia, que en el caso de este expediente no

necesita el interesado adquirir la nacionalidad ni optar por ella, porque la tiene adquirida por el hecho de su nacimiento y reconocida por el Estado español en virtud de un acto tan significativo como el de haberle sometido al servicio de las armas, servicio que, prestado por él espontáneamente y sin ninguna clase de reclamaciones, según resulta del expediente, implica al propio tiempo un acto de opción tan terminante como fuera menester, si de caso de opción se tratara, con cuyos actos ha demostrado la Administración que no reconoce en dicho individuo la cualidad de extranjero:

Considerando que el art. 3.º de la Constitución sólo impone á los españoles el deber de servir en el Ejército, que los artículos 1.º y 14 de la vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 11 de Julio de 1885, y que los tratados celebrados con varios Estados, entre ellos con el de Austria-Hungría en 3 de Junio de 1880, excluyen y eximen respectivamente del Ejército y servicio militar á los extranjeros, por cuya razón el hecho de haber exigido el Gobierno español á un hijo de padres extranjeros el servicio á que sólo siendo español estaba obligado, y que únicamente podía prestar teniendo dicha calidad reconocida y aceptada por el interesado, con el consentimiento paterno, equivaldría siempre á la pérdida de cualquier otra nacionalidad, si la hubiera tenido adquirida, y en todo caso significa la opción por la nacionalidad española, si tal opción se cree indispensable á pesar del texto terminante del art. 1.º de la Constitución:

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Consejo de Ministros, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, ha tenido á bien declarar:

1.º Que los artículos 98 y 103 de la ley Provisional de Registro civil de 17 de Junio de 1870 no se refieren al caso en que meramente se trate de la inscripción de ciudadanía, en virtud de la nacionalidad española adquirida por el hecho del nacimiento, y reconocida por el Estado español en alguna de las formas que la Constitución y las leyes tienen establecidas.

2.º Que para el acto de la opción por la nacionalidad española, en los casos que para adquirir dicha nacionalidad sea necesaria, suple, con arreglo á la legislación civil, la emancipación del hijo el consentimiento del padre, y que en tal concepto puede

interesada en solicitar la inscripción de la ley del Registro civil, acción que en ese sentido haga la autoridad competente.

90.—Pasado á informe de la Junta del Consejo de Estado el expediente interpuesto por D. Luis Vergue, Comisionado provincial, que le fue designado Concejal del Ayuntamiento de Lugo, el Ayuntamiento ha emitido con fecha 25 de mayo de 1887 el siguiente:

Interpuesto el recurso de alzada interpuesto por D. Luis Vergue Ortega, al que se ha unido posteriormente un escrito de D. Antonio Rodríguez Pérez, pidiendo el primero que se revoque el acuerdo de la Comisión provincial de Lugo, que le declaró incapacitado para ser Concejal en el Ayuntamiento de la capital por ser súbdito francés, y solicitando el segundo la confirmación del mencionado acuerdo y que se revoque en cuanto declaró que no había lugar á proclamarle á él Concejal.

Resulta que celebradas las elecciones para renovar el Ayuntamiento en 1887, se reclamó contra la proclamación de D. Martín Heliodoro Rúa, que venía siendo Alcalde y que en tal concepto había presidido una mesa interina y la Junta de escrutinio; contra D. Luis Vergue, porque desde 1874 estaba inscrito como súbdito francés y también su padre en el Consulado de la Coruña, y porque en tal concepto no había sido comprendido en ningún alistamiento para el Ejército español, y contra D. Laureano Tato, que fué electo en el colegio de la Plaza, donde no había más que dos vacantes.

El Ayuntamiento y los comisionados de la Junta general de escrutinio no se estimaron con facultades para resolver respecto á este último, y declararon con capacidad á Rúa y á Vergue, fundándose en cuanto á éste en que se hallaba comprendido en las listas de compromisarios para Senadores de 1886 y aquel año y como mayor contribuyente, que no consta exento del impuesto de consumos como extranjero, que nació en la Coruña de padre francés y madre española, en que está empadronado en Lugo desde 1880, y en que figura en las listas para Concejales como elector y elegible.

Reclamados estos acuerdos, sólo consta que entendiera en el asunto, por lo que se relaciona con este expediente, la Comisión provincial en cuanto á la capacidad de Vergue, y aunque no se acompaña copia de su acuerdo, por las referencias que á él se hacen en los documentos que últimamente se han unido á él, aparece que se fundó en que, como inscrito en el Consulado francés, no era súbdito español.

Aparece también de la correspondiente certificación, que Eduardo Vergue Ortega, hermano del reclamante, fué excluído en concepto de súbdito francés de la reserva de 125.000 hombres.

Antonio Rodríguez Pérez, que había solicitado de la Comisión provincial en 1887 que se le proclamara á él Concejal, por seguir á Vergue en el número de votos, al publicarse las listas para la elección celebrada en Diciembre último, reclamó contra la inclusión en ellas de Vergue, y el Ayuntamiento primero, la Comisión provincial después y la Audiencia del territorio por último le han declarado excluído de las mismas.

La Subsecretaría de ese Ministerio estima que habiendo gozado D. Luis Vergue vecindad española, no debe revocarse el acuerdo de la Comisión provincial de Lugo.

La Sección del Consejo llama la atención de V. E. sobre el retraso que se observa en la tramitación de este expediente y que da lugar á que se vaya á resolver con relación á lo que constituía la situación legal del interesado en 1887, modificada por hechos y por leyes posteriores.

Con efecto, al ser electo Concejal Vergue en dicho año, no se reclamó contra su inclusión en las listas como elector y elegible dentro del plazo legal; fué electo y demostró que figuraba también en las de compromisarios como mayor contribuyente, y en el padrón de vecinos de Lugo desde 1880; y es indudable que con arreglo á la ley 3.^a, tít. XI, lib. VI de la Novísima Recopilación, viviendo con el producto de su propiedad había adquirido vecindad en estos Reinos, y que, según dispone el art. 1.^o, pár. 4.^o, de la Constitución de la Monarquía, podía conceptuársele español.

Pero no habiéndose inscrito como tal en el Registro civil ni cumplido después con los preceptos que contiene el *art. 25 del Código*, es también evidente que no ha perdido su condición de extranjero, por lo cual ha sido excluído ahora de las listas electorales, y en tal concepto es obvio que no puede continuar siendo

Concejal, y que estuvo en su lugar el acuerdo de la Comisión provincial de Lugo incapacitándole, y también en cuanto declaró que no podía proclamar al que le seguía en número de votos por ser para ello incompetente.

Por lo expuesto,

La Sección opina que procede confirmar el acuerdo de la Comisión provincial de Lugo, en que declaró incapacitado para ser Concejal al electo por la capital D. Luis Vergue y Ortega.»

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

Naturalización.—Art. 17, núm. 3.º del Código; art. 1.º, número 3.º, Constitución de 1876. Las que se conceden generalmente son las de clase cuarta de que habla la nota 5.ª del tít. XIV, libro I de la Novísima Recopilación. La concesión se efectúa por el Ministro de la Gobernación ó de Ultramar, según donde resida la persona que desee obtenerla, en los términos que indican los siguientes Reales decretos:

Real decreto de 2 de Noviembre de 1888.—Conformándome con lo expuesto por el Ministro de la Gobernación, y de acuerdo con el dictamen de la Sección de Gobernación del Consejo de Estado,

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se concede á D...., súbdito francés, la nacionalidad española que tiene solicitada, entendiéndose que ésta ha de ser de las llamadas de *cuarta clase*, con arreglo á las leyes.

Art. 2.º La expresada concesión no producirá efecto alguno hasta tanto que el interesado preste juramento de fidelidad á la Constitución del Estado y obediencia á las leyes, con renuncia de todo pabellón extranjero, y sea inscrito en el Registro civil.» (*Gaceta de 1.º de Diciembre, id.*)

Real decreto de 12 de Junio de 1892. (*Gaceta de 21 de idem, Gobernación.*)—Conformándome con lo propuesto por el Ministro de la Gobernación, y de acuerdo con la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado:

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se concede á D.... la nacionalidad que tiene solicitada.

Art. 2.º La expresada concesión no produce efecto hasta que el interesado preste juramento de fidelidad al Estado y obediencia á las leyes, renuncie al pabellón extranjero y sea inscrito en el Registro Civil.

Real decreto de 15 de Julio de 1892. (Ministerio de Fomento.)
Artículo 1.º Se concede al súbdito chino cristiano en Filipinas, la naturalización española que tiene solicitada, tendiéndose que ésta ha de ser de cuarta clase de las leyes de la Monarquía.

Art. 2.º La expresada concesión no produce efecto hasta que el interesado haya prestado el juramento de fidelidad al Estado, con renuncia de todo pabellón extranjero y sea inscrito en el Registro Civil.

Recuperación de la nacionalidad perdida.— Artículos 106, 107, 108 y 109 del Código; artículos 106, 107, 108 y 109 del Reglamento.

Real orden de 17 de Enero 1887. (Gobernación.)
Instancia documentada presentada en este Ministerio por D. Bessieres y Ramírez de Arellano, natural de España, de veintisiete años de edad, solicitando recuperar la nacionalidad española que ha perdido por haber aceptado el pabellón del Perú:

Resultando que, pasado el expediente á informe de la Gobernación del Consejo de Estado, consiguiese que el interesado hiciese constar la renuncia de los honores y derechos que le fueron otorgados en España, hecha en debida forma ante el Cónsul de la misma en el Perú, para que pudiese recuperar la nacionalidad española perdida:

Considerando que, conformándose este Ministerio con lo que la expresada Sección, y habiéndolo hecho constar al interesado, éste ha presentado nueva instancia solicitando la nacionalidad española expedida por el Cónsul del Perú en esta ciudad, resulta haber hecho constar por escrito ante el Cónsul de la misma, que seando recobrar los derechos de ciudadano español, se le ha concedido la ciudadanía peruana, con todo lo á ésta inherente.

Y teniendo en cuenta, por último, que con la

2.º Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza ganando vecindad con arreglo á las leyes son tenidos por tales.

3.º Todos los demás que residan en España sin haber obtenido carta de naturaleza, ni ganado vecindad, son extranjer^{os} domiciliados ó transeúntes.

4.º Se entenderán domiciliados para los efectos legales los que se hallen establecidos con casa abierta ó residencia prolongada por tres años, y bienes propios ó industriales y modo de vivir conocido, en territorio de la Monarquía, con el permiso de la autoridad superior civil de la provincia.

5.º Se considerarán transeúntes los extranjeros que no tengan su residencia fija en el reino del modo que expresa el artículo anterior.

8.º El extranjero transeúnte que desee domiciliarse debe solicitar la correspondiente licencia de la autoridad superior de la provincia, haciendo constar que reúne las circunstancias requeridas en el art. 4.º

9.º En los Gobiernos civiles de las provincias se formarán y llevarán matrículas ó registros en que se asienten los nombres y circunstancias de los extranjeros que residieren ó quisieran residir en el reino, con separación de las dos clases de domiciliados y transeúntes.

10. En los Consulados de todas las Naciones extranjeras establecidos en España se formarán y llevarán igualmente matrículas ó registros de los súbditos de la Nación respectiva.

12. No tendrán derecho á ser considerados como extranjeros en ningún concepto legal aquellos que no se hallen inscritos en la clase de transeúntes ó domiciliados en las matrículas de los Gobiernos de las provincias ó de los Cónsules respectivos de las Naciones.

Las inscripciones se renovarán en el caso de pasar el extranjero de la clase de transeúnte á la de domiciliado.

ARTÍCULO ESPECIAL.

Tratado de paz y amistad entre el Uruguay de 19 de Julio de 1870, firmado en 9 de Octubre de 1882. (Gaceta 28 Enero id.)—Art. 7.º

Con el fin de establecer y consolidar la unión entre los dos pueblos, convienen ambas partes contratantes en que para determinar la nacionalidad de españoles y orientales se observen respec-

CÓDIGO CIVIL

representante de España, tendrá u
erá á las solemnidades de ratificación y ~~...~~, ~~...~~ que
los efectos consiguientes. (Apéndice 4.º *Cambio é inscrip-
le ciudadanía.*)

art. 27. Los extranjeros gozan en España de los
chos que las leyes civiles conceden á los españoles,
lo dispuesto en el art. 2.º de la Constitución del
do ó en tratados internacionales.

acordancias.—Análogo al art. 27 del proyecto de 1851 é
al 25 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—*Ninguno.*

MENTARIO.—Dos principios reinan en la esfera científica y
positiva respecto de los derechos de los extranjeros: el de
iprocidad y el de la igualdad. El primero, proclamado por
lgo francés, en el que subsiste, afortunadamente en mi-
el de la igualdad se acepta por el italiano (art. 27), por-
s (art. 26) y guatemalteco (art. 51).

¿Cuál de los dos principios es acomodado á razón y á justi-
Cuál debe admitirse? Examinemos los fundamentos, el por
e cada uno de ellos.

La reciprocidad descansa principalmente en razones de con-
encia política, no de justicia y de ciencia. Aun los mismos
ontribuyeron á su planteamiento en el Código francés lo
an claramente.

Conocemos, con todos los filósofos —dice Portalis,— que
ero humano no forma más que una gran familia; pero la
siada extensión de esta familia la ha obligado á separarse
ferentes sociedades que han tomado el nombre de pueblos,
nes, Estados, y cuyos miembros se relacionan por lazos
culares, independientemente de los que los unen al sistema
al. De aquí, en toda sociedad política, la distinción entre
nales y extranjeros.

La humanidad, la justicia, son los lazos generales de la so-

al extranjero, éste podría hoy, por .vi ser contratista, porque es un derecho guientemente del extranjero. Ensalce que, á más de ser conforme á los pr ticia, es un paso dado en el camino c ciones, y rechazamos la reciprocidad y antihumanitario.

El art. 27 emplea el adjetivo *civile* en sentido estricto ni limitarlo al llan repele el espíritu expansivo y amplio jetivo *civiles* está empleado en el artí oposición á públicos, porque fija en toda la esfera jurídica privada del . Éste no goza de los derechos de ca privativos de los nacionales, en cuan política de cada país, y él no reúne e no existiendo esa causa, no cabe rest otras que pudiéramos citar, la ley d que en su art. 270, párrafo 2.º, dice extranjeros; el Real decreto citado e públicas, y el art. 1.º de la ley d de 1878.

El artículo establece la regla gene ción, la determinada en el art. 2.º de l nio de 1876 referente al ejercicio de título profesional; otras, las que se est ternacionales. Así sucede, por ejemp intelectual é industrial que se rijan p

Derecho vigente.—Como en otro entre el *general* y el *especial* ó conteni

El *general* es el establecido en el ar tículo 2.º de la Constitución, y adem de *Noviembre de 1852, cap. III*, en los á continuación:

Art. 21. Así los extranjeros domi tes estarán sujetos, además, al pago c extraordinaria ó personal, de que es seúntes, así como á los impuestos m

Art. 23. Unos y otros estarán exer

un español que alegase cambio de nacionalidad sin haber obtenido la autorización expresada. (C. L., 1852, t. LVII, página 479.)

Decreto-ley de 29 de Diciembre de 1868.—Art. 10. Todo extranjero podrá hacer libremente, en terrenos de dominio público, calicatas ó excavaciones que no excedan de 10 metros de extensión en longitud ó profundidad, con objeto de descubrimientos minerales; para ello no necesitará licencia, pero deberá obtenerla previamente á la autoridad local.

Constitución de 30 de Junio de 1876.—Art. 2.º Los extranjeros podrán establecerse libremente en territorio español, ejercer su industria ó dedicarse á cuálcquiera profesión para cuyo ejercicio no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las autoridades españolas (abogado, arquitecto, médico, etc.)

Los que no estuvieren naturalizados, no podrán ejercer en España cargo alguno que tenga aneja autoridad ó jurisdicción.

Ley municipal de 2 de Octubre de 1877.—Art. 28, párrafo 1.º Los extranjeros gozarán de los derechos que les corresponden en los tratados ó por la ley especial de extranjería (que es el Decreto de 17 de Noviembre de 1852, art. 19).

Ley de 30 de Junio de 1878.—Art. 1.º Todo español ó extranjero que pretenda establecer ó haya establecido en los dominios de su propiedad una industria nueva en los mismos tendrá derecho á la explotación exclusiva de su industria durante determinado número de años bajo las reglas y condiciones que se prevén en esta ley.

Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de Septiembre de 1879.—Artículo 270, párrafo 2.º También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas ó bienes, contra sus personas ó bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el art. 280 (1), si no estuvieren comprendidos en el último párrafo del 281 (2).

(1) Art. 280. El particular querellante prestará fianza y la cuantía que fijare el Juez ó Tribunal para responder de los resultados del juicio.

(2) Art. 281, párrafo último. La exención que prescribe el artículo no es aplicable á los extranjeros si no les corresponde en virtud de tratados internacionales ó por el principio de reciprocidad.

EXTRANJEROS

de 1885 (vi-
ros podré
yes de su
, y á las
la creac
pañol, á
ribunales
enderá si
lecerse po

-Art. 1.º
oles y ex
les, con a
tidades,
España.
los tratac

les. (Véanse éstos en el art. 11.)

Títulos profesionales.—*Real orden de 22 de Fe-*
Resultando que por Real orden de 20 de Enero de
en la *Gaceta* de 25 del mismo mes, se anunció á
tedrá de Clínica quirúrgica de la facultad de Me-
versidad central:

Resultando que dentro del plazo de tres mese
anuncio de convocatoria, presentó instancia D.
neda y Barón, solicitando se le admitiera á opos
testa de presentar, antes de que comenzaran l
correspondiente título de Doctor obtenido en la
dicina de París, y que había de revalidar con l
que se le había concedido por Real orden de 16 d
requisito que no había podido llenar por difici
en la constitución de los correspondientes Tribu

Resultando que la Dirección general de Insti
con fecha 30 del mismo mes, fundándose en lo
artículo 9.º del Reglamento de oposiciones de 7
propuso que D. Leopoldo Ramoneda no fuera ad
siciones por no ser Doctor en Medicina y Cirugía

Resultando que pasado el expediente al Cons
ción pública en 3 de Mayo, este Cuerpo consu
de 26 del mismo mes, después de desechar el dic

En cuarta que negaba á Ramoneda el derecho á ser admitido como opositor por no acreditar ser español y no haber hecho los ejercicios del doctorado en Medicina, ni haber obtenido la licenciatura, nombró, con arreglo á Reglamento, la Comisión que emitiera nuevo informe:

Resultando que la Comisión nombrada por el Concejo de Instrucción pública informó que D. Leopoldo Ramoneda había comparecido á las oposiciones con la protesta que había presentado, y que habiéndosele concedido para ello en que desde el 16 de Abril, fecha de incorporación del título, hasta el 25 del mes de Mayo, término del plazo de convocatoria para las oposiciones, tiempo bastante para practicar los ejercicios del grado de Doctor que exige la legislación vigente en materia de títulos extranjeros; en que por la interpretación de las disposiciones, no sólo se han causado perjuicios, sino que se ha privado del derecho para obtener el título de Doctor que habilitara para las oposiciones; en que el Gobierno debe facilitar el cumplimiento de las aspiraciones del interesado, garantidas expresamente por la ley, en caso de que los detrimentos sufridos en sus derechos, los perjuicios en sus intereses y las molestias graves que se le ocasionado; en que debe darse preferencia á lo precepto en el decreto-ley de 9 de Febrero de 1869 por tener carácter de ley anterior en el orden constitucional y en fuerza obligatoria; en que el anuncio de convocatoria y el art. 9.º del Reglamento de 1873, y en que tal medida secunda el espíritu de la ley, no cerrando el campo de las oposiciones:

Resultando que desechado también por el Concejo de Instrucción pública el anterior dictamen en sesión de 2 de Mayo, acordó el nombramiento de nueva comisión, la cual, en su informe, manifestó que D. Leopoldo Ramoneda había podido obtener oportunamente su título de médico, si no se le hubieran exigido los exámenes que los correspondientes al acto de graduación de médicos que en su sentir prescribe el art. 2.º del decreto-ley de 9 de Febrero de 1869, sentó la doctrina de que no por no haber sido admitido para hacer las oposiciones, porque los Licenciados de la Facultad de Medicina, según nuestro tecnicismo, para ser Doctores probar cuatro asignaturas y haber sido aprobados después favorablemente en los ejercicios de

que, con ser más ó menos conformes con su letritu, distan mucho de constituir una infracción sible de dicho precepto:

Considerando que no es extraño, por lo tanto dido entender por varios rectores que, con arreglo disposición, para incorporar un título extranjero probar previamente la aptitud con el examen las asignaturas que, según la legislación patria para obtener el título español correspondiente:

Considerando que así parece que hubo de o. el propio interesado y reclamante D. Leopoldo vez que se allanó al examen previo de asigna protesta alguna, sin exponer siquiera la me extremo de que al solicitar á última hora su a siciones de que se trata, lejos de fundarse p incorporación de su título no había podido te bérsele sometido á exámenes indebidos, alegó t tades ineludibles surgidas para la constitución

Considerando que, de todas suertes, el t texto del art. 2.º del ya citado decreto-ley de 6 d y sobre todo su comparación con el artículo qu cual se dicta la regla procedente para la inco naturas sueltas cursadas en el extranjero, con gún la letra de aquél, el título extranjero de n validarse en España, una vez acreditada su le sola aprobación de los ejercicios del grado cor pago de los oportunos derechos:

Considerando que la interpretación lógica, para entender el sentido de las leyes, principal que se resienten de alguna vaguedad en su red con la interpretación literal é inmediata que a porque la generalidad y extensión de un ejer ministran, sin necesidad de otras pruebas, me ficientes para apreciar la aptitud de aquel que país extranjero el título á que dicho grado cor á ser éste como un examen comprensivo de tod cursadas:

Considerando que por lo mismo que debe inteligencia al precepto del art. 2.º del decret

al propio tiempo, en armonía con el plan de Instrucción pública y con los intereses bien de la enseñanza, que la incorporación debe entenderse respecto de aquellos estudios requeridos, por las condiciones los obtienen y por los derechos que les confiere en cierto modo equivalentes á los que se otorgan al obtener tal equivalencia, se atiende expresamente á la denominación del título en am-

plum de Doctor por la Universidad de Madrid, y se concede á los Profesores de Medicina, equi- valente para el ejercicio de la profesión que se confiere por las Universidades

el título de Licenciado alude concretamente al decreto de 6 de Febrero de 1890, en la circunstancia de hablarse allí de títulos en general, así como también el decreto, todos los cuales demuestran el propósito de autorizar á los extranjeros, reservando para otro decreto, que no se refiere á la validez de los títulos extranjeros por excepción á los médicos (nombrados en España al de Licenciado en su título:

ejercicio del grado de Doctor, según la ley de 1890, si puede servir para acreditar el fin de la carrera determinados conocimientos, prueba bastante de suficiencia por la que se justificó antes de otra manera en

entendieran de otro modo los preceptos sobre establecerse una desigualdad in- justa académica como en el económico, y, con notorio perjuicio de aquéllos, tal de que, á despecho del organismo jerárquico y derechos respectivos de los

títulos nacionales, hubiera Doctores españoles que no fuesen Licenciados:

Considerando que, por consiguiente, D. Leopoldo Ramoneda, para poder con arreglo á la legislación vigente concurrir á las oposiciones á la Cátedra de Clínica quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, si bien no tenía que examinarse una á una de las asignaturas del período de la licenciatura, necesitaba en primer término incorporar su título de Doctor por la Universidad de París, haciéndose Licenciado; probar luego las asignaturas correspondientes al año del doctorado, y practicar, por último, el ejercicio del grado de Doctor español:

Considerando que aun cuando no se le hubiese sujetado al examen de las expresadas enseñanzas del período de la licenciatura, no habría podido, según los preceptos que rigen en la materia, obtener el título de Doctor antes del 25 de Abril próximo pasado, porque tenía que matricularse y examinarse de las asignaturas del doctorado en el mes de Mayo, época señalada al efecto para los que estudian como alumnos libres, y someterse después al ejercicio del grado correspondiente:

Considerando que de todas maneras, los artículos 4.º y 5.º del Reglamento de oposiciones á Cátedras establecen que los aspirantes á ellas han de presentar sus solicitudes con los documentos justificativos de su aptitud en el plazo improrogable de tres meses, á contar desde la publicación de la convocatoria:

Considerando que siendo un hecho innegable que D. Leopoldo Ramoneda no era un Doctor español, ni aun Licenciado, el día 25 de Abril, en que espiró el plazo de tres meses para presentarse, con la justificación debida, como opositor á la Cátedra de Clínica quirúrgica de la Facultad de Medicina de Madrid, claro está que no puede optar á ella aun cuando posteriormente adquiriese la aptitud necesaria al efecto:

Y considerando que, si bien facilitando, en cuanto sea posible, los medios de que acuda el mayor número de aspirantes á los certámenes abiertos para la provisión de cátedras, atiende el Estado á un alto interés público, es asimismo deber suyo muy estrecho el de garantizar escrupulosamente los derechos de todos, y en este caso se encuentran los de los otros opositores que se han presentado en tiempo hábil, con justo título, y que podían reclamar legalmente contra toda concurrencia indebida:

1.º Que D. Enrique Valentín Casamayor y Mitchell y D. Ignacio Salgado Vázquez deben presentar los certificados correspondientes á las asignaturas que hayan cursado y probado en la Universidad de Burdeos y Consejo de Higiene pública de Montevideo, oriental del Uruguay:

2.º Que estas certificaciones bastan para que se les reconozcan como probadas, sin necesidad de nuevo examen, las asignaturas iguales ó análogas que constituyen en España los estudios de la carrera de Farmacia:

3.º Que si no presentasen certificado de haber probado ó algunas de las asignaturas incluidas en el plan vigente de la expresada carrera, tendrán que examinarse de ellas con arreglo á los libros, en cualquiera Universidad española, previo el pago de los derechos correspondientes; y

4.º Que probadas así todas las enseñanzas de la carrera, deberán someterse á los ejercicios del grado de Licenciado en Medicina con arreglo á las disposiciones vigentes.

ART. 28. Las Corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo á las disposiciones del presente Código.

Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados ó leyes especiales.

Concordancias.—Análogo al art. 33 del proyecto de Código de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—*Ninguno.*

COMENTARIO.—No sólo las personas individuales, tan como las colectivas extranjeras pueden gozar de los derechos que conlleva la nacionalidad española, siempre que estén reco-

**domicilio en España y concepto de personas
 & las disposiciones del Código.**

icular de este precepto es el art. 1.º del Real
de 1886, que faculta á las Sociedades re-
para ser contratistas de obras públicas.
omiciliadas en el extranjero, tendrán úni-
que establecen los tratados ó las leyes es-

ercio contiene una disposición terminante
 ablece que «las Compañías constituidas en
 ejercer el comercio en España, con sujeción
 en lo que se refiere á la capacidad para con-
 osiciones del mismo Código respecto á la
 decimientos dentro del territorio español, á
 antiles y á la jurisdicción de los Tribunales
 juicio también de lo que establezcan los tra-
 n las demás potencias.»

España y Bélgica de 4 de Mayo de 1878
1.), art. 3.º, decía lo siguiente: «Las altas
declaran reconocer mutuamente á todas las
asociaciones comerciales, industriales ó
las y autorizadas según las leyes particu-
los dos países, la facultad de ejercer todos
aparecer en juicio ante los Tribunales, sea
ción, sea para defenderse en toda la exten-
posiciones de la otra potencia, sin más
conformarse con las leyes de dichos Estados
entendido que las disposiciones precedentes
Compañías y asociaciones constituidas y
la firma del presente tratado, como á las

NACIMIENTO

a) *Filiación*: Hijos de padre ó madre españoles nacidos en el extranjero. (Artículos 17, número 2.º del Código, y 1.º, núm. 2.º de la Constitución de 30 de Junio de 1876.)

De los padres, en nombre de sus hijos, durante la menor edad de éstos. (Art. 18.)

De los hijos, llegada su mayor edad ó emancipación. (Art. 19 del Código y 103 de la ley del Registro civil.)

Naturalización. (Art. 17, núm. 3.º del Código; artículo 1.º, núm. 3.º, de la Constitución de 1876, y artículo 2.º del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852.)

Vecindad. (Art. 17, núm. 4.º, del Código; art. 1.º, número 4.º, de la Constitución de 1876, y art. 2.º del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852.)

Matrimonio de mujer extranjera con varón español. (Art. 22 del Código.)

Expresa...

Presunta...

b) *Voluntad*.....

La nacionalidad española se adquiere.....

EXTINCIÓN

{ Naturalización en país extranjero. (Art. 20 del Código v art. 1.º, párrafo 2.º, de la Constitución de 30 1876.)

empleo de otro Gobierno ó entrada en a las armas de una Potencia extranjera del Rey. (Art. 20 del Código y art. 1.º, de la Constitución de 30 de Junio

{ b) Naturalización forzosa.....{

RECUPE

{ a) Voluntad.....{

{ b) Voluntad y residencia en territorio español.....{

La nacionalidad española se re-cobra.....

título 22 del Código y 108 de la ley del Registro civil.)

1872-1873

1872-1873

solo y necesita para su realización asociar a otros tantos hombres. Tienen la segunda, y las otras son susceptibles de derechos y están regidas por la ley. Por eso la clasificación más exacta es en personas *individuales* y personas *colectivas*; las primeras constituidas por el individuo y las segundas por la agrupación reflexiva de varios individuos.

El Código se ocupa sólo de los dos tipos principales de la personalidad civil, el del natural y el de la muerte. Con relación á las jurídicas determina sólo la manera de su creación y el hecho que las origina y da vida, respecto al interés público, manifestando en el párr. 2.º del art. 35 que su personalidad empieza a existir desde el momento mismo en que con arreglo á derecho quedan válidamente constituidas. En su denominación, sólo lo hace de un modo indirecto en el artículo 39.

Esto, en realidad, no envuelve un principio, siendo tales entidades de clases en extremo diversas; no podrían señalarse reglas precisas para ellas. Únicamente parece desprenderse algo de lo que dice sobre el particular del art. 39, al decir que la personalidad civil de las Corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado ó reconocido; la de las sociedades por sus estatutos, y la de las fundaciones por su institución, debidamente aprobadas por la autoridad administrativa, cuando este requisito fuere necesario. Dedúcese de aquí que para la existencia de la personalidad colectiva no basta la voluntad de los individuos, sino que es preciso el reconocimiento y la sanción de la ley en una ó en otra forma por la ley.

RIMERO

NATURALES

del título de que forma
la doctrina relativa al
rsonalidad civil del in-

regla general, el naci-
ta el caso en que la ley
oner existente á una per-
sea el caso del póstumo.
el hecho del nacimiento
ivo de la creación de la
individuo *nazca*: es pre-
empo, que traiga consigo
lentes para prolongar su
ipo. Corto y limitado es
día, que es el mismo que
ivil. Creemos debía esta-
diez días, por ejemplo,
ro Juzgo.

l Código que el feto tu-
viere «ngura humana», condición originaria de las
Partidas, copiada á su vez por éstas del Derecho ro-
mano, y que en nuestro sentir es ociosa, pues que todo
sér procedente de la unión sexual de hombre y mujer

ha de tener siempre los rasgos naturales de la especie humana, alguno ó algunos de otra especie.

Casos hay en que los naturales, si vale la frase, sino ó más individuos, y como puede hallarse relacionada con determinados derechos, el Código sobre el particular, asigna primero la preferencia en tal caso.

Como en el caso del derecho también que en el de la muerte recíproco á suceder muerto antes. El Código es principal, por decirlo así; otra manera en el principio de demencia afirma le corresponde demencia, y de conformidad sostenga la muerte anterior probarla. Si la prueba no es aplicable la segunda regla precedentes históricos de veraz en el artículo corresponden presumen muertas á un tanto se verifique transmisión una á otra.

Con respecto á la extinción el Código distingue entre la absoluta ó relativa. La primera es del individuo; la segunda estados en que puede hallarse demencia ó imbecilidad, s

II — PERSONALIDAD C

e, como dice cor
que restricciones

en último términ
al título del libro
de modo que n
ón, que dejamos

iento determina
iene por nacido
orables, siempre
presa el artículo

una.

LES.—*Fuero Juzg*
blescemos que si el
fio que nasciere del
del padre con los ot
y 3.^a—Demientre qu
idre, toda cosa que
ende, bien asi como
echo á daño de su
n dixieron que si a
debiese morir, que l
e la pena, et por en
sí como diremos e:

16.—Sin testamento
reñada ó cuitando
nte del muerto non
esperar fasta que h
a nasciese vivo, él l

Part. id., tit. XVI, ley 3.ª—El abuelo ó el abuelador á su hijo ó á su nieto que estodiere ese menor de edad como desuso dixiemos: e tambien á los que son nascidos como á los que madre...

COMENTARIO.—El texto del artículo equívoco fué objeto de censuras en la discusión por los Colegisladores sobre el Código civil, y al fin, mereciere los ataques de que fué objeto el artículo en los siguientes términos: «El nacimiento de la personalidad: sin perjuicio de los casos en que una fecha anterior los derechos del nacido, que se manifestaba que no hablaba nada de lo que era. A lo cual cabía preguntar: ¿qué caso por la ley ha de retrotraer á una fecha anterior los derechos del nacido sino el del póstumo? Así lo indica la misma ley que terminaba el mismo Código de una manera que hablaban del póstumo y que desahucio, sin embargo, ha sido modificado, y se ha pasado al póstumo en analogía con sus precedentes.»

Antes que éstas, el Derecho romano se ocupaba de la presunción: la de suponer nada de lo favorable. A este principio añadía deber: suspender los efectos del mismo hasta tanto; no conceder el beneficio de la ley al que no reunía condiciones de vida.

Las Partidas, como hemos visto en los precedentes, se basaban en parte al Derecho romano. Conforme á lo que se decía de dar tutor á los póstumos, se les respetaban los derechos hereditarios y no era lícito matar á la mujer embarazada. En la disposición esta última artículo 105 del Código penal vigente en estos días, se aplicará la pena de muerte en la mujer que se le notificará la sentencia en que se imponga, pasado cuarenta días después del alumbramiento. ¿Qué preceptos contiene el Código sobre lo relativo á los póstumos en varios artículos, siendo el primero

ART. 30. Para los efectos civiles, sólo es válido el feto que tuviera figura humana y que hubiere vivido veinticuatro horas enteramente desprendido del útero materno.

Concordancias.—*Ninguna.*

PRECEDENTES LEGALES.—*Fuero Juzgo, lib. IV, tit. II, l. 18.*—E establecemos que aquel que nace non debe aver la vida de los padres fueras si despois que fuese nascido recibiere el bautismo ó vivier diez dias.

Ley 19, tit. y lib. id.—El padre muerto, si el fijo ó la fía vivier diez dias, ó fuese baptizado, quanto quel pertenecía de la bona madre, todo lo debe haber la madre.

Fuero Real, lib. III, tit. VI, ley 3.ª—E si después nasciere fijo, o fía, é fuese baptizado, haya todos los bienes del padre.

Partida 4.ª, tit. VI, ley 5.ª—Non deben ser contados por fijos que nascen de la mujer et non son figurados como homes, asi como si hobiesen cabeza ó otros miembros de bestia. Mas si la criatura que nasce ha figura de home, magüer haya miembros perfectos ó menguados, nol empesce para poder heredar los bienes de su padre, et de su madre, et de otros parientes.

Ley 13 de Toro (2.ª, tit. V, lib. XX, Nov. Recop.).—Por evitar muchas dudas que suelen ocurrir cerca de los hijos que mueren antes de ser nacidos sobre si son naturalmente nascidos ó son abortivos. Mandamos que el tal fijo se diga no abortivo, quando nació vivo o todo, é que á lo menos despues de nacido, vivió veinticuatro horas naturales, é fué bautizado antes de que muriese; y si de alguna manera nascido murió dentro de dicho término ó no fué bautizado, mandamos que el tal hijo sea habido por abortivo.

Ley de M. civil.—Art. 68. Para los efectos civiles no se reputa como nacido el hijo que no hubiere nacido con figura humana, y que no viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del útero materno.

COMENTARIO.—Como se ve por los precedentes expuestos, han influido mucho los preceptos legales acerca de la materia del artículo.

el nacido viviese diez días y que el Real este último requisito; las Parturientas, que no fuese monstruo, sin y 13 de Toro que naciere vivo todo, y que fuese bautizado, y, por último igual precepto que el Código.

con el rigorismo científico. Un feto a las cuatro horas, y, sin embargo, por su alguna enfermedad ingénita, estar con muerte fatal é irremediable, y en algunas condiciones de viabilidad puede no ser la ley por cualquier causa independientes condiciones. De aquí que no se funda la doctrina del artículo de fijar un límite de viabilidad; de aquí también la diferencia entre la natural y la legal, si bien en la práctica es necesario asentar un principio. El Código, por los inconvenientes que en cada caso concreto hubiese que resolver, no viable.

del nacimiento, en el caso de haber nacido los derechos que corresponden al recién nacido.

na.

PRECEDENTES LEGALES.—*Part. 7.ª, tit. XXXIII, ley 12.* Nascon á las vegadas dos criaturas de una vez del vientre de alguna muger, et acontece que es dubda qual dellos nasció primero: et decimos que si el uno es macho et el otro fembra, debemos entender que el varon nascio primero, pues que se non puede averiguar el contrario. Et si fueren amos varones, et non poder seer sabido cuál dellos nascio primero, estonce amos deben haber aquella honra et el heredamiento que habrie el que nasciese primero, á quien dicen en latín *primogenitus*.

COMENTARIO.— Termina este artículo la polémica durante largo tiempo sostenida por jurisconsultos y médicos acerca de quién se entendía por mayor en el caso de un parto doble. El Código, en contra de los que afirmaban que el nacido en último término gozaba de la primogenitura, por estimar que había sido concebido con anterioridad, declara que corresponde la preferencia de los derechos que lleva consigo la primogenitura al nacido en primer lugar.

ART. 32. La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas.

La menor edad, la demencia ó imbecilidad, la sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil no son más que restricciones de la personalidad jurídica. Los que se hallaren en alguno de esos estados son susceptibles de derechos, y aun de obligaciones, cuando éstas nacen de los hechos ó de relaciones entre los bienes del incapacitado y un tercero.

Concordancias.—*Ninguna.*

PRECEDENTES LEGALES.—*Ninguno.*

COMENTARIO.— Encierra el artículo una verdad de carácter axiomático. La personalidad jurídica no se extingue ni debe extinguirse sino por la muerte de la persona natural. De aquí lo injusto de la llamada *muerte civil*, borrada de la legislación de los pueblos cultos. Todos aquellos estados particulares en que puede hallarse una persona, citados en el artículo, no son más, como dice éste, que limitaciones ó restricciones de esa misma personalidad.

Estas restricciones varían, sin embargo, mucho en cuanto á sus condiciones y efectos. Unas provienen de la naturaleza, como la demencia, la imbecilidad y la sordomudez; otras se imponen por la ley, como la interdicción civil, la prodigalidad, y la restante, ó sea la menor edad, puede considerarse como mixta,

El padre, y por muerte ó incapacidad de este la madre, son responsables de los perjuicios causados por los *menores de edad* que vivan en su compañía.

Los tutores lo son de los perjuicios causados *por los menores ó incapacitados* que estén bajo su autoridad y habiten en su compañía.»

Ya había establecido esta doctrina el Código penal en su artículo 19, regla primera, que expresa que «son responsables civilmente por los hechos que ejecutare el loco ó imbecil, y el menor de nueve años, ó el mayor de edad y menor de quince que no haya obrado con discernimiento, los que los tengan bajo su potestad ó guarda legal, á no hacer constar que no hubo por su parte culpa ó negligencia. No habiendo persona que los tenga bajo su potestad ó guarda legal, ó siendo aquélla insolvente, *responderán con sus bienes los mismos locos, imbeciles ó menores, salvo el beneficio de competencia, en la forma que establezca la ley civil.*»

Indudablemente se refiere á estos casos el artículo, como hemos dicho antes. Ni el loco ni el menor pueden contraer por sí obligación alguna; pero si ejecutan un daño en la propiedad ajena, ó el loco comete un delito contra un individuo, por virtud de *este hecho* se origina ciertamente una relación entre los bienes del menor ó del loco y el tercero para la enmienda ó reparación del daño causado.

ART. 33. Si se duda, entre dos ó más personas llamadas á sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una ó de otra, debe probarla; á falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno á otro.

Concordancias.—*Ninguna.*

PRECEDENTES LEGALES.—*Part. 7.º, tit. XXXIII, ley 12.*—Otrosí decimos que muriendo el marido et la muger en alguna nave que se quebrantase en la mar, ó en torre ó en casa que se acendiese ó se cayese á so hora, et non pudiesen saber cual finó primero, entendemos que la muger, porque es flaca natural.

IVIL

un decin
orces años
debrantan
si se no
tender qu
la madre
semejara
re menor
ljo murio

trina ser
blecían
ierta una
onocerse
azón á l

leyes del
Partidas,
a física p
e respect
ción *juris*
uí la reg
i, que al
dada la
. mismo r
la menos

a originar conflictos en la transmisión de derechos.

El precepto del artículo en este punto aparece, sin establecimiento con relación á la materia de *sucesiones*, es decir, referente á los derechos hereditarios de una de las personas muera respectivamente de los bienes de la otra.

Sentado esto, cabe afirmar que la doctrina del artículo tiene aplicación, ó si la tiene no afecta á lo esencial de la cuestión en el caso de *herederos forzosos* entre sí, por la razón de que adquiriendo el derecho aun muriendo antes que la persona de que traen causa, pasan á sus descendientes y á sus colaterales en todos los casos. Así, si en un naufragio, un día, mueren un padre y un hijo, y no sabiéndose co

cuál de ellos ha sucumbido primero, se les estima, con artículo, fallecidos simultáneamente; si ese hijo tiene hijos, éstos heredan á su abuelo, porque le hubieran representado por representación aunque su padre hubiere muerto con anterioridad.

Presentemos otro caso. Existan tres personas: abuelo (A), hijo (B) y nieto (C). Mueren el hijo y el nieto, ó sea B y C, y A (abuelo) hereda, aunque no haya transmisión de derechos, porque es heredero forzoso de B y C. El efecto de la doctrina de la no transmisión de derechos en el caso de herederos forzosos sólo es que el que sea heredero podrá pedir simultáneamente la declaración de heredero, es decir, de los que hereden, primero una y luego otra, al abuelo.

La doctrina es aplicable igualmente, repetimos, en el caso del *heredero voluntario*, como demostraremos con ejemplos. En el mismo caso del padre (B) y del hijo (C) muertos *simultáneamente*, el primero abintestato y el segundo con testamento en que deja á su esposa la mitad de lo que pueda disponer, supongamos que éste se hallaba casado sin hijos y aquél tenía padre (abuelo, A). Si tuviese lugar la transmisión de derechos y se considerase muerto primero al padre B, se realizaría la ficción legal de que el hijo C había entrado en posesión de la herencia de su padre, y en este caso, conforme al art. 809 del presente Código, como los bienes eran ya de él, su abuelo A sólo heredaría la mitad de los bienes (legítima de los ascendientes), pasando la otra mitad á su esposa. Mas con arreglo al precepto del artículo sucederá que, no existiendo transmisión alguna de derechos del padre B al hijo C, y no pudiendo suceder la mujer por representación como los herederos forzosos, el abuelo A heredará toda la *herencia* del hijo por tener este carácter con relación á él, y la esposa sólo tendrá el usufructo de que habla el art. 836.

Otro ejemplo que pudiéramos presentar es el de dos cónyuges sin hijos, pero ambos con ascendientes, muertos bajo testamento en el que cada uno de ellos deja al otro la mitad libre de que puede disponer. Rigiendo la disposición de la ley de Partidas que suponía muerta en primer lugar á la mujer, el marido adquiriría la mitad libre que su esposa le dejaba en testamento, la cual pasaría á sus padres (los del marido); pero con sujeción al artículo, como no se transmite derecho alguno de uno á otro, el

los padres ó ascendientes de la mujer
s de ésta. É igual los del marido con

o á la presunción de muerte del
se estará á lo dispuesto en el tí-
'o.

guna.

ALES.—*Ninguno.*

son los preceptos del Código contenidos
presunción de muerte de un ausente
te por parte interesada, pasados treinta
ió el ausente ó se recibieron las últimas
su nacimiento (art. 191). La sentencia
neición de muerte de un ausente no se
e seis meses, contados desde su publi-
oficiales (art. 192). Una vez declarada
rá la sucesión en los bienes del ausente,
icación por los trámites de los juicios de
ato, según los casos (art. 193). Si el
. presentarse, se prueba su existencia,
el estado que tengan y el precio de los
os con él; pero no podrá reclamar frutos

ión, no cabe estudiarlo aquí. Nos refe-
lica.

CAPÍTULO II

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

El Código ha determinado un gran progreso en nuestra legislación al reconocer en términos expresos capacidad civil, verdadera personalidad, á las entidades colectivas. No quiere decir esto que con anterioridad careciesen en absoluto de ella, puesto que podían adquirir y poseer bienes; pero esta facultad, más que derivada de la ley, estaba afirmada por la jurisprudencia. No había un precepto expreso, una ley especial que contuviera las disposiciones terminantes del capítulo que estudiamos.

El Código bajo este punto de vista sólo merece alabanza, si bien no ha establecido la capacidad de las personas jurídicas ó colectivas de una manera completa, esto es, igual á la que disfrutaban las naturales. En el mero hecho de ser persona es una entidad capaz de derechos, y no hay razón alguna científica para limitar el ejercicio de esos mismos derechos.

Las causas de las restricciones impuestas á las personas jurídicas, sobre todo en cuanto á la adquisición de bienes inmuebles, obedecen á consideraciones de índole política, á las ideas *desamortizadoras* predominantes, encaminadas á impedir la acumulación de la propiedad de las antes llamadas *manos muertas*. I aquí que el Código diga que pueden adquirir bienes

de su constitución, y los
encia é instrucción con-
leyes unas y otras que no
propiedad inmueble en po-
itutos, salvo casos deter-

clusivo de nuestro Código;
or idéntico motivo, el por-
el francés y el belga, que
colectivas.

Código portugués se ocupa
define, y manifiesta que no
neroso bienes inmuebles á
ra el cumplimiento de su
añadiendo que los de aque-

lla clase que adquiriera por título gratuito se convertirán en éstos en el plazo de un año. El Estado, la Iglesia, las Cámaras municipales (Ayuntamientos), las Juntas de parroquias y cualesquiera otras fundaciones ó establecimientos benéficos ó de instrucción se reputan como personas morales. El Código italiano declara en su art. 20 que "el común (Municipio), la provincia, los institutos públicos y, en general, todas las Corporaciones morales legalmente reconocidas, son consideradas como personas y gozan de los derechos civiles, según la ley y el uso observado como derecho público." Los de Guatemala y Méjico, después de definir las personas que llaman morales, dicen en su art. 46 y 43 respectivamente que las asociaciones ó corporaciones que gozan de entidad jurídica pueden ejercer todos los derechos civiles relativos á los intereses legítimos de sus estatutos.

Como vemos, en el fondo es una misma la idea que en diferentes naciones impulsa al legislador: evitar el predominio, la gran extensión de la propiedad colectiva, idea nacida de la fiebre desamortizadora que distingue al siglo presente, producto á su vez del individualismo exagerado y perjudicial que caracteriza á nuestra época. No somos partidarios en modo alguno de que las personas colectivas gocen de la facultad ilimitada de poseer bienes inmuebles, reconociendo los grandes inconvenientes que de la amortización nos ofrece la historia; pero sí lo somos de que disfruten de ella aquellas que tienen un fin puramente humano, en oposición al religioso, como los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, institutos de beneficencia é instrucción.

Es verdad, dice Laurent, refiriéndose principalmente á las asociaciones religiosas, que la asimilación, la analogía de la persona colectiva con la individual, es sólo una ficción, y toda ficción legal está limitada al objeto para el cual se establece. De aquí se deduce que las consideraciones expresivas de la opinión de Laurent no implican una negativa de la nuestra. Al contrario, nos hallamos conformes con ella. Reconocemos que la persona jurídica, como creada para un fin determinado, sólo debe tener capacidad para el cumplimiento de él; pero su capacidad en cuanto á ese fin debe ser absoluta en la esfera civil del derecho privado. En una palabra, creemos que la persona jurídica, con arreglo á los principios rigurosos del derecho, debe gozar de capacidad completa para adquirir y poseer bienes, en cuanto la adquisición y posesión se encamine directa y exclusivamente á la realización de su

2.° Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles ó industriales, á las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.

Concordancias. — *Ninguna.*

PRECEDENTES LEGALES. — *Ninguno.*

COMENTARIO. — El Código, al enumerar las personas jurídicas, distingue entre corporaciones, asociaciones y fundaciones.

La clasificación general de las personas jurídicas se establece por la relación que guardan con los fines individuales y los colectivos. Así se llaman *corporaciones* á las entidades en que existe equilibrio entre unos y otros; por ejemplo, un Municipio, entidad que tiene por fin el bien de todos los individuos que lo componen y la conservación de los bienes comunes; *asociaciones*, ó entidades en que predomina el interés individual sobre el fin colectivo (una sociedad minera, cuyo fin primordial es el lucro de los socios); *fundaciones*, esto es, entidades en que desaparecen casi por completo los intereses individuales, y por el contrario, lo absorbe todo el fin total de la persona social; ejemplo: un hospital, una escuela, etc.

Refiriéndose á las personas colectivas de *interés público*, expresa el Código que su personalidad jurídica no comienza hasta el momento en que válidamente se hallan constituidas; pero en realidad es muy distinta la situación de unas de otras bajo este punto de vista. Por ejemplo: las asociaciones necesitan el cumplimiento de lo ordenado en la ley referente á ellas; las fundaciones su aprobación por el Gobierno; y en cambio, algunas fundaciones (establecidas por los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales), por su carácter especial no requieren requisito alguno.

El artículo, en el párrafo acabado de citar, se refiere, como hemos dicho, á las personas sociales de interés privado, y, sin embargo, éstas exigen también determinadas formalidades para constituirse con arreglo á derecho. Así, el art. 1.667 de este Código dice que «la sociedad civil se podrá constituir en cualquier forma, salvo que se aportaren á ella bienes inmuebles ó derechos reales, en cuyo caso será necesaria la escritura pública.»

mercantiles, el art. 116 del Código de Comercio, el contrato de compañía por el cual dos ó más personas ponen en fondo común, bienes, industria ó trabajo para obtener lucro, será mercantil, cualquiera clase, siempre que se hayan constituido con arreglo de este Código. Una vez constituida la compañía tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y con-

stitución nos la da el art. 119, que dispone lo
compañía de comercio, antes de dar principio á
berá hacer constar su constitución, pactos y
ritura pública, que se presentará para su ins-
tro mercantil, conforme á lo dispuesto en el

ne tanto respecto de unas como de otras per-
menester la observancia de determinadas
que su constitución produzca efectos legales.
Ley de Asociaciones.)

Las asociaciones á que se refiere el artículo anterior se regirán por las disposiciones al contrato de sociedad, según la ley.

1.—*Ninguna.*

3 LEGALES.—*Ninguno.*

El artículo no es cierto del todo, ó al menos sociedades á que alude pueden ser *mercantiles* o dice el mismo art. 35, y claro es que éstas su ley especial, por el Código de Comercio.

inscripción en el Registro mercantil será potestativa para los comerciantes particulares, y obligatoria para las sociedades que se constituyan con arreglo á este Código ó á leyes especiales.

Bien claramente lo indica el art. 121 de éste al declarar que «las compañías mercantiles se regirán por las cláusulas y condiciones de sus contratos, y en cuanto en ellas no está determinado y prescrito, por las disposiciones de este Código.» (Apéndice número 6. *Compañías mercantiles. Contrato de sociedad.*)

ART. 37. La capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado ó reconocido; la de las asociaciones por sus estatutos; y la de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere necesario.

Concordancias.—*Ninguna.*

PRECEDENTES LEGALES.—*Ninguno.*

ART. 38. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles ó criminales, conforme á las leyes y reglas de su constitución.

La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre ambas potestades; y los establecimientos de instrucción y beneficencia por lo que dispongan las leyes especiales.

Concordancias.—*Ninguna.*

PRECEDENTES LEGALES.—*Ninguno.*

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 37 Y 38.—Estudiamos unidos estos artículos porque comprenden idéntica doctrina, y en realidad el 38 debía no haber existido, puesto que es una repetición del 37, ó de insertarse su doctrina como un segundo párrafo del mismo. Regula éste la *capacidad civil* de las personas jurídicas, y á continuación el 38 habla de la facultad de éstas para adquirir y poseer bienes, como si esta facultad no fuese una de las propias

, acaso la más importante, de la persona. El civil es muy lato, y dentro de él está com- ad para adquirir bienes, cualquiera que sea e- n. Por eso, repetimos que estimamos inneces- do del art. 36, pudiendo haberse formado uno de éste y el 37.

da la distinción que establece el Código de lo ición de bienes inmuebles por las personas grandísima importancia, y no tan claro como de los términos del artículo, algún tanto nos ocuparemos especialmente de él respecto onas colectivas, ya en general, ya con la re- e ellas.

12.—Distingue el Código dos clases de estas érés público y las de interés particular ó pri- también debemos examinar separadamente

unas y otras.

I. *Personas jurídicas de interés público.*—Bajo esta denomina- ción se comprende á todas las entidades llamadas antes *manos muertas* (Ayuntamientos ó Concejos, cabildos, conventos, hos- pitales, casas de enseñanza y misericordia, etc.), porque tienen cierto carácter público, y el cumplimiento de su fin es de interés general para la sociedad.

Refiriéndose á ellas el art. 33, dice terminantemente que pue- den, no sólo adquirir, sino *poseer bienes de todas clases*; pero es, añade, *conforme á las leyes y reglas de su constitución*. Su capacidad, pues, que en principio parece absoluta, se halla restringida por las últimas palabras del artículo.

Dadas estas mismas palabras, parece que para determinar la capacidad de las diversas personas colectivas á que nos venimos refiriendo en el extremo objeto de nuestro examen, bastaría examinar la ley, el estatuto por que se rigen cada una de ellas, y sin embargo, no es así. Sobre las leyes particulares que regu- len la vida de las diversas entidades, existen otras de carácter general, de índole política más que civil, que precisa tenerse en cuenta: las leyes desvinculadoras y desamortizadoras.

Ahora bien: esta aseveración lleva consigo la siguiente pre- gunta: ¿Continúan vigentes las leyes expresadas? La respuesta afirmativa se impone. El art. 1.976 del Código deroga *los cuerpos*

bienes inmuebles? Indudablemente hay casos en que gozan de esta facultad: cuando sea indispensable para el cumplimiento de su fin, lo que se comprende fácilmente con un ejemplo. Un particular dona á un Ayuntamiento una casa con objeto de que se establezca en ella una escuela, una casa de socorro, un hospital, etcétera, declarando que de no ser así se entiende por no hecha la donación. Claro es que siendo necesaria é indispensable para el cumplimiento del objeto benéfico que se propuso el donante la posesión por el donatario (Ayuntamiento) del inmueble donado, no hay más remedio que reconocer la posesión de éste á su favor en tal caso, por el principio jurídico de que para realizar un fin son necesarios medios.

Estas consideraciones encuentran en cierto modo su confirmación en lo dispuesto en uno de los considerandos de la Real orden de 26 de Junio de 1886 sobre fundación de un establecimiento de enseñanza (*véase este epígrafe*), que dice «que es también evidente que pueden formar parte, ó mejor dicho, ser base de estas fundaciones los edificios y terrenos que han de ocupar las instituciones fundadas, porque estando expresamente exceptuados de la ley de 1855 por su art. 2.º, *esta excepción lo mismo alcanza á las fundaciones establecidas á la fecha de la ley como á las que en adelante se estableciesen; además de que el buen sentido hace comprender que si la ley autoriza la existencia de las repetidas fundaciones, necesariamente ha de reconocer la facultad de que se destinen edificios á este fin, puesto que de otro modo la institución no existiría.*» Por tanto, toda institución ó entidad permitida por la ley tiene derecho á poseer y retener bienes, *aunque sean inmuebles*, siempre que se destinen al cumplimiento de su fin.

A más de esto, precisa no olvidar una circunstancia, y es que en estos casos no tiene lugar la amortización, que es lo que la ley quiere evitar, pues no se trata de acumulación de bienes inmuebles, sino de uno de éstos, que es condición *sinæ qua non*, por decirlo así, para que se cumpla el fin ó uno de los fines de la persona social. Existiría, sí, amortización cuando una de estas personas, bien por donación, bien por testamento, pudiese adquirir inmuebles ó raíces y retenerlos, no para realizar uno de sus fines, sino para obtener sus rentas.

Por eso la ley, aunque no la determina, lleva implícita esta distinción, que en realidad no precisa establecer, porque la sal-

a Real orden citada de 26 de Junio
a necesidad de que así sea.

Fuera del caso señalado, en los demás, como regla general de la capacidad de las personas jurídicas de que nos ocupamos en este epígrafe, rige la que hemos establecido, corroborada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aplicable aun después de la promulgación del Código, por referirse á leyes que continúan subsistentes, y de la que exponremos algunas sentencias.

Sentencia de 23 de Febrero de 1857. (C. L., íd., tít. I, núm. 3.º)
Aunque las Corporaciones y establecimientos llamados manos muertas no pueden adquirir bienes inmuebles, sin embargo, no les está prohibido tomar los que se les dejen para invertir su producto en efectos públicos.

Esta inversión ó venta de los bienes inmuebles legados á manos muertas no se opone á la ley de 11 de Octubre de 1820, toda vez que aquéllos no se amortizan.

Sentencia de 30 de Abril de 1866. (Gaceta 18 Mayo. C. L., ídem, título I, pág. 674.)—La ley de Desamortización de 1.º de Mayo de 1855, lejos de declarar incapacidad para adquirir bienes á las Corporaciones llamadas manos muertas, establece en su art. 26 que en lo sucesivo puedan aceptar, con arreglo á las leyes, legados y donaciones, sin otra restricción que la de vender los bienes así legados ó donados tan luego como sean declarados propios de la Corporación.

Sentencia de 15 de Octubre de 1880. (Gaceta 30. C. L., ídem, título II, pág. 297.)—El art. 15 de la ley de 11 de Octubre de 1820 sólo prohibió á los hospitales y demás establecimientos denominados manos muertas la adquisición de bienes inmuebles para conservarlos perpetuamente y amortizarlos; pero no para venderlos, empleando en los fines de su instituto ó en la compra de títulos de la Deuda pública el valor ó producto de los mismos, como tiene declarado el Tribunal Supremo.

En este último caso se halla el legado de una heredad que en memoria testamentaria hizo un testador al hospital de una villa, toda vez que no se amortizaba ni gravaba para siempre; y no estando comprendido en la prohibición de dicha ley ni de otra alguna, el hospital tuvo capacidad para adquirirla, tanto al otorgarse el testamento como al fallecimiento del testador, ocurrido en 17 de Enero de 1848, y al de su heredera en 21 de Diciembre

de 1851; y en su virtud, la sentencia, al absolver de la demanda sobre entrega de la misma á los administradores del referido hospital, con las demás declaraciones que contiene, no infringe la citada ley de 11 de Octubre de 1820, restablecida en 1836, en su art. 15, ni en ninguna de sus disposiciones. (*Idem.*)

Sentencia de 29 de Diciembre de 1886.—El carácter esencial de la vinculación de bienes consiste en la prohibición absoluta de la enajenación, y esta condición, como contraria á la libertad natural de las cosas para los efectos de la contratación, no puede presumirse y debe reconocerse tan sólo en los casos en que explícitamente se haya establecido.

Las manos muertas que la ley de 11 de Octubre de 1820 incapacita para adquirir toda clase de bienes, son los establecimientos laicales ó eclesiásticos permanentes que, con arreglo á las leyes ó sus estatutos, no pueden disponer de la propiedad de sus bienes. (*Idem.*)

No conteniendo el legado á favor de los pobres enfermos de una población y sus familias prohibición de enajenar los bienes de su contenido, ni habiéndose otorgado á favor de ninguna mano muerta establecida previamente, ni creada en el testamento, por más que se llame á su administración á las personas que tuviesen ó tengan en lo sucesivo determinadas cualidades, es claro que no se fundó vinculación ni amortización de las prohibidas en la ley 12, tít. XVII, lib. X, de la Novísima Recopilación, y en la de 11 de Octubre de 1820. (*Idem.*)

Sentencia de 25 de Noviembre de 1887.—La condición de que una finca permanezca siempre en la familia del testador y no se trasmita á personas extrañas, es imposible de derecho, como constitutiva de una fundación vincular prohibida por la ley, y debe tenerse por no puesta y como nulo en esa parte el legado hecho bajo dicha condición.

Sentencia de 31 de Diciembre de 1887.—La circunstancia de que el fundador de un patronato, al destinar los productos de sus bienes para casar doncellas, llame preferentemente á la obtención de las dotes á doncellas huérfanas de su linaje, no altera el carácter y naturaleza de la fundación, que no puede calificarse de una institución familiar, sino meramente benéfica y piadosa, cuando en defecto de aquéllas, hizo el testador igual llamamiento á las que no fueran de su familia, lo cual evidencia que

Ayuntamientos.—Trátase de una Corporación (1) y, por tanto, con arreglo á los artículos que estudiamos para determinar su capacidad, hay que atenerse á la ley que regula ésta, ó sea la ley Municipal. La vigente es la de 2 de Octubre de 1877, que se ocupa, como es consiguiente, de las facultades administrativas y políticas de los Municipios. No contiene en realidad ningún artículo que hable de una manera directa de la capacidad civil de éstos; pero hay algunos que se relacionan con tal materia, por la índole de sus disposiciones referentes á los contratos que pueden realizar. Son éstos el 85 y el 86, concebidos en los siguientes términos:

«Art. 85. Las *enajenaciones y permutas* de los bienes municipales se acomodarán á las reglas siguientes:

1.ª Los terrenos sobrantes de la vía pública y concedidos al dominio particular, y los efectos inútiles, pueden ser vendidos exclusivamente por el Ayuntamiento.

2.ª Los contratos relativos á los edificios municipales, inútiles para el servicio á que estaban destinados, y créditos particulares á favor del pueblo, necesitan la aprobación del Gobernador, oyendo á la Comisión provincial.

3.ª Es necesaria la aprobación del Gobierno, previo informe del Gobernador, oyendo á la Comisión provincial, para todos los contratos relativos á los demás bienes inmuebles del Municipio, derechos reales y títulos de la Deuda pública.

Art. 86. Es necesaria la autorización de la Diputación provincial para entablar pleitos á nombre de los pueblos menores de 4.000 habitantes.

El acuerdo del Ayuntamiento ha de ser tomado en todo caso previo dictamen conforme de dos letrados.

No se necesita autorización ni dictamen de letrado para utilizar los interdictos de retener ó recobrar, y los de obra nueva ó vieja, ni para seguir los pleitos en que el Ayuntamiento fuese demandado.»

Como vemos, la capacidad propiamente civil de los Ayuntamientos se halla en extremo restringida, debido á la centraliza-

(1) *Ley Municipal*.—Art. 71. Los Ayuntamientos son *Corporaciones* económico-administrativas, y sólo pueden ejercer aquellas funciones que por las leyes les están cometidas.

PERSONALIDAD CIVIL

o también á los abusos que
necesario, en casi todos lo
rnador ó la más alta del Got
dad en lo relativo á su facul
s ó acciones; cuando los p
o de habitantes, requiérese
ción de la Diputación prov

la capacidad de los Ayunta
es inmuebles, pues el párr
s bienes que *pertenecen* ya
bles del mismo. Ante esta
a norma que determinan, á l
entes á esta materia en gen
es amortización, y aun á las
ente, haciendo un ligero e

del art. 15 de la ley de 182
os ó Ayuntamientos como
cepto era terminante; no p
ningún concepto. La ley

cipal de 8 de Enero de 1845 fué la que en primer término
tan rigurosa disposición por su art. 81, que establecía qu
Ayuntamientos deliberan, conformándose á las leyes y
mentos:

9.º Sobre las enajenaciones de bienes muebles ó inmu
y sus adquisiciones.

11. *Sobre la aceptación de donaciones ó legados que se hi
al común ó algún establecimiento municipal.*

Los acuerdos sobre cualquiera de estos puntos se com
rán al Jefe político, sin cuya aprobación, ó la del Gobierno
caso, no podrán llevarse á efecto.»

La ley de 1.º de Mayo de 1855 continuó este camino, y
hemos expuesto en el epígrafe de «Personas jurídicas de i
público,» el art. 26 de la misma reconoció á todas las r
muertas, y por ende á los Ayuntamientos, la facultad de a
donaciones ó legados, aunque con las condiciones en él esta
das. A esta ley siguió la Real orden de 5 de Julio de 1856, c
nando que «se prohiba á todos los contadores de hipote

escribanías del Reino la intervención en el otorgamiento de *escrituras de venta de predios rústicos y urbanos en favor de las Corporaciones cuyos bienes están mandados desamortizar*; previniéndoles den cuenta á las Administraciones provinciales de Ventas de bienes nacionales de sus respectivas provincias, de los documentos de esta clase en que hubiesen actuado desde 1.º de Mayo de 1855, verificándolo asimismo de todos aquellos documentos en que intervengan y por los cuales *adquieran las citadas Corporaciones bajo cualquier título bienes de las clases citadas*, máxime cuando por el artículo 26 de la ley vigente (la de 1855), deben ser puestos en venta los que por *donación ó legados acepten con arreglo á las leyes*. Por último, la ley para el gobierno y administración de las provincias de 23 de Septiembre de 1863 también contenía preceptos expresos en su art. 77, cuyo contenido era el que se transcribe:

«Art. 77. Los Consejos provinciales serán siempre consultados:

2.º Sobre las autorizaciones que soliciten los *Ayuntamientos para adquirir ó enajenar bienes muebles ó inmuebles, redimir censos .. aceptar donaciones ó legados que se hicieren al común ó algún establecimiento municipal.*»

Vienen después la ley Municipal de 1870 y la vigente de 1877, que no contienen indicación alguna sobre el particular, y cabe preguntar: ¿qué expresa este silencio? ¿Quiere decir que pueden adquirir bienes, puesto que no encierra ninguna prohibición, ó, por el contrario, que no les es dado adquirir por no permitirlo expresamente la ley? La contestación se encuentra en una sentencia de 30 de Mayo de 1885, dictada en un pleito sostenido por un particular contra el Ayuntamiento de Barcelona, sobre validez de la compra de una casa de la propiedad de aquél, verificada por éste para establecer una casa de corrección, en la que el Tribunal Supremo declaró que «no existe en la *Ley Municipal de 1870* (igual á la vigente en este punto) *disposición alguna que faculte á los Ayuntamientos para acordar por si solos, ó sin la aprobación superior, la adquisición de bienes inmuebles con el objeto indicado ó con otro cualquiera.*»

Es, pues, lícito á los Ayuntamientos la adquisición de bienes inmuebles con la aprobación superior, siempre que sea para el cumplimiento de fines que atribuye la ley á tales Corporaciones. Así, podrá aceptar una casa que se le done para una escuela y

as para un fin benéfico ú otro municipal,
, y además como indicación de los requisitos ó solemnidades con que suelen efectuarse las donaciones á favor de los Ayuntamientos, copiamos la Real orden siguiente:

Real orden de 28 de Abril de 1888.—Visto el expediente promovido por D... natural y vecino de... provincia... en el que se hace al Estado, y en su representación al Ministerio de Fomento, donación espontánea é irrevocable de un edificio de la propiedad de dicho señor, con destino á escuelas públicas de niños, para cuyo fin se construyó:

Resultando que con el citado edificio se hace también cesión del terreno que le circunda, cercado de tapia y destinado al recreo de los niños, y que tanto una finca como otra están inscritas como de la propiedad de D... en el Registro de la propiedad de...

Resultando que la donación expresada se hace con las condiciones siguientes:

1.^a Que las referidas fincas se han de destinar única y exclusivamente al establecimiento de una escuela pública en que se dé gratuitamente la instrucción primaria á los niños del distrito municipal.

2.^a Que en el caso de que la escuela no se instale en el plazo que V. E. se digne fijar, ó que después de instalada dejara de existir la enseñanza en ella por cualquier motivo, el edificio y campo expresados serán revertidos á mi sobrino D...

3.^a Que el Ayuntamiento ha de mantener á sus expensas, bien repasada, conservada y provista del material y enseres necesarios, la mencionada escuela, y en buen estado las cercas del campo que la circuyen, de modo que no padezca detrimento, y no podrá en ningún caso enajenarlos, dividirlos ni gravarlos con responsabilidad alguna, pues si lo hiciere tendrá asimismo lugar la reversión expresada:

Resultando que por orden de esa Dirección general de 15 de Marzo último fué aprobada, y por lo tanto aceptada dicha donación, previos los correspondientes informes:

Considerando que las condiciones con que se hace la referida donación son en un todo admisibles; y

Considerando que el acto realizado por D... es, como todos los que tienen por objeto el desarrollo de la enseñanza, digno de imitación y aplauso, así como de la preferente atención del Go.

bierno, S. M. la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (Q. D. G.), ha tenido á bien aceptar la donación y transmisión de dominio de que queda hecha referencia, disponiendo al propio tiempo:

1.º Que el Rector de la Universidad de... autorice al Inspector de primera enseñanza de la provincia de... para que, en su nombre y en representación de la Dirección general de Instrucción pública, lleve á cabo la inscripción correspondiente en el Registro de la propiedad de..., haciendo luego entrega oficial del edificio al Ayuntamiento de... con las prevenciones que juzgue oportunas, de conformidad con las cláusulas establecidas en la donación; y

2.º Que se den las gracias á D... por el acto de esta donación, haciéndolo público por medio de la *Gaceta de Madrid* para su satisfacción y efectos correspondientes. (*Gaceta 3 Junio 1888.*)

Diputaciones provinciales.—Acerca de éstas sólo hay disposiciones expresas en la ley para el gobierno y administración de las provincias de 23 de Septiembre de 1863, cuyos artículos 56 y 57 se hallaban redactados en la siguiente forma:

«Art. 56. Las Diputaciones provinciales acordarán:

10. La aceptación de donativos, mandas ó legados.

Art. 57. Necesitan la aprobación del Gobernador:

2.º La aceptación de donativos ó legados que lleven consigo alguna carga.»

La ley Provincial vigente se calla acerca de este extremo. Nosotros entendemos que es aplicable á las Diputaciones provinciales cuanto hemos dicho respecto de los Ayuntamientos, cuya capacidad tiene que ser análoga en ambas Corporaciones, puesto que es igual su naturaleza y carácter.

Establecimientos de beneficencia é instrucción.—Concerniente á éstos, contiene el Código un precepto expreso, pues dice que tales establecimientos «se regirán en este punto (adquisición y posesión de bienes) por lo que dispongan las leyes especiales.» Estudiaremos, por tanto, estas leyes, comenzando por las relativas á los *establecimientos de beneficencia*.

Innecesario es decir que éstos (y lo mismo los de instrucción) quedaron comprendidos, bajo el punto de vista que examinamos, dentro de la repetida ley de 11 de Octubre de 1820; pero antes que sobre ninguna otra clase de personas colectivas, empezaron á darse disposiciones limitando el rigor de dicha ley. En efecto, la

sostenidos con *los bienes* y valores de su donación voluntarios que se les concedieren,» establece que «se destinarán á la conservación, mejora y establecimientos *generales* de beneficencia los *siguientes*: 1.º Los de procedencia particular que su dotación. 2.º *Los que por contratos entre vivos* destinaren los particulares á este objeto.

La instrucción citada también contiene otras que pueden tener aplicación al punto que en el que declara que «en las *herencias* y *legados* benéficos impliquen obligaciones permanentes, la acción del Gobierno) cesará con el cumplimiento probado del testador,» y el 11, que dice «que corresponde á la Gobernación autorizar á los representantes legados, cuando no lo estuviesen por otro título sus bienes *inmuebles* no amortizados.»

De la instrucción de 27 de Enero de 1885 son los que tenemos que enumerar, el 2.º y el 13, el siguiente:

«Art. 2.º Son establecimientos de beneficencia que cumplieren el objeto de su fundación, los que se crean con fondos propios *donados* ó *legados*. Estos establecimientos se regirán y ajustarán á lo dispuesto en la instrucción aprobada por el Real decreto de 1875 y del Real decreto de 28 de Julio de 1886.

Art. 13. Además de los *bienes*, pensiones y otros propios de la beneficencia *general*, le pertenece al Estado consignar en sus presupuestos *gastos* y *donativos* que se les hicieren con ó sin destino.»

Tal es la parte legislativa referente á los establecimientos de *beneficencia*, cuyo complemento lo constituye la jurisprudencia del Tribunal, consignada en diversas sentencias que se continúan.

Sentencia de 13 de Abril de 1863. (Gaceta 20 idem, pág. 282.) — Si bien la ley de 11 de Octubre de 1836, prohibió á los establecimientos conocidos como *manos muertas* la adquisición de bienes raíces, esta ley ha sido modificada esencialmente en su

que autoriza expresamente á
adquirir bienes raíces, aunque
no integro de la venta de los

875. (*Gaceta* 13 Mayo *idem*.
le 1.º de Mayo de 1855 declaró
de adquirir los bienes que se
diendo *retenerlos* y debiendo
rtirlos en inscripciones de la

d para adquirir á un hospital,
y la citada ley de 1.º de Mayo

877. (*Gaceta* 1.º Junio *idem*,
rme á la ley de 1.º de Mayo
n repetidas sentencias, desde
lecimientos de beneficencia toda
abiendo muerto la usufruc-
al en 1863, época en que regía
el establecimiento ser decla-
declararlo así la Sala senten-
l.

879. (*Gaceta* 7 Febrero 1880.
risprudencia establecida por
prendidas en la ley de 11 de
ramente benéficas ó piadosas
ninadas familias ó personas;
o á esta clase la institución
idad de una ciudad, son in-
b de dicha ley, máxime si se
disposiciones se hallan esen-
á los establecimientos de be-
de 1855, que concede á los
s inmuebles á calidad de con-
dejar á salvo el principio

desamortizador, al que no se opone en manera alguna el legado
pío de que se trata en estos autos.

¿Cuál es el derecho *positivo* que se deduce de todo lo expues-
o? El Código dice que hay que atenerse á lo que dispongan las

leyes especiales, que no son otras que las enumeradas Junio de 1849, Real orden de 27 de Abril de 1875 é inst de esta misma fecha y de 27 de Enero de 1885. Todas e posiciones autorizan á los establecimientos de beneficencia públicos (generales, provinciales y municipales) como ó sostenidos con fondos particulares, para la adquisición y la aceptación de legados y donativos; pero, ¿los para poseer y *retener inmuebles*? En nuestra opinión, no. bien el art. 11 de la instrucción de 27 de Abril del 75 habla de bienes *inmuebles no amortizados*, de donde parece deducirse que tienen inmuebles amortizados, se refiere á los de esta clase que pudieran aún conservar para ser enajenados, pero no contiene precepto ninguno expreso por el cual puedan retenerlos los que de nuevo adquiriesen. Además, no hay que olvidar que los *establecimientos de beneficencia* han sido una de las varias entidades comprendidas bajo la denominación de *manos muertas*, y sujetas, por tanto, á lo dispuesto en las leyes de 1820 y 1855.

Nuestra opinión es que pueden adquirir toda clase de bienes, incluso *inmuebles*, pero á condición de que éstos sean enajenados, pudiendo conservar únicamente aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la fundación. El principio desamortizador no ha sido derogado por el legislador y constituye aún el espíritu de derecho positivo moderno; por consecuencia, en tanto que se conserve no puede darse á los principios legales un sentido que contravendría al mismo, conduciendo á la amortización.

Réstanos ocuparnos de los *establecimientos de enseñanza*. Cuantas consideraciones hemos expuesto respecto de las personas colectivas en general y los establecimientos de enseñanza en particular, son aplicables á éstos. Referentes en especial á ellos, existen la ley de 3 de Mayo de 1837, permitiéndoles la adquisición de capitales de censos y efectos de rédito fijo, y varias sentencias que exponemos a continuación.

Sentencia de 23 de Febrero de 1857. (C. L., id., tomo I, núm. 3.) Aunque las Corporaciones y establecimientos llamados *manos muertas* no pueden adquirir bienes inmuebles, sin embargo, no les está prohibido tomar los que se les dejan para invertir su producto en efectos públicos.

Esta inversión ó venta de los bienes inmuebles legados á ma-

se opone á la ley de 11 de Octubre de 1820, toda no se amortizan. (*Id.*)

de Febrero de 1862. (*C. L.*, *id.*, pág. 136.)—Si la ley de 11 de Octubre de 1820 prohibió á los conocidos con el nombre de manos muertas la pitales de censos impuestos sobre bienes raíces, 1837 modificó aquella prohibición respecto de de instrucción pública, permitiendo que se les otros efectos de rédito fijo.

ón, lejos de contraerse á los establecimientos ntes en aquella fecha, fué general y dictada sucesivo se creasen, con pleno conocimiento de corregía la prohibición de la ley de 11 de Octubre, restablecida y válidamente en observancia to de 1836, no pudo serlo ni lo fué en 1841.

encia de alguno de sus considerandos, y para el as formalidades necesarias para la creación de nadas á fines benéficos y de enseñanza, dare-

Real orden de 26 de Julio de 1886 (Gaceta 5 bida en los siguientes términos:

diente promovido por D..., en representación de oña..., en solicitud de que el Gobierno acepte y ión hecha por la señora citada con el nombre e la misma manera el protectorado y aprobando

e la Excm. Sra. Doña..., por escritura otorgada el Notario D... ha creado, dotado y fundado o de enseñanza primaria pública y gratuita con

alimento y vestido para los niños pobres, singularmente huérfanos, y luego, siendo adultos, para que adquirieran algunos conocimientos teóricos y los de práctica agrícola, ganadería é industrias derivadas y aumento de la riqueza principal de España:

Resultando que para este objeto ha destinado la fundadora el edificio del Monasterio de..., sito en el término de..., y varias parcelas de terreno contiguas al edificio, que han de servir para las prácticas cultivables; asignando asimismo para los gastos del establecimiento un capital de..., de las cuales se han de emplear en títulos de la Deuda perpetua al 4 por 100 el edificio y los te-

rrenos parcelarios agregados al mismo, y disponiendo que los títulos que han de comprarse se conviertan en inscripciones nominativas á favor del patronato fundacional, como también *serán de éste el edificio y parcelas citadas*:

Resultando que dicha Excm. Sra. constituye la fundación con el nombre de... y declara que la fundación de las escuelas públicas y de asilo ha de ser y continuará siendo perpetuamente de patronato particular y familiar además, como dotada exclusivamente con bienes propios de la otorgante, que habrá de ejercer dicho patronato con toda amplitud, sin restricción alguna, formulando las reglas ó constituciones de las escuelas y asilos, sometiéndolas á la aprobación de la autoridad competente, y obteniendo el repetido patronato el concepto de personal jurídico:

Resultando que la fundadora se reserva el derecho de nombrar patrona única á quien tuviere por conveniente, sin que por parte del delegado del patronato haya obligación de dar conocimiento á persona ó autoridad alguna, ni á rendir cuentas más que á la patrona ó patronato que la sucediese, sin que tampoco tenga ésta que rendir cuentas, como en general está dispuesto para los establecimientos de fundación particular cuando los fundadores no relevan de esta obligación á los patronos:

Resultando que al fallecimiento de la fundadora habrá de constituirse el patronato, que lo habrán de formar la actual Marquesa de..., el Obispo de la diócesis á que corresponde la fundación, el Gobernador civil de la provincia, el Cura de la parroquia rural y el Alcalde presidente del Ayuntamiento, entrando á formar parte de este patronato el que posea y suceda al fallecimiento de la actual Marquesa, y en ningún caso antes, el expresado título:

Resultando que la fundadora se reserva dictar en documento separado las reglas á que han de atenerse los patronos en el ejercicio de su cargo, y cuanto sea referente al organismo, enseñanzas y régimen de la fundación:

Resultando que llegado el caso de que la fundación dejara de existir legalmente por cualquier motivo imprevisto, los bienes muebles é inmuebles *adscritos á la misma* serán revertidos á los descendientes de las dos hijas de la fundadora, sucediendo en ellos los que existan por cabeza ó mayor proximidad de grado, de manera que no podrá tener lugar la incautación de dichos bienes por

el Estado, como tampoco á otros establecimientos, ni servir á otros fines que los marcados en la fundación, pues de ocurrir cualquiera de estos casos también tendría lugar la reversión:

Resultando que con arreglo á otra de las cláusulas de la escritura, y atendiendo á que la fundación constituye una verdadera donación que excede de la cantidad permitida por las leyes del Reino, se ha seguido ante los Tribunales el oportuno expediente, en el que ha recaído fallo aprobatorio á condición de que se acepte la donación por quien legalmente deba representar los intereses de las personas á cuyo favor se hace:

Resultando que la fundadora, por otra escritura otorgada ante el mismo Notario, consignó los estatutos que habrán de regir para las escuelas públicas gratuitas de su fundación, y todos los demás particulares necesarios para el régimen y administración, tanto de las referidas escuelas y bienes fundacionales como del patronato y dirección del establecimiento:

Resultando que de la misma escritura se desprende que la dirección del establecimiento habrá de estar á cargo de una congregación religiosa, siempre que fuera posible, y con este fin la fundadora ha designado al Instituto de los Hermanos de las Escuelas cristianas de..., sucediendo este Instituto en la dirección del establecimiento á la muerte de la fundadora y durante el patronato sucesor, sin que éste pueda hacer variación alguna, siempre que los hermanos correspondan á los fines de su cargo, y que dado el caso que este Instituto cesara, le sucederá otra congregación religiosa, ó, en último caso, cuando esto no fuera fácil, un particular:

Y resultando, por último, que en esta segunda escritura la fundadora impone á la dirección de la repetida fundación el deber de dar cuantas noticias se refieran á la instrucción y administración de la misma luego que falleciera aquélla, previniendo además que de la escritura fundacional y de los estatutos se dará conocimiento al Gobierno de S. M. por el Ministerio de Fomento para los efectos legales y singularmente para los ulteriores al fallecimiento de la fundadora:

Considerando que la importancia de esta fundación, que con no común largueza ha instituído la Excm^a. Sra..., la solemnidad y formalidades legales con que ha sido constituída, y las pretensiones deducidas ante este Ministerio por el Delegado de

dicha fundación, son de notoria oportunidad para que es-
tro fije de una manera clara y precisa los principios y re-
nerales que han de seguirse en asuntos de esta índole:

Considerando que bajo el punto de vista legal las fund-
que tienen por objeto atenciones ó servicios de enseña-
carácter de perpetuidad se hallan perfectamente dentro
leyes generales del reino, porque si bien las de desamor
y desvinculadoras tuvieron en su origen un carácter ené-
absoluto que parecía hacer imposible toda institución de
tuidad, *quedaron claramente exceptuadas las fundaciones de*
ción pública por la letra y espíritu de la ley de 3 de Mayo
que autoriza la imposición de censos ú otros efectos de
fijo destinados á objetos de instrucción pública, confir-
después en la práctica este precepto legal por la senten-
bunal Supremo de 28 de Febrero de 1862, que, entre otr-
culares, declaró no haber sido derogada la citada ley de
la de 1.º de Mayo de 1855:

Considerando que es también evidente que pueden
parte, ó mejor dicho, ser base de estas fundaciones los
y terrenos que han de ocupar las instituciones fundadas, po-
tando expresamente exceptuados de los efectos de la citada ley
por su art. 2.º, esta excepción lo mismo alcanza á las funda-
establecidas á la fecha de la ley, como á las que en adelante se
cieren: además de que el buen sentido hace comprender que
autoriza la existencia de las repetidas fundaciones, necesaria
de reconocer la facultad de que se destinen edificios á este fin
que de otro modo la institución no existiría:

Considerando que al Gobierno corresponde el prote-
general, y convendría que ahora se declarase de un modo
nante: primero, que el Ministerio de Fomento es el que
exclusivamente debe ejercer este derecho de suprema-
ción, por sí ó por medio de sus delegados, en lo que
fundaciones se refiere, no sólo porque el concepto de est-
ministerial exige que sea de su competencia todo aquel
la instrucción pública interesa, sino porque dicha supre-
pección está expresamente declarada en el art. 98 de la
de Septiembre de 1857, en relación con el 97 de la misma
lo que sea ejecución de dicha ley únicamente á este M-
está encomendado; y segundo, que los establecimientos,

del mismo dependen, las facultades que por el protectorado general sobre instituciones de esta naturaleza corresponden al Gobierno, y las que en las escrituras de fundación y estatutos del patronato se establecen.

Tercero. El Gobierno ejercerá además en las escuelas de que se trata la inspección que en los establecimientos de enseñanza le corresponde por lo que respecta á la moral, higiene y estadística.

Y cuarto. Que se manifieste á la fundadora la satisfacción con que el Gobierno ha visto el acto de esta fundación, haciéndolo público por medio de la *Gaceta* oficial. (*Gaceta* 5 Agosto *id.*)

Ley de Presupuestos de 1890-1891.—Art. 27. La Hacienda se incautará de los bienes é inscripciones intransferibles de la Deuda, pertenecientes á los *Institutos*, y procederá á su venta, previa conversión de las instituciones en títulos al portador.

Al efecto, se examinarán las fundaciones de que procedan los bienes ó las inscripciones dadas en su equivalencia, y su incautación quedará sometida á las *disposiciones del Código civil relativas á fundaciones de bienes con destino á la enseñanza.*

Iglesia.—El Código está terminante; declara que esta entidad se regirá por lo *concordado* entre ambas potestades, es decir, por el *Concordato de 17 de Octubre de 1851* y la ley de 4 de Abril de 1860 mandando observar el *Convenio* con la Santa Sede de 25 de Agosto de 1859, disposiciones que son las fundamentales en la materia.

El art. 41 del primero expresa que «la Iglesia tendrá el derecho de *adquirir* por cualquier título legítimo, y su *propiedad* en todo lo que *posea ahora ó adquiriera en adelante*, será solemnemente respetada».

Las leyes desamortizadoras de 1855 y 1856, al poner en venta los bienes pertenecientes á manos muertas, comprendieron, como era natural, los del clero, quedando desvirtuado el anterior *Convenio* hasta que se celebró el segundo de 1859, cuyo art. 3.º declara que «el Gobierno reconoce de nuevo formalmente el *libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad, y sin limitación y reserva, toda especie de bienes y valores*, quedando en consecuencia derogada por este *Convenio* cualquiera disposición que le sea contraria, y señaladamente y en cuanto se le oponga la ley de 1.º de Mayo de 1855».

legio á favor de la
ienes, cuando á las
os, olvidando que
a civil (que, lejos de
como en lo relativo
entender, no trae

nio de 25 de Agosto
l de los Registros
e verdadera impor-
niente:

el Convenio-ley de 4
evo y formalmente
uirir, retener y usu-

fructuar en propiedad y sin limitación ni reserva toda especie de bienes y valores, y explícitamente derogó en el artículo citado cualquiera disposición que fuese contraria al Convenio elevado á ley, y señaladamente y en cuanto se le oponga la de 1.º de Mayo de 1855.

En su virtud, no es aplicable esta ley ni las demás disposiciones á ella referentes, *tratándose de bienes adquiridos con posterioridad á la publicación del referido Convenio-ley.*

Ni dicho Convenio ni ninguna otra disposición exigen que los bienes adquiridos por la Iglesia hayan de enajenarse, invirtiendo el precio en láminas intransferibles del 3 por 100, puesto que *este precepto se limita, según el art. 4.º del citado Convenio, á los bienes que fueron devueltos por el Concordato de 1851, y en manera alguna se refiere á los que haya adquirido la Iglesia con posterioridad al Convenio-ley ó que adquiriese en lo sucesivo.»*

En lo relativo á la adquisición por título hereditario, son pertinentes los artículos 746, 747 y 752 del Código, cuyo texto es el siguiente:

«Art. 746. *Las iglesias y los cabildos eclesiásticos, las Diputaciones provinciales y las provincias, los Ayuntamientos y Municipios, los establecimientos de hospitalidad, beneficencia é instrucción pública, las asociaciones autorizadas ó reconocidas por la ley y las demás personas jurídicas, pueden adquirir por testamento con sujeción á lo dispuesto en el art. 38.*

Art. 747. Si el testador dispusiere del todo ó parte de sus bienes para sufragios y obras piadosas en beneficio de su alma,

haciéndolo indeterminadamente los albaceas venderán los bienes y la mitad al Diocesano para que los gastos y á las atenciones y necesidad al Gobernador civil correspondan los benéficos del domicilio del difunto de la provincia.

Art. 752. No producirán efectos las que haga el testador durante la vida del sacerdote que en ella le hubiere servido dentro del cuarto grado de parentesco ó instituto.»

Los dos primeros artículos son extractos de la Real Cédula de 30 de Agosto de 1763, título XX, lib. X de la Novísima Recopilación, el 747, no pueden menos de ser apercibidos que les informa y el fin á que se refieren.

Todo lo expuesto se refiere á lo que respecta á varios de sus institutos que enumeraremos en la siguiente.

Comunidades religiosas.—*Decreto de 16 de Julio de 1837.*—Queda derogado en su totalidad el Real Decreto de 16 de Julio último, autorizando á la Real Audiencia de Madrid para que en su fuerza y vigor el Real Decreto de 1837, que concede individualmente el derecho.

Decreto de 18 de Octubre de 1837.—Quedan extinguidos desde esta fecha los conventos, legios, congregaciones y demás comunidades fundados en la Península é islas de España de 1837 hasta el día.

Art. 2.º Todos los edificios, bienes y acciones de las casas de comunidad que por el artículo anterior, pasarán á ser de propiedad de la Nación.

Art. 3.º Las Hermanas de la Caridad, de Santa Isabel, las de la Doctrina, y con cualquiera otra denominación que se dedique á enseñanza y beneficencia se con-

Ley de 21 de Diciembre de 1876. (Gaceta 22) siendo en cuenta el fin piadoso y altamente se hallan destinados, se declaran exceptuados Estado, ordenada en la ley de 1.º de Mayo y rentas que posee hoy en propiedad el instituto Pías, y los que puedan corresponderle á virtud á su favor en reclamaciones judiciales que que pueda intentar ejerciendo acciones ó dependan en la actualidad.

nte, y por idénticas razones, se declaran ex- ta por el Estado, ordenada en la ley de 1.º de ienes y rentas que posea en propiedad el ins- mas de la Caridad de San Vicente de Paul, ñanza.

Vicente de Paul, San Felipe Neri, Hermanas . (Véase el art. 9.º del decreto de 18 de Octu-

o de 1878. (Gaceta 27 id.)—Artículo único. La bre de 1876, declarando exceptuados de la los bienes y rentas de las Escuelas Pías y de Caridad, será extensiva y aplicable al antiguo as de Nuestra Señora y Enseñanza.

Iglesia, en general, tiene facultad para ad- s de cualquiera clase que sean; pero no así, en idades religiosas exceptuadas por el Real de- bre de 1868.

nosas en Filipinas.—*Real orden de 4 de Diciem-* tando que la Real orden de 17 de Junio son el especial propósito de facilitar á la Junta or Real decreto de 22 de Abril del mismo año, rar las importantes reformas confiadas á su os conocimientos necesarios acerca de los bie- y regular, cuya suficiente decorosa situación os de la formación de dicha Junta:

r lo expuesto que las Reales órdenes aludi- ore un carácter transitorio y como anormal as especiales en que se encontraban á la sazón lo:

ie el art. 88 del Código civil garantiza á las per-

sonas jurídicas las facultades de adquirir y poseer bienes de todas clases, contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles y criminales, conforme á las leyes y reglas de su constitución, y con referencia concreta á la Iglesia, previene que se regirá en este punto por lo acordado entre ambas potestades:

Considerando que en las relaciones del Estado con la Iglesia domina hoy el respeto á todos los derechos y prerrogativas de la misma:

Considerando que la aplicación de la doctrina precedente ha de facilitar la división de la propiedad inmueble y su adquisición en parte por los hoy colonos con los beneficios económicos y sociales consiguientes:

Visto lo informado por el Consejo de Filipinas, y de conformidad con su dictamen,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, hase dignado derogar la Real orden de 14 de Octubre de 1849, y restablecer el derecho de la Iglesia y Corporaciones eclesiásticas á disponer de los bienes que tienen en esas provincias, con arreglo á los cánones y á la legislación anterior de Indias.

II. *Personas jurídicas de interés particular.*—La capacidad de éstas se subordina á las leyes que la regulan, según su distinta naturaleza. Las civiles se rigen por lo dispuesto en este Código (artículos 1.665 á 1.708), y las mercantiles é industriales por lo ordenado en el Código de su nombre (artículos 116 á 238), que se exponen en el Apéndice correspondiente al art. 36.

Existen además otras clases de asociaciones: para fines políticos (casinos), científicos (ateneos, academias), artísticos, benéficos y de recreo (círculos), los cuales, en cuanto á su constitución y régimen, se hallan sometidos á la ley de Asociaciones de 30 de Junio de 1887, inserta en el Apéndice del art. 36. El art. 18 de dicha ley dice que «las asociaciones quedan sujetas, en cuanto á la adquisición, posesión y disposición de sus bienes para el caso de disolución, á lo que dispongan las leyes civiles respecto á la propiedad colectiva.» La ley civil por excelencia es hoy el Código; de manera que hay que atenerse á lo que éste preceptúa.

Ahora bien: ¿dentro de qué disposiciones de éste se hallarán comprendidas? En nuestro entender, dentro del art. 36, por tratarse de sociedades que tienen carácter civil; del art. 33, que habla de las personas jurídicas en general, sin limitación de nin-

Mouricault, 'en su in-
de la Sección legislativa
inclusión de la materia
cés, criterio seguido por
viduo tiene en la sociedad
beres que cumplir; no p
verificando ciertos actos
gistrados, y éstos tienen que invocarse en cualquier
lugar en que se realizan aquéllos. Es necesario, pues
—dice,—que la ley no sólo ordene, sino también indique
el modo de conocer el verdadero domicilio, que declare
lo que especialmente le caracteriza.

En cuanto al lugar de inserción de la materia de
domicilio, el mismo Mouricault manifiesta el por qué
de su inclusión en el libro referente á las personas.
"Aun cuando no hubiese—dice—más que la necesidad
que tiene cada uno de llenar en el lugar de su domicilio
las formalidades relativas á su estado civil, tales como
las necesarias á la publicación, celebración del matri-
monio, divorcio, tutela, curatela, habría motivo más
que suficiente para colocar en el libro referente al estado
de las personas las disposiciones concernientes al domi-
cilio. Mas cuando se considera que á este lugar deben
dirigirse todas las citaciones que se hagan á un indi-
viduo; que en él se abre la sucesión á sus bienes, se
conoce al momento—añade—que mira esencialmente
á la persona, que concurre á formar su estado civil, y
que sólo él la completa."

Laurent distingue entre el domicilio real y el de
elección. Dentro del primero comprende el de origen
(el que el padre tenía en el momento del nacimiento de
un niño), el legal (mujer casada, menor, interdicto,



PRECEDENTES LEGALES.—A

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 40
 miento de la doctrina del párrafo p
 tinguir respecto de todo individuo,
 ramos denominar *civil*, es decir, c
 constituido por la mera residencia
 nado; y el *administrativo* ó *municipa*
 ley municipal, ó sea el determina
 requisito de la inscripción en el
 parte de la casa ó familia de un veci

Por consiguiente, toda persona
 una población podrá ser demandad
 vecino ó domiciliado de otra; y la
 también de base para determinar la
 los artículos 62 y 63 de la ley de En
 del artículo no es otro, en nuestro s
 pues la ley de Enjuiciamiento habla
 qué consiste éste. El precepto del art
 general, limitado á determinar lo q
 civil, y sin pérjuicio de lo quo estat
 la antes citada ley respecto de las r
 edad, incapacitados, empleados y r

El segundo párrafo del artículo
 alabanzas, informándole un gran es
 que á los representantes diplomátic
 pone residentes en su propio país; c
 privilegio el que en lo relativo al co
 nes civiles no se les considerara á
 como viviendo en nuestra patria,
 cepción respecto de lo demás. El
 principio, y en la necesidad de ado
 que conservan el último domicilio q

Como consideración final, dire
 cuenta que habla sólo de *diplomáti*
 que gozan del derecho de extraterritor
 consideran, según hemos dicho, cor
 representan.

Si el art. 40 determina el domicil

acto de las jurídicas. Si bien se mira, ~~requisito que caracteriza~~ distingue el domicilio voluntario del legal, dando la preferencia al primero sobre el segundo. Cuando no conste determinado el domicilio en la ley constitutiva de la persona jurídica (estatutos ó reglas de la fundación, escritura de sociedad), se considerará que lo tienen en el lugar que se halle su representación legal (junta directiva, junta de gobierno, dirección, consejo de administración, etc.), ó en el que se ejerzan las funciones principales de su instituto.

Derecho vigente.—*Civil.*—El determinado en el Código.

Persona. l.—Jurisprudencia.

a) ACCIÓN PERSONAL.—*Sentencia de 26 de Febrero de 1884.*—Según lo dispuesto por la regla 19 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios en que se ejerciten acciones personales será Juez competente el del lugar donde deba cumplirse la obligación, y á falta de éste, á elección del demandante, el del domicilio del demandado, ó el del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento.

Sentencia de 21 de Mayo de 1884.—No constando el lugar en que debe cumplirse la obligación, y ejercitándose una acción personal, es competente para conocer, el Juez del domicilio del demandado, con arreglo al art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil en su regla 1.ª, caso 2.º

Sentencia de 29 de Septiembre de 1884.—Según la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento, el único Juez competente para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones personales, es el del domicilio del demandado, cuando no ha mediado sumisión expresa ó tácita de las partes ni se ha determinado el lugar en que deben cumplirse las obligaciones, ni ha podido hacerse el emplazamiento del demandado en el lugar del contrato.

Cuando la demanda por acción personal tiene por objeto que se declare la existencia y perfección de un contrato consensual celebrado de palabra y que se obligue al demandado á su cumplimiento y éste niega la existencia obligatoria de tal contrato, no puede suponerse designado expresa ni tácitamente el lugar en que deba cumplirse la obligación, porque mientras no se pruebe y se declare la existencia de ésta, no puede exigirse su cumplimiento ni determinarse el lugar en que haya de verificarse, y,

por tanto, es indispensable para obtener aquella declaración sujetarse al fuero del domicilio del demandado, conforme á la regla antes expuesta, por no existir otra base para determinar la competencia cuando no media sucesión de las partes.

Sentencia de 7 de Julio de 1890.—Se considerará como fuero de los demandados domiciliados en Madrid, cuando no hubiese lugar designado expresamente en el caso de ejercitarse una acción personal, el de esta Corte.

Sentencia de 21 de Agosto de 1890.—En los juicios en que se ejerciten acciones personales será Juez competente el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y á falta de éste, á elección del demandante, el del domicilio del demandado, ó el del lugar del contrato.

b) COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES.—*Sentencia de 4 de Junio de 1883.*—El art. 66 de la ley de Enjuiciamiento civil dispone que el domicilio de las Compañías civiles y mercantiles sea el pueblo que como tal esté señalado en la escritura de sociedad ó en los estatutos por que se rijan, sin que altere esto el que haya establecida sucursal en otro punto.

Sentencia de 27 de Agosto de 1884.—Cuando no ha mediado sumisión expresa ó tácita de las partes ni éstas han designado el lugar en que haya de cumplirse la obligación, corresponde al Juez del domicilio del demandado el conocimiento de las demandas en que se ejerciten acciones personales, según la regla 1.^a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Cuando en la escritura de sociedad ó en los estatutos no se señala y determina el domicilio legal de una compañía civil, debe entenderse por tal el pueblo donde tuviere su establecimiento ó el centro de sus operaciones, conforme á lo prevenido en los artículos 65 y 66 de la ley antes citada.

Sentencia de 8 de Enero de 1886.—Según el art. 66 de la misma ley, «el domicilio de las compañías civiles y mercantiles será el pueblo que como tal esté señalado en la escritura de sociedad ó en los estatutos por que se rijan», y tanto en la escritura social como en los estatutos por que se rige la sociedad de que se trata, se señaló expresamente el domicilio de dicha sociedad anónima.

Si bien en la Junta general ordinaria celebrada en el domicilio de la sociedad se acordó que se trasladase el domicilio social á otro punto y que se hiciera para ello lo que prevenían las leyes

gado ni consta que se hubiera
haya sido inscrita en el Registro
ncia la escritura de sociedad con

la modificación indicada; lejos de ello, resulta por certificación librada con referencia al Registro de la anterior población, que en él se inscribió la escritura de constitución de la sociedad, y que no existe anotación referente á haber trasladado su domicilio, ni particular alguno del que se deduzca que hubiera dejado de tenerlo en aquella capital, y no pudiendo producir su efecto entre los socios ni á favor de la sociedad esa modificación del contrato social por faltarle la formalidad de la inscripción en el Registro correspondiente, según lo prevenido en el art. 292 del Código de Comercio, es preciso reconocer para los efectos de esta competencia que la sociedad de que se trata tiene hoy su domicilio legal en el lugar donde primero se fijó el domicilio.

Por las razones expuestas procede decidir esta competencia á favor del Juzgado del domicilio legal de la sociedad demandada, sin que obste el que lo tengan en otro punto los que han promovido la inhibitoria como demandados, porque han comparecido y gestionado en el concepto de socio fundador y Director Gerente de la sociedad anónima de que se trata y, por consiguiente, en representación de la misma.

Sentencia de 18 de Noviembre de 1892.—En los juicios en que se ejercitan acciones personales, es Juez competente el del lugar en que tenga su domicilio el demandado, cuando no haya sujeción expresa ó tácita á otro ó no medien las circunstancias que enumera la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si la sociedad minera contra la que se dirige la demanda reclamando ciertas cantidades por medio de la acción pro-socio, tiene su domicilio en La Carolina, porque allí se estableció en los estatutos y reglamentos por los que se rige, allí debe cumplir sus obligaciones, aplicándose estrictamente lo prescrito en el artículo 66 de la misma ley citada.

No obsta en manera alguna para que así se entienda el que en Junta ordinaria de socios se aprobara el que el Presidente y Junta directiva de la Sociedad se domiciliara en Madrid, porque esto no perjudicaba á los intereses de la misma, puesto que hay que distinguir entre el domicilio de la sociedad y el de los que la

el librador como domicilio del pagador, que es el mismo en que éste debe pagar.

Sentencia de 8 de Octubre de 1889.—Conforme á la regla 1.^a del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios en que se ejercitan acciones personales es en primer término competente, fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, el Juez del lugar ó distrito en que deba cumplirse la obligación, y según jurisprudencia constante del Supremo Tribunal, cuando no se ha determinado dicho lugar, se entiende que lo es en la compraventa de géneros de comercio aquel en que le entrega la mercancía.

Resultando de la factura presentada por el vendedor y demandante que los géneros cuyo importe reclama los vendía con la condición de que habían de abonársele en su domicilio, y aun prescindiendo de esto, habiendo aquél puesto los géneros para el comprador en la estación del ferrocarril de dicha población, en la misma debe satisfacerse el importe reclamado.

El haber librado el vendedor una letra que quedó en poder del comprador, no es bastante para deducir que el pago de los géneros debía hacerse en el domicilio del segundo, pues se comprende perfectamente que se valió aquél de dicha operación para facilitar el pago y recibir la cantidad en su propio domicilio. (Apéndice número 7.—*Domicilio.*)

APÉNDICES

1.º (Art. 6.º)

Antejuicio necesario para exigir la reponsabilidad criminal á los Jueces y Magistrados.—*Ley de Enjuiciamiento criminal, lib. IV, tit. II.*—Art. 757. Todo español que no esté incapacitado para el ejercicio de la acción penal (1), podrá promover el antejuicio necesario para exigir la responsabilidad criminal á los Jueces y Magistrados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Art. 758. Cuando el antejuicio tuviere por objeto alguno de los delitos de prevaricación relativos á sentencias injustas, no podrá promoverse hasta después de terminados por sentencia firme el pleito ó causa que dieren motivo al procedimiento.

Art. 759. Si el antejuicio tuviere por objeto cualquiera de los

(1) Art. 102 de la ley de Enjuiciamiento criminal. No podrán ejercitar la acción penal:

1.º El que no goce de la plenitud de los derechos civiles.

2.º El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia ó querella calumniosa.

3.º El Juez ó Magistrado.

Los comprendidos en los números anteriores podrán, sin embargo, ejercitar la acción penal por delito ó falta cometidos contra sus personas ó bienes, ó contra las personas ó bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos ó uterinos y afines.

Los comprendidos en los números 2.º y 3.º podrán ejercitar también la acción penal por el delito ó falta cometidos contra las personas ó bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal.

delitos referentes, ya á retardo malicioso en la adm de justicia, ya á negativa á juzgar por alguno de los especificados en el Código, podrá promoverse tan pronto el Juez ó Tribunal hubiese dictado resolución, negándgar por obscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley, que hubiesen transcurrido quince días de presentada solicitud pidiendo al Juez ó Tribunal que falle ó resuquiera causa, expediente ó pretensión judicial que pendiente, sin que aquél lo hubiese hecho ó manifestacrito en los autos causa legal para no hacerlo.

Art. 760. Cuando tuviese por objeto cualquier otro metido por el Juez ó Magistrado en el ejercicio de sus podrá promoverse el antejuicio desde que el delito sea

Art. 761. El ofendido por la resolución judicial no cesidad de prestar fianza alguna para ejercitar la acc los Jueces ó Magistrados.

Se entiende por ofendido aquel á quien directame perjudique el delito.

Art. 762. El que no haya sido ofendido por el deli mover el antejuicio, prestará la fianza que el Tribunal de conocer de la causa determine para que pueda es ciarse á su instancia.

En todo lo relativo á la fianza se estará á lo dispu título IX del lib. II de esta ley.

Art. 763. Contra el auto exigiendo la fianza y fijan tidad y calidad, procederá el recurso de apelación en a tos para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sido dictado por la Audiencia.

Si lo hubiese sido por el Tribunal Supremo, proce mente el recurso de súplica.

Art. 764. El antejuicio se promoverá por escrito, en forma de querella, que firmará un Letrado.

Art. 765. Si la responsabilidad criminal que se inta fuese por alguno de los delitos de prevaricación relati tencias injustas, se presentará con el escrito la copia de la sentencia, auto ó providencia injusta.

Si no pudiese presentarse, se manifestará la ofici chivo judicial en que se hallen los autos originales.

Art. 766. Se hará además en el escrito expresión c

arse para comprobar la injusticia de
cia que dé ocasión al antejuicio.

Art. 767. Si la responsabilidad fuese por razón de cualquiera de los delitos á que se refiere el art. 759 de esta ley, se acompañarán con el escrito:

1.º Las copias de los presentados después de transcurrido el término legal, si la ley lo fijase, para la resolución ó fallo de la pretensión judicial, expediente ó causa pendientes, pidiendo cualquiera de los interesados al Juez ó Tribunal que de ellos conozcan que los resuelva ó falle con arreglo á derecho.

2.º La certificación del auto ó providencia dictados por el Juez ó Tribunal denegando la petición por obscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley, si se tratase de delito definido comprendido en el segundo párrafo del mismo artículo, la que acredite que el Juez ó Tribunal dejó transcurrir quince días desde la petición, ó desde la última si se le hubiese presentado más de una, sin haber resuelto ó fallado los autos ni haberse consignado en ellos y notificado á las partes la causa legítima que se lo hubiese impedido.

Art. 768. Si la responsabilidad fuese por razón de cualquiera otro delito cometido por el Juez ó Magistrado en el ejercicio de sus funciones, se presentará con el escrito de querella el documento que acredite la perpetración del delito, ó en su defecto la lista de los testigos, formada del modo prevenido en el artículo 656 (1)

Art. 769. Si el que promoviese el antejuicio por cualquiera de los delitos expresados en los artículos anteriores no pudiese obtener los documentos necesarios, presentará á lo menos el testimonio del acta notarial levantada para hacer constar que los reclamó al Juez ó Tribunal que hubiese debido facilitarlos ó expedirlos.

Art. 770. El Tribunal que conozca del antejuicio mandará practicar las compulsas que se pidan, y en el caso del artículo

(1) Art. 656. ...En las listas de peritos y testigos se expresarán sus nombres y apellidos, el apodo (si por él fuesen conocidos), y su domicilio ó residencia, manifestando además la parte que los presente si los peritos y testigos han de ser citados judicialmente ó si se encarga de hacerles concurrir.

anterior ordenará al Juez ó Tribunal que se hubiese negado á expedir las certificaciones, que las reúna en el término que habrá de señalársele, informando á la vez lo que tuviese por conveniente sobre las causas de su negativa para expedir la certificación pedida.

Mandaré además practicar las compulsas que considere convenientes, citándose al querellante para los cotejos de todas las que se hicieren, á no ser en el caso de que la compulsas fuese de alguna diligencia de sumario no concluida, y no se hubiese practicado con intervención del que promoviese el antejuicio.

Art. 771. Hechas las compulsas se unirán á los autos, dándose de ellos vista al querellante para instrucción, por término de tres días. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el testimonio de carácter reservado á que se refiere el artículo que precede, si el querellante se hallare en el caso indicado.

Si los autos no fuesen devueltos en dicho término, se recogerán de oficio el primer día de la demora.

Se pasarán después al Fiscal por igual término, y devueltos que sean, se señalará día para la vista.

Art. 772. Si hubiesen de declarar testigos, se señalará el día en que deban concurrir, citándose con las formalidades legales.

Los testigos serán examinados en la forma prescrita en el capítulo V, título V del lib. II.

Art. 773. Así el Fiscal como el defensor del querellante podrán, en el acto de la visita, manifestar lo que creyeran conveniente sobre lo que resulte de los documentos del expediente, y en su caso de las declaraciones de los testigos examinados, concluyendo por pedir la admisión ó no admisión de la querella interpuesta.

Art. 774. El Tribunal resolverá lo que estime justo en el día siguiente de la vista.

Art. 775. Si admitiere la querella, mandará proceder á la instrucción del sumario con arreglo al procedimiento establecido en esta ley, designando, conforme á lo dispuesto en el art. 303, el Magistrado ó Sala que lo haya de formar, si no considera conveniente que sea el Juez de instrucción propio del territorio donde el delito se hubiere cometido ó cualquier funcionario del orden judicial en activo servicio.

El Tribunal acordará también la suspensión de los Jueces y

Art. 2.º Los extranjeros que con arreglo á las l. carta de naturaleza ó ganen vecindad en cualquier pueblo de las provincias españolas de Ultramar, son tenidos por españoles.

Art. 3.º Los extranjeros podrán entrar, residir y establecerse libremente en el territorio de las provincias españolas de Ultramar; se dividirán en domiciliados, transeúntes y emigrados; tendrán los derechos y deberes que esta ley establece (1), y quedarán además sujetos á todas las leyes y reglamentos que rijan en aquella provincia.

Serán domiciliados los que tengan casa abierta ó lleven tres años de residencia en la provincia, ó estén inscritos en el Registro como domiciliados.

Serán transeúntes aquellos en quienes no concorra ninguna de las circunstancias precedentes.

Serán emigrados los que, careciendo de la mismas circunstancias, no se hallen inscritos en el Registro como transeúntes y lleven más de tres meses de permanencia en la provincia.

Art. 4.º Los extranjeros que lleguen á territorio español de Ultramar y deseen ser inscritos en el Registro como domiciliados ó transeúntes; deberán presentar á la autoridad civil del pueblo el pasaporte ó documento correspondiente que identifique su persona.

En caso de no tenerle, harán ante la misma autoridad una información de testigos.

Lo uno y lo otro podrá efectuarse ante el Cónsul respectivo, quien en tal caso pasará á la autoridad civil oportuno testimonio íntegro y autorizado.

Art. 5.º El extranjero que no identifique su persona por alguno de los dos medios prescritos en el artículo anterior, será tenido por emigrado pasados tres meses de su llegada.

Art. 6.º Hecho lo prevenido en el art. 4.º, se expedirá un certificado al extranjero para que acredite la identidad de su persona en cualquier punto del territorio á donde quiera dirigirse, ínterin se inscribe en el Registro de extranjeros y se provee de la correspondiente cédula.

(1) Hecho extensivo el Código á Cuba y Puerto Rico, será aplicable en cuanto á los *derechos* de los extranjeros el art. 27 del mismo.

superior civil, el cual mandará que se haga la Registro, se expida la cédula correspondiente por el mismo conducto al interesado.

Estas diligencias deberán ejecutarse en el días, á contar desde el de la recepción de los Gobierno.

Art. 14. La información de testigos, las d sión y todas las demás necesarias para la insc registros, así como el certificado que previene dula que expresa el 11, se practicarán y expe derechos.

Art. 15. Para los efectos legales se consid un extranjero el pueblo donde tenga casa abie al cumplirse los tres años de su residencia en

Cuando tenga casa abierta en dos ó más p para domicilio.

Art. 16. Cuando un extranjero pase de la á la de transeúnte ó domiciliado, ó siendo de domicilio, lo pondrá personalmente ó por con dad local en conocimiento del Gobierno super sión de su cédula, á fin de que en ésta y en el las anotaciones correspondientes.

Los términos para que se verifiquen esta los mismos respectivamente que se fijan en el

Art. 17. El domicilio se pedirá al Ayunta local del pueblo en que se pretenda fijarle, ex y objeto y sus condiciones y circunstancias.

De la decisión de la autoridad local ó Ayu solicitante apelar al Gobernador superior civ. ulterior recurso.

Art. 18. Toda petición de domicilio debe autoridad local ó Ayuntamiento en el térmi pasados los cuales sin resolución, se entende micilio.

La apelación al Gobernador superior civil de domicilio se resolverá en término de un n el día en que se reciba en el Gobierno la solie Pasado un mes sin resolución, se entenderá e lio con anulación de la decisión apelada.

1 extranjero podrá ser inscrito en el Registro en calidad de domiciliado, ni con expresión estenda serlo, sin acreditar debidamente que el domicilio.

2 extranjeros transeúntes podrán residir en el

, cuando los residentes en un punto determinen su número, procedencia ú otras circunstancias o las relaciones amistosas de España con el extranjero ó la autoridad superior de la provincia de su punto de residencia.

3 extranjeros residirán, mientras lo sean, en el territorio de los Gobernadores superiores civiles y después el Go-

4 rán bajo la vigilancia de la autoridad política y primeramente se presentasen, la cual fijará el punto de residencia, dando cuenta inmediata al Gobernador.

5 extranjeros que entren con armas en el territorio de los Gobernadores superiores civiles, dando cuenta de ello, decidirán, además del punto de residencia, el lugar en donde han de estar en depósito ó recibir socorro.

6 extranjeros que no identificasen su persona no podrán ser inscritos en el Registro de extranjeros hasta que se haga lo que se dispone en el artículo siguiente.

7 extranjeros serán en una lista especial bajo los nombres de los países á donde ellos eligiesen. A este efecto, las autoridades de su punto de residencia se presentasen cuidarán de remitir con las diligencias correspondientes á los Gobernadores superiores civiles.

8 so á que se refiere el artículo anterior, el Gobernador de su nombre los Gobernadores superiores civiles de las Naciones de que hubiesen manifestado proporcionar las noticias necesarias para comprobar la veracidad de las noticias dadas por éstos.

9 extranjero pasará á la clase de transeúnte ó de extranjero si no pudiese dar noticias de su entrada en territorio español, ó si no hubiese identificado su persona.

Art. 27. Los emigrados que á los seis meses de su en territorio español no hubiesen identificado su persona ó nes no se supiese cosa cierta, no obstante haberse pedido las noticias de que se habla en el art. 25, serán inscritos con sujeción á las relaciones que hubiesen dado.

Art. 28. El emigrado que, no pudiendo identificar su persona, faltase á la verdad en la relación de su nombre y circunstancias, podrá ser expulsado del territorio español por orden del Gobierno ó del Gobernador superior civil de la provincia.

Igualmente podrá ser expulsado el que, para identificar su persona, presentase documentos falsos ó hiciese una falsa información. En este caso se procederá criminalmente y con arreglo á las leyes contra los españoles que de cualquier modo hayan tomado parte en el delito.

TÍTULO II

De la condición política de los extranjeros.

Art. 29. Los extranjeros que con arreglo á esta ley residan en las provincias españolas de Ultramar tendrán derecho:

A la seguridad de su persona, bienes, domicilio y correspondencia en la forma establecida por las leyes para los españoles.

A reunirse y asociarse en los casos y con las condiciones que estén determinadas para los españoles, y siempre que el objeto con que lo hagan no sea de hostilidad á los Estados que tengan relaciones amistosas con España.

A emitir y publicar sus ideas con sujeción á las leyes que sobre la materia rijan para los españoles y con la limitación impuesta en el párrafo anterior.

Y á dirigir peticiones á los Poderes públicos y á las Autoridades en la forma que para los españoles dispongan las leyes.

Art. 30. Todo extranjero tendrá derecho en los territorios españoles de Ultramar á practicar pública ó privadamente cualquier culto religioso, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.

Art. 31. Ningún extranjero podrá ser elector ni elegible para los cargos públicos de elección popular.

Art. 32. Tampoco podrá ningún extranjero:

alguno, aunque no sea de elección popular, que la autoridad ó jurisdicción.

cio alguno eclesiástico.

o público alguno de los que llevan aneja auto-
in, á no ser que haya entrado al servicio de Es-
de su Gobierno respectivo, ó que, si esta cir-
cunstanza ocurre, se le habilite especialmente para ello por
el.

aso deberá el extranjero, antes de tomar posesión,
renunciar á la protección de su país en cuanto
al cargo.

los considerados extranjeros con arreglo á esta
Ley, al pago de las contribuciones de todas
clases, según las leyes, Reglamentos y tarifas,
que les correspondan por el comercio que ejerciesen.

Los extranjeros estarán además sujetos á los impuestos mu-
nicipales, y á los donativos, préstamos y contri-
buciones ordinarias y extraordinarias.

Los extranjeros que posean bienes raíces ó inmuebles pertenecientes á ex-
trañera clase que sean, y aunque no residan en
el país, estarán sujetos á todos los impuestos que gra-
ven á los bienes de igual naturaleza pertenecientes á es-

Los extranjeros estarán exentos de las cargas conce-
didas por el Estado, exceptuándose los domiciliados con casa abierta.
Los extranjeros estarán sujetos á las cargas de alojamiento y

Los extranjeros domiciliados tendrán derecho al dis-
frute de los aprovechamientos comunes del pueblo en que
estén radicados.

Los extranjeros no de los que esta ley considera extranjeros
no estarán sujetos al servicio militar.

TÍTULO III

Condición civil de los extranjeros.

Los extranjeros podrán adquirir y poseer en el terri-
torio Ultramar toda clase de bienes muebles ó in-

Art. 39. Todo extranjero podrá ejercer libremente en las vicias españolas de Ultramar cualquier clase de industria arreglo á la legislación allí vigente, y dedicarse á cualquier fesi3n para cuyo desempeño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las Autoridades españolas.

Art. 40. Los extranjeros podrán ejercer el comercio por mayor y menor, pero con sujeci3n al Código de Comercio y á las más leyes, reglamentos ó disposiciones que rigen en la materia.

Quedan por ahora subsistentes las prohibiciones que existían respecto al desempeño por los extranjeros de funciones públicas mercantiles.

Art. 41. Los extranjeros estarán sujetos á las leyes y tribunales españoles por los delitos que cometan en el territorio español.

Art. 42. También lo estarán en todas las demandas que ellos ó contra ellos se entablen para el cumplimiento de obligaciones contraídas dentro y fuera de España á favor de español ó que versen sobre propiedad ó posesi3n de bienes existente en territorio español.

Art. 43. Los Tribunales españoles serán también competentes y deberán conocer de las demandas entre extranjeros que ellos se entablen y que versen sobre el cumplimiento de obligaciones contraídas ó cumplideras en España.

Art. 44. En los abintestatos de extranjeros, la autoridad competente en el pueblo en que ocurriese el fallecimiento, en uni3n con el Comisario más próximo de la Naci3n á que correspondiera el finado ó persona que el C3nsul comisione para ello, formará el inventario de los bienes y efectos, y dispondrá lo necesario para que se conserven en custodia y á disposici3n de los herederos.

Si el extranjero fuese domiciliado y falleciese fuera de su domicilio, el Juez de éste, á quien se dará noticia por el Jefe del pueblo del fallecimiento, hará lo que se previene en el párrafo anterior respecto de los bienes y efectos del finado que allí existan.

En el caso de no residir C3nsul en el pueblo del fallecimiento ó del domicilio, la autoridad judicial, mientras el C3nsul, á quien se dará inmediato aviso, ó su comisionado se presentase, se ocupará de tomar las medidas necesarias para la custodia de los bienes y efectos.

Art. 45. Tanto en los abintestatos como en las sucesiones

tamentarias de extranjeros, los Tribunales españoles sólo podrán conocer de las reclamaciones y demandas á que se refieren los artículos anteriores.

Art. 46. En los demás negocios sobre extranjeros ó contra extranjeros, los Tribunales españoles sólo serán competentes para adoptar medidas urgentes y provisionales de precaución y seguridad.

Art. 47. Los extranjeros, como tales, no gozarán de fuero alguno especial ni privilegiado, y estarán sujetos á los mismos Tribunales que, según los casos, conozcan de los negocios de los españoles.

TÍTULO IV

De los buques extranjeros.

Art. 48. Los criminales ó reos de delitos comunes no podrán tomar asilo en los buques mercantes extranjeros anclados en puerto español, y si lo hicieren, las autoridades españolas procederán á su extradición, previo aviso al Cónsul respectivo si lo hubiese, ó de acuerdo con lo establecido en los respectivos tratados internacionales si existiesen.

Art. 49. Todo buque extranjero podrá acogerse á los puertos españoles de Ultramar.

El que llegue por arribada forzosa será auxiliado por las autoridades españolas.

Art. 50. Las autoridades españolas intervendrán en cualquier exceso, desorden ó tumulto ocurrido en buque extranjero anclado en puerto español, cuando crea que puede afectar á la seguridad interior ó exterior ó á la tranquilidad del territorio.

En cualquier otro caso sólo intervendrán si el Capitán del buque reclama su auxilio.

Art. 51. Los desertores de la dotación de buque extranjero anclado en puerto español de Ultramar serán devueltos á su bordo por las autoridades españolas en cuanto se verifique su aprehensión.

Art. 52. En caso de naufragio de un buque extranjero, las autoridades de marina, auxiliadas por las demás, procediendo de acuerdo con el Capitán ó Jefe del buque y el Cónsul respectivo si le hubiese, procederán á todo lo necesario para el salvamento.

Art. 53. En los casos á que se refiere el artículo anterior exigirá el pago de los gastos de salvamento, y por razón de estas procesales lo que dispongan los Aranceles respecto á los ques españoles.

Art. 54. Cualquier falta, negligencia ú omisión por parte las autoridades españolas respecto de los auxilios prevenidos los artículos precedentes, las harán responsables para ante Gobierno español; pero no darán derecho á indemnización ninguna clase á los que se crean perjudicados, salvo que se ha establecido lo contrario en los tratados.

TÍTULO V

Disposiciones generales.

Art. 55. Las disposiciones de esta ley no se refieren á los presentantes extranjeros ni á las personas que dependan de el como tales.

Art. 56. Quedan derogadas las leyes y disposiciones vigen hasta hoy en la materia en cuanto se opongan á las prescripciones de esta ley.

Art. 57. El Ministro de Ultramar formará los Reglamentos dictará las disposiciones necesarias para que esta ley se cum y ejecute.

De acuerdo de las Cortes Constituyentes, se comunica al Jefe del Reino para su promulgación como ley. (*Gaceta 6 Julio*)

3.º (Art. 11.)

Testigos.—*Ley de Enjuiciamiento civil.*—Art. 657. Si alg testigo no entendiere ó no hablare el idioma español, será examinado por medio de intérprete, cuyo nombramiento se hará la forma prevenida para el de los peritos.

Testigos.—*Ley de Enjuiciamiento criminal.*—Art. 410. Todos los que residan en territorio español, nacionales ó extranjeros que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que

lida

lla

náti

----- por
crito las personas comprendidas en el núm. 7.º, remitiéndose
efecto al Ministerio de Gracia y Justicia, con atenta comuni
ción para el de Estado, un interrogatorio que comprenda to
los extremos á que deban contestar, á fin de que puedan hac
por la vía diplomática.

Art. 440. Si el testigo no entendiere ó no hablare el idio
español, se nombrará un intérprete, que prestará á su presen
juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de
cargo.

Por este medio se harán al testigo las preguntas y se
cibirán sus contestaciones, que éste podrá dictar por su c
ducto.

En este caso, la declaración deberá consignarse en el proc
en el idioma empleado por el testigo y traducido á continuac
en español.

Art. 441. El intérprete será elegido entre los que tengan tí
de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto, será nombr
un maestro del correspondiente idioma; y si tampoco le hubi
cualquiera persona que lo sepa.

Si ni aun de esta manera pudiera obtenerse la traducción
las revelaciones que se esperasen del testigo fueren importan
se redactará el pliego de preguntas que hayan de dirigírsele y
remitirá á la oficina de Interpretación de Lenguas del Minist
de Estado, para que, con preferencia á todo otro trabajo, s
traducidas al idioma que hable el testigo.

El interrogatorio, ya traducido, se entregará al testigo y
que, á presencia del Juez, se entere de su contenido y redacte
escrito en su idioma las oportunas contestaciones, las cuales
remitirán, del mismo modo que las preguntas, á la Interpre
ción de Lenguas.

Estas diligencias las practicarán los Jueces con la mayor
ividad.

Ley orgánica del Poder judicial.—Art. 333. Los extranjeros que cometieren faltas ó delinquieren en España, serán juzgados por los que tengan competencia para ello por razón de las personas ó del territorio.

Art. 334. Exceptúanse de lo ordenado en el artículo anterior los Príncipes de las familias reinantes, los Presidentes ó Jefes de otros Estados, los Embajadores, los Ministros plenipotenciarios y los Ministros residentes; los Encargados de Negocios y los extranjeros empleados de planta en las Legaciones, los cuales, cuando delinquieren, serán puestos á disposición de sus Gobiernos respectivos.

Art. 335. El conocimiento de los delitos comenzados á cometer en España y consumados ó frustrados en países extranjeros, corresponderá á los Tribunales y Jueces españoles, en el caso de que los actos perpetrados en España constituyan por sí delito, y sólo respecto á éstos.

Art. 336. Serán juzgados por los Jueces y Tribunales del Reino, según el orden prescrito en el art. 326, los españoles ó extranjeros que fuera del territorio de la Nación hubiesen cometido alguno de los delitos siguientes:

Contra la seguridad exterior del Estado.

Lesma majestad.

Rebelión.

Falsificación de la firma, de la estampilla real ó del Regente.

Falsificación de la firma de los Ministros.

Falsificación de otros sellos públicos.

Falsificaciones que perjudiquen directamente al crédito ó intereses del Estado, y la introducción ó expendición de lo falsificado.

Falsificación de billetes de Banco cuya emisión esté autorizada por la ley, y la introducción ó expendición de los falsificados.

Los cometidos, en el ejercicio de sus funciones, por empleados públicos residentes en territorio extranjero.

Art. 337. Si los reos de los delitos comprendidos en el artículo anterior hubiesen sido absueltos ó penados en el extranjero, siempre que en este último caso se hubiese cumplido la condena, no se abrirá de nuevo la causa.

Lo mismo sucederá si hubiesen sido indultados, á excepción de los delitos de traición y lesma majestad.

- cia del reo ó reos presuntos las diligencias practicarán los autos al Tribunal español que, atendido el delito, tenga competencia para conocer de él, próximo al Consulado en que se haya seguido lo que por fuero personal debiera ser juzgado el reo, en la jurisdicción que la ordinaria si hubiese delinquirido cuyo caso será por el Tribunal superior correspondiente que disfrute.

Art. 343. La jurisdicción ordinaria es competente de las faltas, sin más excepciones que las que respecta á los militares y marinos.

Art. 344. Los Jueces del lugar en que se cometan los delitos son los únicos competentes para juzgarlos.

Art. 345. En las faltas cometidas en país extranjero sean entregados los que las cometan á los Consules. Juzgará en primera instancia el Vicecónsul, si no hubiere apelación el Cónsul con su Asesor, si no fuere de Asesor, con los adjuntos de que habla el artículo 343. El Vicecónsul, hará sus veces un súbdito español en el mismo modo que los adjuntos, á principio de cada año.

Estos juicios se seguirán en conformidad de lo dispuesto en el Reino.

Art. 346. Lo prescrito en esta sección respecta á los delitos cometidos en el extranjero se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 824 y 825, que en adelante se celebren con los mismos efectos.

Extradición.—Procedimiento.—Ley de Enjuiciamiento.—Art. 824. Los Fiscales de las Audiencias Supremo, cada uno en su caso y lugar, pedirá al Tribunal proponga al Gobierno que solicite la extradición de los procesados ó condenados por sentencia firme, cuando no se encuentren en el país con arreglo á derecho.

Art. 825. Para que pueda pedirse ó proponer será requisito necesario que se haya dictado una sentencia firme ó recaído sentencia firme contra los acusados.

Art. 826. Sólo podrá pedirse ó proponerse la extradición de los españoles que, habiendo delinquirado en el extranjero, hayan refugiado en país extranjero.

españoles que, habiendo atentado en el extranjero
contra la independencia exterior del Estado, se hubiesen refugiado
en el extranjero del en que delinquieron.

Extranjeros que, debiendo ser juzgados en España,
se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.

Se procederá la petición de extradición:

En los casos que se determinen en los tratados vigentes
en cuyo territorio se hallare el individuo recla-

mato del tratado, en los casos en que la extradición
se funda en el derecho escrito ó consuetudinario vigente en el
país de la Nación se pida extradición.

En los casos de los dos casos anteriores, cuando la extradi-
ción se funda según el principio de reciprocidad.

Juez ó Tribunal que conozca de la causa en que
se hallare el reo ausente en territorio extranjero, será
competente para pedir su extradición.

Juez ó Tribunal que conociere de la causa acor-
dando ó denegando la extradición, en resolución fundada, pe-
dirá la extradición desde el momento en que, por el estado del
proceso, sea procedente con arreglo á cual-
quiera de los artículos 826 y 827.

Contra el auto acordando ó denegando pedir la ex-
tradición podrá interponerse el recurso de apelación, si lo hu-
iere el Juez de instrucción.

La petición de extradición se hará en forma de
recurso dirigido al Ministerio de Gracia y Justicia.

En el caso en que por el tratado vigente con la Nación
extranjera se hallare el procesado, pueda pedir directa-
mente la extradición el Juez ó Tribunal que conozcan de la causa.

En el suplicatorio ó comunicación que hayan de
emitir, lo dispuesto en el artículo anterior, se remitirá
junto con el auto de extradición la pretensión ó dictamen fiscal en que se haya pe-
dido la extradición con arreglo al número corres-
pondiente. 826 en que aquélla se funde.

Cuando la extradición haya de pedirse por conducto
del Gobierno de Gracia y Justicia, se le remitirá el suplica-

torio y testimonio por medio del Presidente de la Audiencia respectiva.

Si el Tribunal que conociere de la causa fuere el Supremo ó su Sala Segunda, los documentos mencionados se remitirán por medio de dicho Tribunal.

Tratados.—Alemania.—Convenio de 2 de Mayo de 1878.

Artículo 1.º Las altas partes contratantes se obligan por el presente tratado á entregarse recíprocamente, en todos los casos que las cláusulas del mismo expresan, los individuos que por alguno de los hechos abajo enumerados, cometidos y punibles en el territorio de la parte reclamante, han sido, como autores ó cómplices, condenados, acusados ó sometidos á un procedimiento criminal, y residan en el territorio de la otra parte, á saber:

1.º Por homicidio, asesinato, envenenamiento, parricidio ó infanticidio.

2.º Por aborto voluntario.

3.º Por exposición de un niño menor de siete años ó su abandono premeditado en estado tal que lo prive de todo recurso.

4.º Por robo, ocultación, sustracción, supresión, sustitución ó suposición de un niño.

5.º Por rapto ó robo de una persona menor de edad.

6.º Por la privación voluntaria é ilegal de la libertad individual de una persona, cometida por un particular.

7.º Por atentado contra la inviolabilidad del domicilio, cometido por un particular y penado por la legislación de ambas partes.

8.º Por amenaza de causar un mal que constituya un delito grave.

9.º Por formar una asociación ilegal con el propósito de atentar contra las personas ó contra la propiedad.

10. Por bigamia.

11. Por violación.

12. Por atentados contra el pudor con violencia ó amenazas, en los casos penados por la legislación de ambos países.

13. Por atentados contra el pudor con violencia ó amenazas contra jóvenes de uno ú otro sexo de menos de catorce ó doce años, según que tengan aplicación al caso que se persigue las disposiciones penales que rigen en el territorio de una ú otra de las

acir á los mismos á la ejecución ó nestos.

l á la mala vida en personas de menor edad de uno y otro sexo.

15. Por golpes, heridas ó malos tratõs voluntarios á una persona, cuyas consecuencias produzcan una enfermedad al parecer incurable, la inutilidad perpetua para el trabajo, la pérdida del uso completo de un miembro ú órgano, una mutilación grave, ó la muerte sin intención de causarla.

16. Por robo y hurto.

17. Por despojo, abuso de confianza y exacción con violencia ó amenazas, en los casos en que estos actos sean punibles conforme á la legislación de ambas partes contratantes.

18. Por estafa ó engaño en las cosas, consideradas como crímenes ó delitos por la legislación de ambas partes contratantes.

19. Por bancarrota fraudulenta y daño fraudulento á la masa del capital de la quiebra.

20. Por perjurio.

21. Por falso testimonio ó declaración falsa de un perito ó de un intérprete, en los casos en que estos hechos sean castigados por la legislación de ambos países.

22. Por soborno de testigos, peritos ó intérpretes.

23. Por falsificación de documentos y de despachos telegráficos cometida con intención de fraude ó de perjudicar á otro, y por el uso á sabiendas de documentos y despachos telegráficos con intención de fraude ó de perjudicar á otro.

24. Por deterioro, destrucción ó supresión voluntaria é ilegal de un documento público ó privado, cometidos con intención de perjudicar á otro.

25. Por falsificación de troqueles ó punzones, timbres, marcas ó sellos con el objeto de emplearlos como legítimos, y por el uso á sabiendas de troqueles ó punzones, timbres, marcas ó sellos falsificados.

26. Por moneda falsa, comprendiendo la falsificación ó alteración del valor de las monedas y del papel-moneda, y por expender y poner en circulación á sabiendas monedas ó papel-moneda falsificados ó alterados.

27. Por imitación y falsificación de billetes de Banco ó de títulos de la Deuda ú otros valores imitados ó falsificados.

28. Por incendio voluntario.

29. Por malversación de caudales y exacción ilegal cometidas por funcionarios públicos.

30. Por soborno de funcionarios públicos para que falten á los deberes de su cargo.

31. Por los siguientes delitos cometidos por los Capitanes ó tripulaciones de buques de alto bordo:

A) Destrucción voluntaria ó ilegal de un buque.

B) Encallamiento voluntario de un buque.

C) Resistencia con vías de hecho contra el Capitán de un buque, si tal resistencia se efectúa por varios tripulantes después de haberse concertado con este objeto.

32. Por destrucción ilegal y voluntaria, total ó parcial, de ferrocarriles, máquinas de vapor ó aparatos telegráficos; por poner voluntariamente obstáculos á la circulación de los trenes colocando cualquier objeto en la vía férrea; por levantar los carriles ó traviesas, arrancando agujas, clavos ó tornillos, y por emplear cualquier otro medio para detener un tren y hacerle descarrilar.

33. Por destrucción ó deterioro voluntario é ilegal de sepulcros, monumentos públicos ú objetos artísticos expuestos en lugares públicos, de obras y edificios, de víveres, mercancías ú otras propiedades de bienes muebles, de cosechas, plantas de toda especie, árboles é injertos, de aperos de labranza, de animales domésticos ú otros, en los casos en que estos hechos sean punibles como crímenes ó delitos en la legislación de ambos países contratantes.

34. Por la ocultación de objetos adquiridos por uno de los delitos que en este tratado se enumeran, siempre que este acto sea punible por las leyes de ambos Estados.

Aunque el crimen ó delito que motive la demanda de extradición haya sido cometido fuera del territorio de la parte reclamante, se podrá acceder á dicha demanda si las leyes del Estado á quien se dirige autorizan el castigo de tal crimen ó delito cometido fuera de su territorio.

Art. 2.º También podrá tener lugar la extradición por la tentativa de los hechos enumerados en el art. 1.º, si tal tentativa es punible por las leyes de ambos países contratantes.

Art. 3.º Ningún español será entregado por el Gobierno espa-

No se considera como delito político ni como hecho c con tal delito el atentado contra el Soberano ó Jefe de un I extranjero ó contra los miembros de su familia, cuando el tado tenga carácter de homicidio, asesinato ó envenenam

Art. 7.º La extradición no podrá concederse si hubiere crito el delito ó la pena según las leyes del país en que encuentre el individuo reclamado cuando se pida su extradición.

Art. 8.º La extradición de las personas acusadas de lcrimen ó delitos enumerados en los artículos 1.º y 2.º se con en virtud de sentencia condenatoria ó del auto, cabeza de p ó de elevación á plenario, ó del mandamiento de prisión cualquier otro auto ó providencia que tenga la misma fuer estos documentos é indique igualmente la naturaleza ó gra de los hechos, así como la disposición penal que le sea apl Estos documentos se remitirán originales ó en copia lega en la forma prescrita por las leyes del Estado que solicita tradición.

Las demandas de extradición se dirigirán siempre por diplomática, pero la correspondencia y las negociaciones y seguirse, según las circunstancias de cada caso, entre el Go español y el Gobierno del Estado del Imperio alemán inte en la extradición.

Art. 9.º En casos urgentes, el individuo perseguido en de uno de los crímenes ó delitos enumerados en los artícu y 2.º podrá ser detenido preventivamente en vista de una nificación oficial de la autoridad competente del Estado, q clama la extradición.

La persona detenida en tales circunstancias será puesta bertad si en el término de dos meses, contados desde el día prisión, no se presentase la demanda de extradición confo artículo 8.º del presente tratado.

Art. 10. Todos los objetos que en el momento de la det se hallen en poder de la persona que haya de ser entregada, cogidos serán remitidos al Gobierno que solicite su extrac previa orden al efecto de las Autoridades del Estado en c ha refugiado. Se remitirán en este caso, no sólo los objet hayan sido robados ó sustraídos, sino todos aquellos que p servir de prueba del crimen ó delito que se le impute. Se van, sin embargo, los derechos de terceras personas á los

dencia podrán, á petición suya, adelantarle el todo ó parte de los gastos de viaje, que deberá reintegrar enseguida el Gobierno interesado en la declaración de dicho testigo.

El testigo, cualquiera que sea su nacionalidad, que á consecuencia de la citación que reciba en el país de su residencia comparezca voluntariamente ante los Jueces del otro país, no podrá allí ser perseguido ni detenido por hechos ó sentencias anteriores, ni con pretexto de complicidad en los hechos que motivan la causa en que figura como testigo.

Art. 15. Cuando en una causa criminal por hechos no considerados como crímenes ó delitos políticos se juzgue necesaria ó útil la presentación de comprobantes, pruebas ú otros documentos que se hallen en poder de las Autoridades del otro país, se dirigirá al efecto una demanda por la vía diplomática y se le dará curso, á menos que á ello no se opongan consideraciones especiales, pero siempre con la condición de devolver estos documentos y comprobantes.

Las partes contratantes renuncian al reembolso de los gastos á que den lugar la entrega y envío de estos comprobantes y documentos hasta la frontera.

Art. 16. Las partes contratantes se obligan á notificarse recíprocamente todas las sentencias que por crímenes ó delitos de cualquiera especie pronuncien los Tribunales de un país contra los súbditos del otro. Se hará esta notificación por la vía diplomática, remitiendo íntegra ó en extracto la sentencia definitiva al Gobierno del Estado á que pertenezca la persona sentenciada.

Art. 17. Todas las disposiciones del presente tratado serán aplicables á las posesiones españolas de Ultramar, en la inteligencia de que en el caso previsto en el último párrafo del art. 9.º el plazo será de tres meses en vez de dos.

Art. 18. El presente tratado empezará á regir diez días después de su publicación en la forma prescrita por la legislación de las dos partes contratantes, y desde entonces se considerarán derogados los tratados de extradición de malhechores anteriormente celebrados entre España y los Estados del Imperio alemán.

Cada una de las partes contratantes podrá denunciar el presente tratado, pero seguirá en vigor seis meses después de la fecha de la denuncia.

CÓDIGO CIVIL

itos, la sustracción cometida por criado ó dependiente asado.

° La estafa.

° La fabricación, introducción y expendición de moneda ó de instrumentos que sirven para fabricarla, la falsificación de los punzones ó sellos con los cuales se contrastan el oro y plata, la falsificación de los sellos del Estado y de toda clase de papel sellado, aunque estas falsificaciones se hayan efectuado en el país que reclama la extradición.

° El falso testimonio y la sobornación de testigos sobre delito grave, la falsedad cometida en instrumentos públicos ó privados y en los de comercio, exceptuándose las falsedades á las que la legislación del Estado reclamante no diese el carácter de delito grave.

° La sustracción que cometieren depositarios, constituidos en Autoridad pública, de valores que por razón de su cargo se lesen en su poder.

° La quiebra fraudulenta.

art. 3.° Aunque la extradición no se concederá sino por los delitos comunes especificados en el artículo anterior, y de ningún modo por delitos políticos, no obstará á la entrega de los reos de delitos comunes el que lo sean igualmente de delitos políticos; pero en este caso sólo podrán ser encausados y castigados por los primeros.

art. 4.° Cuando el individuo reclamado esté encausado al mismo tiempo por algún delito grave, perpetrado en el país á cuyo Gobierno se pidiere la extradición, podrá éste suspenderla hasta el resultado de la instrucción, y en caso de ser condenado el individuo, hasta que el mismo individuo haya cumplido su condena.

art. 5.° La extradición podrá ser negada si desde la perpetración del delito, desde el encausamiento ó sentencia condenatoria hubiese transcurrido el término de la prescripción de la acción judicial, ó de la pena con arreglo á las leyes del país donde el reo se hubiese refugiado.

art. 6.° Si el individuo reclamado no fuese súbdito del Estado reclamante, la extradición podrá suspenderse hasta que el Gobierno de aquél haya sido puesto en el caso de alegar las razones que pueda tener para oponerse á la misma extradición.

ión
duo
en

· la
de
pri-
ido
ndo
po-

ara

en-
que
ta-
s al
. se

i el
re-

en-
re,
de-
la

ari
sti-
pos
da-
ori-
del
la
nes
de
tes
el

La reclamación irá, por consiguiente, siempre acompañada de un exhorto del Tribunal competente, en el cual explícitamente se declare la diligencia judicial reclamada.

Los documentos judiciales que en virtud de la misma reclamación se extiendan serán remitidos en original al Gobierno que la hiciese, y en ningún caso quedará éste obligado al pago de los gastos originados, así por la expedición de documentos como por las diligencias judiciales que hubiese pedido.

Art. 11. Si para la instrucción de una causa criminal se juzgase necesaria la comparecencia personal de un testigo domiciliado en el otro Estado, el Gobierno del país á que dicho testigo pertenezca le exhortará á que se presente ante el Juzgado que reclamase su presencia; y si consintiese el testigo, se le abonarán los gastos de viaje y estancia con arreglo á las tarifas y reglamentos vigentes en el país donde haya de prestar su declaración.

Art. 12. Cuando en una causa criminal instruída en uno de los dos Estados contratantes se hallare implicado un súbdito del otro, y que en seguimiento de esta causa se estimare necesario carear este súbdito con un individuo ya examinado por los Tribunales del primero, el Gobierno á quien se dirigiese la reclamación dará curso á la correspondiente citación, á fin de que el careo pueda verificarse en el territorio del Estado reclamante, con condición, sin embargo, de que después de concluído este acto sea entregado otra vez á su Gobierno el individuo citado para ser juzgado por los Tribunales de su país.

Art. 13. Los gastos ocasionados por el arresto, detención, custodia y manutención de los individuos cuya extradición estuviese acordada, y los gastos de su conducción al punto donde se verifique la entrega, serán sufragados por aquel de los dos Estados en cuyo territorio dichos individuos hayan sido aprehendidos.

Art. 14. Los Gobiernos contratantes renuncian á cualquiera reclamación de gastos resultantes así de la conducción y restitución á sus respectivos países de los reos que han de ser careados, como del envío y devolución de los objetos que constituyan las pruebas del delito y de los documentos referentes á las mismas providencias.

Art. 15. Si en el transcurso de tres meses, contados desde el

2.º Golpes y heridas causadas voluntariamente, sea con premeditación, sea cuando resulte de ellos una dolencia ó incapacidad permanente de trabajo personal, la pérdida ó privación del uso absoluto de un miembro, de la vista ó de cualquier otro órgano, ó la muerte sin intención de causarla.

3.º Bigamia, rapto de menores, violación ó estupro, aborto, atentados al pudor cometidos con violencia, atentado al pudor cometido sin violencia en la persona ó con la ayuda de un niño de uno ú otro sexo menor de catorce años; atentado á las costumbres, excitando, facilitando ó favoreciendo habitualmente para satisfacer las pasiones ajenas la prostitución ó la corrupción de menores de uno ú otro sexo.

4.º Sustracción, ocultación, supresión, sustitución ó suposición, exposición ó abandono de un niño.

5.º Incendio.

6.º Destrucción de construcciones, máquinas de vapor ó aparatos telegráficos.

7.º Asociación de malhechores, robo.

8.º Amenazas de atentado contra las personas ó las propiedades, punible con la pena de muerte, trabajos forzados ó reclusión.

9.º Atentados á la libertad individual y á la inviolabilidad del domicilio, cometidos por particulares.

10. Falsificación de moneda, comprendiendo en esto la imitación y alteración de la moneda, la emisión y expendición de la moneda imitada ó alterada; imitación ó falsificación de efectos públicos ó de billetes de Banco, de títulos públicos ó particulares; emisión ó expendición de estos efectos, billetes ó títulos imitados, fabricados ó falsificados; falsedad cometida en escritos ó en despachos telegráficos, y uso de estos despachos, efectos, billetes ó títulos imitados, fabricados ó falsificados; imitación ó falsificación de sellos, timbres, punzones ó marcas, á excepción de los de particulares ó comerciantes; uso de los sellos, timbres, punzones y marcas imitados ó falsificados, y uso perjudicial de los sellos, timbres, punzones y marcas verdaderos.

11. Falso testimonio y declaraciones falsas de peritos ó intérpretes; soborno de testigos, de peritos ó de intérpretes.

12. Juramento falso.

13. Concusión, malversación cometidas por funcionarios públicos; soborno de dichos funcionarios.

14. Bancarrota fraudulenta y fraudes cometidos en las quiebras.

15. Estafa, abuso de confianza (apropiación indebida) y engaño.

16. Abandono de un buque ó barco de comercio ó de pesca por parte del Capitán, fuera de los casos previstos en la ley de uno y otro país.

17. Apresamiento de un buque por los marineros ó pasajeros, empleando fraude ó violencia con el Capitán.

18. Ocultación de objetos obtenidos por medio de uno de los crímenes ó delitos previstos por el presente convenio.

La extradición podrá también ser concedida por la tentativa de dichos crímenes ó delitos, cuando sea punible por la legislación de los dos países contratantes.

Art. 3.º No se concederá nunca la extradición por crímenes ó delitos políticos. El individuo que fuere entregado por una infracción á las leyes penales no podrá en ningún caso ser juzgado

Art. 10. La extradición no será concedida sino en vista de la presentación, ya de la sentencia ó del auto definitivo de condena, ya de la providencia de la Sala del Consejo, de la sentencia de la Sala de lo criminal, ó del auto de procedimiento criminal, emanado del Juez ó de la autoridad competente, decretando formalmente ó efectuando de pleno derecho la remisión del reo ó del acusado ante la jurisdicción represiva, expedido su original ó su copia auténtica.

Estos documentos irán, á ser posible, acompañados de las señas del individuo reclamado y de una copia del texto de la ley aplicable al hecho acriminado.

En el caso de que hubiere duda sobre si el crimen ó delito objeto del procedimiento se halla comprendido en el presente convenio, se pedirán explicaciones, y después de examinadas, el Gobierno á quien se pida la extradición resolverá acerca del curso que se ha de dar á la demanda.

Art. 11. El individuo procesado por uno de los hechos previstos en el art. 2.º del presente convenio será arrestado preventivamente á la presentación de auto de prisión ó de otro documento que tenga la misma fuerza, expedido por la autoridad extranjera competente y presentado por la vía diplomática.

En caso de urgencia se efectuará el arresto provisional mediante aviso, transmitido por el correo ó por telégrafo, de la existencia de un auto de prisión, á condición, sin embargo de que dicho aviso sea dado en debida forma por la vía diplomática al Ministro de Negocios Extranjeros del país en que el acusado se ha refugiado.

Sin embargo, en este último caso no se tendrá arrestado al extranjero sino cuando en el plazo de tres semanas reciba comunicación del auto de prisión expedido por la autoridad extranjera competente.

El arresto del extranjero tendrá lugar en la forma y según las reglas establecidas por la legislación del Gobierno á quien se pida.

Art. 12. El extranjero arrestado provisionalmente en virtud de párrafo 1.º del artículo precedente, ó detenido en arresto en conformidad al párrafo 3.º del mismo artículo, será puesto en libertad si dentro de los dos meses de su arresto no recibe notificación, sea de una sentencia ó auto definitivo de condena, sea de una providencia de la Sala del Consejo, de una sentencia de la Sala de lo

ez competente, decretando formalmente la remisión del reo ó del acusado.

Objetos ó cogidos en poder del individuo, los instrumentos ó útiles de que conste el crimen ó delito que se le imputa, serán entregados a la autoridad competente del Estado receptor, aun en el caso en que no hubiere sido concedida, no pudiera verlos el reo.

Se considerará también todos los objetos de igual naturaleza que hubiere ocultado ó depositado en el país en que se hubiere refugiado y que se encontraren allí después.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de terceros sobre los mencionados objetos, que deben serles devueltos sin gastos luego que el proceso criminal ó correccional haya terminado.

Art. 14. Los gastos de arresto, de manutención y de transporte del individuo cuya extradición hubiese sido concedida, así como los de consignación y de transporte de los objetos que en virtud del artículo anterior deban ser devueltos ó remitidos serán de cuenta de los dos Estados dentro de los límites de sus respectivos territorios.

Los gastos de transporte ú otros en el territorio de los Estados intermedios serán de cuenta del Estado reclamante.

En caso de que se juzgue preferible el transporte por mar, el individuo reclamado será conducido al puerto que designe el agente diplomático ó consular acreditado por el Gobierno reclamante, á expensas del cual será embarcado.

Art. 15. Queda formalmente estipulado que la extradición por vía de tránsito por los territorios respectivos de los Estados contratantes, será concedida á la simple presentación en original ó copia auténtica de uno de los autos de procedimiento mencionados, según los casos, en el art. 10 que antecede, cuando sea pedida por uno de los Estados contratantes en favor de un Estado extranjero, ó por un Estado extranjero en favor de uno de dichos Estados, ligados ambos con el Estado requerido por un tratado que comprenda la infracción que motiva la demanda de extradición.

ción, y cuando ésta no se halle prohibida por los artículos del presente convenio.

Art. 16. Cuando en la instrucción de una causa política, uno de los dos Gobiernos juzgare necesario domiciliados en el otro Estado, se enviará al efecto diplomática un exhorto, que se cumplimentará obedeciendo las leyes del país en que hayan de ser oídos los testigos.

Los Gobiernos respectivos renuncian á toda reclamación que tenga por objeto la devolución de los gastos que ocasiona el cumplimiento del exhorto.

Art. 17. Cuando en asunto criminal no político cesaria al Gobierno español ó al Gobierno belga la de un auto de procedimiento, ó de una sentencia á un español, el documento remitido diplomáticamente en persona á excitación del Ministerio público la residencia por medio de un oficial competente, que acredite la notificación, revestido del visto, será el mismo conducto al Gobierno reclamante.

Art. 18. Si en una causa criminal no política fue la comparecencia personal de un testigo, el Gobierno que aquél resida le exhortará á acceder á la invitación que haga, y en este caso se le abonarán los gastos de viaje con arreglo á las tarifas y reglamentos vigentes en que haya de tener lugar la comparecencia. Las personas que residan en España ó en Bélgica llamadas como testigos en los Tribunales de uno ú otro país no podrán ser procesadas por hechos ó condenas criminales anteriores, ni por complicidad en los hechos objeto del procedimiento, ni figurar como testigos.

Cuando en una causa criminal no política instruída en los dos países se considerase útil la presentación de confesión ó documentos judiciales, se dirigirá la petición por vía diplomática, y se le dará curso, á menos que con particulares no se opongan á ello, y con obligación de devolver los documentos.

Los Gobiernos contratantes renuncian á cualquier reclamación de gastos que resulten, dentro de los límites de los respectivos, del envío y devolución de las pruebas y documentos.

Art. 2.º Procederá la extradición por los delitos graves ó menos graves siguientes:

1.º El asesinato, el envenenamiento, el parricidio y el infanticidio.

2.º El homicidio.

3.º Las amenazas de muerte y de incendio cuando hayan sido hechas por escrito y bajo condición.

4.º Las lesiones y heridas causadas voluntariamente con premeditación, ó cuando den por resultado una imposibilidad física ó incapacidad permanente para el trabajo personal, la pérdida ó la privación del uso absoluto de un miembro, de un ojo ó de cualquiera otro órgano, una mutilación grave ó la muerte sin intención de causarla, el homicidio por imprudencia, negligencia, torpeza ó falta de observancia de los reglamentos.

5.º El aborto.

6.º La administración voluntaria y culpable, aunque sin intención de causar la muerte, de sustancias que pueden ocasionarla ó alterar gravemente la salud.

7.º El rapto, la ocultación, la desaparición, la sustitución ó la suposición de un niño.

8.º La exposición ó el abandono de un niño.

9.º La sustracción de menores.

10. La violación.

11. El atentado contra el pudor con violencia.

12. El atentado contra el pudor sin violencia en la persona, ó con ayuda de la persona, de un niño de uno ú otro sexo, menor de trece años.

13. El atentado á las buenas costumbres, excitando, facilitando ó favoreciendo habitualmente para satisfacer las pasiones de un tercero, la mala vida ó la corrupción de menores de uno ú otro sexo.

14. Los atentados á la libertad individual y á la inviolabilidad del domicilio, cometidos por particulares.

15. La bigamia.

16. La asociación de malhechores.

17. La reproducción furtiva ó falsificación de efectos públicos ó de billetes de Banco, títulos públicos ó privados; la emisión ó circulación de dichos efectos, billetes ó títulos reproducidos furtivamente ó falsificados; la falsificación por escrito ó en despa-

37. La oposición por vías de hecho á la confección de trabajos autorizados por el Poder competente.

38. Crímenes cometidos en la mar:

a) Todo acto de pillaje ó de violencia cometido por la tripulación de un buque francés ó español contra otro buque francés ó español, ó por la tripulación de un buque extranjero que no esté habilitado en regla, contra buques franceses ó españoles, sus tripulantes ó sus cargamentos.

b) El acto de cualquier individuo, forme ó no parte de la tripulación de un buque, de entregarlo á los piratas.

c) El acto de cualquier individuo, forme ó no parte de la tripulación de un buque, de apoderarse del mismo por fraude ó violencia.

d) Destrucción, sumersión, varamiento ó pérdida de un buque con intención culpable.

e) Sublevación por dos ó más personas á bordo de un buque en la mar contra la autoridad del Capitán ó del patrón.

Se comprenden en las calificaciones anteriores las tentativas cuando están previstas por las legislaciones de ambos países.

La extradición se llevará á cabo en los casos anteriormente previstos:

1.º Respecto de los sentenciados en juicio ordinario ó en rebeldía, cuando el total de la pena impuesta sea lo menos de un mes de prisión.

2.º Respecto de los procesados, cuando el máximo de la pena aplicable al hecho que se les acrimina sea por lo menos de dos años de prisión, según la ley del país reclamante, ó de una pena equivalente, ó cuando el procesado haya sido condenado á una pena criminal ó á una prisión de más de un año; y en España por los hechos considerados como delitos menos graves, cuando el total de las penas impuestas exceda de dos años de privación de libertad.

En todos los casos ó delitos más ó menos graves no se verificará la extradición sino cuando el hecho semejante sea penable con arreglo á la legislación del país á quien se dirija la demanda.

Art. 3.º No será entregada persona alguna sentenciada ó procesada si el delito por que se pide la extradición está considerado por la parte de quien se reclame como delito político, ó como hecho conexo con semejante delito.

refugiado, podrá retrasarse su extradición hasta de la causa, ó el procesado sea absuelto ó haya cumplido su pena.

En caso de que fuera perseguido y detenido en el mismo país por efecto de obligaciones que hubiese contraído con particulares, su extradición se efectuará, sin embargo, á reserva de que la parte perjudicada pueda ejercitar sus derechos ante la Autoridad competente.

Art. 10. El individuo que fuese entregado no podrá ser perseguido ni juzgado en juicio ordinario por otra infracción que no sea la que motivó la extradición, á menos que conste el consentimiento expreso y voluntario, dado por el acusado y comunicado al Gobierno que lo entregó.

Art. 11. Podrá negarse la extradición si después de los hechos imputados, la última providencia del proceso ó la sentencia condenatoria se adquiriese la prescripción de la pena ó de la acción, según las leyes del país en que el procesado se hubiese refugiado, ó si los hechos acriminados han sido objeto de una amnistía ó de un indulto.

Art. 12. Los gastos ocasionados por la captura, detención, custodia, alimentación de los procesados y el transporte de los objetos mencionados en el art. 8.º del presente convenio al sitio en que ha de verificarse la entrega, serán sufragados por el Estado en cuyo territorio se haya efectuado la captura de los presuntos reos.

Art. 13. Cuando en la tramitación de una causa criminal no política, uno de los dos Gobiernos juzgase necesario oír á testigos domiciliados en el otro Estado, se librará al efecto un exhorto por la vía diplomática, que se cumplimentará por los funcionarios competentes, observando las leyes del país en que deba verificarse la audición de testigos.

Sin embargo, los exhortos en que se trate de efectuar una visita domiciliaria ó la aprehensión del cuerpo del delito ó de documentos de prueba no serán cumplimentados sino por uno de los hechos enumerados en el art. 2.º del presente tratado, y con la reserva consignada en el párrafo 2.º del art. 8.º del mismo.

Los Gobiernos respectivos renuncian á toda reclamación que tenga por objeto el reintegro de los gastos que resulten por el cumplimiento de exhortos, aun en el caso de que se trate de un juicio pericial, con tal de que sin embargo dicho juicio no ocasionase más de una vacación.

Art. 17. Las estipulaciones del presente tral
bles á las colonias y á las posesiones de las dos
tratantes, donde se procederá en la forma sigui

La demanda de extradición del malhechor que se haya re-
fugiado en una colonia ó posesión extranjera de una de ambas
partes será presentada al Gobernador ó funcionario principal de
dicha colonia ó posesión por el principal agente consular de la
otra en la misma colonia ó posesión, ó si el fugitivo se hubiese
evadido de una colonia ó posesión extranjera de la parte en cuyo
nombre se pide la extradición, por el Gobernador ó por el fun-
cionario principal de la referida colonia ó posesión.

Las demandas serán presentadas y admitidas, ajustándose tan
exactamente como sea posible á las estipulaciones de este tra-
tado y teniendo en cuenta la distancia y la organización de los
poderes locales, por el Gobernador ó primer funcionario, que sin
embargo tendrá la facultad ó de conceder la extradición ó de
consultar á su Gobierno.

Art. 18. El presente convenio, que sustituye al de 26 de
Agosto de 1850, empezará á estar en vigor á los treinta días de
haberse canjeado las ratificaciones.

Continuará vigente hasta que haya transcurrido un año, á
contar desde el día en que una de las dos altas partes contratan-
tes hubiese declarado querer que cesasen sus efectos.

Este convenio será ratificado, y las ratificaciones se canjea-
rán cuanto antes sea posible.

En fe de lo cual los plenipotenciarios respectivos han fir-
mado el presente convenio, que han sellado con el sello de sus
armas.

Hecho en Madrid el 14 de Diciembre de 1877.—(L. S.) Fir-
mado: Manuel Silvela.—(L. S.) Firmado: Chandordy.—Este
convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratificaciones can-
jeadas en Madrid el día 25 del presente mes. (*Gaceta* 29 Junio.)

Inglaterra.—Convenio de extradición celebrado entre España
y la Gran Bretaña en 4 de Junio de 1878.

Artículo 1.º S. M. el Rey de España se obliga á entregar, en
las circunstancias y condiciones estipuladas en el presente tra-
tado, todas las personas, con excepción de sus propios súbditos;
y S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda se
obliga á entregar en las mismas circunstancias y con las mismas

biendo sido encaus
le las dos altas part
amerados en el art.
s en el territorio del
te la extradición p

idio, envenenami

amado ó intentado
oce años.
posición ó retención

aves.
toridades, Magistr

on intención de rob

12. Falso testimonio y soborno de testigos, peritos ó
pretes.

13. Incendio voluntario.

14. Hurto y robo.

15. Abuso de confianza ó defraudación por un banque
misionista, administrador, tutor, curador, liquidador, sí
funcionario público, director, miembro ó empleado de una
dad, ó por cualquier otra persona.

16. Estafa, ocultación fraudulenta de dinero, valores ú
tos muebles y adquisición de los mismos con conocimie
que han sido ilegalmente obtenidos.

17. a) Fabricación y expendición de moneda falsa ó alt

b) Falsificación de documentos ó empleo de los mismo
sificación de los sellos del Estado, punzones, timbres ó paj
llado, ó empleo de sellos, punzones ó timbres falsificados.

c) Fabricación ilegal de instrumentos para la falsificaci
cño de la moneda.

18. Quiebra fraudulenta.
19. Actos cometidos con intención de poner en peligro la vida de los viajeros en un tren de camino de hierro.
20. Destrucción ó deterioro de cualquiera propiedad mueble é inmueble, penado por la ley.
21. Crímenes que se cometan en la mar:
 - a) Piratería.
 - b) Destrucción ó pérdida de un buque causada intencionalmente, ó tentativa y conspiración para dicho objeto.
 - c) Rebelión ó conspiración por dos ó más personas para rebelarse contra la autoridad del Capitán á bordo de un buque en alta mar.
 - d) Actos cometidos con intención de matar ó de causar daño material á personas á bordo de un buque en alta mar.
22. Trata de esclavos con arreglo á las leyes de cada uno de ambos Estados respectivamente.

La extradición tendrá también lugar por complicidad en cualquiera de los crímenes y delitos enumerados en este artículo, con tal de que sea punible por las leyes de ambas partes contratantes.

Art. 3.º El presente tratado será aplicable á los crímenes y delitos cometidos anteriormente á su celebración; pero en ningún caso podrá la persona que haya sido entregada en virtud de sus estipulaciones ser encausada por ningún otro crimen ó delito cometido en el país que la reclama que aquél por el cual se concedió la extradición.

Art. 4.º No se hará la entrega de persona alguna si el delito por que se pide su extradición es de carácter político, ó si dicha persona prueba á satisfacción de la autoridad competente del Estado donde se halla, que la demanda de entrega ha sido hecha en realidad con objeto de perseguirla ó castigarla por un delito de carácter político.

Art. 5.º En los Estados de S. M. el Rey de España, con excepción de las provincias ó posesiones de Ultramar, el procedimiento para pedir y obtener la extradición será el siguiente:

El representante diplomático de la Gran Bretaña dirigirá al Ministro de Estado, con la demanda de extradición, una copia auténtica y legalizada de la sentencia ó del auto de prisión contra la persona acusada, estableciendo claramente el crimen ó delito por el cual se procede contra el fugitivo.

mpañarán, si es posible, las
alesquiera otras noticias ó
ntificarla.

ados por el Ministro de Es-
nyo Ministerio, después de
y lugar á la extradición, se
la y ordenando el arresto de
las autoridades británicas.
Ministro de la Gobernación
ra el arresto del fugitivo; y
á disposición del represen-
dición, y conducido hasta el
o de mar donde para hacerse
l efecto por el Gobierno de

suministrados por este Go-
personas reclamadas, ó de
toridades españolas con el
tes, se dará inmediato aviso
de la Gran Bretaña, que-
hasta que el Gobierno bri-
pruebas para establecer la
r cualquiera otra dificultad
sunto.

Británica, con excepción de
as, el procedimiento para
siguiente:

ada, la demanda será diri-
o de S. M. Británica para los
ante diplomático de España.
to de prisión ú otro docu-
por un Juez ó Magistrado
nocer en la causa formada
iones hechas con arreglo á
o, manifestando claramente
y, por último, si es posible,
malesquiera otros datos que
identidad.

do transmitirá los documen-

tos enunciados al principal secretario de Estado o al representante diplomático para los Negocios interiores (*Home Department*) y una orden de su puño y provista de su sello someterá la demanda de extradición á un Magistrado de policía de Londres, requiriéndole que expida, si ha lugar, un mandato de prisión contra la persona reclamada.

Este Magistrado expedirá el mandato requerido si las pruebas presentadas fuesen, en su opinión, bastantes á justificar igual medida en el supuesto de haberse cometido el crimen ó delito en el Reino Unido.

Verificada la aprehensión de la persona reclamada, se la conducirá ante el Magistrado que dictó el auto de prisión, ó ante cualquiera otro Magistrado de policía de Londres.

Si las pruebas presentadas justificasen con arreglo á la ley de Inglaterra la formación de causa al detenido en el caso de que el acto por el cual se le acusa hubiese sido cometido en el Reino Unido, el Magistrado de policía ordenará su prisión hasta que el Secretario de Estado expida la orden para que la extradición se verifique, y dirigirá inmediatamente á ésta certificación de que así lo ha hecho, juntamente con un informe sobre el asunto.

A la terminación de un plazo, que no podrá exceder de quince días desde que se ordenó la prisión y sujeción á juicio del preso, el Secretario de Estado mandará por medio de una orden de su puño y provista de su sello que sea aquél entregado al comisionado autorizado para recibirle por el Gobierno español.

b) En el caso de una persona condenada, el procedimiento será el mismo que queda indicado, salvo que el auto ó mandato que haya de ser presentado por el representante diplomático de España en apoyo de la demanda de extradición expresará claramente el crimen ó delito por el que la persona reclamada haya sido condenada, mencionando al mismo tiempo el lugar y fecha de la sentencia.

La prueba que en ese caso deberá ser presentada al Magistrado de policía ha de ser de naturaleza que establezca que, según la ley de Inglaterra, el detenido ha sido condenado por la infracción de que se le acusó.

c) Los sentenciados en rebeldía ó *in contumaciam* se considerarán para los efectos de la extradición como acusados, y serán entregados en este concepto.

ó condenadas por cualquiera de los crímenes ó delitos ficados en este tratado, y cometidos en alta mar á bordo de un buque de uno de los dos países que llegase á un puerto del otro.

Art. 9.º Si el criminal fugitivo constituido en prisión no ha sido entregado cuando hayan transcurrido dos meses después de haber sido expedida la orden de prisión, ó dos meses después del fallo del Tribunal negativo de su reclamación de un mandato de *Habeas corpus* en el Reino Unido, será puesto aquél en libertad, á menos que haya causa suficiente para lo contrario.

Art. 10. En las provincias de Ultramar, colonias y demás posesiones de las dos altas partes contratantes, el procedimiento será el siguiente:

La demanda de extradición del criminal fugitivo que se hubiese refugiado en una provincia ultramarina, colonia ó posesión de una de las dos partes contratantes, se dirigirá al Gobernador ó á la autoridad superior de dicha provincia, colonia ó posesión por el Agente consular de mayor categoría del otro Estado en dicha provincia, colonia ó posesión; ó si el criminal se ha fugado de una provincia ultramarina, colonia ó posesión del Estado, en cuyo nombre se pide la extradición por el Gobernador ó autoridad superior de esta provincia, colonia ó posesión.

En estos casos se observarán, en cuanto sea posible, las disposiciones del presente tratado por los respectivos Gobernadores ó autoridades superiores; pero se reserva á éstos la facultad de conceder la extradición ó de someter la resolución del caso á los Gobiernos de sus respectivos países.

Art. 11. En los casos en que fuese necesario, el Gobierno español será representado ante los Tribunales por los oficiales legales de la Corona, y el Gobierno británico ante los Tribunales españoles por el Ministerio Fiscal.

Los Gobiernos respectivos prestarán asistencia á los representantes diplomáticos que la reclamen para la custodia y seguridad de las personas sujetas á extradición.

Art. 12. No se dará curso á la demanda de extradición cuando la persona reclamada hubiese sido juzgada por el mismo crimen ó delito en el Estado al cual aquella demanda se dirija, ni tampoco cuando después de los actos que constituyen el crimen ó delito de que se le acuse, después de la acusación ó después de la con-

hecho al beneficio de la prescripción, según las leyes de cada uno de los Estados.

Siendo la persona reclamada por una de las altas partes en virtud del presente tratado fuese reclamada por uno ó varios otros Estados á causa de crímenes cometidos en sus territorios respectivos, su extradición será concedida al Estado cuya demanda sea de fecha más antigua que no exista entre los diferentes Gobiernos para determinar la preferencia, ya por la gravedad del delito, ya por cualquier otro motivo.

Siendo la persona reclamada estuviese encausada ó condenada por un crimen ó delito cometido en el país en el que hubiese refugiado, su extradición podrá diferirse hasta que haya sido puesta en libertad con arreglo á las leyes de dicho país.

Si en el país en que dicha persona reclamada se hallase acusada ó condenada por un crimen ó delito cometido en el país en que se hubiese refugiado por obligación respecto de personas particulares, la extradición será concedida á cargo de dicho país.

La autoridad competente lo dispusiere así, los bienes en poder de la persona reclamada serán aprehendidos y entregados con ella cuando la extradición se verifique en esta disposición, no sólo los objetos de los delitos de quiebra fraudulenta, sino también cualesquiera otros que pudiesen servir para la comprobación del crimen.

Los bienes serán igualmente entregados después de ser verificada la extradición, si no se pudiera llevar ésta á cabo por el consentimiento de la persona reclamada.

En el presente artículo se entiende sin perjuicio de los derechos de los Estados.

Las altas partes contratantes renuncian al reembolso de los gastos ocasionados por ellas para la detención, manutención y traslado hasta su frontera de las personas entregadas, y cada una de ellas sufraga cada una dichos gastos en sus respectivos territorios.

El presente tratado será ratificado, y las ratificaciones serán depositadas en Londres tan pronto como sea posible.

El presente tratado será publicado en los idiomas de los Estados que lo firman, y en los idiomas de los Estados que lo ratifican, dentro de diez días después de verificada su publicación.

ción con arreglo á las leyes de los Estados respectivos, y cada una de las partes contratantes podrá en cualquier tiempo darlo por terminado, participando á la otra su intención de hacerlo así con seis meses de anticipación.

En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios lo han firmado y sellado con el sello de sus armas.

Hecho en Londres á 4 de Junio de 1878.—(L. S.) Marqués de Casa-Laiglesia.—(L. S.) Salisbury.

Este convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Londres el día 21 de Noviembre de 1878. (*Gaceta* 3 Enero.)

Inglaterra.—Real decreto de 9 de Julio mandando cumplir y observar una declaración que contiene los artículos con que se ha creído conveniente adicionar el convenio referido de 4 de Junio de 1878.

Por cuanto el día 29 de Mayo último se firmó en Madrid... una declaración que contiene los artículos con que se ha creído conveniente adicionar el convenio de extradición de 4 de Junio de 1878, vigente entre ambos Estados, con objeto de hacer más efectiva la represión de los delitos cometidos en sus respectivos territorios, cuyo texto literal es el siguiente:

«El Gobierno de S. M. el Rey de España y el Gobierno de S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda y Emperatriz de la India, deseando hacer más efectiva la represión de los delitos cometidos en sus respectivos territorios, han autorizado en debida forma á los infrascritos para convenir en lo siguiente:

Artículo 1.º Los textos español é inglés del párrafo quinto del art. 2.º del convenio de extradición de 4 de Junio de 1878 quedan anulados y se sustituyen del modo siguiente:

Comercio carnal ilícito ó tentativa del mismo delito en la persona de una joven menor de diez y seis años de edad. «Atentado contra el pudor.»

Art. 2.º Los textos español é inglés del párrafo quinto del artículo 6.º de dicho tratado quedan también anulados y se sustituyen del modo siguiente:

«En cualquier tiempo después de la detención del presunto reo, podrá éste, si así lo solicitare, ser entregado, mediante orden del Secretario de Estado, á la persona debidamente autorizada para recibirlo por el Gobierno español.

el detenido no será entregado quince días desde la fecha de su

enzará á regir diez días después
scrita en los respectivos países.
s lo firman y ponen el sello de

Mayo de 1888.— (L. S.) Firma-
Francis Clare Ford.
o de 1868.

ol y el Gobierno italiano se com-
mente los individuos que, ha-
perseguidos por las autoridades
Estados contratantes por cual-
enumerados en el art. 2.º si-
el territorio del otro.

ser concedida por las siguien-
es:

sesinato, envenenamiento, ho-

arias que hayan ocasionado la

aborto procurado, prostitución
padres ó por otra persona en-
ar abuso deshonesto con persona
s con ella de fuerza ó intimidac-
e razón ó de sentido, ó cuando
dependientemente de estas cir-
tutativo ó agravante de la infrac-

eliminación de un niño, sustitua-
ción de un niño á una mujer que

ente en los caminos de hierro y

s, delitos contra la propiedad
las, lesiones, amenazas y otras
los hurtos que según las leyes

respectivas sean castigados con la privación de la libertad más de cinco años.

8.º Falsificación ó alteración de monedas, intrusión, emisión fraudulenta de moneda falsa. Falsificación de obligaciones sobre el Estado, de billetes de Banco quiera otra clase de efectos públicos, introducción y de mismos títulos falsificados.

Falsificación de reales disposiciones, de sellos, punzones, timbres y marcas del Estado ó de las Administraciones públicas, y uso de esos objetos falsificados.

Falsedad en escritura pública ó auténtica, privada, de comercio y de banca, y uso de documentos falsos.

9.º Falso testimonio y falsa declaración de peritos, soborno de testigos y de peritos, calumnias, siempre que hayan tenido lugar por delitos comprendidos en el presente convenio.

10. Sustracciones cometidas por empleados ó depositarios públicos.

11. Bancarrota fraudulenta.

12. Hechos de baratería.

13. Sedición á bordo de un buque, en el caso de que los individuos que forman parte de su tripulación se hayan apoderado de dicho buque por fraude ó violencia, ó le hayan entregado á los piratas.

14. Abuso de confianza (apropiación indebida), estafa y fraude.

Por estas infracciones se concederá la extradición si el valor del objeto robado excede de 1.000 francos.

15. La extradición será también concedida por toda clase de complicidad ó participación en las infracciones que quedan mencionadas, y por las tentativas de las mismas, las cuales constituyen delincuencia, con tal que en este último caso la pena que haya de imponerse llegue al menos á tres años de prisión.

Art. 3.º La extradición no se concederá jamás por los crímenes ó delitos políticos.

El individuo que sea entregado por otra infracción de las leyes penales, no podrá en ningún caso ser juzgado ó condenado por un crimen ó delito político cometido anteriormente á la extradición, ni por ningún otro hecho que tenga conexión con este crimen ó delito.

Art. 8.º La extradición no se suspenderá porque impida el cumplimiento de obligaciones que el individuo reclamado hubiese contraído con personas particulares, las cuales podrán hacer valer su derecho ante la autoridad competente.

Art. 9.º La extradición será concedida en virtud de la demanda dirigida por uno de los dos Gobiernos al otro por la vía diplomática, y en virtud de presentación de una sentencia condenatoria ó de cabeza de proceso de un mandamiento de prisión ó de cualquiera otro auto que tenga la misma fuerza que este mandamiento, indicándose igualmente en él la naturaleza y la gravedad de los hechos perseguidos, así como la disposición penal aplicable á esos hechos. Estos documentos serán expedidos originales ó en copia certificada, bien por un Tribunal ó bien por cualquiera otra autoridad competente del país que reclame la extradición.

Se facilitarán al mismo tiempo, si fuere posible, las señas personales del individuo reclamado, ó cualquiera otra indicación que sirva para identificar su persona.

Art. 10. En los casos urgentes, y sobre todo cuando se tema la fuga, cada uno de los dos Gobiernos, apoyándose en una sentencia condenatoria ó de acusación, ó en un mandamiento de prisión, podrá por el medio más rápido y aun por telégrafo pedir y obtener la prisión del acusado ó del condenado, con la condición de presentar lo más pronto posible el documento cuya existencia se ha supuesto.

Art. 11. Los objetos sustraídos ó que se encontraren en poder del procesado ó reo, los instrumentos ó útiles de que se haya valido para cometer el crimen ó delito, así como cualquiera otra prueba de convicción, serán entregados al mismo tiempo que el individuo detenido. También tendrá lugar aquella entrega ó remesa aun en el caso de que, concedida la extradición, no llegue ésta á efectuarse por muerte ó fuga del culpable.

La remesa de objetos será extensiva á todos los de igual naturaleza que el procesado hubiese ocultado ó conducido al país donde se refugió, y que fuesen descubiertos con posterioridad. Se reservan, sin embargo, los derechos de tercero sobre los objetos arriba dichos, los cuales deberán serle devueltos sin gasto alguno después de terminado el proceso.

Art. 12. Los gastos de arresto, manutención y traslación del

sí como los de consi-
 gn ser devueltos ó re-
 nte, serán sufragados
 is respectivos territo-
 transporte por mar,
 puerto que designe el
 gastos de embarque.
 na crimen ó delito co-
 talia, fuere necesario
 egal de análoga natu-
 en territorio del otro,
 s exhortos y peticio-
 mente evacuadas con
 iación se intente.
 ler á los exhortos y á
 so en que el procedi-
 Gobierno á quien se
 no es punible según
 larecimiento,
 yese necesaria la com-
 rno de quien éste de-
 la invitación que al

partir, recibirán los
 ectivos se entenderán
 gún la distancia y el
 es el Gobierno recla-
 párselos.

detenidos ni molesta-
 donde hayan de ser
 por un hecho anterior

rmanencia comete un
 estimonio, los dos Go-
 caso si deberá quedar
 es en el lugar donde
 i deberá enviársele á
 su domicilio.
 ano de los dos Esta-

dos contratantes fuere necesario proceder al careo del procesado con delincuentes detenidos en el otro Estado ó adquirir pruebas de convicción ó documentos judiciales que éste posea, se dirigirá la súplica por la vía diplomática. Siempre que no lo impidan consideraciones especiales, deberá accederse á la demanda con la condición de que en el más breve plazo posible sean devueltos á su país originario los individuos y los documentos reclamados.

Los gastos de conducción de un Estado á otro de los individuos y de los objetos arriba expresados, lo mismo que los que se ocasionen del cumplimiento de las formalidades estipuladas en el art. 13, serán sufragados por el Gobierno que dirigió la demanda.

Art. 16. Los dos Gobiernos se comprometen á notificarse recíprocamente las sentencias recaídas sobre los crímenes ó delitos de toda especie que hayan sido pronunciadas por los Tribunales de uno de los dos Estados contra los individuos del otro.

Esta notificación se llevará á efecto enviando por la vía diplomática la sentencia pronunciada en definitiva al Gobierno de quien dependa el procesado para que se deposite en los archivos del Tribunal á quien corresponda. Cada uno de los dos Gobiernos dará al efecto las instrucciones necesarias á las autoridades competentes.

Art. 17. El presente convenio queda ajustado por cinco años, á partir desde el día en que se verifique el canje de las ratificaciones. En el caso de que seis meses antes de espirar dicho período no haya manifestado ninguno de los dos Gobiernos su propósito de hacer cesar sus efectos, permanecerá obligatorio por otros cinco años, y así sucesivamente de cinco en cinco años.

Art. 18. El presente convenio será ratificado y las ratificaciones canjeadas en Madrid en el término de tres meses, ó antes si fuere posible.

Fué firmado á 3 de Junio de 1868 y ratificado el 13 de Enero de 1869. (*Gaceta* 17 de Enero.)

Italia.—Real decreto de 25 de Mayo mandando cumplir y observar una declaración que formará el artículo adicional al convenio de 3 de Junio de 1868, y es relativa á la extradición por tránsito de individuos no pertenecientes al país del mismo, entregados por un tercer Estado.

«Por cuanto el día 6 de Mayo de 1891 se firmó en Madrid

2.º Homicidio, asesinato, parricidio, infanticidio miento.

3.º Amenazas de un atentado contra las personas, que se castiguen con penas graves.

4.º Aborto.

5.º Heridas ó golpes voluntarios que hayan ocasionado una enfermedad ó incapacidad para el trabajo personal durante más de veinte días, ó en que haya habido premeditación.

6.º Violación ó cualquier otro atentado contra el pudor, cometido con violencia.

7.º Atentado contra las buenas costumbres, excitando, favoreciendo ó facilitando habitualmente la mala vida ó la corrupción de jóvenes de uno ú otro sexo menores de veintiún años.

8.º Bigamia.

9.º Rapto, ocultación, supresión, sustitución ó suposición de un niño.

10. Sustracción de menores.

11. Falsificación, alteración ó recorte de la moneda ó participación voluntaria en la emisión de moneda falsificada, alterada ó recortada.

12. Falsificación de sellos del Estado, de billetes de Banco, de efectos públicos y de punzones, timbres, marcas de papel-moneda y sellos de correo.

13. Falsificación de escritura pública ó auténtica de comercio ó de banca, ó de escritura privada, exceptuando las falsificaciones cometidas en los pasaportes, hojas de ruta y certificados.

14. Falso testimonio, soborno de testigos, perjurio.

15. Corrupción de funcionarios públicos, concusión, sustracción ó malversación cometidas por cobradores ó depositarios públicos.

16. Incendio voluntario.

17. Destrucción ó derribo voluntario, por cualquier medio que sea, en todo ó en parte, de edificios, puentes, diques ó calzadas ú otras construcciones pertenecientes á un tercero.

18. Saqueo, inutilización de vituallas ó mercancías, efectos, propiedades, muebles, cometidos en reunión ó cuadrilla y á viva fuerza.

19. Pérdida, varamiento, destrucción ó inutilización ilegal y

voluntaria de buques de alto bordo ó de otras embarcaciones (baratería).

20. Sublevación y rebelión de los pasajeros á bordo de un buque contra el Capitán y de los tripulantes contra sus superiores.

21. El hecho voluntario de haber puesto en peligro un tren en un camino de hierro.

22. Robo.

23. Estafa.

24. Abuso de firmas en blanco.

25. Malversación ó disipación en perjuicio del propietario, poseedor ó detentador de bienes ó valores que sólo hayan sido entregados á título de depósito ó por un trabajo asalariado (abuso de confianza).

26. Bancarrota fraudulenta.

Se comprenden en las calificaciones anteriores la tentativa y la complicidad cuando son penables, según la legislación del país al que se pide la extradición.

Art. 2.º La extradición no tendrá lugar:

1.º En el caso de un delito más ó menos grave cometido en un tercer país, cuando el Gobierno de este país entable la demanda de extradición.

2.º Cuando la demanda se motive en el mismo delito, más ó menos grave, por el cual ha sido juzgado el individuo reclamado en el país al que se pide su entrega, y por cuyo motivo ha sido sentenciado y ha obtenido absolución ó sobreseimiento.

3.º Si ha prescrito la acción ó la pena, según las leyes del país al que se pida la extradición, antes de la detención del individuo reclamado ó si aún no se hubiese verificado la detención, antes de que haya sido citado ante el Tribunal que ha de oírle.

Art. 3.º No se verificará la extradición mientras el individuo reclamado sea perseguido por el mismo delito, más ó menos grave, en el país á que se pida la extradición.

Art. 4.º Si el individuo reclamado se halla perseguido ó sufre una pena por una infracción distinta de la que motivó la demanda de extradición, su extradición no podrá concederse sino después de la terminación del proceso en el país al que se pida la extradición, y en caso de sentencia condenatoria, hasta que haya sufrido la pena ó que haya sido indultado.

No obstante, si según las leyes del país que pide la extradición

pudiese resultar de esta demora la prescripción de la concederá su extradición, á menos que consideraciones se opongan á ello, y obligándose á devolver al individuo entregado tan pronto como se termine el proceso en el referido país.

Art. 5.º Queda expresamente estipulado que el individuo que se entregue no podrá ser ni perseguido ni castigado en el país al que se conceda la extradición, por un delito cualquiera más ó menos grave no previsto por el presente convenio y anterior á su extradición: y que tampoco podrá ser entregado por semejante delito más ó menos grave sin el consentimiento de aquel que ha concedido la extradición, á menos que haya tenido la libertad de abandonar de nuevo el antedicho país, durante un mes después de haber sido juzgado, y en caso de condena, después de haber sufrido la pena ó después de haber sido indultado.

Art. 6.º Las disposiciones del presente tratado no son aplicables á las personas que se han hecho culpables de algún delito político más ó menos grave. La persona que ha sido entregada por uno de los delitos comunes más ó menos graves enumerados en el art. 1.º no puede por consiguiente en ningún caso ser perseguida y castigada en el Estado al que se ha concedido la extradición por un delito político más ó menos grave que haya cometido antes de la extradición, ni por un hecho conexo con semejante delito político más ó menos grave.

Art. 7.º La extradición se pedirá por la vía diplomática y no se concederá sino mediante presentación, en original ó en copia auténtica, sea de una sentencia condenatoria, sea de un auto mandando formular la acusación (*mise en accusation*) ó remitiendo el conocimiento de la causa á la justicia represiva con mandamiento de prisión, de un mandamiento de prisión expedido en las formas prescritas por la legislación del país que presenta la demanda é indicando el delito más ó menos grave de que se trata, así como la disposición penal que le es aplicable.

Art. 8.º Los objetos aprehendidos en poder del individuo reclamado serán entregados al Estado solamente si la Autoridad competente del Estado á quien se reclama ha ordenado su entrega.

Art. 9.º El extranjero cuya extradición se pide por uno de los hechos mencionados en el art. 1.º podrá ser detenido preventivamente en cada uno de ambos países, según las formas y las reglas prescritas por las legislaciones respectivas.

Art. 10. Mientras se entabla la demanda de extradición por la vía diplomática, el extranjero cuya extradición puede solicitarse por uno de los hechos mencionados en el art. 1.º, podrá ser detenido preventivamente, según las formas y las reglas prescritas por la legislación del país al que se pide la extradición.

Podrá pedirse la detención preventiva en España por todo Juez de primera instancia, y de los Países Bajos por todo Juez de instrucción, Juez comisario ó todo Oficial de justicia.

Art. 11. El extranjero detenido preventivamente con arreglo á los términos del artículo anterior será puesto en libertad, á no ser que la detención deba continuar por otro motivo, si en el término de veinte días después de la fecha de la orden de detención preventiva no se ha entablado la demanda de extradición por la vía diplomática con los documentos exigidos.

Art. 12. Cuando en la tramitación de una causa criminal uno de los Gobiernos juzgue necesario oír á testigos que se encuentren en el otro Estado, se dirigirá un exhorto para dicho fin por la vía diplomática y se le dará curso, observando las leyes del país en que los testigos hayan sido invitados á comparecer.

En caso de urgencia, podrá también remitirse un exhorto directamente por la Autoridad judicial en uno de los Estados á la Autoridad judicial en el otro Estado.

Todo exhorto que tenga por objeto solicitar una audición de testigos, deberá ir acompañado de una traducción francesa.

Art. 13. Si en una causa criminal se necesita ó se desea la comparecencia personal de un testigo en el otro país, su Gobierno invitará al efecto, y en caso de que consienta, se le señalarán los gastos de viaje y de estancia, según las tarifas y los reglamentos vigentes en el país en que la audición deba verificarse, salvo el caso de que el Gobierno reclamante crea deber señalar al testigo una indemnización más crecida.

Ningún testigo, cualquiera que sea su nacionalidad, que citado en uno de los dos países, comparezca voluntariamente ante los Jueces de otro país, podrá allí ser perseguido ó detenido por hechos ó condenas criminales anteriores, ni á pretexto de complicidad en los hechos objeto de la causa en que figure como testigo.

Art. 14. Cuando en una causa criminal se juzgue útil ó necesario el careo de criminales detenidos en el otro Estado, ó bien

la comunicación de pruebas convincentes ó de documentos que se encontraren en poder de las Autoridades del otro país, se dirigirá la demanda por la vía diplomática y se le dará curso, á no ser que consideraciones especiales se opongan á ello, y con obligación de devolver los criminales y las pruebas.

Art. 15. El tránsito á través del territorio de una de las partes contratantes de un individuo entregado por una tercera potencia á la otra parte y que no pertenezca al país de tránsito, se concederá á la simple presentación en original ó en copia auténtica de uno de los autos de procedimiento enumerados en el art. 7.º, con tal que el hecho que sirva de fundamento á la extradición se halle comprendido en el presente convenio, y no se refiera á lo previsto en los artículos 2.º y 6.º y que el transporte se verifique, en cuanto á la escolta, con el concurso de funcionarios del país que ha autorizado el tránsito por su territorio.

Los gastos de tránsito correrán á cargo del país reclamante.

Art. 16. Los Gobiernos respectivos renunciarán cada uno por su parte á toda reclamación para el reintegro de los gastos de manutención, de transporte y otros que pudieran resultar en los límites de sus respectivos territorios por la extradición de los presuntos reos, acusados ó sentenciados, así como los que resultaren por el cumplimiento de exhortos, por el transporte y devolución de los criminales que hubieren de ser careados, y por el envío y devolución de pruebas convincentes ó documentos.

En caso de que se juzgue preferible el transporte por mar, el individuo que ha de ser entregado será conducido al puerto que designe el Agente diplomático consular del reclamante, que pagará los gastos de embarque.

Art. 17. El presente convenio no regirá hasta veintiún días después de su promulgación, en las formas prescritas por las leyes de ambos países.

Desde que se ponga en ejecución cesará de estar en vigor el convenio de 5 de Noviembre de 1860, y será sustituido por el presente convenio, que continuará vigente durante seis meses después que haya sido denunciado por uno de ambos Gobiernos.

Será ratificado, y las ratificaciones se canjearán tan pronto como sea posible.

En fe de lo cual los plenipotenciarios respectivos han firmado el presente convenio y han puesto el sello de sus armas.

6.º Destrucción de construcciones, máquinas de vapor y aparatos telegráficos.

7.º Destrucción ó desviación de las vías férreas, y generalmente el empleo de cualquier medio para interceptar la marcha de los trenes ó hacerles descarrilar.

8.º Destrucción ó deterioro de sepulcros, monumentos, objetos de arte, títulos, documentos, registros y otros papeles.

9.º Destrucción, deterioro, inutilización de vituallas, mercancías ú otras propiedades muebles.

10. Asociación de malhechores, robo.

11. Amenazas de atentado contra las personas ó propiedades, castigados con la pena de muerte, trabajos ó de reclusión.

12. Atentado á la libertad individual y á la inviolabilidad del domicilio, cometido por particulares.

13. Moneda falsa, comprendiendo la reproducción furtiva, contrefacción y la alteración de la moneda, la emisión y la introducción de la moneda falsa ó alterada, reproducción furtiva ó falsificación de efectos públicos, de billetes de Banco, de títulos públicos ó privados, emisión ó uso de estos efectos, billetes ó títulos falsificados, falsificación de escrituras ó de despachos telegráficos, y el uso de estos despachos, efectos, billetes ó títulos fabricados, ó falsificación; la falsificación de sellos, timbres, punzones y marcas falsificadas, y el uso perjudicial de los verdaderos sellos, timbres, punzones y marcas.

14. Falso testimonio y declaraciones falsas de peritos ó intérpretes, soborno de testigos, de peritos ó intérpretes.

15. Perjurio.

16. Concusión; malversación cometida por funcionarios públicos, corrupción de funcionarios públicos.

17. Bancarrota fraudulenta y fraudes cometidos en las quiebras.

18. Estafa, abuso de confianza y fraude.

19. Extorsión con fuerza, violencia ó intimidación.

20. Abandono por el Capitán, fuera de los casos previstos en las leyes españolas, de un buque de alto bordo mercante ó barco de pesca.

21. Apresamiento de un buque por los marineros ó pasajeros, empleando fraude ó violencia con el Capitán.

DICES

obtenidos por uno de los
ados en el presente conven
también por la tentativa de
mpre que esté penada po

ica la extradición por delito

o político ni conexo el aten
el Jefe del Estado ó contr
ado este atentado constituy
envenenamiento. El indiv
otra infracción de las leyes
ser juzgado ni condenado
la extradición, ni por nin
en ó delito, ni por ninguna
ión no comprendida en el
spués de haber sido castiga
cho que motivó la extradi
el término de un mes, ó

entregado no podrá ser pe
tra infracción que la que l
s del consentimiento expres
r comunicado al Gobierno

adrá lugar si después de la
l ó la sentencia de prisión p
las leyes del país en el qu

ratantes no podrán en nin
bligadas á entregar sus pro
según las leyes en vigor.
nado es perseguido ó conden
lo por un delito más ó me
is, podrá aplazarse su extr
l procedimiento, haya sido

la extradición porque ésta
cumpla los compromisos

haya podido adquirir con particulares, los cuales podrá mar sus derechos ante la Autoridad judicial competente

Art. 8.º La demanda de extradición se dirigirá por la plomática del siguiente modo: las demandas del Gobierno de Luxemburgo, á falta de un representante en Madrid, por el representante de otro país, que será expresamente encargado de los altos asuntos de Luxemburgo, y la del Gobierno español por medio de la legación de S. M. el Rey de España en El Haya.

Art. 9.º Se concederá la extradición en vista de la presentación del mandato de la Cámara del consejo ó de sentencia condenatoria, ó el mandato de la Cámara (*mise en accusation*) ó del acto de procedimiento criminal emanado del Juez ó de la autoridad competente, decretando formalmente ó de pleno derecho el envío del acusado delante de la jurisdicción represiva.

Se concederá igualmente con la presentación del mandamiento de prisión ó de cualquier otro documento de igual valor expedido por la Autoridad extranjera competente, siempre que estos documentos contengan la explicación exacta del hecho que los ha motivado. Los documentos arriba citados serán expedidos en original ó copia auténtica en la forma prescrita por la legislación del Gobierno que reclama la extradición, y acompañados de una copia del texto de la ley aplicable, y si es posible las señas del individuo reclamado ó cualquiera otra indicación para comprobar su identidad.

En el caso de que se dude de si el delito más ó menos grave objeto del procedimiento está comprendido en los casos previstos en el presente convenio, se pedirán explicaciones; y previo examen, el Gobierno á quien se pide la extradición resolverá el curso que ha de darse á la demanda.

Art. 10. El individuo perseguido por cualquiera de los hechos previstos en el art. 2.º del presente convenio, será detenido preventivamente con la presentación de un mandamiento de prisión ó otro documento de igual valor decretado por la Autoridad extranjera competente, y tramitado por la vía diplomática.

En caso de urgencia, la detención preventiva se efectuará con el aviso transmitido por el correo ó por telégrafo de haberse extendido el mandamiento de prisión, con la condición de que este aviso será transmitido por la vía diplomática al Ministerio de

por uno de los Estados contratantes en beneficio de un Estado extranjero, ó por un Estado extranjero en beneficio de uno de los contratantes, unidos ambos con el Estado requerido por un tratado que comprende la unificación que da lugar á la demanda de extradición, y siempre que ésta no esté en oposición con los artículos 3.º y 4.º del presente convenio.

Art. 14. Cuando durante la tramitación criminal de un delito no político, uno de los dos Gobiernos juzgara necesario oír testigos domiciliados en el otro Estado, se enviará por la vía diplomática un exhorto y se le dará curso, observando las leyes del país en donde deban ser oídos los testigos.

Los Gobiernos respectivos renuncian á toda reclamación de los gastos que pueda originar el cumplimiento del exhorto.

Art. 15. Cuando los Gobiernos de España y del Luxemburgo juzguen necesario en un asunto criminal no político la notificación de un auto de procedimiento ó de una sentencia de un súbdito español ó del Luxemburgo, se entregará el documento remitido por la vía diplomática á la persona á quien va dirigido á petición del Ministerio público del lugar de su residencia por medio de un Oficial competente, y se devolverá por el mismo conducto diplomático al Gobierno reclamante el original certificado ó en copia auténtica debidamente legalizada.

Art. 16. Si en una causa criminal no política se creyere necesaria la comparecencia de un testigo, el Gobierno de quien éste dependa le invitará á acceder á ella; en este caso, los gastos de viaje y de estancia les serán abonados conforme á las tarifas y reglamentos en vigor en el país donde deba tener lugar la comparecencia del testigo.

Las personas residentes en España ó en el Gran Ducado de Luxemburgo, llamadas á comparecer como testigos ante los Tribunales de uno y otro país, no podrán ser perseguidas ni detenidas por hechos ó condenas criminales anteriores ni bajo pretexto de complicidad en los hechos objeto del proceso en los que figuran como testigos.

Cuando en una causa criminal no política instruída en uno de los países se crea útil la presentación de piezas de convicción ó documentos judiciales, se hará la demanda por la vía diplomática, y se le dará curso, á menos que consideraciones especiales se opongan á ello, y con la obligación de devolver dichos documentos.

as ultramarinas en España y sus dominios de Ultramar, que como autores ó cómplices de cualquiera de los crímenes expresados en el art. 3.º se hallen acusados ó condenados por los Tribunales de la Nación donde el crimen ó delito deba ser castigado.

La extradición se verificará en virtud de reclamación de los Gobiernos y por la vía diplomática.

Art. 2.º Cuando el reo ó acusado sea extranjero en los dos Estados contratantes, el Gobierno que deba conceder la extradición informará al del país á que pertenezca el individuo reclamado de la demanda que le haya sido dirigida; y si este último Gobierno reclama á su vez al culpable para que le juzguen sus tribunales, aquel á quien haya sido dirigida la demanda de extradición podrá á su arbitrio entregarle al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito ó á aquel á que pertenezca dicho dividio.

Si el reo ó acusado cuya extradición se pide, en conformidad en el presente convenio, por una de las dos partes contratantes, ese igualmente reclamado por otro ú otros Gobiernos por delitos cometidos por el mismo individuo en los términos respectivos, será entregado al Gobierno cuya demanda tenga la fecha más antigua.

Art. 3.º La extradición deberá efectuarse cuando se trate de individuos acusados ó condenados como autores ó cómplices de los crímenes ó delitos siguientes:

- 1.º Homicidio voluntario, infanticidio, envenenamiento.
- 2.º Lesiones corporales graves, aborto.
- 3.º Violación, estupro, rapto violento ó cualquier abuso desonesto con persona de uno ú otro sexo, cuando se use con ellas fuerza ó intimidación, ó cuando se halle privada de razón ó sentido ó cuando su edad diere al abuso el carácter de delito grave según las legislaciones respectivas, aunque no concurre ninguna otra de aquellas circunstancias.
- 4.º El robo, el hurto, encarcelación privada, detención arbitraria.
- 5.º Incendio voluntario, daño en los caminos de hierro de que sulte ó pueda resultar algún daño para la vida de los pasajeros; daño en los telégrafos.
- 6.º Sustracción y ocultación de menores; parto supuesto; usuración de estado civil; bigamia.

prevaricación, malversación de
poderio y corrupción.

incluyéndose en ella la venta de docu-
mentación y expendición de moneda
instrumentos destinados á hacer di-
vidos ó billetes de Banco ó cual-
quiera moneda; la fabricación ó falsifica-
ción de monedas á marcar objetos de oro ó
plata, y la falsificación de éstos y de
los sellos del Estado; falsificación de
testimonio privado que por su naturaleza
exija fe pública; falso testimonio.

quiebra fraudulenta, barateo.

las acciones mencionadas, dará derecho
para reclamar con relación á las mismas.

Por lo tanto, la extradición en ningún caso
frustrado sólo merezca pena co-
munes generales de la legislación penal
de los países.

Concederse la extradición es indis-
pensable testimonio de la sentencia condena-
toria expedido por el Tribunal
de las leyes del país cuyo Gobierno
pide la declaración de las
leyes, añadiéndose, si fuese posible,
todas y todas las indicaciones á
la entidad.

los y que se encontraren en poder
de los entes y útiles de que se hubiese
así como cualquier otra prueba de
que al mismo tiempo que el individuo

la entrega ó remesa aun en el caso
de que no llegase ésta á efectuarse
la.

extensiva á todos los de igual na-
turaleza oculto ó conducido al país
de donde se han escapado con posterioridad. Se

reservan, sin embargo, los derechos de tercero arriba dichos, los cuales deberán serle devueltos después de terminado el proceso.

Art. 6.º Los desertores de los cuerpos del Armada de España y Portugal serán recíprocos siempre que uno de los dos Gobiernos entable por vía diplomática la reclamación competente acerca de la sentencia del Consejo de guerra.

Las disposiciones del presente artículo son aplicables exclusivamente á los súbditos de la Nación reclamante.

Art. 7.º Los gastos de captura y custodia, manutención y conducción hasta la frontera de los individuos á cuya extradición se acceda, serán de cuenta del Gobierno en cuyo territorio se halle refugiado el reo.

Art. 8.º Los individuos reclamados que estén encausados á consecuencia de crímenes cometidos en el país donde se hayan refugiado, no serán entregados sino después de juzgados definitivamente; y en el caso de ser condenados, después de cumplida la pena que se les haya impuesto.

Los que hayan sido condenados por crímenes perpetrados en el país donde se han refugiado, sólo serán entregados después de cumplida la condena.

Art. 9.º Los individuos entregados en virtud del presente convenio no podrán ser procesados por ningún crimen anterior distinto del que haya motivado la extradición, á no ser que el crimen esté comprendido en el art. 3.º y haya sido perpetrado con posterioridad á la celebración de este convenio.

Art. 10. En ningún caso se concederá la extradición por crímenes ó delitos políticos ó por hechos que tengan conexión con dichos crímenes ó delitos.

Los individuos cuya extradición haya sido concedida como reos de algunos de los crímenes ó delitos comunes expresados en el art. 3.º, no podrán en caso alguno ser juzgados ni castigados por crímenes ó delitos políticos ó por hechos que tengan conexión con éstos anteriores á la extradición.

Art. 11. La extradición no se suspenderá porque impida el cumplimiento de obligaciones que el individuo reclamado hubiere contraído con personas particulares, las cuales podrán hacer valer su derecho ante la Autoridad competente.

En casos urgentes, y sobre todo cuando se trata de los dos Gobiernos, apoyándose en una sentencia ó en el auto de prisión expedido contra el reo, otro documento que tenga al menos la misma fuerza, podrá por el medio más rápido, y aun por obtener la prisión del condenado ó del acusado, le presentar lo más pronto posible el documento si se ha supuesto.

La tradición no será de modo alguno concedida por la legislación del país donde se halle refugiado el reo, la pena ó acción criminal.

En la prosecución de alguna causa criminal entre los dos países se estime necesaria la declaración de uno de los países en el otro, se dirigirá con este objeto al país una interrogatorio á que se dará curso, observando que los testigos de la Nación donde hayan de prestar su declaración, no serán obligados.

Los países no renuncian á cualquier reclamación que se haga por la devolución de los gastos procedentes del cumplimiento de la interrogatorio.

En una causa criminal se creyere necesario la comparecencia de un testigo, el Gobierno de quien éste declare su voluntad de acceder á la invitación que al efecto le haga el otro Gobierno.

Si los testigos consienten en partir, recibirán los gastos de viaje, y los Gobiernos respectivos se entenderán por el pago de la indemnización que, según la distancia y el tiempo de la comparecencia, habrá de darles el Gobierno reclamante, y no deberá anticipárselos.

No podrán los testigos ser detenidos ni molestados en el lugar donde hayan de ser oídos, ni en su ida y vuelta, por un hecho anterior á la declaración.

Según el proceso instruido en uno de los Estados, será necesario proceder al careo del procesado con los testigos en el otro Estado, ó adquirir pruebas de los hechos judiciales que éste posea, se dirigirá la cooperación diplomática.

Si lo impidan circunstancias especiales, deberá

accederse á la demanda, con la condición de que en el más breve plazo posible serán devueltos á su país originario los individuos y los documentos reclamados. Los gastos de conducción de un Estado á otro de los individuos y de los objetos arriba expresados serán sufragados por el Gobierno que dirigió la demanda.

Art. 17. Los dos Gobiernos se comprometen á notificarse las sentencias recaídas sobre los crímenes y delitos de toda especie que hayan sido pronunciadas por los Tribunales de uno de los dos Estados contra los individuos del otro.

Esta notificación se llevará á efecto enviando por la vía diplomática la sentencia pronunciada en definitiva al Gobierno de quien dependa el procesado para que se deposite en los archivos del Tribunal á que corresponda.

Cada uno de los dos Gobiernos dará al efecto las instrucciones necesarias á las autoridades competentes.

Art. 18. Queda sin efecto el convenio para la recíproca entrega de criminales y desertores celebrado en 8 de Marzo de 1823.

Art. 19. El presente convenio estará vigente por espacio de cinco años, á contar desde el día en que se canjeen las ratificaciones, y transcurrido este plazo continuará subsistiendo mientras uno de los dos Gobiernos no declare con seis meses de anticipación que desiste de su cumplimiento.

Será ratificado, y las ratificaciones se canjearán en Lisboa en el más breve plazo posible. En fe de lo cual los plenipotenciarios respectivos han firmado los precedentes artículos escritos en las lenguas española y portuguesa, y los han sellado con el sello de sus armas.

Hecho por duplicado en Lisboa á 25 de Julio de 1867.—(L. S.) Firmado: El Conde de Bañuelos.—(L. S.) Firmado: Luis Augusto Rabello da Silva.

ARTÍCULOS ADICIONALES

Artículo 1.º En los casos de simple deserción de soldados portugueses, será suficiente para legitimar la reclamación la sentencia ó decisión de los consejos de disciplina.

Art. 2.º Además de los desertores de los cuerpos del Ejército y de la Armada de España y Portugal, serán entregados recíprocamente los prófugos del alistamiento militar de los dos países.

que trata este artículo se harán por las e las provincias, y vendrán siempre mentos comprobantes de la identidad, ólugos.

Los presentes artículos adicionales tendrán la misma fuerza y vigor que tendrían si estuviesen insertos palabra por palabra en el convenio de 25 de Junio de 1867, y serán ratificados al mismo tiempo.

En fe de lo cual los infrascritos plenipotenciarios de S. M. C. y de S. M. P., en virtud de sus plenos poderes, los firmaron y sellaron con el sello de sus armas.

Hecho por duplicado en Lisboa á 27 de Mayo de 1868. —(L. S.) Firmado: El Conde de Bañuelos. —(L. S.) Firmado: Luis Augusto Rabello da Silva. —Ratificado en 14 de Enero de 1869. (*Gaceta* de 7 de Febrero.)

Portugal.—Convenio de 7 de Febrero de 1873 estableciendo artículos adicionales al de extradición celebrado entre España y Portugal en 25 de Junio de 1867.

Artículo 1.º Los individuos acusados ó condenados por crímenes á los cuales correspondiese la pena de muerte conforme á la legislación de la Nación reclamante, sólo serán entregados con la cláusula de que esa pena les será conmutada.

Art. 2.º A pesar de lo dispuesto al final del art. 3.º de la convención de 25 de Junio de 1867, se concederá la extradición en virtud de sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, cuando la pena impuesta en la misma sentencia al delito consumado ó frustrado exceda de tres años de prisión ó presidio.

Art. 3.º Los dos Gobiernos podrán pedir por telégrafo ó por cualquier otro medio y por la vía diplomática la captura ó detención del individuo de su Nación condenado ó acusado en los términos del art. 12 por crimen comprendido en la referida convención.

Párrafo único. No podrá prolongarse la detención más de veinticinco días, si en este plazo no fueren presentados al Gobierno reclamado los documentos mencionados en el art. 4.º de la misma convención.

Los presentes artículos adicionales quedan formando parte integrante de la convención de 25 de Junio de 1867, y serán ra-

tificados, y las ratificaciones cambiadas en más corto posible.

En fe de lo cual los plenipotenciarios respectivos firmaron los presentes artículos, y los sellaron con los sellos de sus armas.

Hecho por duplicado en Lisboa á 7 de Febrero de 1873.—(L. S.) Firmado: Angel Fernández de los Ríos.—(L. S.) Firmado: Joao de Andrade Corvo.

Estos artículos han sido ratificados, y las ratificaciones canjeadas en Lisboa el día 6 de Diciembre de 1873. (C. L., tomo CXV, pág. 779.)

Rusia.—Convenio de extradición celebrado entre España y Rusia, firmado en Madrid el día 12/24 de Abril de 1888, que sustituye al de 9/21 de Marzo de 1877.

Artículo 1.º Las altas partes contratantes se obligan á entregarse recíprocamente á los individuos que, procesados ó sentenciados por un delito más ó menos grave cometido en el territorio de una de las dos partes, sea habido en el término de la otra en las circunstancias y con las condiciones que marca este convenio.

Art. 2.º La extradición no se verificará sino en el caso de que exista un procedimiento ó una sentencia condenatoria por un acto voluntario cometido en el territorio del Estado que pide la extradición, y que, según la legislación del Estado reclamante y del Estado á quien se dirige la reclamación, puede ser castigado con una pena más grave que la de un año de prisión.

También se verificará la extradición en el caso de que el delito en que se funda la demanda de entrega se haya cometido fuera del Estado del territorio reclamante, siempre que la legislación del país á quien se pide autorice el procesamiento por hechos análogos cometidos fuera de su territorio.

Con estas limitaciones, la extradición se verificará por los actos penales que á continuación se expresan, comprendiendo la tentativa y complicidad:

1.º Delito de lesa majestad contra el Soberano ó individuos de su familia, que constituyen los de

- a) Homicidio voluntario ó tentativa del mismo.
- b) Vías de hecho.
- c) Lesiones corporales.
- d) Privación voluntaria de la libertad individual.
- e) Ultrajes.

sta la paz ó la independencia del

oridad superior ó sus agentes.
 ión de dinamita ó de otras mate-
 usar daño en las personas ó en las
 sean penables por las leyes de am-

n para cometerlo, homicidio, he-

n, aborto, atentado contra el pu-
 in violencia en un niño de uno ú
 los; prostitución ó corrupción de
 cualquiera otra persona encargada

supresión, sustitución ó suposi-
 un niño.

riamente en los caminos de hie-
 otras construcciones hidrotécni-
 rio que hiciese peligroso su uso

malhechores, rapiña y robo.
 ón, emisión de moneda falsa ó
 sificado ó alterado; falsificación
 aciones del Estado, de billetes de
 o público, introducción ó uso de
 ón de decretos, de sellos, punzo-
 ó de la Administración pública
 los.

blica, privada, de comercio ó de
 banca y uso de escrituras falsificadas.

13. Falso testimonio ó declaraciones falsas de peritos, ó el
 acto de inducir á los testigos y peritos que hagan declaraciones
 falsas, calumnia.

14. Sustracciones cometidas por funcionarios ó depositarios
 públicos y soborno de funcionarios públicos.

15. Quiebra fraudulenta.

16. Abuso de confianza cometido por un administrador, ban-

quero, agente, comisionado, curador, director ó empleado de una Sociedad cualquiera, siempre que el penado por las leyes vigentes.

17. Estafa y fraude.

18. Baratería.

19. Piratería.

20. Amenazas hechas por escrito ó de cualquier otro modo para obtener dinero.

21. El acto de sumergir, destruir ó hacer varar un buque, ó tentativa ó confabulación para llevarlo á cabo.

22. Ataque á un buque en alta mar con objeto de cometer un homicidio ó de causar graves lesiones corporales.

23. El acto de rebelarse ó de tratar de rebelarse dos ó más personas que se encuentran á bordo de un buque en alta mar, contra la autoridad del Capitán.

24. Trata de esclavos, según se halle penada por las leyes de ambos países.

25. Ocultación de los objetos adquiridos por cualquiera de los delitos consignados en este convenio.

Dependerá del Estado de quien se solicite la entrega de un reo, concederla igualmente por cualquier otro delito respecto del cual proceda la extradición, según las leyes que rijan en ambos países.

Art. 3.º Los dos Gobiernos podrán libremente conceder ó negar la entrega de sus propios súbditos.

Se obligan á proceder criminalmente, con arreglo á sus leyes respectivas, contra los autores de los delitos cometidos en el otro país en cuanto se haga la petición al efecto, y siempre que dichos delitos puedan ser clasificados en una de las categorías enumeradas en el art. 2.º de este convenio.

Cuando un individuo se halle procesado según las leyes del país en que se encuentre por un acto punible cometido en el territorio del otro país, el Gobierno de éste se halla obligado á facilitar los informes, los documentos judiciales, con el cuerpo del delito, y cualquiera otra aclaración necesaria para abreviar el procedimiento.

Art. 4.º En ningún caso podrá alegarse como motivo para negar la extradición la circunstancia de que el delito por el que se pide la extradición se hubiese cometido con un fin político.

en este convenio, fuese reclamado también por otro ú biernos á causa de otros delitos cometidos por el mismo, será entregado al Gobierno del Estado en cuyo hubiese cometido el delito más grave, y cuando los del sen todos la misma gravedad, al Gobierno del Estado; fuese más antigua, y, finalmente, será entregado al Gobierno del Estado á que pertenece si concurren las circunstancias expresadas en el art. 6.º de este convenio.

Art. 8.º Si el individuo que se reclama estuviese procesado ó detenido por otro delito á consecuencia de haber faltado á las leyes del país al que se pide la entrega, se diferirá ésta hasta que haya sido absuelto ó haya cumplido la pena que se le imponga, y asimismo se diferirá si el individuo reclamado se encontrase detenido por deudas ú otras obligaciones civiles en virtud de una providencia judicial ó cualquier otro auto ejecutivo dictado por la autoridad competente anterior á la demanda de extradición, aun cuando el individuo reclamado no pudiese por este hecho cumplir los compromisos contraídos con particulares, los cuales podrán siempre hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales competentes.

Art. 9.º Se concederá la extradición cuando sea pedida por una de las partes contratantes á la otra por la vía diplomática y mediante presentación de una sentencia condenatoria ó de un escrito de acusación ó de un mandamiento de prisión ó de cualquiera otra providencia que tenga la misma fuerza que éste; expresando igualmente la naturaleza y la gravedad de los hechos que se imputan al reclamado, así como su denominación y el artículo del Código penal aplicable á los mismos que se halla vigente en el país que solicita la extradición.

Al mismo tiempo se facilitarán, si es posible, las señas del individuo reclamado ó cualquiera otra indicación que pueda servir para identificar su persona.

Art. 10. Deberá llevarse á efecto la detención preventiva de un individuo reclamado por uno de los delitos consignados en el artículo 2.º, no sólo mediante la presentación de uno de los documentos especificados en el art. 9.º, sino igualmente en vista del aviso que se transmita por correo ó por telégrafo, anunciando que existe un mandamiento de prisión, siempre con la condición de que dicho aviso sea transmitido en debida forma por la vía

APÉNDICES

rio de Negocios Ex
ese refugiado el pro
preventiva si en el
n que se haya efec
del detenido por la vi
ste convenio.

os robados ó hallad
los instrumentos ó
el delito ó cualquier
ados al mismo tiem
aso de que no se el
por muerte ó fuga d
enderá también los
o hubiese escondido
que se encontrasen
go, reservados los
tos mencionados, q
e de la terminación
o igual reserva resp
a la demanda de ex
s objetos mientras fu
so ocasionado por e
ó por otro cualquier
de detención, manu
adición se hubiese
rega y transporte de
o anterior deben ser
las altas partes cor
orios respectivos.

zgue preferible el tr
ión se ha de efectua
obierno reclamante,

e este puerto deberá
ntratante á la que se
la instrucción de uni
e una demanda de ex
os creyese necesaria
territorio de la otr

tante, ó que se practicase cualquiera otra diligencia judicial, se dirigirá al efecto por la vía diplomática un exhorto, extendido en la forma prescrita por la legislación vigente en el país de donde proceda la reclamación, y se le dará curso, observando las leyes del país en que hayan de ser oídos los testigos.

Art. 14. Cuando en una causa criminal fuese necesaria la comparecencia personal de un testigo, el Gobierno de quien dependa le exhortará para que acuda á la invitación que por el otro Gobierno se le hubiese hecho al efecto.

Si los testigos citados acceden á presentarse, se les expedirán inmediatamente los pasaportes necesarios y recibirán al mismo tiempo una cantidad para gastos de viaje y de permanencia, con arreglo á la distancia y al tiempo necesario para dicho viaje, según los reglamentos y las tarifas del país en que han de prestar su declaración.

Estos testigos no podrán en ningún caso ser detenidos ni molestados por un hecho anterior á la citación de comparecencia durante su residencia obligatoria en el punto en que ejerza sus funciones el Juez que ha de oírlos, ni durante el viaje de ida ó de vuelta.

Art. 15. Si con motivo de una causa criminal instruída en uno de los países contratantes se juzgase necesario proceder al careo del procesado con individuos detenidos en el otro país, ó presentar pruebas de convicción ó documentos judiciales, se dirigirá la petición por la vía diplomática, y salvo el caso de que á ello se opongan consideraciones excepcionales, se accederá á la petición, á condición, sin embargo, de devolver cuanto antes á los detenidos y restituir las pruebas y documentos mencionados.

Los gastos de traslación de un país á otro de los individuos detenidos y de los objetos citados, así como los que ocasionase el cumplimiento de las formalidades consignadas en los anteriores artículos, salvo los casos citados en los artículos 12 y 14, serán sufragados por el Gobierno que hizo la petición, en los límites de los territorios respectivos.

Cuando se juzgue conveniente la traslación por mar, dichos individuos serán conducidos al puerto que haya designado el agente diplomático ó consular de la parte reclamante, que abonará los gastos de embarque.

Art. 16. Las estipulaciones de este convenio serán aplicables.

PÉNDICES

trangeras de S. M. Católica
es vigentes en las mism
anda de extradición de
colonias ó posesiones al
se decidirá en su vista,
y ateniéndose á las ley
este convenio. Podrá, s
mediatamente ó consult

ólica se reserva el dere
lonias y posesiones extr
rusos que se refugien
ble, y ateniéndose á las
ipulaciones de este conv
rán las demandas de ex
ualquiera de las colonis
ólica, con arreglo á las c
l.

as contratantes se obli
tencias condenatorias q
tra los súbditos de la ot
ertificación se hará env
dictada en definitiva al
tenciado.

os respectivos dará al e
autoridades competentes
s y documentos que lo
recíprocamente en cum
mpañados de una trad
ivos renuncian al reint
umplimiento de las es
s 13 y 17.

o, y dentro de los límite
atantes se adhieren reci
espectivos países, que
niento ulterior de la ext
ontinuará en vigor hasta
e una de las altas parte
s antes de dicha fecha :

de que cesen los efectos del mismo, seguirá siendo obligatorio hasta que transcurra un año, á contar desde el día que lo denuncie una de las altas partes contratantes.

Art. 21. Este convenio se ratificará, y las ratificaciones se canjearán en Madrid en el término de seis semanas ó antes si fuese posible.

Empezará á regir veinte días después de su promulgación, en la forma prescrita por las leyes vigentes en los territorios de los Estados de las altas partes contratantes.

En fe de lo cual los plenipotenciarios respectivos han firmado el presente convenio y puesto el sello de sus armas.

Hecho en Madrid el 12/24 de Abril del año de gracia de 1888.— Firmado: (L. S.) M. Gortchacoff.—Firmado: (L. S.) Moret.

El presente convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Madrid el día 13/1.º de Junio de 1888.

Suecia y Noruega.—Convenio de 15 de Mayo de 1885.

Artículo 1.º Las altas partes contratantes se obligan á entregarse recíprocamente, según las reglas que posteriormente se expresan, con excepción de sus nacionales, á los individuos sentenciados ó procesados como autores ó cómplices por alguna de las infracciones que después se enumerarán, cometidas en el territorio de la parte reclamante, con tal que estas infracciones se castiguen en Suecia ó en Noruega con una pena superior á la de reclusión, y que sean calificadas en España de delitos menos graves, á saber:

1.º Asesinato, comprendiendo el infanticidio, parricidio, envenenamiento y homicidio.

2.º Aborto voluntario.

3.º Exposición de un niño ó abandono premeditado de un niño en estado tal que le prive de todo recurso.

4.º Robo, ocultación, sustracción, supresión, sustitución ó suposición de un niño.

5.º Rapto de un menor.

6.º Privación voluntaria é ilegal de la libertad individual, de una persona, cometida por un particular.

7.º Atentado contra la libertad individual cometido con violencia ó amenazas para obligar á alguno á hacer ó á dejar de hacer alguna cosa.

8.º Bigamia.

v. VIOLACION.

10. Atentado contra el pudor.
amenazas.

11. Atentado contra el pudor por amenazas en la persona de uno de catorce años, ó inducir á sufrir actos que ultrajen al pudor.

12. Excitación habitual á otro sexo, menores de edad.

13. Golpes ó heridas causados que hayan tenido por consecuencia incurable ó una incapacidad pérdida del uso completo de la muerte sin intención de cometer el homicidio.

14. Rapiña y extorsión.

15. Robo.

16. Estafa, sustracción ó

17. Quiebra fraudulenta ;

18. Perjurio ó falso testimonio.

19. Falsa declaración de un testigo, perito ó intérprete.

20. Falsificación de escritura hecha con intención fraudulenta como el uso de títulos ó despachos, hecho con conocimiento del fin de causar daño.

21. Destrucción, deterioro de un título público ó privado, un tercero.

22. La reproducción fraudulenta de punzones, marcas, sellos del con el fin de usarlos como lemento, de dichos timbres, y usados fraudulentamente ó falsamente.

23. La fabricación de moneda, falsificación y la alteración de la moneda, y el hecho de poner en circulación moneda, ambos falsificados.

24. La reproducción fraudulenta de moneda.

Banco y otros títulos de obligaciones y cualesquiera efectos emitidos por el Estado ó con autorización del Estado por corporaciones, sociedades ó particulares, así como la emisión y el hecho de poner en circulación con conocimiento de ello dichos billetes de Banco, títulos de obligaciones ú otros efectos falsificados.

25. Incendio voluntario.

26. Malversación de caudales y concusión por parte de funcionarios públicos.

27. Corrupción de funcionarios públicos con objeto de inducirlos á faltar á los deberes de su cargo.

28. Las infracciones siguientes cometidas á bordo de un buque por el Capitán ó la tripulación:

Destrucción voluntaria é ilegal de un buque.

Encallamiento voluntario de un buque.

Resistencia con violencia y vías de hecho al Capitán, si la resistencia se efectúa por varios tripulantes puestos de acuerdo con este objeto.

29. Destrucción voluntaria é ilícita, total ó parcial, de canales, esclusas ó construcciones hidráulicas análogas, de caminos de hierro ó de aparatos telegráficos, el hecho de poner obstáculos á la libre circulación de los trenes en un camino de hierro, colocando en la vía cualquier objeto ó levantando los carriles ó las traviesas, arrancando agujas ó tornillos, ó empleando cualquier otro medio capaz de detener un tren ó de hacerle descarrilar.

30. Destrucción ó deterioro voluntario é ilegal de sepulcros, monumentos fúnebres, ó de monumentos públicos.

31. Ocultación de objetos adquiridos á consecuencia de una de las infracciones previstas en este convenio.

Podrá también efectuarse la extradición por la tentativa de los delitos anteriormente enumerados, siempre que esta tentativa sea penable según las leyes de las altas partes contratantes y se castigue en Suecia ó en Noruega con una pena superior á la de reclusión.

Sin embargo, aun cuando la infracción que motive la demanda de extradición haya sido cometida fuera del territorio de la parte reclamante, se le podrá dar curso, siempre que la legislación del país á que se dirige la demanda autorice en igual caso la instrucción de proceso por hechos análogos cometidos fuera de su territorio.

individuo reclamado no es sueco, noruego ni es-
lo á que se pida la extradición podrá dar cuenta
al Gobierno á que pertenezca el perseguido, y
lo reclama á su vez para que lo juzguen sus
Gobierno al que se haya dirigido la demanda de
á á su arbitrio entregarle al uno ó al otro Go-

se efectuará la extradición si la persona reclamada por Suecia ó de Noruega ha sido procesada en España, ó si se halla aún procesada ó ha sido ya castigada en España, ó si la persona reclamada por el Gobierno español ha sido absuelta, ó se halla aún procesada, ó ha sido condenada en Suecia ó en Noruega por la misma infracción que da lugar á la entrega.

persona reclamada por el Gobierno de Suecia ó de
procesada en España, ó que la persona recla-
miada por el Gobierno español se encuentre procesada en Suecia
por motivo de otra infracción, se diferirá su extra-
dición hasta que termine el procedimiento y cumpla la pena que
le corresponde.

La tradición no se suspenderá porque impida el cumplimiento de las obligaciones que el individuo reclamado haya contraído con terceros, los cuales podrán hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes.

disposiciones de este tratado no son aplicables á pables de algún delito político. La persona que por algunos de los delitos comunes mencionados podrá, por consiguiente, en ningún caso ser entregada en el país al cual se concede su entrega, si el delito que hubiere cometido antes de la extradición fuere conexo con un delito político semejante, o si el delito que fuere cometido después de la extradición no prevista por este tratado, exceptuándose el individuo de que se trata, después de haber su-
bido a bordo de un buque, se le impuso por la infracción que motivó su extradición, permaneciese en el país al que se le entregó, ó ausentándose, regresase á él. No será como delito político ni hecho conexo con tal delito, el cometido contra la persona del Jefe de un Gobierno extranjero, ni contra alguno de los individuos de su familia, cuando

el atentado constituya el delito de homicidio, asonamiento.

Art. 6.º No podrá efectuarse la extradición si después de la exposición de hechos imputados al individuo que se reclama, de la última providencia del procedimiento judicial ó de la subsiguiente condena, hubiera prescrito la acción ó la pena, según las leyes del país en que aquél se encuentre cuando se pida su extradición.

Art. 7.º La extradición se pedirá por la vía diplomática, y no se concederá sino mediante la presentación en original ó en copia certificada, ya de una sentencia condenatoria, ya de una providencia del procesamiento ó instrucción de causa criminal con auto de prisión, ya de un simple auto de prisión, expedido en la forma prescrita por la legislación del país que presenta la demanda, indicando exactamente la infracción de que se trata, así como la disposición penal que le es aplicable. A la demanda de extradición acompañarán, si es posible, las señas personales del individuo reclamado.

Art. 8.º En caso de urgencia, y especialmente cuando se tema una evasión, podrá pedirse y obtenerse la detención del individuo sentenciado ó procesado por la vía más corta y aun por telégrafo, fundándose en una sentencia condenatoria, ó en una providencia de procesamiento ó en un auto de prisión, con tal de que en el término de seis semanas, después de verificada la detención, se presente el documento que ha servido de base á la demanda de extradición.

Art. 9.º Todos los objetos que se encuentren en poder del individuo reclamado al detenerle, serán entregados al Estado reclamante al mismo tiempo que se verifique la extradición, y esta entrega se hará extensiva, no sólo á los objetos adquiridos de una manera ilícita, sino también á todos los que pueden servir de prueba de la infracción.

Se reservan, sin embargo, los derechos que una tercera persona haya podido adquirir sobre los objetos mencionados, los cuales deberán en este caso serle restituidos sin gastos después de la terminación del proceso.

Art. 10. Las partes contratantes renuncian á pedir el reintegro de los gastos que se ocasionen con motivo de la detención ó el mantenimiento del individuo cuya extradición se halla enta-

8

or la
ta el
. co.
s po
n de
abre
.trat
o pa
iará
enta
ido
. Po
ón t
del

n si
casie
ligos
gast
ción
al pe
ros f
Gobi
peti.
se
viaje
arma
eder
tos
i na
tari
sten
s an
os o

imih
poli
itos
rida.

la petición por la vía diplomática y se cumplimentará. que circunstancias especiales se opongan á ello, siem condición de devolver los documentos de que se trata.

Ambas partes contratantes renuncian á solicitar el reintegro de los gastos que ocasione el envío y devolución de documentos hasta la frontera.

Art. 14. Este tratado entrará en vigor diez días después de su publicación en la forma prescrita por la legislación de las partes contratantes, pero continuará vigente seis meses después de la denuncia.

Se ratificará, y las ratificaciones serán canjeadas en el plazo más breve posible.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos han firmado este tratado, poniendo en él el sello de sus armas.

Hecho en original por duplicado en Stockolmo el 15 de Mayo de 1885.—(L. S.) Firmado: Lorenzo Castellanos.—(L. S.) Firmado: Carlos Federico, Barón Hochschild.

Este tratado ha sido debidamente ratificado, siendo las ratificaciones canjeadas en Stockolmo el 14 de Julio del mismo año de 1885.

Brasil.—Convenio de 16 de Marzo de 1872.

Artículo 1.º El Gobierno español y el Gobierno brasileño se obligan por el presente tratado á la recíproca entrega de todos los individuos refugiados del Brasil en España y sus provincias de Ultramar y de España y sus provincias de Ultramar en el Brasil, acusados ó condenados como autores ó cómplices de cualquiera de los crímenes declarados en el art. 3.º por los Tribunales de aquella de las dos Naciones en que el crimen deba ser castigado.

Art. 2.º La obligación de conceder la extradición no se extiende en caso alguno á los nacionales de los dos países, ó á los individuos que en ellos se hubiesen naturalizado antes de la perpetración del crimen.

Art. 3.º La extradición deberá realizarse con respecto de los individuos acusados ó condenados como autores ó cómplices de los siguientes crímenes:

1.º Homicidio, comprendiendo el asesinato, el parricidio, el envenenamiento y el infanticidio.

2.º La tentativa de cualquiera de los crímenes especificados en el número que antecede.

rales graves, según la ley de los dos países.
pro, rapto y otros atentados contra el pu-
b; la circunstancia de violencia; poligamia.
stracción ó sustitución de menor; usurpa-

.tario, daño en los caminos de hierro, del
resultar peligro para la vida de los pasa-

.versación de fondos públicos, estelionato,
sustracción de dinero, fondos, documentos
de propiedad pública ó particular por per-
. estén confiados, ó que sean asociadas ó
decimiento en que el crimen fué cometido.
alteración, importación, introducción y
papeles de crédito con curso legal en los
n, importación, venta y uso de instrumen-
er dinero falso, pólizas ó cualesquier otros
ública, notas de los Bancos ó cualesquiera
ue circulan como si fuese moneda; falsifica-
nos, sellos de correos, estampillas; sellos,
lesquiera otros sellos del Estado, y uso, im-
esos objetos; falsificación de escrituras pú-
letras de cambio y otros títulos de comer-
eles falsificados.

tería, comprendido el hecho de posesio-
que de cuya tripulación formase parte por
lencia contra el Capitán ó quien le sustitu-
embarcación fuera de los casos previstos
esclavos.

ilenta, perjurio en materia criminal.

persona libre á la esclavitud.

luos acusados ó condenados por crímenes á
la legislación de su Nación, corresponde la
entregados únicamente con la cláusula de
nmutada.

ición será reclamada por la vía diplomática
dida sino en vista de la copia del auto de
(despacho de pronuncia) ó de la sentencia

condenatoria sacada de los autos, de conformidad con las leyes del Estado reclamante.

Estos documentos irán, siempre que fuese posible, acompañados de las señas particulares del acusado ó condenado y de una copia del texto de la ley aplicable al hecho criminal que le es imputado.

Art. 5.º En casos urgentes cada uno de los dos Gobiernos, apoyado en sentencia condenatoria, auto de elevación á plenario (despacho de pronuncia) ó mandato de prisión, podrá por el medio más expedito pedir y alcanzar la prisión del condenado ó acusado, con la condición de presentar con la brevedad posible el documento citado en la instancia.

Art. 6.º Si dentro del plazo de tres meses, contados desde el día en que el acusado ó condenado fuese puesto á disposición del agente diplomático, éste no le hubiese remitido al Estado reclamante, se le dará la libertad á dicho acusado ó condenado, que no podrá ser de nuevo preso por el mismo motivo.

En este caso, los gastos serán por cuenta del Gobierno que dirigió la instancia.

Art. 7.º Cuando el acusado fuese extranjero en los dos Estados contratantes, el Gobierno que debe conceder la extradición informará al del país al cual pertenece el individuo reclamado de la demanda de extradición; y si este último Gobierno reclamare el culpado para mandarlo juzgar por sus Tribunales, el Gobierno que hubiere recibido la instancia podrá á su arbitrio entregarlo á la Nación en cuyo territorio cometió el delito ó á aquella de quien fuese súbdito.

Art. 8.º Si el acusado ó condenado cuya extradición fuese pedida en conformidad del presente tratado por una de las partes contratantes, fuere igualmente reclamado por otro ú otros Gobiernos en virtud de crímenes cometidos en sus respectivos territorios, será entregado al Gobierno cuya demanda hubiere sido primero presentada, ó tuviere fecha más antigua cuando las presentaciones fueren simultáneas.

Art. 9.º En caso alguno se concederá la extradición por crímenes políticos ó por hechos que tengan conexión con ellos.

No se reputará delito político ni hecho que tenga relación con él el atentado contra los Soberanos de los dos Estados contratantes y los miembros de sus respectivas familias, cuando ese atentado constituye el crimen de homicidio y envenenamiento.

APÉNDICES

cuya extradición hubiere sido concedida o castigados por crímenes políticos ni por hechos que tengan conexión con otro crimen anterior distinto del que hubiere sido declarado en el artículo 3.º y hubiese sido perpetrado posteriormente á la celebración de este tratado.

Art. 11. La extradición tampoco será concedida cuando, según la ley del país en que el criminal estuviere refugiado, se halla prescrita pena ó acción criminal.

Art. 12. Si el individuo reclamado se hallare perseguido ó retenido en el país en donde se refugió por obligación contraída con una persona particular, su extradición tendrá, sin embargo, lugar quedando á voluntad de la parte perjudicada hacer valer sus derechos ante la autoridad competente.

Art. 13. Los individuos reclamados que se hallaren condenados ó procesados por crímenes cometidos en el país en que se refugiaron, serán entregados después de la sentencia definitiva ó de haber cumplido la pena que le hubiere sido impuesta.

Art. 14. Serán entregados siempre los objetos sustraídos encontrados en poder de los reos, los instrumentos y utensilios de que se hubieren servido para la perpetración del crimen cualquier otra prueba de convicción, sea que se realice la extradición ó deje de realizarse por muerte ó fuga del culpado.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de terceros sobre los mencionados objetos, los cuales en ese caso serán devueltos sin gasto alguno después de terminado el proceso.

Art. 15. Los gastos hechos con la captura, custodia, manutención y transporte del individuo cuya extradición fuera concedida, así como los gastos de la remisión de los objetos especificados en el artículo que antecede, serán de cuenta de los Gobiernos en los límites de sus respectivos territorios.

Los gastos de transporte por mar serán por cuenta de aquel que reclame la extradición.

Art. 16. Cuando en el curso de una causa criminal que no es política se juzgare necesario la deposición de testigos residentes en el otro, será enviado para ese fin y por la vía diplomática, exhorto interrogatorio, al cual se dará cumplimiento, observándose las leyes del Estado en donde los testigos fuesen examinados.

Art. 17. Cuando en el curso de una causa criminal que no es política se juzgare necesario la deposición de testigos residentes en el otro, será enviado para ese fin y por la vía diplomática, exhorto interrogatorio, al cual se dará cumplimiento, observándose las leyes del Estado en donde los testigos fuesen examinados.

Los dos Gobiernos renuncian á cualquier reclamación que tenga por objeto la restitución de los gastos que resulten del cumplimiento del exhorto, siempre que no se trate de investigaciones criminales, comerciales ó médico-legales.

Art. 17. El presente tratado tendrá vigor por cinco años, contados desde el día del canje de las ratificaciones, y continuará subsistiendo pasado ese plazo, hasta que uno de los dos Gobiernos no lo denuncie con anticipación de un año.

Será ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Río de Janeiro con la posible brevedad.

En fe de lo cual, etc.—Hecho en Río de Janeiro á 16 del mes de Marzo del año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1872. Ratificado en 8 de Junio (*Gaceta* 8 Agosto).

Estados Unidos de América.—Convenio de 5 de Enero de 1877.

Artículo 1.º El Gobierno de España y el Gobierno de los Estados Unidos convienen en entregar á la justicia, á petición uno de otro, hecha con arreglo á lo que en este convenio se dispone, á todos los individuos acusados ó convictos de cualesquiera de los crímenes especificados en el art. 2.º de este convenio, cometidos dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, siempre que dichos individuos estuviesen dentro de dicha jurisdicción al tiempo de cometer el crimen, y que busquen asilo ó que sean encontrados en el territorio de la otra, con tal que dicha entrega tenga lugar únicamente en virtud de las pruebas de criminalidad que, conforme á las leyes del país en que el fugitivo ó acusado se encuentre, justificasen su detención y enjuiciamiento si el crimen ó delito se hubiesen cometido allí.

Art. 2.º Según lo dispuesto en este convenio, serán entregados los individuos acusados ó convictos de cualquiera de los crímenes siguientes:

1.º Asesinato, incluso los crímenes designados con los nombres de parricidio, homicidio, envenenamiento é infanticidio.

2.º El conato de asesinato.

3.º Estupro ó violación.

4.º Incendio.

5.º Piratería ó motín á bordo de los buques, cuando la tripulación ú otras personas á bordo, ó una parte de ellas, se hayan apoderado del barco por fraude ó violencia contra el Capitán.

6.º Robo, entendiéndose como tal el acto de allanar la casa

APÉNDICES

en ella con intención de come

is oficinas del Gobierno y autor
casas de banca ó de cajas de aho
pañías de seguros, con intención

se por tal la sustracción de bi
cia ó intimidación.

endición de documentos falsifica
plantación de actos oficiales d
pública, incluso los Tribunales
uso fraudulento de los mismos.

moneda falsa, bien sea ésta met
s falsos de la Deuda pública, é
públicos de crédito, de sellos d
as de Administración del Estado
circulación ó uso fraudulento de
a mencionados.

fondos públicos, cometida dentro
parte por empleados públicos ó

por cualquiera persona ó persona
sus principales ó amos, cuando
pena infamante.

lose por tal la detención de p
s dinero ó para otro cualquier

ones de este convenio no dan de
por ningún crimen ó delito de ca
cionados con los mismos; y ni
cualquiera de las partes contra
o podrá ser juzgada ó castigada
fético, ni por actos que tengan co
netidos antes de la extradición.

la entrega de persona alguna en
uier crimen ó delito cometido co
atificaciones del mismo, y nadie
n ó delito que el que motivó su
nen sea de los especificados en

título 2.º, y se haya cometido con posteriores ratificaciones del convenio.

Art. 5.º El criminal evadido no será entregado con arreglo á las disposiciones del presente convenio, cuando por el transcurso del tiempo ó por otra causa legal, con arreglo á las leyes del punto dentro de cuya jurisdicción se cometió el crimen, el delincuente se halle exento de ser procesado ó castigado por el delito que motiva la demanda de extradición.

Art. 6.º Si el criminal evadido cuya entrega puede reclamarse con arreglo á las estipulaciones del presente convenio, se halla actualmente enjuiciado, libre con fianza ó preso por cualquier delito cometido en el país en que buscó asilo ó haya sido condenado por el mismo, la extradición podrá demorarse hasta tanto que terminen las actuaciones y el criminal sea puesto en libertad con arreglo á derecho.

Art. 7.º Si el criminal fugado reclamado por una de las partes contratantes fuera reclamado á la vez por uno ó más Gobiernos, en virtud de lo dispuesto en tratados, por crímenes cometidos dentro de sus respectivas jurisdicciones, dicho delincuente será entregado con preferencia al primero que haya presentado la demanda.

Art. 8.º Ninguna de las partes contratantes aquí citadas estará obligada á entregar á sus propios ciudadanos ó súbditos en virtud de las estipulaciones de este convenio.

Art. 9.º Los gastos de captura, detención, interrogatorio y transporte del acusado serán abonados por el Gobierno que haya presentado la demanda de extradición.

Art. 10. Todo lo que se encuentre en poder del criminal fugado al tiempo de su captura, que pueda servir de comprobante para probar el crimen, será, en cuanto sea posible, entregado con el reo al tiempo de su extradición. Sin embargo, se respetarán debidamente los derechos de tercero con respecto á los objetos mencionados.

Art. 11. Las estipulaciones del presente convenio serán aplicables á todas las posesiones extranjeras ó coloniales de cualquiera de las dos partes contratantes.

Las diligencias para la entrega de los fugados á la acción de la justicia serán practicadas por los respectivos agentes diplomáticos de las partes contratantes. En la eventualidad de la au-

sencia de dichos agentes del país ó residencia del Gobierno, ó cuando se pida la extradición desde una posesión colonial de una de las partes contratantes, la reclamación podrá hacerse por los funcionarios superiores consulares.

Dichos representantes ó funcionarios superiores consulares serán competentes para pedir y obtener un mandamiento ú orden preventiva de arresto contra la persona cuya entrega se solicita; y en su virtud, los Jueces y Magistrados de ambos Gobiernos tendrán respectivamente poder y autoridad, con queja hecha bajo juramento, para expedir una orden para la captura de la persona inculpada, á fin de que él ó ella pueda ser llevada ante el Juez ó Magistrado para que pueda conocer ó tomar en consideración la prueba de su criminalidad; y si así, oído conocimiento, resulta la prueba suficiente para sostener la acusación, será obligación del Juez ó Magistrado que lo examine certificar esto mismo á las correspondientes Autoridades ejecutivas, á fin de que pueda expedirse la orden para la entrega del fugado.

Si el criminal evadido fuese condenado por el crimen por el que se pide su entrega, se dará copia debidamente autorizada de la sentencia del Tribunal ante el cual fué condenado. Sin embargo, si el evadido se hallase únicamente acusado de un crimen, se presentará una copia debidamente autorizada del mandamiento de prisión en el país donde se cometió el crimen, y de las declaraciones en virtud de las cuales se dictó dicho mandamiento, con la suficiente evidencia ó prueba que se juzgue conveniente para el caso.

Art. 12. Este convenio continuará en vigor desde el día del canje de las ratificaciones; pero cualquiera de las partes puede en cualquier tiempo darlo por terminado, avisando á la otra con seis meses de anticipación su intención de hacerlo así.

En testimonio de lo cual, los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente convenio por triplicado y puesto sus sellos.

Hecho en la Villa de Madrid por triplicado en español y en inglés, el día 5 de Enero de 1877.—Este convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Wáshington el día 21 de Febrero último. (*Gaceta* 13 Marzo.)

Estados Unidos de América.—Convenio adicional modificando y adicionando el de 5 de Enero de 1877.

Artículo 1.º El párrafo quinto del art. 2.º del expresado con-

venio de 5 de Enero de 1877 queda derogado y sustituido por el siguiente:

5.º Crímenes cometidos en el mar:

a) Piratería, tal como es ordinariamente reconocida y la definen las leyes internacionales.

b) Destrucción ó pérdida de un buque causada intencionalmente, ó conspiración y tentativa para conseguir dicha destrucción, ó pérdida cuando hubiesen sido intentadas por alguna ó algunas personas á bordo del dicho buque en alta mar.

c) Motin ó conspiración por dos ó más individuos de la tripulación ó por otras personas á bordo de un buque en alta mar, con el propósito de rebelarse contra la autoridad del Capitán ó comandante de dicho buque, ó que por fraude ó violencia traten de apoderarse del mismo buque.

El párrafo duodécimo del citado art. 2.º quedará redactado y se entenderá del modo siguiente:

12. La sustracción ó malversación criminal de fondos públicos cometida dentro de la jurisdicción de una ú otra parte por empleados públicos ó depositarios.

El párrafo décimotercero del citado art. 2.º queda igualmente modificado, y se entenderá del modo siguiente:

13. Malversación de caudales por cualquiera persona ó personas dependientes, asalariadas ó empleadas, en detrimento de sus principales ó amos, cuando este crimen ó delito estén castigados con prisión ú otro castigo corporal por las leyes de ambos países.

El párrafo décimocuarto del mencionado art. 2.º queda asimismo modificado y se entenderá del modo siguiente:

14. Plagio de menores ó adultos, entendiéndose por este delito el secuestro ó detención de una ó más personas para exigirles dinero ó exigirlo de sus familias, ó para otro cualquier fin ilícito.

Art. 2.º A continuación y formando parte del art. 2.º del expresado convenio de 5 de Enero de 1877, se añadirán los párrafos siguientes:

15. Obtener por medio de amenazas de daños, ó por medio de falsos artificios, dinero, valores ú otra propiedad personal, así como compra de estos mismos efectos con conocimiento de cómo han sido obtenidos, cuando estos crímenes ó delitos estén pena-

detención ó extradición ayudarán á los empleados del Gobierno que pida la extradición ante los respectivos Jueces y Magistrados, con todos los medios legales que estén á su alcance, sin que estos servicios les den derecho á reclamar honorarios al Gobierno que pida la extradición como compensación de los mismos servicios así prestados, á menos que el empleado ó empleados que hubiesen prestado la ayuda no fuesen de aquellos que en el ejercicio ordinario de sus funciones no reciban otro sueldo ó retribución que la devengada por cada servicio prestado, en cuyo caso estos funcionarios especiales tendrán derecho á percibir del Gobierno que pida la extradición los honorarios de costumbre de la misma manera y por la misma suma que si estos servicios ó actos los hubiesen prestado en procedimientos criminales ordinarios bajo las leyes del país del cual dependen.

Art. 4.º Todas las disposiciones del citado convenio de 5 de Enero de 1877 no derogadas por estos artículos adicionales se aplicarán á los presentes artículos con la misma fuerza que tienen en el dicho convenio original.

Este convenio adicional será ratificado y las ratificaciones serán canjeadas en Wáshington tan pronto como sea posible, y seguidamente el cambio de ratificaciones tendrá inmediato efecto y formará parte del convenio de 5 de Enero de 1877, y continuará rigiendo y terminará de igual manera que éste.

En testimonio de lo cual los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente convenio adicional por duplicado, en español y en inglés, y puesto en el mismo sus sellos.

Hecho en la ciudad de Wáshington el día 7 de Agosto del año del Señor de 1882.—(L. S.) Firmado: Francisco Barca.—(L. S.) Firmado: Frederick F. Frelinghuysen.

El presente convenio ha sido debidamente ratificado y las ratificaciones se canjearon en Wáshington el 19 de Abril de 1883. (*Gaceta* 25 Abril.)

Estados Unidos Mejicanos.—Convenio de 17 de Noviembre de 1881.

Artículo 1.º El Gobierno español y el mejicano se comprometen á entregarse recíprocamente los individuos que habiendo sido condenados ó siendo perseguidos por las Autoridades competentes de uno de los Estados contratantes como autores principales, auxiliares ó cómplices de cualquiera de los crímenes ó delitos

13. La mutilación, golpes ó heridas causadas con premeditación, cuando de ellas resulte una dolencia ó incapacidad permanente de trabajo personal, la pérdida de la vista ó de algún órgano cualquiera, ó la muerte sin intención de causarla.

14. El daño cometido en los caminos de hierro que pueda poner en peligro la vida de los pasajeros, en los telégrafos, diques ú obras de utilidad pública.

15. El rapto, los atentados con violencia contra el pudor, ó sin violencia en niños de uno ú otro sexo menores de trece años de edad; la bigamia.

16. La piratería, en la inteligencia de que para los efectos de este tratado serán considerados como piratas:

1.º Los que perteneciendo á la tripulación de una nave mercante de cualquier Nación ó sin nacionalidad apresen á mano armada alguna embarcación ó cometan depredaciones en ella ó hagan violencia á las personas que se hallen á su bordo ó asalten alguna población.

2.º Los que yendo á bordo de alguna embarcación se apoderen de ella y la entreguen voluntariamente á un pirata.

3.º Los corsarios que en caso de guerra entre dos ó más Naciones hagan el corso sin patente de ninguna de ellas, ó con patentes de dos ó más de los beligerantes.

4.º Los capitanes, patrones ó cualquiera de los que, formando parte de la tripulación de un buque de guerra, se apoderen de él sublevándose contra el Gobierno á que el buque pertenezca.

17. Ocultación, sustracción, sustitución ó corrupción de menor; usurpación del estado civil.

18. La bancarrota ó quiebra fraudulenta y fraudes cometidos en las quiebras.

19. Baratería.

20. Abuso de confianza.

No se concederá, sin embargo, la extradición en ningún caso cuando el delito consumado ó frustrado sólo merezca pena correccional.

Art. 3.º No habrá lugar á la extradición:

1.º Cuando se pida á causa de una infracción, de la cual el individuo reclamado sufre ó ha sufrido ya la pena en el país al cual la extradición ha sido pedida, ó por la que hubiese sido allí perseguido y declarado inocente ó absuelto.

ENDI

.fra
lido
paf

pe
las
os,
se

por
pol
a v
los
co

uci
ha
nta
ser

alos
par
as
de
culc
neid
o a

ado
ante
sue
le l
lam
or l
pod
hub
die
pid
rtes

también por otro ú otros Gobiernos á causa de otros crímenes ó delitos cometidos por el mismo individuo, éste será entregado al Gobierno del Estado en cuyo territorio hubiese cometido la infracción más grave á juicio del Gobierno que ha de disponer la extradición; cuando las diversas infracciones tuviesen todas la misma gravedad, será entregado al Gobierno del Estado cuya demanda sea de fecha anterior, y, por último, será entregado al Gobierno del Estado al cual pertenezca si concurren las circunstancias requeridas por el art. 19 del presente tratado.

Art. 6.º La demanda de extradición será presentada por la vía diplomática, y apoyada en los documentos siguientes:

1.º El auto de prisión expedido contra el reo ó cualquiera otro documento que tenga al menos la misma fuerza que dicho auto, y precise igualmente los hechos denunciados y la disposición penal que le sea aplicable.

2.º Las señas personales del encausado, hasta donde sea posible, á fin de facilitar su busca y arresto.

Art. 7.º Las estipulaciones del presente tratado serán aplicables á todas las posesiones extranjeras ó coloniales de cualquiera de las dos partes contratantes.

En la eventualidad de ausencia de los Agentes diplomáticos del país ó residencia del Gobierno, ó cuando se pida la extradición desde una de las provincias ultramarinas de Cuba ó Puerto Rico, ó á una de dichas posesiones, la reclamación podrá hacerse por los funcionarios superiores consulares.

Art. 8.º Si un criminal evadido fuese condenado por el crimen por el que se pide su entrega, se dará copia debidamente autorizada de la sentencia del Tribunal ante el cual fué condenado. Sin embargo, si el evadido se hallase únicamente acusado de un crimen, se presentará una copia debidamente autorizada del mandamiento de prisión en el país en que se cometió el crimen y de las declaraciones en virtud de las cuales se dictó dicho mandamiento, con la suficiente evidencia ó prueba que se juzgue competente para el caso.

Art. 9.º En los casos urgentes y, sobre todo, cuando se tema la fuga, cada uno de los dos Gobiernos, apoyándose en una sentencia condenatoria ó de acusación ó en un mandamiento de prisión, podrá por el medio más rápido y aun por telégrafo pedir y obtener la prisión del acusado ó del condenado, con la condición

tencia de las Autoridades locales para buscar, aprehender y arrestar á los desertores de buque de guerra ó mercante de su país.

Con tal fin se dirigirán por escrito á las Autoridades locales competentes, y probarán, con la exhibición de los registros de los buques de la tripulación ú otros documentos públicos, que los individuos reclamados hacían parte de dichas tripulaciones. Justificada así la demanda, menos no obstante cuando se probare lo contrario, no se rehusará la entrega. Luego que los desertores fuesen aprehendidos, se pondrán á disposición del Cónsul ó agente consular que los hubiese reclamado, y podrán ser detenidos en las prisiones públicas á disposición y expensas de quienes lo reclamen para ser remitidos á los buques de cuyo servicio desertaron ó á otros de la misma Nación. Sin embargo, si no fueren remitidos dentro de dos meses, contados desde el día de su arresto, serán puestos en libertad y no se volverá á aprehenderlos por la misma causa. Siempre que el desertor hubiese cometido algún crimen ó delito en el país donde se le reclame, se diferirá su extradición hasta que termine el juicio criminal relativo, y la sentencia final haya tenido entera ejecución.

Queda entendido que si los desertores son ciudadanos del país donde acontezca la deserción, estarán exceptuados de las estipulaciones del presente artículo.

Art. 14. Si el individuo reclamado estuviese perseguido, encausado ó condenado por delito cometido en el país donde se refugió, su extradición será diferida hasta que termine su causa; si fuere ó estuviere condenado, hasta que extinga su pena.

No será obstáculo para su extradición la responsabilidad por obligaciones civiles que tenga el individuo reclamado á favor de personas particulares.

Art. 15. En el caso de haber expedido la extradición por alguno de los delitos enumerados en el art. 2.º, no se podrá procesar ni castigar á los procesados por razón de delitos políticos, ya sean inconexos ó conexos con los crímenes por que se hubiese concedido la extradición.

Siempre que las circunstancias políticas de cualquiera de las Naciones contratantes diese lugar á temer un procedimiento por delito político contra la persona cuya extradición se solicita, podrá el Gobierno requerido exigir que por medio de notas se sustituya una nueva garantía á favor del acusado.

INDICES

trega de persona a
rimen ó delito com
ciones del mismo,
o que el que mot
a de los especificad
oridad al canje de

ntratantes se com
ntencias condenat
e contra los súbd
Esta notificación se
a la sentencia dic
en es súbdito el se
nos dará al efecto
s competentes.

ucción de una cau
le extradición, una
stigos domiciliados
tro acto de instruc
omática un exhort
yes vigentes en el
mplimentará obser
los testigos.

criminal no polít
ites se juzgare ne
enidos en el otro
clón ó documentos
omática y se le da
o consideraciones
viar lo más pronto
mentos indicados.

un país á otro de
a mencionados, as
las formalidades
sufragados por el
s límites del territ
e las partes contra
ado uno de los crí
efugiase en territ

parte, se concederá la extradición cuando, tes, no pudiese ser juzgado por los Tribunales de la condición de que no sea reclamado por donde hubiera cometido la infracción, sea, si no, sea que no haya cumplido la pena.

Las mismas reglas se observarán par biese cometido en las circunstancias ante fracciones contra un súbdito de una de l

Ambas se comprometen á perseguir, respectivas, los crímenes y delitos cometi una parte contra las leyes de la otra, des presente la demanda, y en el caso en que puedan ser clasificados en una de las cat el art. 2.º del presente tratado.

Cuando un individuo sea perseguido país, por una acción penable cometida en Nación, el Gobierno de esta última está informes, los documentos judiciales con cualquiera otra declaración necesaria pa miento.

Art. 20. El presente tratado continuará sea abrogado por los dos Gobiernos de los ó por uno de ellos; mas para que sea abro berá éste dar aviso al otro Gobierno con pación

Art. 21. El presente tratado será rat Constitución de cada uno de los dos país serán canjeadas en la ciudad de Méjico de año, ó antes si fuese posible.

En fe de lo cual los respectivos plenip por duplicado y lo sellaron con sus sellos á los diez y siete días del mes de Novieml mado: E. de Muruaga y Vildósola. (L. Mariscal.

Estados Unidos Mejicanos.—Convenio de 1882, prorogando el plazo de canje del celebrado en 17 de Noviembre de 1881.

El Gobierno de España por una parte y e Mejicanos por la otra, teniendo presente q

- 4.º Infanticidio.
- 5.º Envenenamiento y las tentativas de los crímenes comprendidos en los incisos anteriores.
- 6.º Violación, aborto voluntario.
- 7.º Bigamia.
- 8.º Rapto.
- 9.º Atentado con violencia contra el pudor.
10. Ocultación y sustracción de menores.
11. Incendio voluntario.
12. Lesiones hechas voluntariamente, en que hubiere ó de las que resultase inhabilitación de servicio, deformidad, mutilación ó destrucción de algún miembro ú órgano, ó la muerte sin intención de darla.
13. Daños ocasionados voluntariamente á los ferrocarriles y telégrafos y de que resulten trabas á la marcha regular de ellos ó peligro para la vida de los pasajeros.
14. Asociación de malhechores.
15. Robo, y particularmente con violencia á las personas y á las cosas.
16. Falsificación, alteración, introducción y emisión fraudulenta de monedas y papeles de crédito con curso legal, fabricación, importación, venta y uso de instrumentos destinados á hacer moneda falsa, pólizas ó cualesquiera títulos de la Deuda pública, billetes de Banco ó cualesquiera papeles de los que circulan como si fuesen moneda; falsificación de sellos de correo, estampillas, timbres, cuños y cualesquiera otros sellos del Estado ó de las oficinas públicas, aun en el caso de que el crimen haya sido cometido fuera del Estado que pide la extradición; uso, importación y venta de estos objetos.
17. Falsificación de escrituras públicas, letras de cambio y otros títulos de comercio, y el uso de estos papeles falsificados.
18. Sustracción de las oficinas del Estado de documentos originales ó en copia, cometida por particulares, por empleados ó funcionarios públicos; peculado ó malversación de caudales públicos, concusión cometida por funcionarios públicos, sustracción fraudulenta de los fondos, dinero ó papeles pertenecientes á una Compañía ó Sociedad industrial ó comercial ú otra Corporación, por persona empleada por ella, siempre que esté legalmente establecida dicha Compañía ó Corporación; pero sólo en el caso

una de las altas partes contratantes, de este tratado, fuese igualmente reclamado á consecuencia de delitos cometidos en los territorios, será entregado al Gobierno del país en el que se cometió el crimen más grave; y siendo de igual gravedad el crimen cometido en ambos países, se preferirá en primer lugar la reclamación del país en el que se cometió el crimen, y en segundo lugar la de la parte reclamante.

Art. VI. Si el individuo reclamado se hallase enjuiciado por un crimen ó delito cometido en el país en que se encuentra asilado, la extradición será diferida hasta que concluya el juicio que se sigue contra él, ó sufra la pena que se le impusiere.

Lo mismo sucederá si al tiempo de reclamarse su extradición se hallare cumpliendo una pena anterior.

Art. VII. Si el individuo reclamado se hallare perseguido ó detenido en el país en que se ha refugiado, en virtud de obligación contraída con persona particular, su extradición, sin embargo, tendrá lugar, quedando libre la parte perjudicada para hacer valer sus derechos ante la autoridad competente.

Art. VIII. El individuo entregado en virtud del presente tratado no podrá ser procesado por ningún crimen anterior distinto del que haya motivado la extradición, excepto en los casos siguientes:

1.º Si á consecuencia de los debates judiciales y un examen más profundo de las circunstancias del crimen, los Tribunales lo clasifican en algunas de las otras categorías indicadas en el artículo 2.º

El Gobierno del Estado á quien el reo ha sido entregado comunicará el hecho al otro Gobierno y dará los informes precisos para el conocimiento exacto del procedimiento, por el cual los Tribunales hubieren llegado á aquel resultado.

2.º Si después de castigado, absuelto ó perdonado del crimen especificado en la demanda de extradición permaneciera en el país hasta el plazo de tres meses, contados desde la fecha de la sentencia de absolución pasada en autoridad de cosa juzgada, ó del día en que haya sido puesto en libertad en consecuencia de haber cumplido la pena ó obtenido su perdón.

3.º Si regresase posteriormente al territorio del Estado reclamante.

dos en los artículos preceden
biernos en los límites de los
de manutención y conducció
caso por cuenta del Estado q

Art. XIV. Cuando en la prosecucion de una causa criminal, uno de los dos Gobiernos juzgase necesario oír á testigos domiciliados en el territorio del otro, dirigirá un escrito por la vía diplomática al Gobierno del país donde debe hacerse la requisición, y éste dictará las medidas necesarias para que dicha requisición tenga lugar según las reglas del caso.

Los dos Gobiernos renuncian á la reclamación de los gastos que originare este procedimiento.

Art. XV. Si en una causa criminal fuese necesaria la comparecencia personal de un testigo, el Gobierno del país á que pertenezca le invitará á acudir á la citación que se le haga. En caso de asenso, le serán acordados gastos de viaje y permanencia, á contar desde su salida de su domicilio, según las tarifas y reglamentos vigentes en el país donde deba tener lugar la comparecencia. Ningún testigo, cualquiera que fuera su nacionalidad, quien, citado que fuere á uno de los dos países, compareciere voluntariamente ante los Jueces del otro, podrá ser perseguido ni detenido por hechos ni condenaciones anteriores, civiles ó criminales, ni so pretexto de complicidad en los hechos objeto del proceso en el que tenga que figurar como testigo.

Art. XVI. Los individuos acusados ó condenados por crímenes á los cuales correspondiere la pena de muerte, conforme á la legislación de la Nación reclamante, sólo serán entregados con la cláusula de que esa pena les será conmutada.

Art. XVII. El presente tratado regirá por el término de seis años, á contar desde el día en que se efectúe el canje de las ratificaciones; transcurrido este plazo, continuará en vigor hasta que una de las altas partes contratantes notifique á la otra la voluntad de hacer cesar sus efectos, en cuyo caso caducará seis meses después de haberse llevado á conocimiento del otro Gobierno la denuncia.

Art. XVIII. El presente tratado, según se halla extendido en 18 artículos, será ratificado por los Gobiernos de España y de la República Oriental del Uruguay, y las ratificaciones se canjearán en la ciudad de Montevideo á la brevedad posible.

12. Las amenazas de muerte ó de incendio, ó para exigir dinero, hechas por escrito y bajo condición.

13. El perjurio y soborno para perjurar.

14. El incendio voluntario.

15. El hurto y el robo.

16. La defraudación y malversación de caudales por empleados públicos ó personas legalmente reponsables de la custodia de efectos y valores y de la gestión é inversión de fondos.

17. La estafa y el abuso de confianza.

18. La falsificación, alteración, introducción y emisión fraudulenta de moneda y documentos de crédito con curso legal; falsificación, importación, venta y uso de instrumentos destinados á hacer moneda falsa, pólizas ó cualesquiera títulos de la Deuda pública, billetes de Banco y papel moneda, falsificación de sellos del Estado ó de Correos, estampillas, timbres, cuños, marcas y despachos telegráficos.

19. Falsificación ó expendición de documentos falsificados públicos ó privados.

20. Falsificación ó suplantación de actos oficiales del Gobierno ó de la Autoridad pública, incluso los de los Tribunales de justicia, ó la expendición ó uso fraudulento de los mismos.

21. Quiebra fraudulenta.

22. El daño cometido en los caminos de hierro que pueda poner en peligro la vida de los pasajeros; en los telégrafos, diques ú obras de utilidad pública.

23. El atentado contra la propiedad y la libertad individual y la inviolabilidad del domicilio, siempre que dichos delitos sean penables en ambos países.

24. La asociación de malhechores.

25. El falso testimonio, el soborno de testigos, peritos é intérpretes.

26. Usurpación de estado civil.

27. Delitos cometidos en la mar:

a) La piratería, según la ley de las Naciones.

b) Todo acto de pillaje ó de violencia cometido por la tripulación de un buque español ó salvadoreño contra otro buque salvadoreño ó español, ó por la tripulación de un buque extranjero que no esté habilitado en regla contra buques españoles ó salvadoreños, sus tripulaciones ó cargamentos.

11

refugiado, ó si los [hec
amnistía ó de un indu]

Art. 6.º No será entregada persona alguna procesada ó sentenciada si el delito de que se le acusa está considerado por la parte que reclama su extradición como delito político ó como hecho anejo con el mismo.

No se reputará delito político ni hecho que tenga relación con él el atentado contra la vida del Soberano ó Jefe de uno de los Estados contratantes y los individuos de sus respectivas familias, que constituye el delito de asesinato, homicidio ó envenenamiento.

Art. 7.º El individuo que fuese entregado no podrá ser perseguido ni juzgado en juicio ordinario por otro delito que no sea el que motivó la extradición, á menos que conste el consentimiento expreso y voluntario del acusado, comunicado al Gobierno que lo entregó.

Art. 8.º La demanda de extradición será siempre entablada por la vía diplomática y deberá ir acompañada de un auto de prisión dictado contra el reo cuya entrega se pide por la autoridad competente del Estado reclamante, fundado en pruebas tales, que, según las leyes del país donde se encuentra el procesado, justifiquen su arresto como si el delito se hubiese cometido allí; ó de cualquier otro documento que tenga al menos la misma fuerza que dicho auto, y precise igualmente los hechos denunciados y la disposición penal que les sea aplicable.

En dicho documento deberán especificarse, hasta donde sea posible, las señas personales del reclamado para facilitar su busca y detención.

Cuando la demanda se refiera á una persona condenada en rebeldía, deberá ir acompañada del testimonio de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal competente del Estado que solicita la extradición.

Las demandas de extradición no podrán apoyarse solamente en sentencias dictadas en rebeldía; pero las personas sentenciadas en rebeldía deben considerarse como acusadas para los efectos de la petición de entrega.

Art. 9.º Si la demanda de extradición se halla conforme con las estipulaciones que preceden, las Autoridades del Estado al que se dirija la demanda procederán á la detención del fugado,

asimismo los autos y sentencias dictadas con arreglo á Derecho, firmadas por el Juez competente y declaradas auténticas y selladas con el sello oficial por el Ministro de Justicia ó algún otro Ministro del Estado.

Art. 15. Si el individuo reclamado por una de las altas partes contratantes con arreglo á este convenio lo fuese simultáneamente por uno ó más Estados por otros delitos cometidos en sus respectivos territorios, será concedida su extradición al Estado que primeramente hubiese presentado la demanda, á menos de existir algún otro arreglo entre los diferentes Gobiernos para determinar la preferencia, ya sea en vista de la gravedad del delito ó por cualquiera otra causa.

Art. 16. Los objetos aprehendidos que puedan servir para probar el delito, así como los procedentes de robo, serán, según lo disponga la autoridad competente, entregados al Estado reclamante, bien se verifique la extradición por haber sido detenido el procesado, bien no pueda efectuarse por haberse fugado ó fallecido el individuo que se reclama. Esta entrega comprenderá igualmente todos los objetos que el procesado hubiese ocultado ó depositado en el país y que posteriormente se descubriesen.

Quedan reservados los derechos que un tercero no complicado en la causa pudiese haber adquirido sobre los objetos indicados en este artículo.

Art. 17. Las altas partes contratantes renuncian á cualquiera reclamación para el reembolso de los gastos ocasionados por la captura y detención, custodia, alimentación de los procesados y conducción de los mismos hasta el buque que ha de transportarlos al país que le reclama, y entrega de los objetos á que se refiere el artículo anterior, comprometiéndose á satisfacer los referidos gastos dentro de sus respectivos territorios.

Art. 18. El delito de simple desertión no será motivo de extradición; pero si el desertor hubiere cometido algún otro de los enumerados en este convenio, se procederá conforme á lo prevenido para estos casos. No se hallan comprendidos en la excepción anterior los desertores de la marina de guerra ó mercante, y los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules ó Agentes consulares, podrán reclamar el auxilio de las Autoridades locales para buscar, aprehender y arrestar á los desertores de buques de guerra ó mercantes de su país.

rán por escrito á las Autoridades locales
rán con la exhibición de los registros de los
ión ú otros documentos oficiales, que los
s formaban parte de la misma. Justificada
nos de probarse lo contrario, se accederá á
tores aprehendidos serán puestos á dispo-
gente consular que los hubiere reclamado,
nidos en las prisiones públicas durante un
ontados desde el día de su arresto hasta
á los buques de cuyo servicio desertaron ó
lación; transcurrido el cual serán puestos
rán á ser detenidos por la misma causa.
or hubiere cometido algún delito en el país
e, se diferirá su extradición hasta que ter-
la la sentencia que se le imponga.

a la instrucción de una causa criminal no
s Gobiernos juzgase necesario oír testigos
ritorio del otro Estado ú otro acto de ins-
mviará al efecto por la vía diplomática un
las formas prescritas por las leyes vigentes
de la reclamación y se cumplimentará ob-
país en que hayan de ser oídos los testigos.
una causa criminal no política, instruída
es, se juzgase necesario el cargo del acu-
letenidos en el otro país ó la presentación
ntos oficiales, se dirigirá la petición por la
: dará curso, salvo el caso de que á ello se
nes excepcionales y con la condición de en-
osible á los detenidos y devolver los docu-

lación de un país á otro de los individuos
estos mencionados, así como los que ocasio-
de las formalidades enunciadas en los ar-
serán sufragados por el Gobierno que los
ro de los límites del territorio respectivo.
ilaciones de este convenio serán aplicables
esiones de España en Ultramar.

trega de un criminal evadido en alguna de
osiones se formulará ante el Gobierno ó

autoridad principal de las mismas por República del Salvador allí establecido.

Dichas demandas serán presentada bernador ó autoridad principal, ajustado como sea posible á las estipulaciones facultad, sin embargo, de conceder la extradición ó de consultar á su Gobierno.

Art. 21. Este convenio empezará á regir diez días después de su publicación, con arreglo á las fórmulas prescritas por las leyes de uno y otro país, y podrá ser denunciado por cualquiera de las altas partes contratantes; pero continuará vigente durante seis meses después de haberse dado aviso para su terminación.

Este convenio será ratificado, y las ratificaciones canjeadas en París tan pronto como posible fuere.

En fe de lo cual los plenipotenciarios respectivos lo han firmado y sellado en París á 22 de Noviembre de 1884.—(L. S.) Firmado: Manuel Silveira.—(L. S.) Firmado: F. M. Torres Caicedo.

El presente convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratificaciones canjeadas en París el día 5 de Junio.

4.º (Art. 26.)

Inscripciones de ciudadanía.—*Ley de Registro civil.*—Artículo 96. Los cambios de nacionalidad producirán efectos legales en España solamente desde el día en que sean inscritos en el Registro civil.

Art. 97. En todos los casos en que se trate de inscribir en el Registro civil un acto por virtud del cual se adquiere, se recupera ó se pierde la nacionalidad española, deberán presentarse la partida del nacimiento del interesado, la de su matrimonio si estuviese casado y las de nacimiento de su esposa y de sus hijos.

Art. 98. No se practicará inscripción alguna en el Registro de ciudadanía relativa á la adquisición, recuperación ó pérdida de calidad de español en virtud de declaración de persona interesada que no se halle emancipada y no haya cumplido la mayor edad.

Art. 99. La adquisición, recuperación ó pérdida de la nacionalidad española se anotará al margen de las partidas de naci-

s y de sus hijos, si estos actos hubiesen
stro civil de España, remitiéndose al
de la inscripción á los encargados de
, quienes acusarán inmediatamente el
umplimiento de la disposición de este ar-
lta prevista en el art. 65.

s inscripciones del Registro de que ha-
entes se expresará, si fuese posible, ade-
s mencionadas en el art. 20:

rior del interesado.

ellidos, naturaleza, domicilio y profesión
, pudieren ser designados.

io y naturaleza de su esposa si estuviese

ellidos, naturaleza, vecindad y profesión
ésta en el caso del núm. 2.º

, naturaleza, residencia, profesión ú oficio
do si alguno de ellos está emancipado.

le naturaleza concedidas á un extranjero
no producirán ninguno de sus efectos

itas en el Registro civil del domicilio
, ó en el de la Dirección general si no

ncia en España. Al efecto, deberá pre-
registro por el interesado el decreto de

mentos expresados en el art. 97, mani-
su nacionalidad anterior y jurando la

En el asiento respectivo del Registro se
tancias y la clase de la naturalización

ecución de la ley del Registro de 13 de Di-

. La inscripción de los actos en virtud
, se recupere ó se pierda la nacionalidad

arse en el Registro de ciudadanía en
soliciten, presentando al efecto los do-

el art. 97 de la ley de Registro civil, y
retos de concesión.

solicitada se refiera á una viuda, deberá
ado de viudez con el certificado de de-

Art. 66. La inscripción en los artículos 20 y 100 Reglamento.

También se observará, ren, lo prevenido en los art 109, 110, 111 y 112 de la le

Art. 67. En el caso exp Reglamento se consignará: raleza y último domicilio d

Art. 68. Cuando no fue cunstancias mencionadas e el acta el motivo de aquell

Reglamento para el regis extranjero.—Art. 1.º Para llan en países extranjeros agentes de S. M. residente privilegios que les concede que presenten su pasaport cecónsul de España dentro haciéndolo allí, deberán d inmediato para que en unc gistro de transeúntes y co

Art. 2.º Los Cónsules y mente en el Registro de tr representados, su profesidencia, la Autoridad que vecindad, y la fecha de aq cia en el país y el día de su número 1.º

Art. 3.º Cuando la re país extranjero se prolong en el Registro de la nacio

Art. 4.º Los súbditos e dad anteriormente en país y quisieran hacerlo para a legios enunciados, tendrán dentes presentando su pas otro documento fehaciente mación justificativa de su

realizados en España se les exigirá para del requisito mencionado, la carta de a se practicará alguna prueba supletorio antes de expedir el documento

a circunstancias especiales del Imperio de China, de modo a la apreciación de los agentes de España en aquellos países el dispensar de dichas formalidades á los súbditos españoles procedentes de nuestras posesiones de Asia.

Art. 5.º Los españoles refugiados en el extranjero por cualquier motivo tienen opción á ser inscritos en un Registro especial á fin de que puedan ejercitar los derechos civiles, que por ninguna causa se pierden.

Art. 6.º No podrán ser matriculados, y en su caso serán borrados de los Registros, los españoles que, con arreglo á las leyes del Reino, renuncien á su nacionalidad.

Art. 7.º Los Cónsules y Vicecónsules harán constar en el libro ó registro de su nacionalidad el nombre y apellido de los matriculados, su edad, naturaleza, estado, profesión y su última vecindad antes de ausentarse de su patria, y especificarán las mismas circunstancias respecto de todos los individuos de su familia que le acompañen, el lugar y tiempo de su residencia en el país de su demarcación consular; asimismo anotarán las alteraciones que puedan tener lugar con motivo de ausencia, cambio de domicilio, pérdida de nacionalidad ó cualquiera otra causa análoga, en la forma que determina el modelo núm. 2.º

Art. 8.º Los españoles domiciliados en el extranjero deberán estar provistos del correspondiente certificado de nacionalidad, sin cuyo requisito no podrán hacer valer sus derechos ni ser atendidos en la Legación ó en los Consulados.

Art. 9.º Deberán proveerse de los certificados de nacionalidad y cédulas de transeúntes:

1.º Todos los españoles domiciliados ó residentes en el extranjero.

2.º Los hijos é hijas mayores de catorce años que ejerzan cualquiera industria, vivan ó no en compañía de sus padres.

Art. 10. Los Cónsules procurarán que los emigrantes que lleguen á países extranjeros y deseen conservar su nacionalidad, se provean inmediatamente del documento que la acredite, reco-

mendando á los Capitanes de buques les hagan saber esta disposición antes del embarco.

Art. 11. Los españoles domiciliados que estando obligados á proveerse del certificado de nacionalidad no lo hagan en el término de seis meses, desde la publicación de este Reglamento, pagarán, por vía de multa, el duplo de su valor; en la inteligencia de que las reclamaciones que entablen sobre asuntos anteriores á su matriculación serán desatendidas.

Esta misma pena es aplicable á los transeúntes que no cumplan con lo prevenido en el art. 1.º

Art. 12. Los certificados y cédulas de nacionalidad se presentarán á la renovación ó revisión anualmente, abonando la suma que marca el art. 138 de la tarifa consular.

Dichos certificados y cédulas de nacionalidad se redactarán en la forma que determinan los modelos números 3.º y 4.º

Art. 13. Al terminar los seis meses desde el recibo de este Reglamento en las agencias respectivas se remitirán al Ministerio de Estado los duplicados de los registros para que pueda constar de una manera clara y evidente el número de súbditos españoles que residen en el extranjero, y para transmitirlos á la Dirección general de los Registros civil y de la Propiedad y del Notariado.

En los años sucesivos se limitarán los Agentes diplomáticos y consulares á dar conocimiento por separado de las altas y bajas de todos los registros en general.

También remitirán en la misma forma copia de los registros de presentados y matriculados á la Legación correspondiente para que ésta tenga exacto conocimiento de todos los súbditos españoles que están bajo su protección.

Art. 14. En todas las Cancillerías diplomáticas y consulares de España se abrirá el Registro civil, dividiéndolo en cuatro secciones, según marca el art. 5.º de la nueva ley publicada el 17 de Junio de 1870, á contar desde el día 1.º de Noviembre próximo.

Art. 15. Las actas de nacimientos, matrimonios y defunciones se extenderán con arreglo á los formularios y modelos que prescribe el Reglamento de la citada ley de Registro civil, teniendo presente los Agentes que por las inscripciones ó anotaciones que se hagan no podrá exigirse retribución alguna, con arreglo al art. 26 de dicha ley.

o el nacimiento tenga lugar en punto donde diplomático ó consular, se observará lo dispuesto de la ley, cuidando dicho funcionario de acusar á los interesados el recibo de la notificación. Lo factible poner en ejecución en el extranjero el título IV que se refieren á las defunciones, harán á inscribir en el libro correspondiente á los españoles que ocurran.

El difunto deberán, al efecto, presentar en el punto del acta en que, con arreglo á las leyes de este país, constar el fallecimiento. Si no existiese, se remitirá por duplicado copia de dicha acta al consulado más inmediato, quien la transcribirá, y dará el recibo.

Los agentes diplomáticos y consulares procurarán mantener con los encargados del Registro del país en el extranjero, á fin de que les den conocimiento de los nacimientos de españoles que ocurran.

Los derechos que los españoles están obligados á pagar por actos que tengan referencia con el Registro en la tarifa consular.

El importe de estos derechos como el de los pasaportes y cédulas de transeúntes, ingresará al Tesoro, sin descuento alguno y bajo la responsabilidad de los funcionarios.

Los Consules generales, Cónsules ó Agentes consulares por su cuenta los derechos obvenacionales respectivas Cancillerías, rendirán cuenta de los que ingresen en este concepto, según la disposición del Ministerio de Estado en la materia por el Reglamento de contabilidad vigente.

En las Cancillerías deberá existir un ejemplar de la ley de Registro civil y su Reglamento y las resoluciones que pueden ocurrir, con arreglo á la jurisprudencia que ella se establece.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

En los Consulados donde se hayan abierto ya los Registros con referencia este Reglamento, se podrá conti-

nuar usando los mismos libros si el 1.^o fuese demasiado considerable para traer dando en este caso de anotar dicha circ al cerrarlos para la remisión de un ejem

2.^o Igualmente se cuidará de anotar en la redacción de los diversos actos, co en la ley y el Reglamento, y se dará cues se haya observado.

3.^o Con objeto de que este importan rizado á la mayor brevedad, los Agent remitarán los primeros Registros en 1.^o separado un pliego con las observacion la ejecución práctica de dicha ley, á fin sario las medidas oportunas para su me

4.^o Los individuos que hayan abonafificados de nacionalidad ó cédulas de t la tarifa vigente, y á contar desde 1.^o de exceptuados de todo pago en este conce anteriormente en los Registros respecti arreglo al art. 13, á renovar dichos doc corresponden al ejercicio del año actual

5.^o Los Cónsules quedan autorizado de gastos extraordinarios el importe de este servicio, así como el de los corresp consulares en sus respectivos distritos uniformidad en todos los actos, y de q gistros no exceda de las exigencias de *Septiembre id.*)

5.^o (Art. 35.

Ley de Asociaciones de 30 de Jun Julio id.)—Artículo 1.^o El derecho de as artículo 13 de la Constitución podrá eje forme á lo que preceptúa esta ley. En sometidas á las disposiciones de la misr fines religiosos, políticos, científicos, s recreo, ó cualesquiera otros lícitos que n clusivo objeto el lucro ó la ganancia.

én por esta ley los gremios, las sociedades de previsión, de patronato y las cooperativas de crédito y de consumo.

se aplicarán de las disposiciones de la pre-

ces de la religión católica, autorizadas en España. Las demás asociaciones religiosas se reunirán debiendo acomodarse en sus actos las normas señaladas por el art. 11 de la Constitu-

ción que, no siendo de las enumeradas en el artículo, tengan un objeto meramente civil ó comercial, se regirán por las disposiciones del derecho civil ó mercantil.

Las Corporaciones que existan ó funcionen en España.

En caso de lo que el Código penal disponga respecto de delitos que se cometan con ocasión del ejercicio de la asociación ó por falta de cumplimiento de los deberes por la presente ley para que las asociaciones modifiquen, el Gobernador de la provincia convocará y celebren reuniones los asociados, poniendo conocimiento del Juzgado de instrucción

correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes á su acuerdo.

Art. 4.º Los fundadores ó iniciadores de una asociación, ocho días por lo menos antes de constituir la, presentarán al Gobernador de la provincia en que haya de tener aquélla su domicilio dos ejemplares firmados por los mismos de los estatutos, reglamentos, contratos ó acuerdos por los cuales haya de regirse, expresando claramente en ellos la denominación y objeto de la asociación, su domicilio, la forma de su administración ó gobierno, los recursos con que cuente ó con los que se proponga atender á sus gastos, y la aplicación que haya de darse á los fondos ó haberes sociales caso de disolución.

Las formalidades prevenidas en el párrafo anterior se exigirán igualmente y deberán llenarse ante el Gobernador de la provincia en que se constituya sucursal, establecimiento ó dependencia de una asociación ya formada.

Del mismo modo estarán obligados los fundadores, directores, presidentes ó representantes de asociaciones ya constituidas, y de sucursales ó dependencias de las mismas, á presentar al Gobernador de la provincia respectiva dos ejemplares firmados de los acuerdos que introduzcan alguna modificación en los contratos, estatutos ó reglamentos sociales.

En el acto mismo de la presentación se devolverá á los interesados uno de los ejemplares con la firma del Gobernador y sello del Gobierno de la provincia, anotando en él la fecha en que aquélla tenga lugar.

También estarán obligados los directores, presidentes ó representantes de cualquier asociación á dar cuenta dentro del plazo de ocho días de los cambios de domicilio que la asociación verifique.

En el caso de negarse la admisión de documentos á registro, los interesados podrán levantar acta notarial de la negativa, con inserción de los documentos, la cual acta surtirá los efectos de la presentación y admisión de los mismos.

Art. 5.º Transcurrido el plazo de ocho días que señala el párrafo primero del artículo anterior, la asociación podrá constituirse ó modificarse con arreglo á los estatutos, contratos, reglamentos ó acuerdos presentados, salvo lo que se dispone en el artículo siguiente.

Del acta de constitución ó de modificación deberá entregarse copia autorizada al Gobernador ó Gobernadores respectivos, dentro de los cinco días siguientes á la fecha en que se verifique.

Art. 6.º Si los documentos presentados no reúnen las condiciones exigidas en el art. 4.º, el Gobernador los devolverá á los interesados en el plazo de ocho días, con expresión de la falta de que adolezcan, no pudiendo, por consiguiente, constituirse la asociación mientras la falta no se subsane.

Cuando de los documentos presentados en cumplimiento del mismo art. 4.º aparezca que la asociación deba reputarse ilícita con arreglo á las prescripciones del Código penal, el Gobernador remitirá inmediata copia certificada de aquellos documentos al Tribunal ó Juzgado de instrucción competente, dando conocimiento de ello, dentro del plazo de ocho días que fija el párrafo anterior, á las personas que los hubieren presentado ó á los directores, presidentes ó representantes de la asociación, si ésta estuviese ya constituida.

stituirse ó reanudar sus funciones si
iguientes á la notificación del acuerdo
terior no se confirma por la autoridad
nativa.

no de provincia se llevará un registro
rá razón de las asociaciones que ten-
iento en su territorio á medida que se
stitución.

tegrante del registro todos los docu-
exige esta ley.

de las asociaciones se acreditará con
relación al registro, los cuales no po-
es, presidentes ó representantes de la

rá adoptar una denominación idéntica
en la provincia, ó tan parecidas que
confundirse, aplicando el Gobernador
n el pár. 1.º del art. 6.º

s, directores, presidentes ó represen-
ción darán conocimiento por escrito al
pitales de provincia, y á la autoridad
ones, del lugar y días en que la asocia-
sesiones ó reuniones generales y ordi-
antes de la celebración de la primera.
s que celebren ó promuevan las aso-
á lo establecido en la ley de Reunio-
ifiquen fuera del local de la asociación
signados en los estatutos ó acuerdos
d, ó cuando se refieran á asuntos ex-
a ó se permita la asistencia de perso-
a misma.

ón llevará y exhibirá á la autoridad,
ro de los nombres, apellidos, profesio-
los asociados, con expresión de los
lla cargo de administración, gobierno

cción de éstos deberá darse conoci-
rnador de la provincia dentro de los
que tenga lugar.

También llevará uno ó varios libros de contabilidad, en los cuales, bajo la responsabilidad de los que ejerzan cargos administrativos ó directivos, figurarán todos los ingresos y gastos de la asociación, expresando inequívocamente la procedencia de aquéllos y la inversión de éstos.

Anualmente remitirá un balance general al Registro de la provincia.

La falta de cumplimiento de lo prevenido en este artículo se castigará por el Gobernador de la provincia con multa de 50 á 150 pesetas á cada uno de los directores ó socios que ejerzan en la asociación algún cargo de gobierno, sin perjuicio de las responsabilidades civiles ó criminales que fueren procedentes.

Art. 11. Las asociaciones que recauden ó distribuyan fondos con destino al socorro ó auxilio de los asociados ó á fines de beneficencia, instrucción ú otros análogos, formalizarán semestralmente las cuentas de sus ingresos y gastos, poniéndolas de manifiesto á sus socios y entregando un ejemplar de ellas en el Gobierno de la provincia, dentro de los cinco días siguientes á su formalización.

La inobservancia de este artículo se castigará por los medios expresados en el anterior.

Art. 12. La autoridad gubernativa podrá penetrar en cualquier tiempo en el domicilio de una asociación y en el local en que celebre sus reuniones, y mandará suspender en el acto toda sesión ó reunión en que se cometa ó acuerde cometer algunos de los delitos definidos en el Código penal.

El Gobernador de la provincia podrá también acordar, especificando con toda claridad los fundamentos en que se apoye, la suspensión de las funciones de cualquier asociación cuando de sus acuerdos ó de los actos de sus individuos, como socios, resulten méritos bastantes para estimar que deben reputarse ilícitos ó que se han cometido delitos que deban motivar su disolución.

En todo caso la autoridad gubernativa, dentro de las veinticuatro horas siguientes á su acuerdo, pondrá en conocimiento del Juzgado de instrucción correspondiente, con remisión de antecedentes, los hechos que hayan motivado la suspensión de la asociación ó de sus sesiones y los nombres de los asociados ó concurrentes que aparezcan responsables de ellos.

gubernativa de una asociación quedará sin los veinte días siguientes al acuerdo no fuese autoridad judicial, en virtud de lo prevenido

terminos que señala esta ley para que la autoridad judicial ponga en conocimiento de la judicial los acuerdos de las asociaciones, se entenderán aplicables á la de Enjuiciamiento criminal, en un día netos de distancia cuando la asociación no esté en la capital ó residencia del Tribunal comparecer las diligencias á que dieren lugar los hechos ocurridos.

La autoridad judicial podrá decretar la suspensión de cualquier asociación desde el instante en que ocurriese el delito que dé lugar á que se declare en la sentencia.

La autoridad judicial será la única competente para declarar la suspensión de las asociaciones constituidas con arre-

stos en las sentencias en que declare ilícita una asociación de acuerdo á las disposiciones del Código penal, y en las sentencias en que declare delictivos los hechos cometidos en cumplimiento de los deberes de la asociación.

La autoridad judicial podrá decretar la suspensión de la asociación en las sentencias que dicte contra los delitos cometidos por los medios que la asociación emplee, teniendo en cuenta en cada caso la naturaleza del delito, la índole de los medios empleados y el tiempo que la asociación haya tenido en el empleo de los hechos ejecutados.

La autoridad judicial podrá declarar por sentencia firme la disolución de una asociación y que no se constituya otra con la misma denominación, si éste hubiere sido declarado ilícito, y si se constituyere otra con igual denominación ó objeto, parte de ella los individuos á quienes se hubiere condenado en dicha sentencia.

La suspensión producirá el efecto de impedir que se constituya otra con la misma denominación ó objeto de que se suspendió la asociación suspendida, é incapacitará á ésta para reunirse en el local de sus se-

siones ó en otro que adoptasen para ello, durante la suspensión deba subsistir.

Art. 17. De las sentencias ó providencias la disolución ó suspensión de las funciones de en que ésta se deje sin efecto, dará la Autorización al Gobernador de la provincia en segundo día.

Art. 18. Las asociaciones quedan sujetas, adquisición, posesión y disposición de sus bienes disolución, á la propiedad colectiva.

Art. 19. Quedan derogadas todas las disposiciones en cuanto se opongan á la presente ley.

ARTÍCULO ADICIONAL

Las asociaciones existentes quedan sometidas á las disposiciones de esta ley, y deberán cumplir lo dispuesto en ella si ya no lo hubiesen hecho anteriormente, dentro de los días siguientes á su publicación en la *Gaceta* de Madrid, las aplicables, si no lo verifican dentro de ese tiempo en el art. 3.º

6.º (Art. 36.)

Compañías mercantiles.—*Código de Comercio.*—Contrato de compañía por el cual dos ó más personas ponen en fondo común bienes, industria ó trabajo para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que sea su clase, siempre que se haya constituido con arreglo á las disposiciones de este Código.

Una vez constituida la compañía mercantil adquiere personalidad jurídica en todos sus actos y contratos.

Art. 117. El contrato de compañía mercantil reúne los requisitos esenciales del derecho, será válido entre los que lo celebren, cualesquiera que sean las personas y combinaciones lícitas y honestas que se hagan, siempre que no estén expresamente prohibidas por el Código.

ción de Bancos territoriales, agrícolas y de
), de sociedades de crédito, de préstamos hi-
 narios de obras públicas, fabriles, de almace-
 pósito, de minas, de formación de capitales y
 seguros y demás asociaciones que tuvieren
 a empresa industrial y de comercio.

igualmente válidos y eficaces los contratos
 mercantiles y cualesquiera personas capa-
 mpre que fueren lícitos y honestos y apare-
 s requisitos que expresa el artículo siguiente.
 Compañía de comercio, antes de dar principio
 eberá hacer constar su constitución, pactos
 rritura pública, que se presentará para su
 gistro mercantil, conforme á lo dispuesto en

malidades quedarán sujetas, con arreglo á
 rt. 25, las escrituras adicionales que de cual-
 fiquen ó alteren el contrato primitivo de la

drán hacer pactos reservados, sino que todos
 la escritura social.

cargados de la gestión social que contravi-
 en el artículo anterior, serán solidariamente
 on las personas extrañas á la Compañía con-
 ntratado en nombre de la misma.

mpañías mercantiles se regirán por las cláu-
 de sus contratos, y en cuanto en ellas no
 rescrito, por las disposiciones de este Código.
 gla general, las Compañías mercantiles se
 ndo algunas de las siguientes formas:

lectiva, en que todos los socios, en nombre
 a razón social, se comprometen á participar
 establezcan, de los mismos derechos y obli-

ría, en que uno ó varios sujetos aportan ca-
 fondo común para estar á las resultas de
 ales dirigidas exclusivamente por otros con

en que formando el fondo común los asocia-

dos por partes ó porciones ciertas, figurada otra manera indubitada, encargan su mane administradores amovibles que representen una denominación apropiada al objeto ó en sus fondos.

Art. 123. Por la índole de sus operaciones pañías mercantiles:

Sociedades de crédito.

Bancos de emisión y descuento.

Compañías de crédito territorial.

Compañías de minas.

Bancos agrícolas.

Concesionarias de ferrocarriles, tranvías y

De almacenes generales de depósito.

Y de otras especies, siempre que sus pact fin la industria ó el comercio.

Art. 124. Las Compañías mutuas de se dios, de combinaciones tontinas sobre la vida vejez y de cualquiera otra clase, y las coope ción, de crédito, de consumo, sólo se conside quedarán sujetas á las disposiciones de este dedicaren á actos de comercio extraños á convirtieren en sociedades á prima fija.

SECCIÓN SEXTA

Derechos y obligaciones de los se

Art. 170. Si dentro del plazo convenido al tare á la masa común la porción del capit obligado, la Compañía podrá optar entre proc contra sus bienes para hacer efectiva la porci hubiere dejado de entregar, ó rescindir el coi socio remiso, reteniendo las cantidades que la masa social.

Art. 171. El socio que por cualquier causa total de su capital, transcurrido el término trato de sociedad, ó en el caso de no haberse p se establezca, abonará á la masa común el

entregado á su debido tiempo, y el importe
sios que hubiere ocasionado con su moro-

el capital ó la parte de él que un socio haya
en efectos, se hará su valuación en la forma
rato de sociedad; y á falta de pacto especial
or peritos elegidos por ambas partes y según
a, corriendo sus aumentos ó disminuciones
de la Compañía. En caso de divergencia en-
signará un tercero á la suerte entre los de su
no mayores contribuyentes en la localidad
iscordia.

entes ó administradores de las Compañías
in negar á los socios el examen de todos los
pantes de los balances que se formen para
de la administración social, según lo pres-
150 y 158.

eedores de un socio no tendrán, respecto á
en el caso de quiebra del mismo, otro dere-
gar y percibir lo que por beneficios ó liqui-
sponder al socio deudor.

nal del párrafo anterior no será aplicable á
ituídas por acciones, sino cuando éstas fue-
cuando constare ciertamente su legítimo
ortador.

CIÓN DÉCIMATERCERA

liquidación de las Compañías mercantiles.

ugar á la rescisión parcial del contrato de
, colectiva ó en comandita por cualquiera de
es:

socio de los capitales comunes y de la firma
por cuenta propia.

en funciones administrativas de la Compañía
no compete desempeñarlas, según las condi-
e sociedad.

raude algún socio administrador en la ad-
bilidad de la Compañía.

4.º Por dejar de poner en la caja común el capital que cada uno estipuló en el contrato de sociedad, después de haber sido requerido para verificarlo.

5.º Por ejecutar un socio por su cuenta operaciones de comercio que no le sean lícitas con arreglo á las disposiciones de los artículos 136, 137 y 138.

6.º Por ausentarse un socio que estuviere obligado á prestar oficios personales en la sociedad, si habiendo sido requerido para regresar y cumplir con sus deberes, no lo verificare ó no acreditar una causa justa que temporalmente se lo impida.

7.º Por faltar de cualquier otro modo uno ó varios al cumplimiento de las obligaciones que se impusieron en el contrato de compañía.

Art. 219. La rescisión parcial de la Compañía producirá la ineficacia del contrato con respecto al socio culpable, que se considerará excluído de ella, exigiéndole la parte de pérdida que pueda corresponderle si la hubiere y quedando autorizada la sociedad á retener, sin darle participación en las ganancias ni indemnización alguna, los fondos que tuviere en la masa social hasta que estén terminadas y liquidadas todas las operaciones pendientes al tiempo de la rescisión.

Art. 220. Mientras en el Registro mercantil no se haga el asiento de la rescisión parcial del contrato de sociedad, subsistirá la responsabilidad del socio excluído, así como de la compañía, por todos los actos y obligaciones que se practiquen en nombre y por cuenta de ésta con terceras personas.

Art. 221. Las Compañías, de cualquiera clase que sean, se disolverán totalmente por las causas que siguen:

1.ª El cumplimiento del término prefijado en el contrato de sociedad ó la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

2.ª La pérdida entera del capital.

3.ª La quiebra de la Compañía.

Art. 222. Las Compañías colectivas y en comandita se disolverán además totalmente por las siguientes causas:

1.ª La muerte de uno de los socios colectivos, si no contiene la escritura social pacto expreso de continuar en la sociedad los herederos del socio difunto ó de subsistir ésta entre los socios sobrevivientes.

ja á otra causa que produzca la inhabilitación para administrar sus bienes.

de cualquiera de los socios colectivos.

compañías mercantiles no se entenderán voluntad tácita ó presunta de los socios, después implido el término por el cual fueron constituidos quieren continuar en compañía, celebrarán lo, sujeto á todas las formalidades prescritas niento, según se previene en el art. 119.

las compañías colectivas ó comanditarias por, si alguno de los socios exigiese su disolución, drán oponerse sino por causa de mala fe en el

que un socio obra de mala fe cuando, con ocasión de la sociedad, pretenda hacer un lucro particular obtenido subsistiendo la compañía.

socio que por su voluntad se separase de la comercio su disolución, no podrá impedir que se continúe más conveniente á los intereses comunes, las pendientes, y mientras no se terminen no se producción de los bienes y efectos de la compañía.

disolución de la compañía de comercio que produce otra causa que no sea la terminación del plazo constituyó, no surtirá efecto en perjuicio de terceros anote en el Registro mercantil.

la liquidación y división del haber social se observarán las reglas establecidas en la escritura de compañía, y en su defecto las que se expresan en los artículos siguientes.

Art. 228. Desde el momento en que la sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los socios administradores para hacer nuevos contratos y obligaciones, quedando limitadas sus facultades, en calidad de liquidadores, á percibir los créditos de la compañía, á extinguir las obligaciones contraídas de antemano según vayan venciendo, y á realizar las operaciones pendientes.

Art. 229. En las sociedades colectivas ó en comandita, no habiendo contradicción por parte de alguno de los socios, continuarán encargados de la liquidación los que hubiesen tenido la administración del caudal social; pero si no hubiese conformidad

para esto de todos los socios, se convocará sin neral, y se estará á lo que en ella se resuelve nombramiento de liquidadores de dentro ó fu como en lo relativo á la forma y trámites de l administración del caudal común.

Art. 230. Bajo pena de destitución de dores:

1.º Formar y comunicar á los socios, den veinte días, el inventario del haber social, c cuentas de la sociedad en liquidación, según l tabilidad.

2.º Comunicar igualmente á los socios to tado de la liquidación.

Art. 231. Los liquidadores serán respons cualquier perjuicio que resulte al haber c negligencia grave en el desempeño de su ca se entiendan autorizados para hacer transa compromisos sobre los intereses sociales, á n les hubieren concedido expresamente estas fi

Art. 232. Terminada la liquidación, y lle ceder á la división del haber social, según la cieren los liquidadores ó la junta de socios ellos podrá exigir que se celebre para este ef liquidadores verificarán dicha división dentro junta determinare.

Art. 233. Si alguno de los socios se crey división acordada, podrá usar de su derecho bunal competente.

Art. 234. En la liquidación de sociedades tengan interés personas menores de edad ó i rán el padre, madre ó tutor de éstas, según nitud de facultades como en negocio propio irrevocables, sin beneficio de restitución, t dichos representantes otorgaren ó consintiere tados, sin perjuicio de la responsabilidad que para con éstos por haber obrado con dolo ó n

Art. 235. Ningún socio podrá exigir la en le corresponda en la división de la masa so hallen extinguidas todas las deudas y obliga

depositado su importe, si la entrega no se puede presentar.

En las primeras distribuciones que se hagan á los socios, se repartirán las cantidades que hubiesen percibido para sus acciones ó que bajo otro cualquier concepto les correspondan á la compañía.

Los derechos particulares de los socios colectivos que no figuren en el haber de la sociedad al formarse ésta, no podrán ser usados para el pago de las obligaciones contraídas antes de haber hecho exclusión del haber social. En las compañías anónimas en liquidación continuará observándose el período de ésta observándose las disposiciones en cuanto á la convocación de sus juntas ordinarias y extraordinarias, para dar cuenta de los resultados de la liquidación y acordar lo que convenga al interés de la sociedad.

Sociedad.—*Código civil.*—Art. 1.665. La sociedad es un contrato por el cual dos ó más personas se obligan á contribuir con su dinero, bienes ó industria, con ánimo de partir los beneficios.

La sociedad debe tener un objeto lícito y estable, y un interés común de los socios.

En caso de la disolución de una sociedad ilícita, las ganancias se repartirán á los establecimientos de beneficencia del lugar, y en su defecto, á los de la provincia. En la sociedad civil se podrá constituir en cualquiera forma, pero si se aportaren á ella bienes inmuebles ó derechos reales, será necesaria la escritura pública.

Si no se hizo en el contrato de sociedad siempre que se aportaren bienes inmuebles si no se hace un inventario de ellos, no será válida, que deberá unirse á la escritura.

Las sociedades tendrán personalidad jurídica las sociedades que no tengan secretos entre los socios, y en que cada uno de ellos contrate en su propio nombre con los terceros. Las sociedades se regirán por las disposiciones relativas á las sociedades de bienes.

Las sociedades civiles, por el objeto á que se convierten, tendrán todas las formas reconocidas por el Código.

En tal caso, les serán aplicables sus disposiciones en cuanto no se opongan á las del presente Código.

Art. 1.671. La sociedad es universal ó particular.

Art. 1.672. La sociedad universal puede ser de todos los bienes presentes ó de todas las ganancias.

Art. 1.673. La sociedad de todos los bienes presentes es aquella por la cual las partes ponen en común todos los que actualmente les pertenecen, con ánimo de partirlos entre sí, como igualmente todas las ganancias que adquieran con ellos.

Art. 1.674. En la sociedad universal de todos los bienes presentes pasan á ser propiedad común de los socios los bienes que pertenecían á cada uno, así como todas las ganancias que adquieran con ellos.

Puede también pactarse en ella la comunicación recíproca de cualesquiera otras ganancias, pero no pueden comprenderse los bienes que los socios adquieran posteriormente por herencia, legado ó donación, aunque sí sus frutos.

Art. 1.675. La sociedad universal de ganancias comprende todo lo que adquieran los socios por su industria ó trabajo mientras dure la sociedad.

Los bienes muebles ó inmuebles que cada socio posee al tiempo de la celebración del contrato continúan siendo de dominio particular, pasando sólo á la sociedad el usufructo.

Art. 1.676. El contrato de sociedad universal celebrado sin determinar su especie sólo constituye la sociedad universal de ganancias.

Art. 1.677. No pueden contraer sociedad universal entre sí las personas á quienes está prohibido otorgarse recíprocamente alguna donación ó ventaja.

Art. 1.678. La sociedad particular tiene únicamente por objeto cosas determinadas, su uso, ó sus frutos, ó una empresa señalada ó el ejercicio de una profesión ó arte.

Art. 1.700. La sociedad se extingue:

- 1.º Cuando espira el término por que fué constituida.
- 2.º Cuando se pierde la cosa ó se termina el negocio que le sirve de objeto.

- 3.º Por la muerte natural, interdicción civil ó insolvencia de cualquiera de los socios, y en el caso previsto en el artículo 1.699.

INDIC

nier

705

en

refi

glo

es

per

volu

lad

pro

d e

eda

la i

....., consi
nado, puede prorrogarse por conse
El consentimiento puede ser expres
los medios ordinarios.

Art. 1.703. Si la sociedad se pro
término, se entiende que se consti

Si se prorroga antes de espirar d
ciudad primitiva.

Art. 1.704. Es válido el pacto de
de los socios, continúe la sociedad

En este caso, el heredero del qu
derecho á que se haga la partición, f
de su causante, y no participará de
ulteriores sino en cuanto sean una
hecho antes de aquel día.

Si el pacto fuere que la sociedad
dero, será guardado sin perjuicio
número 4.º del art. 1.700.

Art. 1.705. La disolución de la s
nuncia de uno de los socios, únicam
se ha señalado término para su dur
naturaleza del negocio.

Para que la renuncia surta efect
en tiempo oportuno; además, debe p
otros socios.

. l
opis
o el
fac
a h
se l
e su
min
l. l
e, y
neg
serv
á s
ú c
l. l
enc
tan.
bie
lo
te l

lo.-
mpe
rior
is d
silio
las
del
tent
tanc
s bi
á el
is d
ot
er c
en.

será Juez competente el

pedido en la recon-
en las atribuciones
nda, en cuyo caso
derecho para que

testato será compe-
el finado su último

rá Juez competente
a, ó donde tuviere

ra instancia ó mu-
lopten las medidas
del difunto, y en su
ción tuviere bienes
s y poner en buena
iligencias practica-
la testamentaria ó
ón.

or los juicios de tes-
ción de los bienes
lamadas por el tes-

tador, sin designarlas por sus nombres.

Cuando el juicio tenga por objeto la adjudicación de bienes de capellanías ó de otras fundaciones antiguas, será Juez competente el de cualquiera de los lugares en cuya jurisdicción estén sitos los bienes, á elección del demandante.

7.º En las demandas sobre herencias, su distribución, cumplimiento de legados, fideicomisos universales y singulares, reclamaciones de acreedores testamentarios y hereditarios, mientras estuvieren pendientes los autos de testamentaría ó abintestato, será Juez competente el que conociere de estos juicios.

8.º En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la presentación del deudor en este estado, será Juez competente el del domicilio del mismo.

9.º En los concursos ó quiebras promovidos por los acreedo-

res, el de cualquiera de los lugares en que esté conociendo de las ejecuciones.

Será entre ellos preferido el del domicilio del deudor, si éste ó el mayor número de acreedores lo reclamasen. En otro caso, lo será aquel en que antes se decretare el concurso ó la quiebra.

10. En los litigios acerca de la recusación de árbitros y amigables compondores, cuando ellos no accedieren á la recusación, será competente el Juez del lugar en que resida el recusado.

11. En los recursos de apelación contra los árbitros, en los casos en que corresponda según derecho, será competente la Audiencia del distrito á que corresponda el pueblo en que se haya fallado el pleito.

12. En los embargos preventivos será competente el Juez del partido en que estuvieren los bienes que se hubieren de embargar, y á prevención, en los casos de urgencia, el Juez municipal del pueblo en que se hallaren.

13. En las demandas en que se ejerciten acciones de desahucio ó de retracto, será Juez competente el del lugar en que estuviere sita la cosa litigiosa ó el del domicilio del demandado, á elección del demandante.

14. En el interdicto de adquirir será Juez competente el del lugar en que estén sitos los bienes, ó aquel en que radique la testamentaría ó abintestato ó domicilio del finado.

15. En los interdictos de retener y recobrar la posesión, en lo de obra nueva y obra ruinosa y en los de deslindes, será Juez competente el del lugar en que esté sita la cosa objeto del interdicto ó deslinde.

16. En los expedientes de adopción ó arrogación será Juez competente el del domicilio del adoptante ó arrogador.

17. En el nombramiento ó discernimiento de los cargos de tutores ó curadores para los bienes y excusas de estos cargos, será Juez competente el del domicilio del padre ó de la madre cuya muerte ocasionare el nombramiento, y en su defecto el del domicilio del menor ó incapacitado, ó el de cualquier lugar en que tuviere bienes inmuebles.

18. En el nombramiento y discernimiento de los cargos de curadores para pleitos será competente el Juez del lugar en que los menores ó incapacitados tengan su domicilio ó el del lugar en que necesitaren comparecer en juicio.

andas en que se ejercitaren acciones relativas a tutela ó curaduría, en las excusas de estos car-
cer empezado á ejercerlos y en las demandas
guardadores como sospechosos, será Juez
ugar en que se hubiere administrado la guar-
principal ó el del domicilio del menor.

sitos de personas será Juez competente el que
causa que lo motive.

ere autos anteriores será Juez competente el
persona que deba ser depositada.

tancias particulares lo exigieren, podrá decre-
cionalmente el depósito el Juez municipal del
contrare la persona que debe ser depositada,
gencias al de primera instancia competente, y
posición la persona depositada.

ciones de alimentos, cuando éstos se pidan in-
os casos de depósito de personas ó en un jui-
etente el del lugar en que tenga su domicilio
dan.

encias para elevar á escritura pública los tes-
s ó memorias otorgadas verbalmente, ó los
nción de Notario público, y en las que hayan
a la apertura de los testamentos ó codicilos co-
ompetente el del lugar en que se hubieren
amente dichos documentos.

rizaciones para la venta de bienes de menores
rá Juez competente el del lugar en que los
ó el del domicilio de aquellos á quienes per-

edientes que tengan por objeto la administra-
le un ausente cuyo paradero se ignore, será
del último domicilio que hubiere tenido en

maciones para dispensas de ley y en las habi-
parecer en juicio cuando por derecho se re-
competente el del domicilio del que las soli-

maciones para perpetua memoria será Juez
lugar en que hayan ocurrido los hechos, ó

aquel en que estén, aunque sea
hayan de declarar.

Cuando estas informaciones
cosas inmuebles, será Juez com
vieren sitios.

27. En los apeos y prorrates
por acto de jurisdicción volunt
lugar donde radiquen la mayor

Art. 64. El domicilio de las
paradas legalmente de sus mari

El de los hijos constituidos e

El de los menores ó ineapaci
el de sus guardadores.

Art. 65. El domicilio legal d
conciérne á actos ó contratos m
será el pueblo donde tuvieren
merciales.

Los que tuvieren establecim
diferentes partidos judiciales, p
nes personales en aquel en qu
cimiento ó en el que se hubiere
dante.

Art. 66. El domicilio de las
será el pueblo que como tal est
ciudad ó en los estatutos por qu

No constando esta circunst
respecto á los comerciantes.

Exceptúanse de lo dispuest
Compañías en participación, e
que puedan promoverse entre l
les se estará á lo que prescribe
esta ley.

Art. 67. El domicilio legal d
que sirvan su destino. Cuando
nuamente, se considerarán don
vieren más frecuentemente.

Art. 68. El domicilio legal d
será el del pueblo en que se hal
cuando se hiciera el emplazamie





oscuridad ó insuficiencia de las leyes, incurrirá en responsabilidad.

Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicará la costumbre del lugar y, en su defecto, los principios generales del derecho.

Art. 7.º Si en las leyes se habla de meses, días ó noches, se entenderá que los meses son de treinta días, los días de veinticuatro horas, y las noches desde que se pone hasta que sale el sol.

Si los meses se determinan por sus nombres, se computarán por los días que respectivamente tengan.

Art. 8.º Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública, obligan á todos los que habiten en territorio español.

Art. 9.º Las leyes relativas á los derechos y deberes de familia, ó al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan á los españoles, aunque residan en país extranjero.

Art. 10. Los bienes muebles están sujetos á la ley de la nación del propietario: los bienes inmuebles, á las leyes del país en que están sitos.

Sin embargo, las sucesiones legítimas y las testamentarias, así respecto al orden de suceder como á la cuantía de los derechos sucesorios y á la validez intrínseca de sus disposiciones, se regularán por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en que se encuentren.

Los vizcaínos, aunque residan en las villas, seguirán sometidos, en cuanto á los bienes que posean en la tierra llana, á la ley 15, tít. XX del Fuero de Vizcaya.

Art. 11. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás instrumentos públicos, se rigen por las leyes del país en que se otorguen.

Cuando los actos referidos sean autorizados por funcionarios diplomáticos ó consulares de España en el extranjero, se observarán en su otorgamiento las solemnidades establecidas por las leyes españolas.

No obstante lo dispuesto en este artículo y en el anterior, las leyes prohibitivas concernientes á las personas, sus actos ó sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costumbres, no quedarán sin efecto por leyes ó sentencias dicta-

as, ni por disposiciones ó convenciones acordadas en país extranjero.

Art. 12. Las disposiciones de este título, en cuanto determinan los efectos de las leyes y de los estatutos y las reglas generales para su aplicación, son obligatorias en todas las provincias del reino. También lo serán las disposiciones del título IV, libro primero.

En lo demás, las provincias y territorios en que subsiste derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico, escrito ó consuetudinario, por la publicación de este Código, que regirá tan sólo como derecho supletorio en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas por sus leyes especiales.

Art. 13. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, este Código empezará á regir en Aragón y en las Islas Baleares al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto no se oponga á aquellas de sus disposiciones forales ó consuetudinarias que actualmente estén vigentes.

Art. 14. Conforme á lo dispuesto en el art. 12, lo establecido en los artículos 9.º, 10 y 11, respecto á las personas, los actos y los bienes de los españoles en el extranjero, y de los extranjeros en España, es aplicable á las personas, actos y bienes de los españoles en territorios ó provincias de diferente legislación civil.

Art. 15. Los derechos y deberes de familia, los relativos al estado, condición y capacidad legal de las personas, y los de sucesión testada é intestada declarados en este Código, son aplicables:

1.º A las personas nacidas en provincias ó territorios de derecho común, de padres sujetos al derecho foral, si éstos durante la menor edad de los hijos, ó los mismos hijos dentro del año siguiente á su mayor edad ó emancipación, declararen que es su voluntad someterse al Código civil.

2.º A los hijos de padre, y, no existiendo éste ó siendo desconocido, de madre, perteneciente á provincias ó territorios de derecho común, aunque hubieren nacido en provincias ó territorios donde subsista el derecho foral.

3.º A los que, procediendo de provincias ó territorios forales, hubieren ganado vecindad en otros sujetos al derecho común.

Para los efectos de este artículo se ganará vecindad: por la

residencia de diez años en provincias ó territorios de derecho común, á no ser que, antes de terminar este plazo, el interesado manifieste su voluntad en contrario; ó por la residencia de dos años, siempre que el interesado manifieste ser esta su voluntad. Una y otra manifestación deberán hacerse ante el Juez municipal, para la correspondiente inscripción en el Registro civil.

En todo caso, la mujer seguirá la condición del marido, y los hijos no emancipados la de su padre y, á falta de éste, la de su madre.

Las disposiciones de este artículo son de recíproca aplicación á las provincias y territorios españoles de diferente legislación civil.

Art. 16. En las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones de este Código.

LIBRO PRIMERO

De las personas.

TÍTULO PRIMERO

DE LOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS

Art. 17. Son españoles:

- 1.º Las personas nacidas en territorio español.
- 2.º Los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.
- 3.º Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.
- 4.º Los que, sin ella, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía.

Art. 18. Los hijos, mientras permanezcan bajo la patria protestad, tienen la nacionalidad de sus padres.

Para que los nacidos de padres extranjeros en territorio español puedan gozar del beneficio que les otorga el núm. 1.º del art. 17, será requisito indispensable que los padres manifiesten, en la manera y ante los funcionarios expresados en el art. 19, que optan, á nombre de sus hijos, por la nacionalidad española, renunciando á toda otra.

Los hijos de un extranjero nacidos en los dominios berán manifestar, dentro del año siguiente á su emancipación, si quieren gozar de la calidad de español, concede el art. 17.

Los que se hallen en el Reino harán esta manifestación ante el Registro civil del pueblo en que residieren; los que se hallen en el extranjero, ante uno de los Agentes consulares de España; y los que se encuentren en el extranjero, pero no en el Gobierno español; y los que se encuentren en el extranjero, pero no en el Gobierno no tenga ningún Agente, dirigiéndose al Agente del Estado en España.

La calidad de español se pierde por adquirir naturalidad extranjera, ó por admitir empleo de otro Gobierno, ó servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Rey.

El español que pierda esta calidad por adquirir naturalidad extranjera, podrá recobrarla volviendo al Reino, si tal es su voluntad ante el encargado del Registro civil, que elija para que haga la inscripción correspondiente, renunciando á la protección del pabellón de aquel país.

La mujer casada sigue la condición y nacionalidad del marido.

La que casare con extranjero, podrá, disuelto el matrimonio, recobrar la nacionalidad española, llenando los requisitos en el artículo anterior.

El español que pierda esta calidad por admitir empleo de otro Gobierno, ó entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Rey, no podrá recobrar la nacionalidad española sin obtener previamente la Real habilitación.

El nacido en país extranjero de padre ó madre española, que haya perdido la nacionalidad de España por haberla adquirido en el extranjero, podrá recuperarla también llenando las condiciones que exige el art. 19.

Para que los extranjeros que hayan obtenido carta de vecindad ó ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía, renuncien de la nacionalidad española, han de renunciar á su nacionalidad anterior, jurar la Constitución, y inscribirse como españoles en el Registro civil.

Art. 26. Los españoles que trasladen su domicilio á un país extranjero donde sin más circunstancia que la de su residencia en él sean considerados como naturales, necesitarán, para conservar la nacionalidad de España, manifestar que ésta es su voluntad al Agente diplomático ó consular español, quien deberá inscribirlos en el Registro de españoles residentes, así como á sus cónyuges, si fueren casados, y á los hijos que tuvieren.

Art. 27. Los extranjeros gozan en España de los derechos que las leyes civiles conceden á los españoles, salvo lo dispuesto en el art. 2.º de la Constitución del Estado ó en tratados internacionales.

Art. 28. Las Corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo á las disposiciones del presente Código.

Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados ó leyes especiales.

TÍTULO II

DEL NACIMIENTO Y LA EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD CIVIL

CAPÍTULO PRIMERO

De las personas naturales.

Art. 29. El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente.

Art. 30. Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.

Art. 31. La prioridad del nacimiento, en el caso de partos dobles, da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al primogénito.

Art. 32. La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas.

imbecilidad, la sordomudez, si no son más que restricciones que se hallaren en alguno de los hechos y aun de obligaciones de relaciones entre los bienes

más personas llamadas á suprimir, el que sostenga la debe probarla; á falta de prueba no tiene lugar la

de muerte del ausente y sus el tit. VIII de este libro.

II

jurídicas.

nes y fundaciones de interés

instante mismo en que, con o válidamente constituidas. articular, sean civiles, meras a ley conceda personalidad uno de los asociados.

se refiere el núm. 2.º del ar. disposiciones relativas al con-za de ésta.

as Corporaciones se regulará reconocido; la de las asociaciones por las reglas de las por disposición administrativa necesario.

ueden adquirir y poseer bienes obligaciones y ejercitar ne á las leyes y reglas de su

to por lo concordado entre

ambas potestades; y los establecimientos de instrucción y beneficencia por lo que dispongan las leyes especiales.

Art. 39. Si por haber espirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente, ó por haber realizado el fin para el cual se constituyeron, ó por ser ya imposible aplicar á éste la actividad y los medios de que disponían, dejasen de funcionar las Corporaciones, asociaciones y fundaciones, se dará á sus bienes la aplicación que las leyes, ó los estatutos, ó las cláusulas fundacionales, les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiere establecido previamente, se aplicarán esos bienes á la realización de fines análogos, en interés de la región, provincia ó Municipio que principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones extinguidas.

TÍTULO III

DEL DOMICILIO

Art. 40. Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y, en su caso, el que determine la ley de Enjuiciamiento civil.

El domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será el último que hubieren tenido en territorio español.

Art. 41. Cuando ni la ley que las haya creado ó reconocido, ni los estatutos ó las reglas de la fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, ó donde ejerzan las principales funciones de su instituto.

ambas pote-
stades por

Art. 39
cionaban l
constituy
y los me
raiones
aplicac

ÍNDICE ALFABÉTICO

MATERIAS	Artículos.	Apéndices.	Páginas.
A			
Intestato.....	11	»	156
cción personal.....	40	»	351
ctos ejecutados contra ley	4.º	»	120
Actos y contratos. Código de Méjico.....	»	»	87
Actuaciones judiciales.....	11	»	157
Adquisición de la nacionalidad española.....	17 al 26	»	239
Alemania.....	4.º	»	120
Antejuicio necesario para exigir la responsabilidad criminal á los Jueces y Magistrados.....	6.º	1.º	357
Apéndices.....	»	»	357
Aplicación que debe darse á los bienes de las personas jurídicas.....	39	»	345
Aragón.....	13	»	209
Asociaciones (Ley de).....	35	5.º	486
Asociaciones.....	28	»	292
Asociaciones domiciliadas en el extranjero.....	28	»	292
Ayuntamientos.....	35 al 38	»	326
B			
Baleares.....	13	»	210
Bienes.....	10	»	145

MATERIAS	Artículos.
Bienes muebles.....	10
Bienes inmuebles.....	10
Biología de la nacionalidad es- pañola.....	»
Bolivia	11
C	
Capaces é incapaces. Código de Guatemala.....	»
Capacidad jurídica de los mejica- nos. Código de Méjico.....	»
Capacidad jurídica. Código de Portugal.....	»
Capacidad jurídica de los extran- jeros. Código de Portugal....	»
Capacidad de las personas mo- rales ó sociales. Código de Portugal.....	»
Cataluña	12
Causas de extinción de la perso- nalidad civil.....	32
Chile	11
Circular de 7 de Abril de 1885..	11
Ciudadanos portugueses. Código de Portugal	»
Ciudadanos. Código de Italia...	»
Código civil.....	11
Compañías.....	41
Compañías mercantiles	36
Competencia.	11
Comunidades religiosas.....	35 al 38
Comunidades religiosas en Fili- pinas.....	35 al 38
Condición de la mujer casada ..	15
Contrato de sociedad.....	36
Convenio consular con la Gran Bretaña.....	11
Convenio consular con Italia...	11
Convenio consular con los Países Bajos.....	11
Convenio consular con Portugal.	11

MATERIAS	Artículos.	Apéndices	Páginas.
convenio consular con Rusia...	11	»	178
convenciones acordadas en país extranjero.....	11	»	150
corporaciones.....	28	»	292
costumbre.....	5 y 6	»	190 y 131
D			
demandantes y demandados.			
Proyecto de 1851.....	»	»	68
demencia.....	32	»	306
derecho foral.....	12	»	187
derecho supletorio en las provincias forales.	12	»	187
derechos civiles. Proyecto de 1851	»	»	68
derechos y deberes de familia..	9	»	137
derechos del primer nacido.....	31	»	305
derechos de que gozan los extranjeros.....	27	»	278
derechos de las asociaciones domiciliadas en el extranjero...	28	»	292
derechos de las personas cuya personalidad jurídica se halla restringida.....	32	»	306
derogación de las leyes.	5	»	130
desuso.....	5	»	130
días.....	7	»	134
diplomáticos.....	11	»	150
deputaciones provinciales.....	35 al 38	»	390
disposiciones referentes á la publicación del Código.....	»	»	9
disposiciones legales referentes á extranjeros.	27	»	282
división de las personas. Código de Guatemala.....	»	»	83
domicilio.—Código de Méjico...	»	»	IV
idem.—Código de Italia.....	»	»	77
idem.—Código de Portugal.....	»	»	81
idem voluntario.—Código de Portugal.....	»	»	81
idem necesario.—Idem id.....	»	»	81

MATERIAS	Artic
Domicilio	4
Idem de las personas naturales..	4
Idem de los diplomáticos.....	4
Idem de las personas jurídicas..	4
Idem voluntario.....	4
E	
Efecto retroactivo de las leyes..	3
Efectos generales de la ley.—Códigos de Bélgica y Francia...	x
Idem de la ley.—Código de Italia	x
Idem generales de las leyes.—Código de Méjico.....	x
Idem id. de la ley.—Código de Portugal.....	x
Idem de las leyes.—Código de Guatemala.....	x
Idem civiles del nacido.....	3
Embargo preventivo.....	1
Empleo de otro Gobierno.....	2
Entrada al servicio de las armas de una potencia extranjera. ..	2
Esclavos.—Proyecto de 1851....	x
Escuelas Pías	35
Espanoles.—Proyecto de 1851...	x
Espanoles y extranjeros.....	x
Establecimientos de Beneficencia é Instrucción.....	35
Estatutos.....	1
Estudio comparativo entre las materias comprendidas en este tomo (títulos preliminar y I, II y III del libro I) y los proyectos de 1851, 1882 y Códigos extranjeros.....	x
Excepción de arraigo del juicio.	1
Exhorto.....	1
Exposición de motivos de las reformas introducidas en la nueva edición del Código civil ...	x

ORIAS	Artículos.	Apé- n. o.	ginas.
personalidad ci-	»	»	297
Extradición: procedimiento.....	11	3.º	374
Extradición: tratados.....	11	3.º	376
Extradición.....	11	»	164
Extranjeros.—Códigos de Bélgi- ca y Francia.....	»	»	73
Extranjeros.....	»	»	275
Extranjeros en Ultramar.....	9	2.º	161
F			
Figura humana del feto.....	30	»	304
Filiación.....	17	»	240
Formas de los contratos.....	11	»	150
Formas y solemnidades de los actos y contratos. Código de Guatemala.....	28	»	82
Fundaciones.....	»	»	292
G			
Gastos en el extranjero por cuen- ta del Ministerio de Ultramar.	11	»	163
Guatemaltecos y extranjeros. Có- digo de Guatemala.....	»	»	84
H			
Hijos nacidos en España. Pro- yecto de 1851.....	»	»	67
I			
Iglesia.....	35 al 38	»	340
Ignorancia de las leyes.....	2.º	»	107
Interdicción civil.....	32	»	306
Insuficiencia de las leyes.....	6.º	»	131
Instrumentos públicos.....	11	»	150

MATERIAS	Artículos.	Apéndices.	Páginas.
Inscripción de ciudadanía en el Registro civil.	18 al 26	4.º	262 y 480
Institutos de San Vicente de Paul, San Felipe Neri y Hermanas de la Caridad.	35 al 38	»	343
L			
Ley de Enjuiciamiento civil. ...	11	»	157
Ley de Asociaciones.	35	5.º	486
Leyes por que se rigen la capacidad de las personas y los actos de las mismas. Código de Italia.	»	»	75
Leyes por que se regula la capacidad y actos de los portugueses en el extranjero. Código de Portugal.	»	»	79
M			
Manifestación de la voluntad de recobrar la nacionalidad.	21	»	257
Matrimonio.	17 al 26	»	253
Mayores y menores de edad. Código de Guatemala.	»	»	83
Méjico.	11	»	185
Mejicanos y extranjeros. Código de Méjico.	»	»	88
Menor de edad.	32	»	306
Meses.	7	»	134
Modo por el que se obtiene la vecindad.	15	»	213
Modos de recobrar la ciudadanía. Código de Italia.	»	»	76
Modos de perderse la ciudadanía. Idem id.	»	»	76
Muerte del ausente.	34	»	311
Mujer casada.	15 y 40	»	213 y 354
Mujer española. Proyecto de 1851	»	»	68

Páginas.

297

240

72

292

260

252 y 273

256

256

79

200

185

134

355

120

135

135

131

161

355

185

163

305

67

MATERIAS	Artículos.	Apéndice.	Páginas.
Pérdida de los derechos civiles.			
Códigos de Bélgica y Francia.	»	»	73
Idem íd. á consecuencia de fallos judiciales. Idem íd.....	»	»	73
Idem de la ciudadanía portuguesa. Código de Portugal...	»	»	79
Idem de la nacionalidad.....	20 y 22	»	255
Perjuicio de tercero.....	4.º	»	120
Personas.....	»	»	219
Personas que pueden gozar de la calidad de españoles. Proyecto de 1851.....	»	»	67
Personas morales. Idem de íd.	»	»	68
Personas morales ó sociales. Código de Portugal.....	»	»	80
Personas jurídicas. Código de Guatemala.....	»	»	84
Personas morales. Código de Méjico.....	»	»	88
Personas á quienes se aplican los derechos declarados en el Código civil.....	15	»	212
Personas naturales.....	»	»	298
Personas muertas al mismo tiempo.....	33	»	308
Personas jurídicas...	»	»	312
Personas jurídicas de interés público.....	35 al 38	»	323
Perú.....	11	»	186
Presunción de muerte de un ausente.....	34	»	311
Principios generales del Derecho	6.º	»	131
Primogénito.....	31	»	305
Prioridad de nacimiento.....	31	»	305
Procedimiento. Código de Italia.	»	»	75
Procedimiento para la extradición.....	11	3.º	374
Procedimientos.....	11	»	164
Prodigalidad.....	32	»	306
Prólogo.....	»	»	5
Promulgación de las leyes. Códigos de Bélgica y Francia...	»	»	71

MATERIAS	Artículos.	Apéndices.	Páginas.
Promulgación de las leyes. Código de Italia.....	»	»	74
Idem id.....	1.º	»	98
Provincias de diferente legislación civil.....	14	»	211
Proyecto de Código civil de 1832.	»	»	69
R			
Real decreto de 17 de Noviembre de 1852.....	»	»	275
Idem id. de 2 de Noviembre de 1888	»	»	273
Idem id. de 5 de Febrero de 1889.	11	»	160
Idem id. de 30 de Julio de 1891.	11	»	164
Idem id. de 12 de Junio de 1892.	»	»	273
Idem id. de 15 de Junio de 1892.	»	»	274
Real orden de 9 de Abril de 1884.	11	»	160
Idem id. de 26 de Julio de 1886.	35 al 38	»	335
Idem id. de 17 de Enero de 1887.	»	»	274
Idem id. de 9 de Septiembre de 1887.....	»	»	274
Idem id. de 22 de Febrero de 1888.	27	»	285
Idem id. de 28 de Abril de 1888.	»	»	329
Idem id. de 17 de Agosto de 1888.	27	»	285
Idem id. de 28 de Noviembre de 1888.....	»	»	261
Idem id. de 28 de Abril de 1890.	»	»	271
Real habilitación.....	23	»	260
Recuperación de la nacionalidad perdida	21 al 24	»	274
Reglamento estableciendo el procedimiento administrativo del Ministerio de Gracia y Justicia.	11	»	164
Renuncia de derechos.....	4.º	»	120
República Argentina.....	11	»	186
Residencia.....	15	»	213
Responsabilidad de los Tribunales.....	6.º	»	131
Resolución de la Dirección general de los Registros de 30 de Junio de 1892.....	12	»	193

MATERIAS	Artículos.	Apéndices.	Páginas.
Resolución de la Dirección general de los Registros de 3 de Enero de 1892.....	12	»	203
Restricciones de la personalidad jurídica.....	32	»	306
Retroactividad de las leyes.	3.º	»	112
S			
San Salvador.....	11	»	186
Sentencias dictadas por los Tribunales extranjeros.....	11	»	165
Idem del Tribunal Supremo....	9 y 10	»	139 y 145
Idem del íd. íd. sobre vecindad..	»	»	275
Idem del íd. íd. referente á las personas jurídicas.....	35 al 38	»	323 y 332
Servicio de las armas en una potencia extranjera.....	20	»	256
Sociedades.....	41	»	352
Solemnidades de los contratos..	11	»	150
Sordomudez	32	»	306
Subsistencia del derecho foral ..	12	»	187
Sucesión testada é intestada....	10	»	145
Idem de personas muertas al mismo tiempo.....	33	»	308
Sucesiones legítimas y testamentarias.....	10	»	143
T			
Término dentro del cual son obligatorias las leyes.....	1.º	»	98
Territorios de diferente legislación civil.....	14	»	211
Testamentos.....	11	»	155
Testigos.....	11	3.º	370
Texto literal de los artículos del Código contenidos en este tomo.....	»	»	509
Título preliminar.....	»	»	91
Idem íd. Proyecto de 1851.....	»	»	65
Títulos profesionales.....	27	»	285

ÍNDICE ALFABÉTICO

MATERIAS	Artículos.	Apéndice.	
Transeúntes. Código de Guatemala	»	»	
Transmisión de derechos	33	»	
Tratados de comercio y navegación con Alemania	11	»	
Idem id. id. con Austria-Hungría	11	»	
Idem id. id. con Bélgica	11	»	
Idem id. id. con Francia	11	»	
Idem id. id. con Italia	11	»	
Idem id. id. con Suecia y Noruega	11	»	
Tratados con Suiza	11	»	
Idem con las Repúblicas hispano-americanas	11	»	
Idem de pobreza para litigar con Francia	11	»	
Tratados de paz y amistad con el Uruguay y República del Salvador	»	»	
Idem de extradición con Alemania	11	3.º	
Idem id. con Austria	11	3.º	
Idem id. con Bélgica	11	3.º	
Idem id. con Francia	11	3.º	
Idem id. con Inglaterra	11	3.º	
Idem id. con Italia	11	3.º	
Idem id. con los Países Bajos	11	3.º	
Idem id. con el Gran Ducado de Luxemburgo	11	3.º	
Idem id. con Portugal	11	3.º	
Idem id. con Rusia	11	3.º	
Idem id. con Suecia y Noruega	11	3.º	
Idem id. con el Brasil	11	3.º	
Idem id. con los Estados Unidos de América	11	3.º	
Idem id. con los Estados Unidos Mejicanos	11	3.º	
Idem id. con la República oriental del Uruguay	11	3.º	
Idem id. con la República del Salvador	11	3.º	
Tribunal Supremo	9	»	

MATERIAS	Artículos.	Apéndices.	Páginas.
U			
Uruguay.. .. .	11	»	186
V			
Varones y mujeres. Código de Guatemala....	»	»	83
Vecindad.....	15 y 17	»	213 y 275
Idem.....	17 al 26	»	252
Idem.....	»	»	85
Vecindad y domicilio. Proyecto de 1851.....	»	»	69
Venezuela.....	11	»	186
Vizcaínos.....	10	»	144
Vizcaya.....	12	»	207
Vocales de la Sección primera de la Comisión general de Codificación que han redactado el Código civil.....	»	»	30
Vocales que han sido de la Sección primera y han tomado parte en la redacción del Código civil.....	»	»	30
Voluntad expresa de los padres.	18	»	248
Idem íd. de los hijos.....	18	»	249
Idem presunta.....	17 al 26	»	253 y 256

TAS

DEBE DECIR

fallar
de-
del
verdad
sin saber
diferentes
del
demandantes
Apéndice núm. 3
existen
unos de otros
Ahrens
letra
súbditos
individuo
territorio
aportar

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

CÓDIGO CIVIL

COMENTADO Y CONCORDADO EXTENSAMENTE

CON ARREGLO Á LA NUEVA EDICIÓN OFICIAL

POR

Q. MUCIUS SCÆVOLA

Abogado del Ilustre Colegio de Madrid.

PUBLICADOS

TOMO I (tercera edición). — **De las leyes, sus efectos y reglas generales para su aplicación.** — **Espanoles y extranjeros.** — **Nacimiento y extinción de la personalidad civil.** — **Domicilio.**

Un volumen de 530 páginas en 8.º mayor. Precio, 5 pesetas en Madrid, 5,50 en provincias y 8 en Ultramar.

TOMO II (cuarta edición). — **Matrimonio** — **Disposiciones generales.** — **Matrimonio canónico.** — **Matrimonio civil.**

Un volumen de 513 páginas en 8.º mayor. Precio, 5 pesetas en Madrid, 5,50 en provincias y 8 en Ultramar.

TOMO III (segunda edición, próxima á agotarse). — **Paternidad y filiación.** — **Alimentos entre parientes.** — **Patria potestad.** — **Adopción.** — **Ausencia.**

Un volumen de 581 páginas en 8.º mayor. Precio, 5 pesetas en Madrid, 5,50 en provincias y 8 en Ultramar.

TOMO IV (segunda edición, próxima á agotarse). — **Tutela.** — **Clases de tutela.** — **Protutor.** — **Personas inhábiles para ser tutores y protutores, y de su remoción.** — **Excusas de la tutela y protutela.**

Un volumen de 376 páginas en 8.º mayor. Precio, 3 pesetas en Madrid, 3,50 en provincias y 7 en Ultramar.

TOMO V (segunda edición, próxima á agotarse).—**Afianzamiento, ejercicio, cuentas y registro de las tutelas.—Consejo de familia.—Emancipación y mayor edad.—Registro del estado civil.**

Un volumen de 704 páginas en 8.º mayor. Precio, 7 pesetas en Madrid, 7,50 en provincias y 10 en Ultramar.

PRIMER TOMO APÉNDICE (segunda edición).—**Reglas y modelos para la redacción de las actas del consejo de familia. —, Observaciones pertinentes á las mismas.— Tramitación de las alzas contra los acuerdos del consejo.**

Un volumen de 474 páginas en 8.º mayor. Precio, 4 pesetas en Madrid, 4,50 en provincias y 7,50 en Ultramar.

Recomendamos eficazmente la adquisición de este tomo á todas aquellas personas que forman parte de algún consejo de familia, por la gran utilidad que ha de reportarles.

TOMO VI (segunda edición).—**Clasificación de los bienes.— Bienes inmuebles y muebles.—Propiedad.—Derecho de accesión.**

Un volumen de 620 páginas en 8.º mayor. Precio, 6 pesetas en Madrid, 6,50 en provincias y 9 en Ultramar.

TOMO VII.—Deslinde y amojonamiento.—Del derecho de cerrar las fincas rústicas.—De los edificios ruinosos y de los árboles que amenazan caerse. - Comunidad de bienes.—Aguas.—Minas.—Propiedad intelectual.

Un volumen de 610 páginas en 8.º mayor. Precio, 6 pesetas en Madrid, 6,50 en provincias y 9 en Ultramar.

EN PRENSA

Tomo VIII.

EN PREPARACIÓN

Tomos III, IV y V (tercera edición).

C. A. A.

6

